



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

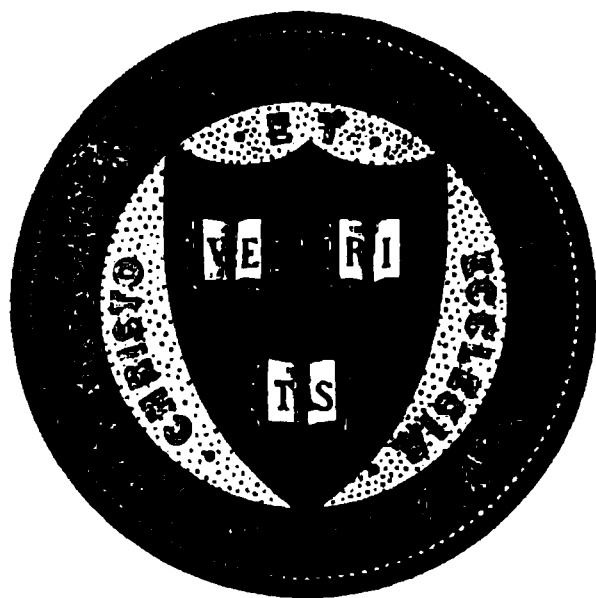
Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>

S. pa. 73.5



Harvard College Library

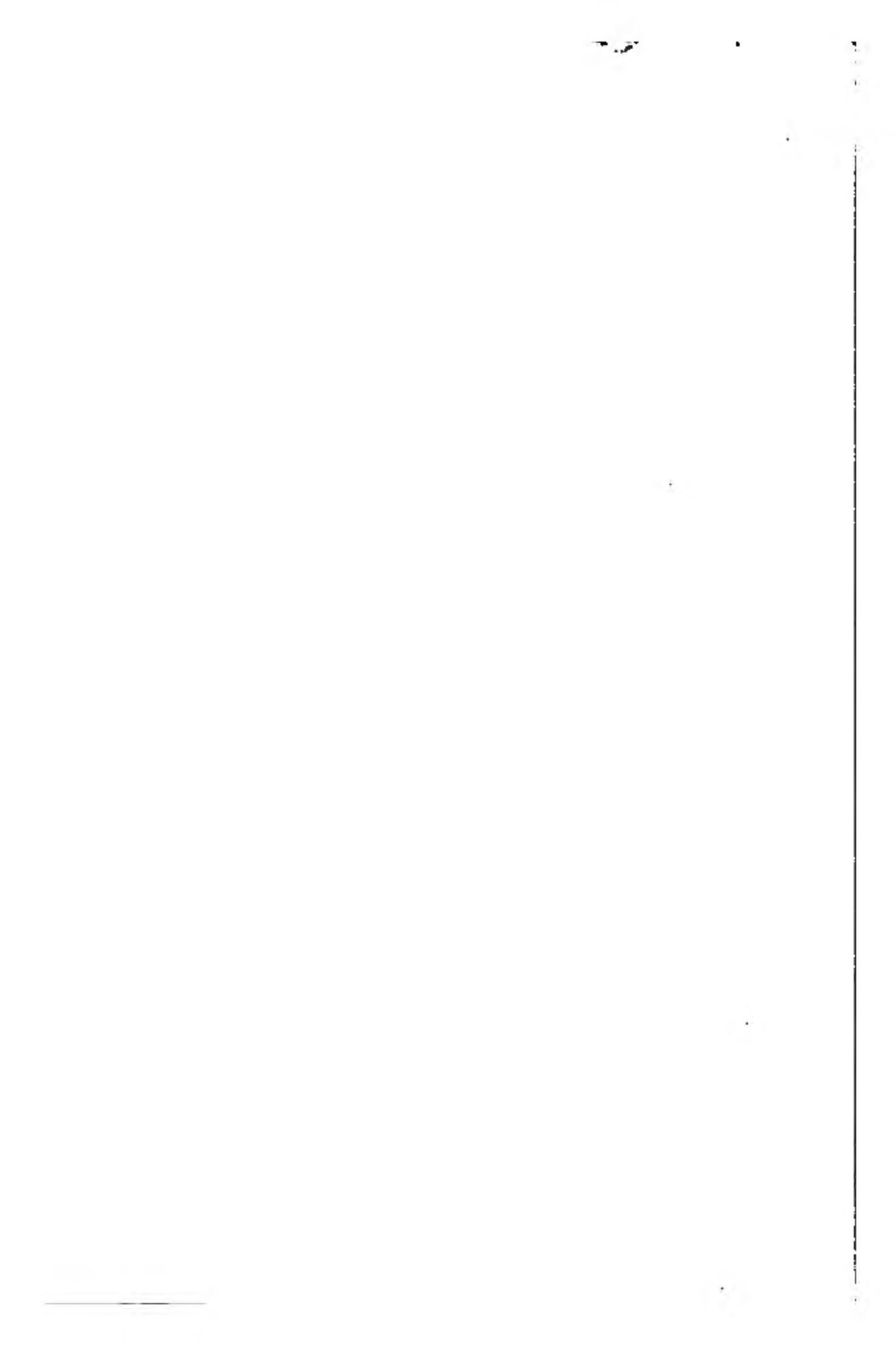
FROM THE FUND OF

THOMAS WREN WARD,

Late Treasurer of Harvard College.

Received 28 June, 1904.

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right. The names are: John Smith, James Brown, William Jones, and Thomas White. The dates are: 1812, 1813, 1814, and 1815. The list is followed by a signature, which appears to be "John Smith".



MANUAL

PARA USO DE LOS

SEÑORES DIPUTADOS



Spain - 1900

M A D R I D

Imprenta y Fundición de los Hijos de J. A. García,
CALLE DE CAMPOMANES, NÚM. 6.

—
1900

— — — — —

Todo detenido será puesto en libertad ó entregado á la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

nes comprendidas en los números 1.º, 2.º y primer caso del 4.º del art. 189, serán castigados con la pena de arresto mayor.

Art. 195. Incurrirán respectivamente en las penas inmediatamente superiores en grado, los promovedores, directores y asistentes á cualquiera reunión ó manifestación, si no la disolvieren á la segunda intimación que al efecto hicieren las autoridades ó sus agentes.

Art. 196. Los que concurrieren á reuniones ó manifestaciones, llevando armas de fuego, lanzas, espadas, sables ú otras armas blancas de combate, serán castigados con la pena de prisión correccional en sus grados mínimo y medio.

Art. 197. Los asistentes á reuniones ó manifestaciones, que durante su celebración cometieren alguno de los delitos penados en este Código, incurrirán en la pena correspondiente al delito que cometieren, y podrán ser aprehendidos en el acto por la autoridad ó sus agentes, ó en su defecto por cualquiera de los demás asistentes.

Art. 198. Se reputan asociaciones ilícitas:

1.º Las que por su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral pública.

2.º Las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos penados en este Código.

Art. 199. Incurrirán en la pena de prisión correccional en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas:

1.º Los fundadores, directores y presidentes de asociaciones que se establecieran y estuvieran comprendidas en alguno de los números del artículo anterior.

Si la asociación no hubiere llegado á establecerse, la pena personal será la inmediatamente inferior en grado.

2.º Los fundadores, directores y presidentes de asociaciones que se establecieren sin haber puesto en conocimiento de la autoridad local su objeto y estatutos con ocho días de anticipación á su primera reunión, ó veinticuatro horas antes de la sesión respectiva, el lugar en que hayan de celebrarse éstas, aun en el caso en que llegare á cambiarse por otro el primeramente elegido.

3.º Los directores ó presidentes de asociaciones que no permitieran á la autoridad ó á sus agentes la entrada ó la asistencia á las sesiones.

4.º Los directores ó presidentes de asociaciones que no leiten la sesión á la segunda intimación que con este objeto gan la autoridad ó sus agentes.

100

100



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

1

2

3

Art. 11. Aprobado un proyecto de ley por los dos Cuerpos Colegisladores, se presentará á la sanción del Rey por una Comisión del último que lo haya discutido.

Art. 12. Cuando el Congreso declare que há lugar á juzgar á los Ministros, nombrará los Diputados que han de sostener la acusación ante el Senado.

Art. 13. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores fijará anualmente, con independencia del otro, el importe de los gastos precisos para la conservación del edificio en que celebre sus sesiones y para el pago de sus oficinas y dependientes.

Palacio del Congreso 12 de Julio de 1837.=
Vicente Sancho, Presidente.=Mauricio Carlos de Onís, Diputado Secretario.=Miguel Roda, Diputado Secretario.

Por tanto:

Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.=Yo la Reina Gobernadora.=Está rubricado de la Real mano.=En Palacio á 19 de Julio de 1837.=A D. José Landero Corchado.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1

2

3

4

5

6

7



1

1

LEY ELECTO

escrutinio general, el presidente la
uelta, y concluida la elección.

CAPITULO II

de las elecciones parciales.

solamente por acuerdo del Congreso
eder á la elección parcial de Dipu-
5 más distritos ó colegios especiales,
edado vacante su representación en

Para los distritos que con arreglo á
n elegir tres ó más Diputados, sola-
enderá que hay vacante en su repre-
las Cortes cuando, por cualquiera
n dos por lo menos de sus Diputados.
El Real decreto convocando á los cole-
es de uno ó más distritos para elec-
de Diputados á Cortes se publicará
de Madrid dentro de ocho días, con-
a fecha de la comunicación del acuer-
eso. En el mismo Real decreto se se-
en que ha de hacerse la elección, y
fijar este día antes de los veinte ni-
s treinta, contados desde la fecha de
ia.

La elección parcial se hará en el día
los trámites y en la forma prescritos
para las elecciones generales.

CAPITULO III

*tación de las actas y reclamaciones
lectorales ante el Congreso.*

El Congreso en uso de la prerro-

LEY ELECTORAL

documento
y, el censo y
as, certificac
i quien la le
a por objeto
erecho electo
laridad del p
ín castigado
multa de f
siciones gen
tra mayor, l
ejar de cum
res impuest
que se dicta
lguno de lo

listas de el
nitivas, no
expuestas a
ugar corresp
iera alteraci
eba celebra
de designac

os fraudulent
la formació
ntas y colegi
escrutinios

se extienda
s, ó no se fl
que deban
debido las

, * de la comuni
il de 1899 dirig

. sol
o ó
deli
visto
s gr
500
elite
par
n sol
arti
mil
nienc
o á p
lo de
ose
pue
ben

ps qu
ros c
pios
a ad
se ha

Min
ran
ione
uale
da e
per
rmi
acto
en d
o, pa

rzo c

qu
nta.
las
una
stit
nci
de a
npl
ta l
cre
star
7 (1
al r
las
es c
ven
le
l ar
e e
tra
gido
s
an
s co
mo
en
s qu
os e
de
en
.
s qu
tora

re
s de

esidentes é interventores de las Mesas de escrutinio (1).

La jurisdicción ordinaria competirá para el conocimiento de los delitos cualquiera que sea el fuero de los culpables (2).

Los efectos de las disposiciones de esta ley serán los que son delitos electorales previstos en esta ley, y los del Código penal, afecten á la elección electoral.

Cuando dentro del colegio electoral cometiese algún delito, el juez conocerá y pondrá á los presuntos culpables á la autoridad judicial.

La jurisdicción penal que nace de los delitos electorales es pública, y podrá ejercerse en los meses después del término fijado por la elección.

El ejercicio no se exigirán de

los jueces y tribunales procederán al conocimiento criminal.

No se necesitará autorización de ningún funcionario.

El que por sentencia firme fuere declarado culpable por obediencia á un superior, al tribunal que se le atribuya proceder contra el que dió origen al delito, el plazo de la prescripción á contar desde el día anterior, estará en suspenso si el superior ó persona obedecida

es el 14.º de la Circular de la Junta de 1890 y la 6.ª de la com. -Apéndices 13 y 37.

El 1.º del acuerdo 1.º de la Cir. de Octubre de 1890. -Apéndice 7.º

RALE

que
de
leg
eci

idu
la (

de

ac

pal
iva
ales

tes

no

gui

en

ión

to (

a.

in l

ica

respectiva, para que
án cuenta de el'a á

is demás; y sólo esta
aso, deberá imponer
las disposiciones del
cepción á que se re-

tas se hará en reso-
que se impongan á
párrafo 1.º de este
nicipales, serán re-
incial dentro de dos
ación, cuya Junta

ARTÍCULOS ADICIONALES

Las disposiciones de los arts. 1.º y 2.º, y los títulos 2.º y 6.º de esta ley, así como lo se á la forma de las votaciones, serán aplicables á las elecciones de concejales y de diputadas provinciales cuando hayan de verificarse con arreglo á las leyes respectivas.

La Junta provincial del censo publicará, como complemento de las listas ordinarias, una lista por secciones, en que se comprendan los nombres de las personas que hayan sido baja en el censo general y en la parte de los colegios especiales, y las comunicará á los alcaldes respectivos, á fin de que éstos puedan ejercitar oportunamente su derecho en las elecciones á que se refiere el artículo 1.º.

La Junta provincial del censo electoral en adelante será presidida por el vicepresidente de la Diputación. No formarán parte de ella los que han presidido la Diputación á título de gobernadores de la provincia.

Si no hubiese número suficiente de ex-vicepresidentes y de ex-diputados para completar el número de los cuatro diputados en ejercicio que debe formar la Junta provincial, serán suplidos por los restantes diputados provinciales y por los miembros del Ayuntamiento de Pamplona que lo han sido más veces.

El Gobierno de S. M., oída la Junta Censo electoral, dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta ley y su aplicación á las elecciones de concejales y diputadas provinciales.

Las disposiciones del título 6.º de esta ley se aplicarán á los actos ú omisiones que puedan producirse con motivo de las elecciones de Sena-

ión y procederá de la ma
o artículo, formando la

los los vecinos á quiene
electoral según dicho

fallecidos con posterior
ento, formada con los d
eces municipales respec
que se hallen en caso

que, no teniendo inca
r el derecho electoral

vecinos mayores de 2
os años de residencia.

s se publicarán, como
esta disposición, dura
s, y al cabo de ellos s
de la Junta provincia
nes indicados en el mis
del mes siguiente se reu
(1) y procederá según o
do en todo aplicables
siguientes.

r declaración de la Junta provincial,
por la Audiencia respectiva, los
s electores, se inscribirán éstos en
oral que entonces se abrirá, y se
las listas respectivas, publicándo-
ándolas como establece el art. 16.
de estas listas se procederá á la for-
censos de los colegios especiales.

reglas 1.ª y 3.ª de la Circular de 4 de Septiem-
bre 2.º

PMH

su
os.
los
ará
ados
me
orn

list
y
el

rito
ra
ne
itos
de

dist
mer
res
ito
lem
iput
nal
fé,

brasil con los dos diputaciones
os distritos de Pamplona, Oviedo,
lid, Burgos, Santander, Coruña,
n, Alicante, Almería y Badajoz,
critorios comprenderán los actua-
les que se les aplican en el estado

1.º K.

.

1.º B

división de distritos e de Guipúzcoa

io XII, por la gracia
paña;
que la presente
Cortes han decret

ico. La división d
tritos para la ele
aquéllos en seco

Distrito de San Se

—San Sebastián (S
—Irún (Irún, Fuen
—Rentería (Rente
e San Juan, Pasaj

Distrito de Tol

—Tolosa (Tolosa
nza, Gaztelu, Her
rza, Oreja).
—Andoain (Andoa
raul, Villabona).
—Idiazabal (Idiaza
—Villafranca (Vil
eta, Isasondo, Las
—Berástegui (Ber

visión en secciones e
electoral. (Art. 23.)

le
de

P
ia,
Re
p
ha

a
ec
de

ele
—

—

ite

rra
an
ba
leg
l F
an
ur
dv
ald

ci
de





De 100.000 residentes en adelante, no se hará más variación que la de aumentar un Regidor por cada 20.000, hasta que el Ayuntamiento llegue á 50 Concejales, de cuyo número no pasará.

«Los distritos en que se divida cada término serán próximamente iguales en número de habitantes.»

Queda derogado el art. 37 de la ley municipal, y sustituido por el art. 28 de la ley electoral en los términos de adaptación que expresa el art. 10 de este Real decreto.

Art. 13. Cada distrito municipal tendrá el número de secciones que le correspondan según el censo electoral y lo establecido en el art. 10 de este decreto.

Se procurará que á los distritos en que resulte dividido cada término municipal se les compute un número de Concejales proporcional al de sus residentes, asignándose en cada caso mayor número de Concejales al distrito municipal que resulte con mayor número de secciones.

Cada distrito municipal tendrá votación propia de Concejales, y en todos los colegios del respectivo distrito se votará en términos de que para ninguna candidatura sean acumulables los votos de uno á otro distrito. (Adaptación del art. 42 de la ley municipal.)

Las elecciones municipales en que no se observen las disposiciones de los artículos precedentes en este mismo título, se considerarán nulas. (Adaptación del art. 7.º de la ley de 2 de Mayo de 1889.)

Art. 14. En los casos de renovación ordinaria ó extraordinaria, la elección de los Concejales y de los Diputados provinciales se hará por los mismos distritos que hubieren hecho la de los salientes. (Adaptación del art. 45, párrafo 2.º de la ley municipal, y del art. 57, párrafos 2.º y 3.º de la provincial.)

TÍTULO

CONSTITUCIÓN DE LA

1. En cada sección
a de presidir la v
te y de los Interv
provincial ó munic
por los candidatos
los, hagan uso del
esa electoral de cad
nterventores por lo

Presidente de la M
calde; y si éste no
municipal hubiere
Tenientes de Alca
su defecto los Alc
os, los suplentes d
astaran, designará
ido Alcaldes de t
tores de la sección

Alcaldes, Tenientes
en desempeñando
declarado ilegal l
podrán presidir las
presidir las los que
nterinamente por
va de los propietarios
re dictado auto de
suspensiones admin

se lo dispuesto en el
1891. (Apendice 31.º)

Concejales contra quienes no se hubiere dictado auto de procesamiento, cesarán diez días antes del señalado para la votación. (Adaptación del art. 36 de la ley electoral.)

Art. 16. Tendrán derecho á designar Interventores para las Mesas electorales en las secciones que comprenda el distrito los candidatos siguientes:

a) En las elecciones provinciales:

1.º Los ex-Diputados provinciales que hayan representado, en virtud de elección popular, el mismo distrito, ya sea con la forma de agrupación de distritos ahora vigente para las elecciones provinciales, ó en cualquier otra que estos distritos hubieran tenido anteriormente.

2.º Los que hubieren luchado en el mismo distrito en elecciones para Diputados provinciales anteriores y obtenido la quinta parte por lo menos del total de votos emitidos (1).

3.º Los candidatos para Diputados provinciales propuestos por medio de cédulas firmadas por electores del respectivo distrito, ó por actas notariales con intervención del funcionario competente, cuyos electores asciendan, cuando menos, á la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista ultimada del distrito (2).

b) En las elecciones de Concejales:

1.º Los ex-Concejales del mismo Municipio que lo hubieren sido en virtud de elección popular, exceptuando los que no pueden ser reelegidos conforme al art. 62 de la ley municipal vigente, reformado por la ley de 9 de Julio de 1889.

2.º Los que hubieren luchado en el mismo distrito municipal en elecciones municipales anteriores y ob-

(1) Véase la disposición 1.ª del Apéndice 17.º

(2) Idem id. id.

Vertical line of text on the right side of the page.

1

2

3

1

11

11

hasta el número de la mitad más una de las que comprenda el distrito electoral, cuando sean éstas menos de 50, ó hasta el de 25 cuando sean más, cuyos comisionados Interventores tengan que concurrir á la Junta de escrutinio, bajo la responsabilidad penal que establece el título 6.º de la ley electoral. La concurrencia de los comisionados de las demás secciones será voluntaria.

Si no se reuniere hasta las dos de la tarde el número de Interventores exigidos por el artículo anterior, ú otra causa imprevista impidiere la celebración de la Junta, el Presidente convocará para el día inmediato, notificándolo á los Interventores presentes y al público por anuncio escrito, á la vez que al Gobernador de la provincia y á la Junta provincial del Censo. Cumplidos dichos requisitos, la junta se celebrará el día señalado, cualquiera que sea el número de los concurrentes.

Art. 48. En las elecciones de Concejales, la Junta general de escrutinio del distrito municipal se reunirá á las diez de la mañana, en sala de edificio consistorial debidamente capaz, y no estando estos locales disponibles, en otro que el Alcalde ponga á su disposición, y que habrá de ser en tal caso igualmente decoroso y capaz.

No podrá entrar esta Junta en funciones sin la concurrencia de dos terceras partes de los comisionados Interventores, cuando el número de secciones no exceda de 10; de la mitad más uno de los Interventores, si el número de secciones en que esté dividido el distrito municipal fuere mayor de 10 y menor de 50, y hasta el de 25 cuando sean más.

A los comisionados Interventores que de no mediar justificada excusa dejen de concurrir á la junta de escrutinio, podrá imponerles el Presidente de la Junta multa que no exceda de 100 pesetas.

APÉNDICE

no es aplicable á este párrafo 2.º del art. 47, parte se ha de dar á la vez de hacerlo á la

Reunida la mayoría, y en su caso verificó la elección, á la Junta de escrutadores e Interventores más auxiliares.

Después, de orden de la Junta de escrutadores, y en seguida el escrutinio, computándose los votos sucesivamente.

Después se pondrán sobre la mesa de las secciones que se han dispuesto en el art. 37.

Uno de los Secretarios, tomando los otros auxiliares convenientes para el cómputo, guiente de los votos, se pondrán sobre la mesa examinando las actas de las secciones, se pondrán sobre la mesa el escrutinio, las reclamaciones y se pondrán sobre la legalidad de los votos.

Los individuos de la Junta que estuvieren en el escrutinio y en el escrutinio no podrán atribuciones se les atribuya el recuento de los votos del distrito, atender á los admitidos y a los no admitidos de las Mesas electorales.

1

2

1

2

4.ª En atención al retraso ocasionado por las prórrogas concedidas, de acuerdo con la Junta Central, para la impresión y publicación del censo, podrá el Ministro de la Gobernación, con respecto á la próxima renovación de las Diputaciones provinciales en las islas Baleares y Canarias, reducir los plazos á que se contrae el párrafo 3.º del art. 18 de este decreto, relativos á la sesión de la Junta provincial para la proclamación de candidatos y designación de Interven-toras.

Dado en Palacio á 5 de Noviembre de 1890.—*María Cristina*.—El Ministro de la Gobernación, *Francisco Silvela*.

mentos y aspiraciones de los intereses económicos. Las Cámaras de comercio é industriales están ya oficialmente organizadas sobre esta base, han recibido del Gobierno la cooperación, sin la cual difícilmente hubieran podido nacer, y con esta cooperación cuentan seguramente para llegar á la plenitud de su desarrollo.

Pero si la organización de las Cámaras de comercio é industriales tiene afianzada entre nosotros su constitución y apoyo legal en términos que lo que falta hoy á su desenvolvimiento sólo puede ser obra del tiempo, los intereses agrícolas, que en la economía presente de nuestro estado social representan fuerzas todavía más importantes y vitales que las de la industria y del comercio, carecen aún de estas instituciones y del amparo oficial. Por la necesidad universalmente sentida de que el Estado los atienda con particular solicitud, nuestras leyes novísimas hacen mención de las Cámaras agrícolas; y partiendo del supuesto de estar ya constituidas y en la plenitud de sus funciones, la misma ley electoral las considera como organismos existentes, otorgándoles iguales derechos que á las Cámaras de comercio é industriales, á las Sociedades Económicas y á las Universidades Literarias.

Mas á pesar de tales reconocimientos de derecho, y de aparecer en la ley las Cámaras agrícolas como realidad existente en nuestra vida nacional, esta es la hora en que el Estado no ha conferido aún á los intereses agrícolas una organización suficiente, como la que tienen los mercantiles é industriales, para dar fórmula y unidad de dirección á sus necesidades; y ninguna causa, á no dudar, ha contribuido tanto como ésta á que los esfuerzos que la iniciativa particular viene haciendo en España durante los últimos años, para desarrollar con vigorosas asociaciones las aspiraciones económicas de las clases agrícolas, se redujeran á agitaciones vanas é ineficaces. Tan valiosos elementos no pueden

ción, perfectamente armónica con la naturaleza de tales Cámaras, no puede aplicarse á las agrícolas sin que resulte como cohibida y esterilizada la manifestación de vitalidad de nuestras clases agrícolas, que necesitan mayor libertad y soltura para organizar sus asociaciones allí donde encuentren favorables elementos de vida.

Por lo que se refiere á la constitución de las asambleas generales, tampoco cabía aplicar á estos Cuerpos, destinados á reunir tan numerosos consocios, el precepto de que todos los miembros de la Cámara formaran su Asamblea general. Parece más ajustado á su orden natural el dejar á estas Cámaras que ellas mismas determinen con entera libertad en sus respectivos estatutos el modo y forma de constituir sus Asambleas generales.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 14 de Noviembre de 1890.—Señora: A los R. P. de V. M.—Santos de Isasa.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las asociaciones de carácter permanente que usando de su libertad constitucional, y conforme á la ley de 30 de Junio de 1887, funden los ciudadanos españoles con el objeto de defender y fomentar los intereses de la agricultura, de la propiedad rústica, de los cultivos y de las industrias rurales, cualesquiera que sean los procedimientos ó métodos que dentro de la ley hayan adoptado ó adopten para la realización de



mera Junta directiva el sorteo de todos su con el fin de determinar el orden de los desde el año inmediato siguiente hayan por la Asamblea general, y en su caso por las secciones.

5.ª Que la Junta directiva de cada Asamblea general se reunirán cuantas considere conveniente el Gobierno, además lo disponga el respectivo reglamento.

6.ª Que podrán también reunirse diver ó sus Juntas directivas cuando el Gobierno ponga, ó en los casos previstos en sus reglamentos, para deliberar sobre intereses todas ellas. Cuando fueren dos ó más Cár hubieren de reunirse, no será necesaria de todos sus miembros, pudiendo elegir general de cada una aquellos que hayan en su representación á la reunión común.

Art. 4.º Respetando las bases estable primordiales y fundamentales en el artículo cada Cámara agrícola podrá en todo lo de realización de sus fines, establecer con en su constitución y reglamento, tanto para interior como para congregar su Asamblea. Igualmente podrán establecer lo conveniente á la forma de las convocatorias ordinarias narias de la misma, la determinación de l puedan concurrir con voz y voto, y la cu cada miembro deba contribuir á los gastos la Cámara.

Art. 5.º Las Cámaras agrícolas oficial nizadas tendrán, además de los derechos lación vigente reconoce á las asociaciones público, las facultades siguientes:

1.ª Solicitar de los Cuerpos Colegisladores resoluciones estimen convenientes para el

y Cajas de ahorros y de seguros, centros para la colocación de obreros agrícolas y asilos donde los ancianos ó inútiles de buena conducta puedan ser acogidos.

8.º Adquirir y revender ó alquilar á los asociados máquinas, herramientas, abonos, semillas y ganados, y garantizar el pago de las compras de cualquiera de esos objetos hechas por los asociados mismos.

9.º Recibir depósitos de todas clases, tomar fondos en cuenta corriente, y encargarse, mediante premio, de cobrar letras ó créditos, ó vender frutos ó productos de las industrias agrícolas por cuenta de los asociados.

10.º Contratar empréstitos para atender á las operaciones mencionadas en los números precedentes.

La responsabilidad de cada uno de los asociados en estas operaciones se fijará por los estatutos. Cuando éstos no la hubieren fijado, será solidaria la de los que formen la Junta directiva general de la asociación que hayan tomado el acuerdo, ó en su caso la de la sección respectiva; y simplemente mancomunada la de los demás miembros de la Asociación que hubieren contribuido al acto de que proceda la responsabilidad.

Las Cámaras que hicieren uso de las facultades contenidas en los números 4.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10 de este artículo, quedarán sometidas á los preceptos del artículo 11 de la ley de 80 de Junio de 1887.

Art. 6.º Las Cámaras agrícolas oficiales serán consultadas sobre los proyectos de tratados de comercio, navegación y tránsito, reforma de aranceles, legislación de crédito agrícola y organización y planes de la enseñanza relativos á la agricultura.

Art. 7.º Las Cámaras agrícolas, al tiempo mismo en que cumplan lo prescrito en los párrafos 2.º y 3.º del art. 10 de la ley de 80 de Junio de 1887, remitirán al Gobierno de la provincia respectiva una Memoria de los trabajos que hubiesen realizado durante el ejercicio.

Real orden sobre formación de los colegios especiales.—(«Gaceta» de 16 de Noviembre de 1890.)

Real orden.—La 2.ª de las disposiciones transitorias de la ley electoral, en su p rrafo 8.º, prescribe que, á partir de las listas definitivas de electores, se procederá á la formación de los colegios especiales de la manera y en los plazos previstos en los artículos 24 y siguientes de la misma. Terminada la impresión y publicación del censo, es llegado ya el caso de dictar las disposiciones necesarias para que la ley tenga cumplida realización en todas sus partes y para facilitar á la iniciativa individual y á las Universidades y asociaciones los medios de hacer efectivos sus derechos.

A este fin, y con la anticipación conveniente, el Gobierno consultó á la Junta Central del Censo, la cual ha dado á conocer ya en la *Gaceta* del 7 del corriente algunos de sus acuerdos relacionados con este importante extremo, y además, en comunicación del 4 del propio mes, dirigida á la Presidencia del Consejo de Ministros, ha prestado su asentimiento para que el Gobierno, sin más trámites de consulta, pueda fijar todas las fechas y plazos en que hayan de verificarse las operaciones necesarias para la formación de los censos especiales hasta su ultimación y publicación, en armonía con los arts. 28, 29, 30 y 31 de la ley electoral.

Uno de los citados acuerdos de la Junta Central ha sido que desde el día 15 del corriente puedan los electores pedir su baja en el censo general, y es, por lo tanto, deber inexcusable dictar las disposiciones precisas para darle eficacia.

En su vista, S. M. la Reina Regente, en nombre de su augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, se ha servido ordenar lo que sigue:

Artículo 1.º Los electores que deseen inscribirse en el censo especial de Universidad Literaria, Sociedad Económica ó Cámara de comercio, industrial ó agrícola, deberán formular las correspondientes reclamaciones desde el día 15 del corriente mes, á tenor de lo establecido en los arts. 25 y 26 de la ley electoral y de las disposiciones de este decreto.

Cuando la corporación en cuyo censo haya de inscribirse el elector sea Universidad Literaria, le será indispensable presentar antes de su inscripción en el respectivo colegio especial un título facultativo ó profesional, y necesitará asimismo acreditar su residencia dentro del respectivo distrito universitario.

Cuando se trate de una Sociedad Económica ó de una Cámara de comercio, industrial ó agrícola, necesitará ser socio ó miembro numerario ó correspondiente de ella, con arreglo á las disposiciones generales de carácter oficial por que se rija su organización ó sus estatutos; y para el efecto de acreditar dicho carácter de socio ó miembro numerario ó correspondiente, basará que la respectiva Junta directiva ó de gobierno no ponga reparo.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley electoral, las bajas en el censo general para pasar á formar parte de los colegios especiales podrán solicitarse por alguna de las tres formas siguientes:

1.ª Por comparecencia ante la Junta provincial, certificando el Secretario del conocimiento del solicitante.

2.ª Por comparecencia ante la Junta municipal, que constará en acta que firmarán el Presidente, el secretario y el elector que solicitase la baja.

3.ª Por escrito á la Junta provincial, en el que conste por acta notarial la solicitud del elector de pasar al colegio especial, y se dé fe por el Notario del conocimiento del solicitante.

Las comparecencias, así como los escritos con acta

notarial, podrán efectuarse y suscribirse individual ó colectivamente, con tal de que todos los interesados pretendan pasar á un mismo colegio y tengan la misma residencia.

Art. 3.º En el mismo día en que se verifiquen las comparecencias ante las Juntas provinciales, ó en que reciban éstas las actas-listas de las efectuadas ante las Juntas municipales, ó en que se les presenten las solicitudes solemnizadas con el acta notarial, deberán dichas Juntas provinciales extender con el carácter de provisionales las anotaciones de bajas en el censo general, haciéndolo constar así en los documentos que ellas expidan, ó bien en su caso al pie de las actas ó documentos notariados que hayan recibido, y oficiarán incontinenti á las Juntas municipales respectivas comunicándoles las bajas de los electores.

En el mismo día deberán asimismo quedar entregados los documentos á los interesados ó á las Juntas encargadas de la formación de los censos especiales respectivos.

Art. 4.º Las certificaciones á que se refiere el número 3.º del art. 25 de la ley podrán extenderse por nota á continuación de las certificaciones expedidas por las Juntas provinciales, ó de las notas certificadas puestas por las mismas Juntas, y deberán autorizarse por el Presidente y Secretario de la Junta municipal tan luego como se reclamen por cualquier interesado, y previo el examen correspondiente, que se hará en el mismo acto.

Art. 5.º Los Rectores de las Universidades, los Presidentes de las Sociedades Económicas de Amigos del País y los de las Cámaras de comercio, industriales y agrícolas podrán anunciar la forma en que han de acudir á ellos los que soliciten ingresar en el censo especial respectivo, sujetándose á las fechas y prescripciones de este decreto.

Art. 6.º Las Juntas directivas que establece el ar-

culo 27 de la ley electoral, correspondientes á las Universidades Literarias, Sociedades Económicas y Cámaras de comercio, industriales ó agrícolas que quieran instituirse inmediatamente en colegios especiales, deberán presentar el día 5 de Diciembre próximo sus respectivos censos á la Junta provincial del Censo á que corresponda el domicilio de la oficina principal de la corporación, para que se inserten en el número extraordinario del *Boletín oficial* de la provincia.

Asimismo deberán someterse á las prescripciones de los artículos siguientes.

Art. 7.º La publicación en dicho *Boletín oficial* de la provincia habrá de tener efecto, á más tardar, el día 10 del citado mes de Diciembre.

Art. 8.º De las resoluciones de las Juntas encargadas de la formación de los censos especiales se podrá apelar directamente para ante la Audiencia territorial dentro de los seis días naturales, á contar desde la publicación de dichas resoluciones en el *Boletín oficial*, diéndose acompañar los documentos en que se funde la impugnación.

Art. 9.º Dentro de los quince días naturales siguientes á la interposición de los respectivos recursos, y con arreglo á lo dispuesto en el art. 29 de la ley electoral, deberán las Audiencias territoriales resolverlos en la forma y condiciones establecidas en el art. 15 de la misma, sin que bajo ningún motivo ni pretexto pueda retardarse la resolución más allá del 6 de Enero de 1891, que será el último día en que habrán de comunicar sus acuerdos á las correspondientes Juntas directivas ó de gobierno.

Art. 10. Con el resultado de estas apelaciones se ratificará el censo especial de las corporaciones, según dispone el art. 30 de la ley electoral, debiéndose publicar el nuevo, á más tardar, el día 16 del citado mes de Enero y remitirse por la Junta provincial los ejemplares que determina el citado artículo.

Art. 11. En el período desde el día 10 de Diciembre próximo hasta el 16 de Enero de 1891, las respectivas Juntas directivas ó de gobierno prepararán la división en secciones y concertarán en su caso el plan de asociación con las corporaciones más próximas de la misma clase para llegar á reunir los 5.000 electores que exige como minimum el art. 24 de la ley electoral. Juntamente con la designación de Presidentes y suplentes y señalamiento de locales que prescribe el art. 31 de la misma, se comunicarán los debidos antecedentes, á más tardar el día 17 de Enero, á la Junta Central para su resolución. Dichos antecedentes se comunicarán igualmente á la Junta provincial. Si para el día 27 de Enero no hubiese ésta recibido resolución de la Junta Central, se entenderán aprobadas la división y designaciones referidas, y en todo caso se publicarán por la Junta provincial en el *Boletín oficial* antes del día 1.º de Febrero siguiente, remitiendo á la Junta Central, á la Presidencia de las corporaciones respectivas y á las de cada sección electoral del respectivo colegio especial, ejemplares firmados y sellados.

Art. 12. Una vez constituido el colegio, la Junta provincial lo comunicará á la Central, así como á las Juntas municipales, para que éstas consideren como definitivas las anotaciones de bajas provisionales.

Igual advertencia consignarán también las Juntas provinciales en el censo general.

Art. 13. Si sobre la base de una misma acta de corporación alguna Cámara agrícola estuviera oficialmente organizada en secciones ó sucursales ó Juntas locales, por manera que funcionaran éstas como Junta directiva ó de gobierno de los asociados en la respectiva localidad ó región, aunque bajo la dependencia superior de otra Junta directiva central, la Junta directiva que corresponda al domicilio de la oficina principal de aquella corporación, según lo dispuesto en el art. 27 de la ley electoral, será la encargada de cumplimentar ante

la Junta Central del Censo todo lo dispuesto en el artículo 11.

Art. 14. Las Mesas y los procedimientos electorales de los colegios especiales se regirán por las disposiciones del art. 32 de la ley electoral.

Con respecto á las Universidades Literarias el censo electoral se forma con electores pertenecientes á las diferentes provincias del distrito universitario, conforme al art. 26 de la ley electoral, la designación

de Interventores por los candidatos se hará ante la Junta provincial que corresponda al domicilio de la oficina principal de la Corporación. En esta misma oficina se verificará el escrutinio.

Quando se trate de colegios especiales formados por Corporaciones asociadas, la designación de Interventores se hará asimismo ante la Junta provincial que corresponda al domicilio de la oficina fijada como oficina principal en el concierto de esta asociación.

Quando una Cámara agrícola compuesta de secciones regionales, ó Juntas locales ó sucursales, abarque diferentes provincias, la Junta central de dicha Cámara, teniendo en cuenta la distribución de sus organizaciones respectivas, propondrá para cada una de sus secciones, Juntas locales ó sucursales, la Junta provincial del Censo ante la cual deba hacerse la designación de Interventores, así como la oficina provincial en que han verificarse los escrutinios.

Art. 15. En las Universidades Literarias, Sociedades Económicas de Amigos del país y Cámaras de comercio, industriales ó agrícolas que hayan de elegir uno ó más Diputados, será aplicable en un todo lo dispuesto en el art. 22 de la ley electoral.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Noviembre de 1890.—Silvela.

Sr. Gobernador civil de la provincia de ..

Circular de la Junta Central del Censo, relativa á los acuerdos tomados para la aplicación de la ley electoral. —(17 de Noviembre de 1890.)

JUNTA CENTRAL DEL CENSO ELECTORAL.—*Circular.*—El considerable número de consultas dirigidas á esta Junta, y resueltas en las sesiones que ha celebrado durante el mes de Octubre último, ha dado lugar á que se adoptaran algunos acuerdos referentes á la aplicación de la ley electoral, que, no obstante haberse comunicado directamente á las Juntas; funcionarios ó particulares que los motivaron con sus instancias, atendiendo á su carácter de generalidad, resolvió esta Junta que, tan luego como terminaran sus sesiones, se publicasen en una circular, como ya se hizo con los que se adoptaron en las sesiones de 6 y 7 de Agosto último.

En cumplimiento del expresado acuerdo, se insertan á continuación las siguientes reglas generales:

1.ª En lo sucesivo, los Diputados provinciales interinos no pueden votar en la elección de los cuatro Diputados provinciales en ejercicio que han de formar parte de la Junta provincial del Censo.

2.ª A falta de Presidente y ex-Presidentes, en ausencia ó enfermedad de éstos, pueden presidir las Juntas provinciales del Censo los ex-Vicepresidentes de Diputación por orden de antigüedad.

3.ª Formarán parte de las Juntas municipales del Censo los ex-Alcaldes que desempeñaron sus cargos por dimisión de otros que lo fueron como Concejales de elección popular, si á su vez aquéllos tuvieron este carácter y no lo fueron por nombramiento gubernativo.

4.ª No pueden formar parte de las Juntas municipales del Censo:

mero. Los Alcaldes que hayan dejado de serlo nulacion de elecciones, siempre que ésta haya sido dada por Autoridad competente.

undo. Los Alcaldes nombrados por Concejales nos.

cero. Los ex-Alcaldes que sean Secretarios del tamiento.

arto. Los Alcaldes nombrados por las Juntas regionarias.

Los Concejales de elección popular que hayan ido sus cargos, formarán parte de las Juntas municipales del Censo, y no los interinos que les hayan sucedido.

ualmente, los Concejales que, formando parte de las Juntas, hubieran sido destituidos por orden gubernativa, continuarán perteneciendo á las mismas Juntas no se diere contra ellos auto de procesamiento.

Las Juntas provinciales del Censo serán convocadas por sus Presidentes siempre que sea necesario el ejercicio de las funciones que la ley les encomienda, y en la forma y tiempo que la misma deter-

Quando en la primera sesión que celebren las Juntas provinciales del Censo no hubiera habido tiempo para resolver todas las reclamaciones presentadas, éstas que celebren en el día siguiente y sucesivos, si la interrupción se considerará como sesiones distintas, debiendo dar al acuerdo de su celebración la publicidad conveniente para que, conocido de todos los interesados, puedan hacer las reclamaciones á que tienen derecho.

Para hacer efectivas las dietas devengadas por los comisionados nombrados para recoger documentos orales, puede emplearse la vía de apremio, como indica el art. 109 de la ley electoral para el pago de costas.

9.ª En la casilla titulada «Domicilio» de las listas definitivas debe consignarse la calle y el número de la casa que habita el elector; y cuando esto no sea posible, cuantas circunstancias sean precisas para no confundir á un elector con otro que tenga igual nombre y apellidos.

10.ª El precio de venta de las listas definitivas que deben facilitarse á los electores, lo fijarán las Juntas provinciales del Censo con arreglo al coste de impresión de cada pliego.

11.ª El libro del Censo ha de ser escrito y no impreso, dejando entre los nombres de elector á elector el espacio suficiente para que en la casilla de notas marginales puedan consignarse las necesarias, siempre que sea rigurosamente correlativa la numeración de los electores dentro de cada sección.

Los libros del censo serán encuadernados y foliados, y se observarán en ellos las formalidades siguientes:

Primera. En el primer folio del libro se consignará en letra el número de los que contiene, cuya nota será firmada por todos los individuos y Secretario de la Junta provincial y autorizada con el sello de la misma.

Segunda. Todos los folios serán autorizados con el sello de la Junta.

Tercera. Al final de cada sección, y después del nombre del último elector, y sin dejar espacio alguno, se consignará en letra el número total de los que constituyan dicha sección, nota que será firmada también por los individuos y Secretario de la Junta provincial.

12.ª Conforme al art. 16 de la ley electoral, corresponde á las Juntas provinciales del Censo, y no á la Central, la distribución de los electores en secciones, dentro de las prescripciones de la misma ley.

13.ª Los Jueces de instrucción y de primera instancia deberán expedir certificaciones de lo que conste en sus respectivos Juzgados, para los efectos de lo prevenido en los arts. 11 y 19 de la ley electoral, sin per-

APÉNDICE 13.º

as resoluciones que, oída la Junta de Gobierno, para que puedan dar cumplimiento disponen los mencionados artículos los Gobernadores civiles y los Alcaldes públicos para el efecto de expedir las resoluciones referentes á los cuerpos armados de la provincia.

Es necesaria la presentación de los datos en las reclamaciones electorales.

Participo á V. S. para su conocimiento y para su digna presidencia, esperando que se tomen las providencias necesarias para la publicación de los datos en el *Boletín oficial* de esa provincia. Doy fé á V. S. muchos años. Palacio de Justicia, 1.º de Noviembre de 1890.—El Presidente de la Junta provincial del Censo electoral don

Circular de la Junta Central del Censo, dictando algunas disposiciones sobre organización de los colegios especiales.—(29 de Noviembre de 1890.)

JUNTA CENTRAL DEL CENSO.—Circular (1).—Publicado el censo general, ha llegado el caso previsto en los arts. 24 y 34 de la ley electoral vigente, de dictar las disposiciones concernientes para que puedan funcionar los colegios especiales, cuya organización incumbe exclusivamente, según el art. 24 de la citada ley, á la Junta Central del Censo.

Esto es tanto más necesario hoy, cuanto que inspirándose sin duda en el deseo de ver funcionar desde luego estos nuevos organismos, se han dictado disposiciones que no podrían prevalecer en caso de diferenciarse de los acuerdos de esta Junta, dada la competencia que la ley le confiere y que el Gobierno sin dificultad le ha reconocido.

Cuando se estudia con detenimiento la ley, se ve que si los colegios especiales no han de ser la negación del sufragio universal, lo cual no ha podido estar en la letra ni en el espíritu de la ley electoral, deben en su organización tomarse precauciones que se desprendan del mismo espíritu de la ley.

Claro es que cuando la ley, para poder ser considerado candidato, ha querido, según el art. 37, aparte ciertas categorías que taxativamente ha marcado que se tengan en cuenta, según el párrafo 2.º de ese mismo artículo, que sean considerados tales los que hubiesen luchado en el mismo distrito en elecciones anteriores

(1) Por Real orden de 30 de Noviembre de 1890 se dispuso se cumplieran las reglas acordadas en esta circular. (Apéndice 18.º)

y obtenido la *quinta* parte por lo menos como en el párrafo 4.º que las cédulas de presentación de Interventores hayan de estar firmadas por la *vigésima* parte de los comités electorales del distrito electoral, sea cual es el criterio que ha presidido en la ley, sería tanto más grave, cuanto que para las asociaciones últimamente organizadas basta para ser individuo de ellas, ser en los 25 años, con tal que reúnan el número de firmas que la ley marca para formar colegio especial.

El que no se hayan señalado más condiciones que ser español y tener 25 años, no puede, decirse que los que entren á formar los colegios especiales no reúnen las demás que la ley exige, se encuentra en primer término la reconsideración, indispensable en todo caso, del art. 1.º, para tener el derecho de votar. En el embargo, exigirse más que en la local donde el colegio especial se forme, ó en la de aquélla á la que el elector tiene derecho á constituir colegio especial, no es reunir con otros de igual naturaleza por el número de votos que la ley exige.

Otra de las cuestiones que necesariamente han de ser sometidas á la Junta, es el modo de pasar los censos generales al especial, á fin de evitar el fraude, establecido terminantemente en la ley, se le ha revestido de toda clase de solemnidad, y de su letra se desprende que debe ser en forma de colectivo, como consecuencia de la formación de los colegios especiales, que constituye una verdadera excepción de la ley.

Punto también de importancia es el de las corporaciones que forman colegio especial. El art. 82 de la ley, deberá ser en el domicilio de la corporación, bajo la presidencia de

peñe la de la misma, y de aquí cabalmente nace la dificultad de definir cuál es el domicilio principal. Podrían seguirse para esta designación diferentes sistemas: ya el de que fuera el domicilio de la corporación más antigua; ya el de la que hubiese tomado la iniciativa para la formación del colegio especial; ya el de la que aportase mayor número de electores á la acumulación; ya el de la que estuviera situada en mejores condiciones que las demás, y quizás algún otro; pero parece lo más natural que la Junta Central, al remitirle la división de secciones, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, marque cuál ha de ser la Junta de escrutinio general.

Los demás puntos que se relacionan con los colegios especiales, cree la Junta que están perfectamente explicados en la ley, y por lo tanto, que debe limitarse á reproducirlos en la parte dispositiva, marcando, sin embargo, plazos improrrogables y condiciones para que se tenga conocimiento perfecto de la organización de los colegios especiales.

En vista de las anteriores consideraciones, y estimando la Junta Central que para evitar toda clase de dificultades al implantar los colegios especiales, debe dictar una disposición en que se consignent cuantas medidas ha creído convenientes señalar para la organización de dichos colegios, ha acordado en sesión de ayer, á que asistieron, bajo mi presidencia, los Excelentísimos Sres. D. Práxedes Mateo Sagasta, D. Cristino Martos, D. Nicolás Salmerón, D. Emilio Castelar, D. Francisco de Cárdenas, Marqués de la Vega de Armijo, D. José Elduayen, D. Rafael Cervera, D. Gaspar Núñez de Arce, Marqués de Sardoal, D. Fernando de León y Castillo, D. Lorenzo Domínguez, D. Trinitario Ruiz Capdepón y D. Manuel de Eguilior, la siguiente circular:

Artículo 1.º Con arreglo al art. 24 de la ley electoral de 26 de Junio de 1890, tienen derecho á constituir

gios especiales y á elegir un Diputado á (, 5.000 electores de que se compongan, las les Literarias, las Sociedades Económicas del País y las Cámaras de comercio, indt solas organizadas oficialmente.

as corporaciones expresadas que no l ero de 5.000 electores, se asociarán á las as de la misma clase para constituir colegio es- al.

t. 2.º Se requiere para ser comprendido en el o electoral de las corporaciones á que se refiere el ulo anterior:

º Ser elector inscrito en el censo general, sin an- in de incapacidad ó suspensión.

º Acreditar por certificación de la Junta provin- del Censo electoral, que se ha anotado en éste y unicado á la respectiva Junta municipal la baja elector que haya de figurar en el de cualquiera de as corporaciones.

º Acreditar igualmente por medio de certificación ada por el Alcalde Presidente y por el Secretario Junta municipal, el recibo de la comunicación ionada en el párrafo anterior, á los efectos preve- s en el art. 19 de la ley electoral.

uando la corporación en cuyo censo haya de ins- larse el elector sea una Universidad Literaria, será pensable además presentar un título facultativo fisional, y residir dentro del distrito universita- Cuando se trate de una Sociedad Económica ó de Cámara de comercio, industrial ó agrícola, ser ó miembro numerario ó correspondiente de ella, arreglo á las disposiciones generales de carácter al por que se rija su organización y á sus estatutos, a residencia dentro del territorio á que se extien- las funciones de la corporación.

t. 3.º Según el acuerdo 4.º de la circular de la a Central del Censo electoral de 6 del corriente,

los electores que reúnan las circunstancias expresadas en el artículo anterior podrán pedir su baja en el censo general desde el día 15 del actual y en la forma que determina el artículo siguiente.

Art. 4.º La baja en el censo electoral general para pasar á formar parte del de los colegios especiales, habrá de solicitarse individualmente por alguna de las tres maneras siguientes:

1.ª Por comparecencia ante la Junta provincial, y certificando del conocimiento del solicitante el Secretario de la misma.

2.ª Por comparecencia ante la Junta municipal, que constará en acta que firmarán el Presidente, el Secretario y el elector que solicitare la baja.

3.ª Por escrito á la Junta provincial, acompañando acta notarial en que, con fe del conocimiento por el Notario, se haga constar la solicitud del elector de pasar al colegio especial.

Art. 5.º Para dejar sin efecto la nota de baja que expresa el número 2.º del art. 2.º de esta circular, será preciso acreditar con certificación del Presidente y Secretario del colegio especial, que el elector no llegó á ser alta en él, ó que se le dió de baja á su instancia. Para acordar esta baja en el colegio especial, habrá de solicitarse individualmente de la Junta directiva del Censo del mismo, por una de las dos maneras siguientes:

1.ª Por comparecencia ante la Junta directiva del colegio especial, que constará en acta que firmarán el Presidente, el Secretario y el elector que solicitare la baja.

2.ª Por escrito, acompañando acta notarial en que, con fe del conocimiento por el Notario, se haga constar la solicitud del elector de dejar de pertenecer al colegio especial.

La Junta directiva del Censo del colegio especial dará inmediatamente conocimiento de la baja del elec-

al Presidente de la Junta provincial, el cual hará anotar la nota de baja en el censo general y lo comunicará al de la municipal respectiva para los efectos del art. 19 de la ley electoral.

Art. 6.º En el mismo día en que se verifique la comparecencia ante la Junta provincial, ó en que reciba el acta de la efectuada ante la Junta municipal, ó que se le presente la solicitud solemnizada con el sello notarial, deberá dicha Junta provincial extender, con el carácter de provisional, la anotación de baja en el censo general, haciéndolo constar así en el documento que ella expida, ó bien, en su caso, al pie del acta ó documento notarial que haya recibido, y oficiará inmediatamente á la Junta municipal respectiva, comunicándole la baja del elector. En el mismo día deberá quedar entregado el documento al interesado. .

Art. 7.º La certificación á que se refiere el núm. 8.º del art. 2.º de esta circular podrá extenderse por nota de continuación de la certificación expedida por la Junta provincial ó de la nota certificada puesta por la misma Junta, y deberá autorizarse por el Presidente y Secretario de la Junta municipal tan luego como se reclame por el interesado, y previo el examen correspondiente, se hará en el mismo acto.

Art. 8.º Conforme al acuerdo 4.º de la ya mencionada circular de 6 del corriente, los Rectores de las Universidades, los Presidentes de las Sociedades Económicas de Amigos del País y los de las Cámaras de Comercio, industriales y agrícolas, podrán anunciar lámina en que han de acudir á ellos los que deseen inscribirse en el censo especial respectivo, debiendo éstos publicarlo desde el 15 del actual, según ya se dispone en el acuerdo 3.º de la misma circular, hasta el día 5 Diciembre próximo, fecha fijada por la Real orden del Ministerio de la Gobernación de 15 del corriente en la que las Juntas directivas que establece el art. 27 de la ley electoral que quieran constituirse inmediata-

mente en colegios especiales presenten sus respectivos censos á la Junta provincial á que correspondan.

Art. 9.º En las Universidades Literarias, la formación y rectificaciones del censo electoral estarán á cargo de una Junta compuesta del Rector, Presidente, de los Decanos de las Facultades y de los Directores de los Institutos y Jefes de las Escuelas superiores, especiales y profesionales establecidos en la misma ciudad.

En las Sociedades Económicas y Cámaras de comercio, industriales y agrícolas, estas funciones corresponderán á las respectivas Juntas directivas ó de gobierno.

Art. 10. Las Juntas directivas de las Universidades Literarias, Sociedades Económicas y Cámaras de comercio, industriales y agrícolas que quieran constituirse inmediatamente en colegios especiales, deberán comunicar á la Junta provincial del Censo á que corresponda el domicilio de la oficina principal de la corporación, antes del día 5 de Diciembre próximo, según se dispone en el art. 8.º de esta circular, sus censos especiales, con las resoluciones de inclusión ó de exclusión dictadas por las mismas Juntas directivas, á fin de que se inserten en el número extraordinario del *Boletín oficial* de la provincia.

Art. 11. La publicación de los respectivos censos de colegios especiales en el *Boletín oficial* de la provincia habrá de tener efecto, á más tardar, el día 10 del citado mes de Diciembre.

Art. 12. De las resoluciones de inclusión ó exclusión en los censos especiales podrá apelar ante la Audiencia territorial respectiva cualquiera de las personas á quienes el art. 14 de la ley electoral atribuye el derecho de reclamar. La apelación se interpondrá dentro del plazo de seis días, á contar desde la publicación de las resoluciones en el *Boletín oficial*, pudiéndose acompañar los documentos en que se funde la impugnación.

La Audiencia, dentro de los quince días siguientes á la interposición de la apelación, y previo informe de la Junta cuya resolución se haya impugnado, y con citación de la misma y del elector interesado en su caso, resolverá en la forma y condiciones establecidas en el art. 15 de la ley electoral, sin que bajo ningún motivo ni pretexto pueda dilatarse la resolución más allá del 6 de Enero de 1891, que será el último día en que habrán de comunicar sus acuerdos á las correspondientes Juntas directivas ó de gobierno y á las provinciales del Censo.

Art. 13. Con el resultado de las declaraciones de las Juntas directivas sobre inclusión é exclusión, y en su caso de las resoluciones de la Audiencia territorial respectiva, se formará definitivamente el censo especial de las corporaciones, publicándose en número extraordinario del *Boletín oficial* de la provincia antes del día 15 de Enero de 1891, y no se revisará hasta la fecha que establece la 2.ª de las disposiciones transitorias de la ley electoral para la rectificación del censo general.

La Junta provincial remitirá ejemplares del censo especial, sellados y firmados, á la Junta Central del Censo electoral, á la Presidencia de las corporaciones respectivas, al Presidente de la Audiencia territorial y á los Jueces de instrucción, de primera instancia y municipales á que correspondan los domicilios de los comprendidos en el censo general.

Asimismo la Junta provincial del Censo publicará, como complemento de las listas ordinarias, una división de secciones, en que se comprendan los electores que no han sido baja en el censo general por formar los colegios especiales, y las comunicará á los respectivos, á fin de que aquéllos puedan oportunamente su derecho en las elecciones que se refiere el art. 1.º adicional de la ley

Art. 14. Las corporaciones que cuenten al número de 5.000 electores sin asociarse á otras de la misma clase, una vez ultimados sus censos con arreglo á los artículos 28, 29 y 30 de la ley electoral, los remitirán inmediatamente á la Junta Central, entendiéndose que están ultimados cuando las Audiencias territoriales hayan comunicado á las respectivas Juntas directivas sus resoluciones sobre inclusión ó exclusión de electores, dentro de las fechas fijadas por el Gobierno de S. M. en la Real orden de 15 del corriente.

Art. 15. Las Juntas directivas de las corporaciones comprendidas en el artículo anterior dividirán su cuerpo electoral en las secciones necesarias para la votación, no debiendo pasar de 500 el número de electores de cada una, y agrupando á éstos según su domicilio. También designarán para cada sección un Presidente ordinario y un suplente, que lo serán, con arreglo al art. 24 de la ley electoral, los del establecimiento ó sucursal de más representación que las mismas corporaciones tengan en las respectivas localidades, y en su defecto los socios más antiguos que residan en ellas.

A la vez señalarán los locales en que se hayan de constituir las secciones, los cuales serán de la dependencia de la corporación, si los tuviere. La división y designación referidas se comunicarán, á más tardar, el día 17 de Enero de 1891, á la Junta Central, la cual podrá aprobarlas ó modificarlas. Igualmente se comunicarán á la Junta provincial. Si para el día 27 de Enero no hubiese ésta recibido resolución de la Junta Central, se entenderán aprobadas la división y designación referidas, y en todo caso se publicarán por la Junta provincial en el *Boletín oficial* antes de día 1.º de Febrero siguiente, remitiendo á la Junta Central, á la Presidencia de las corporaciones respectivas y á las de cada sección electoral del colegio especial, ejemplares firmados y sellados.

Art. 16. Las corporaciones que por no contar 5.000 electores tengan que asociarse á otras de la misma clase para constituir colegio especial, no podrán practicar alguna gestión para su asociación hasta tener los sus censos particulares y haberlos remitido á la Junta Central, conforme al segundo de los acuerdos de esta circular de ésta, de fecha 6 del actual.

Para remitir estos censos particulares, manifestarán á la Junta Central con qué corporaciones de las más numerosas y de la misma clase piensan asociarse, si han practicado alguna gestión para ello, y cuáles han sido sus resultados.

Después como los censos particulares de las corporaciones asociadas contengan 5.000 electores cuando la Junta Central declarará constituido el colegio especial, y atendidas las condiciones de antigüedad, de electores y facilidades de comunicación de las corporaciones asociadas, designará cuál deba ser la Junta directiva principal de dichas corporaciones que se practique cuantas operaciones determina el artículo anterior de esta circular, y dentro de los plazos que para este efecto establezca el Gobierno

17. Si sobre la base de una misma acta de corporación, alguna Cámara agrícola la estuviera oficialmente organizada en secciones ó sucursales ó Juntas localmente que funcionaran éstas como Juntas directivas ó de Gobierno de los asociados en la respectiva localidad ó región, aunque bajo la dependencia de otra superior, la Junta directiva á que corresponda el control de la oficina principal de aquella Corporación lo dispuesto en el art. 27 de la ley electoral 6 de esta circular, será la encargada de cumplir ante la Junta Central del Censo todo lo que el art. 15 de la mencionada circular.

18. Ningún colegio especial comenzará á fun-

cionar hasta que esté ultimado y publicado el censo electoral correspondiente.

Interin no se haya constituido el colegio en la forma indicada en los artículos anteriores, los electores que hubieren solicitado su inclusión en el censo del mismo no serán baja definitiva en el general del distrito á que pertenezcan, si bien se harán en él con carácter provisional las anotaciones procedentes.

Una vez publicado el censo y constituido el colegio, la Junta provincial lo comunicará á la Central, así como á las municipales, para que conviertan en definitivas las anotaciones de bajas provisionales.

En los casos en que se disuelva un colegio, ó la Junta Central, en vista del resultado del censo, declare que aquél no puede funcionar por haber disminuído el número de electores que se requiere para constituirlo, la Junta provincial lo comunicará á las municipales, para que en el primer caso se cancelen definitivamente las anotaciones de baja en los censos de distrito, y en el segundo se conviertan en provisionales hasta que el colegio se constituya de nuevo.

La Junta provincial y las municipales darán conocimiento á las respectivas superiores de haber cumplido las obligaciones que se les impone en el párrafo anterior.

Art. 19. Una vez aprobado por la Junta Central el proyecto de división de secciones de los colegios especiales, se abrirá en la Secretaría de la oficina principal del colegio especial un libro titulado «Censo electoral especial de (tal colegio)», dividido en tantas partes cuantas fueren las secciones aprobadas por la Junta, ninguna de las cuales podrá exceder de 500 electores.

En cada una de las secciones se inscribirán, según dispone el art. 9.º de la ley, y por orden alfabético de primeros apellidos, éstos y los nombres de los respectivos electores, con expresión además de su edad, domicilio y profesión, y de si saben leer y escribir, en los

de aquellas corporaciones en que no se exige título facultativo ó profesional. Deberá consignarse también la provincia, Municipio y sección del mismo de que procede el elector, número que tenía en la sección respectiva del censo general, fecha en que obtuvo la baja en el censo general y su inscripción en el especial, y fecha de su ingreso como socio ó miembro numerario ó correspondiente de la Sociedad Económica, Cámara de comercio, industrial y agrícola, cuando se trate del censo de esta clase de corporaciones, y no de Universidades Literarias.

Por notas marginales, autorizadas por el Presidente y Secretario de la Junta directiva, con referencia á los respectivos documentos, se expresarán las exclusiones y las suspensiones del ejercicio del derecho electoral, y en su caso la cancelación de estas anotaciones, así como las bajas y altas que se produzcan.

Los libros del censo se exhibirán gratuitamente en todo tiempo á cualquiera que lo solicite, y no podrán hacerse en ellos raspaduras ni enmiendas, y las de todo punto indispensables se salvarán por notas que autoricen el Presidente y el Secretario, dando el primero conocimiento á la Junta Central.

Art. 20. Publicado el Real decreto de convocatoria de una elección en colegio especial, los Presidentes de las secciones expondrán inmediatamente al público, ta el día en que aquélla termine, las listas definitivas de los electores que formen la sección respectiva. Los Jueces de primera instancia, de instrucción y principales remitirán á los Presidentes de sección, sobre certificado y con la antelación precisa para surtan efecto en el día de la elección, las certificaciones determinadas en el art. 19 de la ley electoral, cuanto afecten á los electores comprendidos en los censos especiales, noticiando, como en el citado artículo previene, el cumplimiento de este servicio al Presidente de la Junta provincial.

Art. 21. Las listas de los colegios especiales deberán expresar las circunstancias siguientes:

1.ª Provincia, Municipio y sección del mismo de que procede el elector, con expresión del número que tiene en el censo general.

2.ª Fecha en que obtuvo el alta en el censo del colegio especial.

3.ª Apellidos y nombre del elector, y demás circunstancias que se exigen en el censo general.

4.ª Título facultativo ó profesional que haya presentado, si la lista se refiere á censos de una Universidad Literaria.

5.ª Si es socio ó miembro numerario ó correspondiente, si se trata de una Sociedad Económica de Amigos del País ó de una Cámara de comercio, industrial y agrícola, indicando la fecha de su ingreso, con expresión del número de orden con que aparece en la lista, así como el que le corresponde en el colegio especial.

Estas listas se ajustarán á los modelos adjuntos:

COLEGIO ESPECIAL DE (1)				SECCION				
Número de orden.	Apellidos y nombres de los electores (2).	Edad	Domicilio	Profesión	Título facultativo o profesional que ha presentado.	Fecha en que obtiene el alta en este censo.	Provincia, Municipio y sección de donde procede al elector.	Número que tiene en el censo general.

(1) Aquí el nombre ó nombres de la Universidad ó Universidades Literarias que formen el colegio especial.

(2) Por orden alfabético de primeros apellidos.

CENSO ELECTORAL										SECCIÓN	
COLEGIO ESPECIAL DE (1)	
Número de orden.	Apellidos y nombres de los electores (2).	Edad	Profesión.	Sabe leer.	Sabe escribir.	Sabe numerar o contar.	Fecha de su ingreso en la corporación.	Fecha en que obtuvo el alta en este censo.	Número de orden en la lista ó escala de la corporación.	Provincia, Municipio y sección de donde procede al elector.	Número que tiene en el censo general.

(1) Aquí el nombre ó nombres de la Sociedad ó Sociedades Económicas de Amigos del País, Cámara ó Cámaras y agrícolas que formen el colegio especial.

(2)

Art. 22. Las Mesas y los procedimientos electorales de los colegios especiales se regirán por lo establecido en la ley electoral de 26 de Junio de 1890 para las Mesas y procedimientos electorales en los distritos, desempeñando las funciones que en dichas Mesas corresponden á los Alcaldes y sus suplentes, los Presidentes de las corporaciones y los designados para sus secciones.

Art. 23. Los Interventores serán designados por los candidatos ante las Juntas provinciales del Censo electoral, para todas las secciones comprendidas en la provincia respectiva y en la misma forma determinada en los arts. 39 y siguientes de la ley electoral.

Art. 24. Para ser candidato en un colegio especial será necesario que haya sido propuesto, por lo menos, por la vigésima parte del total de sus electores.

Art. 25. El escrutinio general tendrá siempre lugar en el domicilio principal de la corporación, bajo la presidencia de quien desempeñe la de la misma, sujetándose dichas Mesas y las Juntas de escrutinio en sus relaciones con el público, con las autoridades y con las Juntas Central y provincial del Censo electoral, á las obligaciones impuestas á las Mesas y Juntas de escrutinio de los distritos.

Art. 26. En las Universidades Literarias, Sociedades Económicas de Amigos del País y Cámaras de comercio, industriales y agrícolas que hayan de elegir uno ó más Diputados, será aplicable en un todo lo dispuesto en el art. 22 de la ley electoral.

Art. 27. La inscripción de un elector en un censo especial impide su inclusión en otro de esta clase. A este fin se hará constar sucintamente en las anotaciones marginales en el censo general, la fecha en que el elector pidió su baja, la en que se le concedió, y el censo del colegio especial al cual pasa á formar parte.

Art. 28. Antes del día 5 de Diciembre próximo, los Secretarios de las Sociedades Económicas de Amigos

APÉNDICE 14.º

s, Cámaras de comercio, industria
án á la Junta Central copia cert
de sus Presidentes, de los estatutos y regla-
por que se rigen dichas corporaciones y hayan
robados, expresando en cada caso la autoridad
hizo.

nismo los Secretarios de las Diputaciones y de
tas provinciales del Censo electoral remitirán
ntral, antes del día 10 de Diciembre de este año,
ación expedida con el V.º B.º de los Presiden-
tichas Juntas, y con referencia á los libros del
de los electores que hasta el 5 del mismo mes
solicitado sus bajas en el censo general, con ex-
de las circunstancias siguientes:

Municipio y sección de la provincia á que el
pertenece, guardando el orden alfabético de
1.

Número que tiene el elector en el censo.

Sus apellidos y nombres.

Su profesión.

Si sabe leer y escribir.

Fecha en que ha solicitado su baja en el censo
1.

Fecha en que ha obtenido la anotación de baja.

Colegio especial á que desea pertenecer.

participo á V. S. para su inteligencia y cum-

to. Dios guarde á V. S. muchos años. Palacio

greso 29 de Noviembre de 1890.—El Presiden-

tuel Alonso Martínez.—Sr.

Reales decretos declarando legalmente constituidas las Cámaras agrícolas de Segovia y Alba de Tormes.—(«Gaceta» de 22 de Noviembre de 1890.)

Reales decretos.—Vista la instancia de la Junta directiva de la Cámara agrícola fundada en la ciudad de Segovia, en solicitud de que se reconozca oficialmente su constitución:

Visto el reglamento aprobado para su organización y régimen:

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, con arreglo á lo prevenido en los arts. 2.º y 3.º del Real decreto de 14 del actual;

En nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar constituida legalmente la expresada Cámara agrícola.

Dado en Palacio á 21 de Noviembre de 1890.—**María Cristina.**—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

Vista la instancia de la Junta directiva de la Cámara agrícola fundada en Alba de Tormes, provincia de Salamanca, en solicitud de que se reconozca oficialmente su constitución:

Vistos los estatutos aprobados para su organización y régimen:

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, con arreglo á lo prevenido en los arts. 2.º y 3.º del Real decreto de 14 del actual;

En nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar constituida legalmente la expresada Cámara agrícola.

Dado en Palacio á 21 de Noviembre de 1890.—Ma-
a Cris ina.—El Ministro de Fomento, Santos de
asa.

Real orden resolviendo las dificultades á que ha dado lugar el examen de los censos electorales en algunas provincias, y las consultas acerca de la aplicación de los mismos á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales.—(«Gaceta» de 26 de Noviembre de 1890.)

Real orden.—En el expediente instruido en este Ministerio con motivo de las dudas y dificultades á que han dado lugar el examen de los censos electorales de algunas provincias y las consultas formuladas por varios Gobernadores acerca de la aplicación de los respectivos censos á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales:

Resultando que habiéndose examinado los censos de 12 provincias, y advertido que en Alicante y en Madrid los censos de la capital tomaban por base la división en distritos municipales, y en el de Granada la división de distritos judiciales, para formar después las secciones correspondientes de 500 electores como máximo, al paso que en otras capitales sólo se había procurado atender al término municipal, lo cual habrá de crear obstáculos en estas últimas provincias para llevar á cabo las elecciones municipales, y aun en algunas para las provinciales, si las secciones respectivas comprendían electores que no perteneciesen al distrito judicial donde hubiese correspondido la renovación bienal de sus Diputados:

Resultando que consultada la Junta Central por el Gobierno de S. M., expone, por lo que se refiere al remedio de las dificultades puestas de manifiesto por la práctica, que en cuanto á las elecciones provinciales, donde ocurra lo que en Valencia, en cuyo censo no se han tenido en cuenta las convenientes divisiones, los

electores de aquellas secciones electorales que pertenezcan á dos partidos judiciales se clasifiquen en listas separadas que se publicarán en *Boletín extraordinario*, no admitiéndose á votar sino á los electores incluidos en la lista de los domiciliados en el distrito judicial á que corresponda renovación; y que en cuanto á las elecciones parciales de Concejales, podría seguirse un procedimiento análogo en aquellas secciones donde hubiera electores domiciliados en distintos distritos municipales:

Considerando que las dificultades surgidas en cuanto á elecciones provinciales sólo pueden afectar á un corto número de poblaciones que, por estar divididas en partidos judiciales, forman distritos electorales diversos, si es que en sus censos respectivos no han tenido en cuenta esta circunstancia, como lo han hecho las Juntas provinciales de Madrid y de Granada:

Considerando que los remedios propuestos como inmediatos por la referida Junta para las capitales que se hallen en el caso indicado de dificultades de censo en las elecciones provinciales, son de fácil aplicación, aun dentro del breve plazo que resta para llevarse á cabo estas elecciones:

Considerando que no siendo aún conocida por el Gobierno la manera como se han confeccionado los censos en la inmensa mayoría de las provincias, no es por lo tanto posible apreciar hoy cuántas son las Juntas provinciales que han dejado de seguir el ejemplo de las de Alicante y de Valencia, donde aparece formado el censo de la capital sobre la base de los distritos municipales:

Considerando que ante la diversidad de criterio sobre la formación del censo, por lo que se observa en las Juntas provinciales han previsto que el censo de servir para las tres elecciones de Diputados provinciales, de Diputados provinciales y de Concejales, y no por base el *distrito municipal* para la división de secciones electorales; otras que sólo han tenido

en cuenta los distritos judiciales, y otras, por último, que sólo se han preocupado de la división de los electores del *término municipal* en secciones de 500, se impone la necesidad de estudiar detenidamente este punto, para resolver con madurez y acierto la aclaración que convenga dar á las leyes y disposiciones vigentes, á fin de que en lo sucesivo se pueda aplicar en la confección del censo el sistema que resulte más en armonía con el espíritu y los propósitos del legislador:

Considerando que esta es una cuestión que fácilmente ha podido pasar inadvertida á las Juntas ante la premura y angustiosos plazos con que había de procederse para la formación del censo, si había de estar terminado para poderlo aplicar á las elecciones provinciales, fijadas en el plazo improrrogable del 7 de Diciembre próximo, señalado por la ley:

Y considerando que la práctica y conducta observadas por las Juntas provinciales de Alicante y Madrid demuestra con los hechos que el censo puede, sin trastorno de la organización municipal y provincial, y adaptándose en un todo á la legislación orgánica electoral de Diputados á Cortes, responder á las necesidades y exigencias de las tres elecciones, manteniéndose la unidad del mismo, sin que sea preciso ni indispensable, ante detalles nimios, practicar una nueva formación de distritos electorales municipales y provinciales, porque sería alterar la constitución de más de 6.000 Ayuntamientos, transformando fundamentalmente la esencia y modo de ser de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, y sustituir la base fija y de relativa estabilidad que para la organización de estos últimos y para determinar el número de los Concejales y de los distritos llamados á intervenir en elecciones parciales por vacantes extraordinarias, señalan los artículos 35, 39 y párrafo 2.º del art, 42 de la ley municipal, con la base movediza y anualmente variable de las secciones electorales;

S. M. la Reina Regente, en nombre de su augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII (Q. D. G.), y de conformidad en lo sustancial con lo propuesto por la Junta Central del Censo, se ha servido disponer:

1.º Que en las capitales de provincia donde resulten electores de una misma sección que por pertenecer a distintos distritos judiciales deben ejercer su derecho a la próxima renovación los unos, mientras que los otros deban aguardar para ejercerlo a la siguiente, seuelva por esta vez la dificultad del censo electoral especificando cuáles son los electores de dichas secciones que están domiciliados dentro del distrito judicial que corresponde la renovación, y cuáles los otros que residen en su domicilio en distrito judicial distinto.

Una vez hecha esta clasificación de electores en listas separadas, expresivas del número de cada elector del censo, de sus apellidos y nombre, edad, domicilio, profesión, y si sabe ó no leer y escribir, se publicarán en *Boletín extraordinario* las indicadas listas y searán en los sitios de costumbre, constituyéndose las Mesas de las secciones en la forma establecida por el decreto de adaptación, y no admitiéndose a votar sino los electores incluidos en la lista de los domiciliados en el distrito judicial á que corresponda elegir. La revisión de estas listas por las Juntas provinciales á los presidentes de las Mesas, y su exposición al público á puerta del local donde se halle establecido el colegio, completarán los medios de evitar confusión.

2.º Que con respecto á las resoluciones que sean necesarias para dar igualmente solución á las dificultades de la propia índole que resulten en las elecciones municipales, el Gobierno, tan luego como disponga de completo conocimiento oficial del estado del censo en todas las provincias, dicte, oída la Junta Central del Censo, las disposiciones legales convenientes, y se vayan en lo sucesivo á tomar por base uniforme en la formación de los censos los distritos municipales, puesto

que la experiencia demuestra que por la circunstancia de que estos distritos municipales pertenecen siempre y sin fraccionamiento á un mismo distrito judicial, tomándolos como punto de partida de divisiones electorales, se consigue la unidad del censo y su adaptación á los tres órdenes de elecciones, sin trastorno ni alteraciones esenciales en el régimen de los Ayuntamientos y de las Diputaciones provinciales.

Lo que de Real orden pongo en conocimiento de V. S. para los efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Noviembre de 1890.—Silvela.

Sr. Gobernador de la provincia de...

Real orden aclarando algunas dudas acerca de la inteligencia del Real decreto sobre adaptación de la ley electoral á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales.—
(«Gaceta» de 28 de Noviembre de 1890.)

Real orden (1).—Entre las múltiples consultas dirigidas á este Ministerio por los Gobernadores y Juntas provinciales, acerca de la inteligencia de varios artículos del Real decreto de 5 del corriente, adaptando la vigente ley electoral á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales, sobresalían algunas que por su importancia se ha creído conveniente oír previamente para su resolución á la Junta Central del Censo, no obstante de que todas ellas se contraen á la interpretación y aplicación del referido Real decreto, y que, por lo tanto, únicamente al Gobierno compete fijar el alcance y sentido de las disposiciones del mismo, por virtud de las facultades de reglamentación que le confiere el art. 54 de la Constitución del Estado:

Visto el dictamen formulado por la referida Junta Central, y de conformidad sustancialmente con su propuesta;

S. M. la Reina Regente, en nombre de su augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII (Q. D. G.), se ha servido acordar como resolución de los puntos consultados y aclaración de los referidos artículos las disposiciones siguientes:

1.ª Los Presidentes y Vicepresidentes de Diputación provincial y los Diputados provinciales actuales, así como los Alcaldes, Tenientes y los Concejales que no reunan respectivamente la cualidad de ex-Diputados ó

(1) Véase el art. 2.º de la Real orden de 8 de Enero de 1891. (Apéndice 21.º)

ex-Concejales, sólo por los conceptos señalados en los números 2.º y 3.º de las letras *A* y *B* del art. 16 del Real decreto de 5 del corriente (1) pueden obtener la declaración de candidatos, para el efecto de designar Interventores. Para solicitarlo por el número 2.º necesitarán haber obtenido en la elección, en el mismo distrito, la quinta parte de los votos emitidos.

2.ª Los Diputados provinciales que sean Vocales de la Junta provincial, y los actuales Concejales que tengan condiciones para ser reelegidos con arreglo al artículo 62 de la ley municipal, reformado por la ley de 9 de Julio de 1889, si solicitaren ó fueren propuestos como candidatos, no podrán tomar parte en las deliberaciones y acuerdos de la Junta respectiva en la sesión que ha de celebrar el domingo anterior al señalado para la elección, á los efectos del art. 18 del citado Real decreto.

3.ª Las solicitudes ó comunicaciones pidiendo la declaración de candidatos deberán admitirse por las Juntas, cualquiera que sea la forma en que se presenten, bastando que aparezcan firmadas por el interesado. Pero para que produzca efectos el día de la sesión á que se refiere el art. 18, los candidatos interesados, ya lo sean por solicitud ó por propuesta, han de asistir por sí ó por medio de apoderados en forma legal.

4.ª De conformidad con el espíritu y letra del art. 20 de la ley electoral, las solicitudes ó comunicaciones y las propuestas pidiendo la declaración de candidatos pueden presentarse ante la Junta provincial ó municipal respectivamente durante las siete primeras horas de la sesión que ha de celebrar el domingo anterior al día de la elección. Pasadas las siete primeras horas, se procederá ya á ultimar las operaciones de nombramiento y sorteo en su caso de los Interventores y su-

(1) Véase el Apéndice 10.º

plentes; y si no fuesen para ello bastante otras tres horas, se podrá prorrogar la sesión, siempre que lo acuerden las dos terceras partes de los Vocales. Si hubiera de continuar más de un día, se dará en cada uno conocimiento al Gobernador de la provincia.

5.ª La asistencia á la indicada sesión de la Junta provincial ó municipal respectiva es obligatoria para los Vocales natos y suplentes convocados, los cuales, cuando sin justa causa no concurrieren, ó no se excusaren oportunamente, serán corregidos por quien corresponda con las multas señaladas en los artículos 98 y 99 de la ley electoral, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que proceda con arreglo al núm. 12 del art. 88 de la misma.

Para la sesión á que se refieren la regla precedente y el art. 18 del Real decreto de 5 del corriente mes, el Presidente de la Junta respectiva convocará á los Vocales natos y á los suplentes que considere necesarios, teniendo para ello muy en cuenta la incompatibilidad en que, conforme á la regla 2.ª, pueden hallarse algunos de los Vocales.

Si á pesar de esto no se reuniese número suficiente de Vocales ó suplentes, la sesión se celebrará al día siguiente, previa convocatoria de los suplentes que residan en la capital ó en el Municipio, según los casos, y con el número de los que asistan.

6.ª Los Interventores y suplentes que propongan los candidatos, no necesitan reunir otras circunstancias que las prevenidas en el art. 20 del Real decreto de 5 de Noviembre. Los que tienen que nombrar las Juntas con arreglo al art. 22, han de ser además electores de la sección respectiva; pero si en ella no hubiese individuos bastantes que sepan leer y escribir, los candidatos podrán completar las listas con electores de otras secciones del Municipio. En este caso, las Juntas provinciales, á los efectos del párrafo 4.º de dicho art. 22, podrán también completar el número de In-

terventores con electores de otras secciones del mismo Municipio.

7.ª Tan luego como se hayan terminado las operaciones á que se refieren los artículos 17 al 23 inclusive del referido Real decreto, el Secretario de la Junta extenderá el acta de la sesión, que aprobarán y firmarán todos los individuos de la misma.

La comunicación del acta por pliegos certificados á los Alcaldes y Presidentes de las Mesas de las secciones se verificará por resúmenes certificados que habrá de autorizar el Secretario de la Junta, con el V.º B.º del Presidente, y en los que se comprenderán tan sólo los nombres de los candidatos y los de Interventores y suplentes correspondientes.

Los nombramientos de los Interventores y suplentes se autorizarán por el Presidente, y se notificarán directamente á los interesados, debiendo hacerse por conducto de los Alcaldes respectivos, cuando aquéllos residan fuera de la capital de la provincia en las elecciones provinciales, ó del Municipio en las municipales.

8.ª Para el cumplimiento de lo dispuesto en los dos últimos párrafos de la regla precedente podrá hacerse uso de documentos impresos.

Igualmente podrá hacerse uso de impresos para las credenciales de los candidatos y para las certificaciones que se solicitaren de los nombramientos de Interventores, así como para las certificaciones del escrutinio y de las actas, y las del resultado de la elección y del escrutinio general á que se refieren los artículos 35, 36, 37 y 54 del Real decreto de 5 del corriente.

Las firmas de estos documentos serán siempre autógrafas.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Noviembre de 1890.—Silvela.

Sr. Gobernador civil de la provincia de...

Real orden circular disponiendo se cumplan las reglas acordadas por la Junta Central del Censo para constituir los Colegios especiales.—(«Gaceta» de 1.º de Diciembre de 1890.)

Circular.—El Gobierno de S. M., deseando se cumpliera en todos sus extremos la ley electoral y se facilitara la constitución de algún colegio especial para las primeras elecciones, dicto, después de oír á la Junta Central sobre esa materia, varias reglas de procedimiento que entendió respondían á los propósitos expresados en las deliberaciones de la Junta, reconociendo siempre la competencia de ésta para resolver en definitiva sobre todas las cuestiones á que dé lugar el cumplimiento del art. 24 de la ley, y consignándolo así en el art. 11 de la Real orden de 13 del corriente.

Posteriormente la Junta ha acordado otras reglas dirigidas al mismo fin; y con el objeto de evitar toda duda y perturbación al cuerpo electoral, siendo ésta materia sujeta hoy á tan angustiosos plazos, y en la que el Gobierno ha intervenido principalmente con el propósito de promover la iniciativa y cooperar á la ejecución de la expresada Junta,

S. M. el Rey, y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que en todo aquello que puede corresponder á la autoridad de V. S. ó de sus subordinados, se cumplan y hagan cumplir las reglas acordadas por la Junta Central para constituir Colegios especiales (1).

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1890.—Silvela.

Sr. Gobernador de la provincia de...

(1) Véase el Apéndice 14.º

Real decreto declarando oficialmente organizada la Cámara agrícola de Medina del Campo.—(«Gaceta» de 2 de Diciembre de 1890.)

Real decreto.—Vista la instancia de la Junta directiva de la Cámara agrícola fundada en la villa de Medina del Campo, en solicitud de que se reconozca oficialmente su constitución: visto el reglamento aprobado para su organización y régimen; conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento; con arreglo á lo prevenido en los artículos 2.º y 3.º del Real decreto de 14 del mes anterior;

En nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en declarar oficialmente organizada la expresada Cámara agrícola.

Dado en Palacio á 1.º de Diciembre de 1890.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

Real decreto declarando oficialmente organizada la Liga de contribuyentes de Salamanca de 3 de Enero de 1891.)

Real decreto.—Vista la instancia de la Junta directiva de la Liga de contribuyentes de Salamanca, en solicitud de que se reconozca oficialmente su constitución en Cámara agrícola; visto el reglamento aprobado para su organización y régimen; conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, con arreglo á lo prevenido en los artículos 2.º y 3.º del Real decreto de 14 de Noviembre del año anterior;

En nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en declarar oficialmente organizada la expresada Cámara agrícola.

Dado en Palacio á 2 de Enero de 1891.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

Real orden dictando disposiciones respecto á las personas que podrán presidir las Mesas electorales, declarando supletorias las Reales órdenes de 29 de Octubre y 27 de Noviembre de 1890 sobre Interventores, y sobre designación de Magistrados y Jueces para presidir las Juntas de escrutinio general.—(«Gaceta» de 9 de Enero de 1891.)

Real orden.—Ilmo. Sr.: Consultada la Junta Central del Censo por el Gobierno de S. M. con relación á algunas dudas y dificultades propuestas acerca de la inteligencia de la ley electoral y del Real decreto de adaptación de la misma á las elecciones provinciales y municipales, de fecha 5 de Noviembre último, se dictaron las Reales órdenes de 29 de Octubre y de 27 de Noviembre, y se consignó en el art. 15 de dicho Real decreto quiénes podrían ser llamados á la presidencia de las Mesas electorales en defecto de las personas señaladas en el art. 36 de la ley. Para que no puedan reproducirse dichas dudas en las próximas elecciones de Diputados á Cortes, y con el objeto de facilitar la aplicación de los preceptos contenidos en los artículos 62 y 63 de la referida ley, puntualizando los deberes que á las respectivas Salas y Juntas de gobierno de las Audiencias corresponden en cuanto á las presidencias de las Juntas de escrutinio;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:

Artículo 1.º (1) Las Mesas electorales en las elecciones de Diputados á Cortes serán presididas por las

(1) Véase la regla 1.º de la Comunicación de 8 de Abril de 1890 dirigida al Alcalde de Madrid por el Presidente de la Junta Central del Censo y la Circular de dicha Junta de la misma fecha. (Apéndices 37.º y 38.º)

sonas designadas en el párrafo 3.º, art. 36 de la ley electoral, y en defecto de ellas, á tenor de las prescripciones del párrafo 8.º del art. 15 del Real decreto de 1.º de Noviembre último, presidirán los suplentes de Alcaldes de barrio; y si éstos no bastaran, designará el Alcalde á personas que hubieren sido Alcaldes de barrio y á ser posible, que sean electores de la sección. La Mesa hayan de presidir.

Art. 2.º Las disposiciones contenidas en la Real orden de 29 de Octubre sobre Interventores y en la de 1.º de Noviembre de 1890 (1), dictadas ambas de conformidad con el dictamen de la Junta Central del Censo, considerarán supletorias de las disposiciones de la ley electoral en la parte que fuesen aplicables á elecciones de Diputados á Cortes.

Art. 3.º Para que tenga cumplido efecto lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la ley electoral, el 1.º de Febrero, que es el señalado para la votación, y si fuere preciso, las Salas de gobierno de las Audiencias territoriales, teniendo en cuenta los preceptos de dichos artículos, y consultando las conveniencias del mejor servicio y menor perturbación de la administración de justicia, designarán los Magistrados de la propia Audiencia y de las de lo criminal que hubieren dentro de la provincia respectiva, y en su caso, en aquellas que hayan de presidir en todos los distritos judiciales de la misma las respectivas Juntas generales de escrutinio, que habrán de celebrarse el jueves siguiente:

En las demás provincias, las Juntas de gobierno de las Audiencias de lo criminal de la capital designarán los Magistrados de la misma, por orden de antigüedad, para que presidan las Juntas en los distritos electorales comprendidos en la provincia; y si por causas de lejanía, dificultad de comunicaciones ó exigencias

Véanse los Apéndices 8.º y 17.º

de la administración de justicia, apreciadas prudentemente, no dispusieren de personal bastante de Magistrados, atenderán por lo menos con los Magistrados y Jueces que de ellas dependan al territorio de su demarcación, é invitarán con toda urgencia á las Juntas de gobierno de las demás Audiencias de la provincia para que designen á su vez Magistrados y Jueces para los distritos de sus territorios respectivos. Las Juntas invitadas no podrán rehusar el cumplimiento del servicio que se les reclame.

Art. 4.º De lo dispuesto en el artículo anterior se dará traslado inmediato al Ministerio de Gracia y Justicia, á fin de que se sirva comunicar las oportunas instrucciones á los Presidentes de las Audiencias territoriales y de lo criminal.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, traslado al Presidente de la Junta provincial y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Enero de 1891 —Silvela.

Sr. Gobernador de la provincia de...

Real orden dictando disposiciones acerca de varias consultas referentes á la declaración de candidatos, firma del nombramiento de Interventores y reclamación de actas electorales. — («Gaceta» de 23 Enero de 1891.)

Real orden.—Vistas las diferentes consultas formuladas por Juntas provinciales, Gobernadores de provincia y Presidentes de Audiencia, acerca de diversos puntos relacionados con la aplicación de las disposiciones electorales vigentes á las próximas elecciones de Diputados á Cortes; y habiéndose oído á la Junta Central del Censo, en cumplimiento del art. 4.º adicional de la ley de 26 de Junio último.

S. M. la Reina Regente, en nombre de su augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII (Q. D. G.), y de conformidad con varios dictámenes de la referida Junta, se ha servido dictar las disposiciones siguientes:

1.ª Que para acreditar el carácter de ex-Diputado y ex-Senador en los casos en que este carácter se ponga en duda, no es indispensable, á los efectos de poder solicitar la declaración de candidatos, presentar certificación de la Secretaría del Congreso ó del Senado respectivamente, puesto que las Juntas provinciales disponen de datos auténticos para determinar quiénes tienen dicha cualidad, toda vez que deben existir en el Archivo de la Diputación provincial los documentos de las antiguas Juntas inspectoras del Censo.

2.ª Que, si esto no obstante, se presentaran por los interesados los referidos documentos, no es necesario lleven legalización alguna notarial.

3.ª Que, con arreglo á la letra y espíritu del art. 87 de la ley electoral, los ex-Diputados á Cortes y ex-Senadores puedan solicitar la declaración de candidatos

hasta para todos los distritos de la provincia, en cuyo caso tendran derecho á designar Interventores para todas las secciones electorales de dichos distritos.

4.ª Que una misma persona puede aparacer como apoderado de diversos individuos para el efecto de solicitar la declaración de candidatos y designar los respectivos Interventores.

5.ª Que los Presidentes de las Juntas provinciales podrán firmar con estampilla los nombramientos de Interventores y las certificaciones que pidan éstos y los candidatos.

6.ª Que con arreglo á lo dispuesto en el art. 20 de la ley electoral, los Presidentes de las Juntas municipales de las cabezas de los distritos electorales respectivos tienen la obligación de reclamar las actas de los escrutinios parciales que les falten, y que han debido remitirles á tenor del art. 56, á fin de que estén en su poder el día del escrutinio general, y si á pesar de esto no se hubiesen recibido ese día, los Presidentes de las Juntas generales de escrutinio computarán los votos de las actas recibidas, y en último caso los que consten en los certificados que presentaren los Interventores de las secciones cuyas actas no se hubieren recibido.

7.ª Que en atención á la dificultad de las comunicaciones inter-insulares, se aplaze en Canarias hasta el día 8 de Febrero próximo el escrutinio general de las elecciones de Diputados á Cortes.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1891.—Silvela.

Señor Gobernador de la provincia de...

Real orden sobre nombramiento de empleados de Correos durante el periodo electoral.—(«Gaceta» del 18 de Junio de 1891.)

Ilmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de la consulta elevada por ese Centro directivo, respecto á la posibilidad de verificar el nombramiento de individuos propuestos por el Ministerio de la Guerra para los empleos vacantes en el ramo de Correos, en el periodo que media desde la convocatoria para las elecciones generales, hasta después de terminado el escrutinio general, sin faltar á lo dispuesto en la ley de 26 de Junio de 1890, y sin incurrir por consiguiente en la sanción establecida por el art. 91 de la misma ley:

Considerando que lo dispuesto en el Reglamento de 10 de Octubre de 1885 respecto á sargentos y licenciados del ejército, propuestos para destinos civiles, no altera el carácter que de verdaderos nombramientos tienen los hechos en favor de los individuos de aquellas clases, ni puede en su favor establecerse un privilegio que no existe para persona alguna, según el absoluto precepto citado de la vigente ley de Sufragio:

Considerando que no se perjudica al servicio público prolongando durante el periodo electoral las funciones de los que con carácter provisional desempeñan los destinos objeto de las propuestas del Ministerio de la Guerra:

Considerando que no se irrogan graves perjuicios á los aspirantes militares, puesto que no se les niega un derecho, sino que sólo se suspende y paraliza su nombramiento, siguiendo así la misma suerte que cuantos funcionarios de la Administración pudieran encontrarse en análogas circunstancias;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina

Regente del Reino, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, se ha servido declarar que durante el período que media desde la convocatoria para elecciones hasta después de terminado el escrutinio general, no pueden otorgarse nombramientos ni decretarse cesantías, aun cuando tengan por objeto dar cumplimiento á lo dispuesto en la ley de 10 de Julio de 1885 y Reglamento de 10 de Octubre del mismo año, sin incurrir en la sanción penal que establece el art. 91 de la ley de 26 de Junio de 1890.

Lo que de Real orden digo á V. S. á los efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Febrero de 1891.—F. Silvela.

Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

Real orden referente al nombramiento de empleados durante el periodo electoral.—(«Gaceta» de 20 de Mayo de 1894.)

Excmo. Sr.: Examinado el expediente instruido en este Ministerio con motivo de una consulta de la Ordenación de pagos por obligaciones del mismo acerca de si son lícitos y tienen fuerza legal los nombramientos de empleados hechos durante el periodo electoral con objeto de cubrir vacantes naturales:

Visto el art. 91 de la ley de 26 de Junio de 1890, sobre emisión del sufragio, en cuyo núm. 3.º se previene que «cometen el delito de coacción electoral aunque no conste ni aparezca la intención de cohibir ó ejercer presión sobre los electores, los funcionarios, desde Ministro de la Corona inclusive, que hagan nombramientos, separaciones, traslaciones ó suspensiones de empleados, agentes ó dependientes de cualquier ramo de la Administración, ya corresponda al Estado, á la provincia ó al Municipio, en el periodo desde la convocatoria hasta después de terminado el escrutinio general, siempre que tales actos no estén fundados en causa legítima y afecten de alguna manera á la sección, colegio, distrito, partido judicial ó provincia donde se verifique la elección»:

Considerando que este precepto legal no tiene otro objeto que garantizar el libre ejercicio del sufragio, sin que por su letra ni su espíritu pueda entenderse que la Administración haya de suspender durante el periodo de las operaciones preliminares y posteriores á una elección popular el uso de sus atribuciones regladas, siempre que necesite ejercerlas en virtud de causa legítima, como claramente el mismo artículo determina:

Considerando que una de estas atribuciones, que es

necesario ejercer en todo tiempo, es la provisión de los destinos públicos, cuando éstos se hallen vacantes, si de su aplazamiento puede resultar perjuicio para el servicio, y, por tanto, para los intereses confiados al cuidado de la misma Administración;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con el dictamen de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, ha tenido á bien resolver:

Primero. Que se hallan comprendidos en la excepción de *causa legítima*, señalada en el núm. 3.º del artículo 91 de la ley de 26 de Junio de 1890, y que, por lo tanto, son lícitos y eficaces los nombramientos de empleados hechos durante el periodo electoral para cubrir las vacantes naturales, ocurridas por fallecimiento, si la provisión no afecta á las elecciones y es rigurosamente necesaria para la marcha expedita de la Administración pública.

Segundo. En las órdenes de los expresados nombramientos se harán constar el nombre del funcionario que, por fallecimiento, haya producido la vacante, y las circunstancias de no afectar aquéllos á la elección convocada y ser necesaria la provisión para que el servicio no se interrumpa.

Y tercero. Que la responsabilidad que establece la susodicha disposición legal ha lugar á exigirla cuando en los nombramientos no concurrieren los requisitos enunciados.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Mayo de 1891.—Francisco Silvela.

Sr. Ministro de.....

Circular de la Junta Central del Censo dictando reglas para la formación de las listas definitivas de electores y remitiendo el modelo para las mismas.—(24 de Marzo de 1892.)

Cercana la fecha en que ha de empezar la revisión del censo, y en vista de las consultas que se han dirigido á esta Junta Central exponiendo las dificultades que presentan en su aplicación algunas de las disposiciones legales que á dicha revisión se refieren, y solicitando una interpretación que resuelva las dudas y permita realizar desembarazadamente á las Juntas provinciales y municipales del censo las delicadas funciones que la ley les confía, ha examinado esta Central cuáles son las soluciones más adecuadas para vencer aquellas dificultades, facilitando á las Juntas expresadas las operaciones que han de dar principio el día 10 del inmediato mes de Abril.

El primero de los puntos consultados es la interpretación que debe darse á la palabra «actuales» que en el párrafo 2.º del art. 12 de la ley sigue á las de «edad, domicilio y profesión»; si significa que la ley quiere se rectifiquen esos datos y el de si el elector sabe leer y escribir, y en este caso cómo han de llegar á conocimiento de las Juntas provinciales aquellos antecedentes para que puedan hacer la rectificación en los libros del censo. Indudablemente la palabra «actuales» tiene por objeto que en la primera lista de las cuatro á que se refiere el art. 12 de la ley electoral se exprese la edad, el domicilio y la profesión del elector en el día que da principio la revisión, así como la circunstancia de si sabe leer y escribir, cualidad que puede haber adquirido desde que se formó la lista anterior; y como las listas definitivas de electores que se

deben imprimir y publicar todos los años han de ser copiadas del libro del censo, de aquí la necesidad de que también se hagan en éste las rectificaciones que aquellos cambios exijan, para que las listas definitivas las contengan. Pero como según el texto del art. 13 de la ley, las ocho listas que las Juntas municipales del censo han de remitir á las provinciales comprenden solamente inclusiones y exclusiones, no será posible que las Juntas provinciales rectifiquen en el libro del censo el domicilio y demás circunstancias de los electores, cuando se hayan modificado, si las Juntas municipales no les envían al mismo tiempo que las ocho listas de que habla el art. 13, la primera y la tercera de las cuatro á que se refiere el art. 12.

El art. 2.º del Real decreto de 24 de Marzo de 1891 ha dispuesto que, de conformidad con lo ordenado en el art. 42, párrafo 2.º de la ley municipal, cuando haya de tener efecto la rectificación del censo electoral, los Alcaldes de los pueblos de más de 400 vecinos, al publicar el día 10 de Abril las listas que expresa el artículo 12 de la ley de 23 de Junio de 1890, cuiden de que las listas primera y tercera contengan una casilla más, donde se consigne el carácter de *elegible* ó *no elegible* para cargos concejiles que corresponda á cada elector, con arreglo á las prescripciones del art. 41 de la citada ley Municipal; que sobre este particular puedan hacerse reclamaciones, y que, en lo sucesivo, el libro del censo electoral y las listas definitivas de electores en los pueblos de más de 400 vecinos contengan una casilla adicional en que se exprese si cada elector tiene el carácter de *elegible* para cargos municipales; y con este motivo se consulta si debe anotarse en el libro del censo y listas electorales el carácter de *elegible* ó *no elegible* de cada elector, sin dejar nunca en blanco esta casilla para ninguno de ellos, ó deberá llenarse sólo la del que reúna el carácter de *elegible* para cargos municipales, habiéndose decidido la Junta por que

esa casilla aparezca siempre llena con la indicación correspondiente á cada elector.

Los demás puntos consultados se refieren á que, supuesta la necesidad de nuevos libros del censo, por no haber espacio en los antiguos para otra casilla más, indispensable para consignar el carácter de *elegible* ó *no elegible* de cada elector, cómo han de hacerse las referencias de los libros nuevos á los antiguos; á la manera de que las Juntas provinciales tengan conocimiento de cuáles son los electores que tienen el carácter de elegibles, dado que los libros actuales se formaron sin estos antecedentes; y por último, al modo de hacerse la división en secciones electorales en aquellos Ayuntamientos cuyos términos municipales estén divididos en distritos para las elecciones de Concejales.

Establecido por el art. 23 de la ley electoral vigente que los distritos se dividirán en secciones electorales, constituyendo cada término municipal una sección, si no excede de 500 el número de sus electores; dos, si no excede de 1.000; tres, si no excede de 1.500, y así sucesivamente, al formarse el Censo actual antes de adaptar la ley electoral para Diputados á Cortes á las elecciones de Concejales y Diputados provinciales, no se pudieron legalmente dividir los términos municipales en distinta forma que la establecida por los artículos 16 y 23 de dicha ley.

Pero hecha la indicada adaptación, insistiendo el Gobierno de S. M. en mantener el distrito municipal, que coincide siempre y sin fraccionamiento con el distrito judicial, como base de las elecciones de Concejales y de Diputados provinciales, y siendo conforme al espíritu y aun á la letra misma de la ley que unas mismas listas definitivas sirvan para los tres órdenes de elecciones, es necesario poner término á la dificultad, resuelta ya en cierto modo por el art. 3.º del Real decreto de 30 de Diciembre de 1890, dictado por el

Gobierno de S. M. con audiencia de esta Junta, conviniendo en que mientras otra cosa no disponga una nueva ley, es indispensable que las palabras «Municipio» y «término» de los artículos 16 y 23 de la ley electoral de 26 de Junio de 1890 se equiparen á la de «distrito» en todos aquellos Municipios cuyos términos estén divididos en distritos para la renovación de sus Ayuntamientos.

Por estas consideraciones, y como contestación á los puntos consultados, la Junta Central, en sesión celebrada, bajo mi presidencia, el día 23 del corriente, á que asistieron los Sres. D. Práxedes M. Sagasta, D. Nicolás Salmerón, Marqués de la Vega de Armijo, D. Rafael Cervera, D. Francisco Silvela, D. Trinitario Ruiz Capdepón, D. Gaspar Núñez de Arce, D. Fernando León y Castillo y D. Manuel de Eguilior, ha acordado las siguientes reglas:

1.ª La lista definitiva de electores del año anterior, que los Alcaldes, bajo su responsabilidad, harán fijar en el sitio acostumbrado para los edictos y bandos municipales, á las ocho de la mañana del día 10 del próximo mes de Abril, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 12. de la ley electoral, será, con relación á los nombres de los electores y á la división de secciones, la misma que la del año anterior; pero modificada respecto á la edad de cada uno, que ha aumentado en el tiempo transcurrido desde la formación del Censo; en el domicilio y la profesión, cuando hayan variado, y en la circunstancia de saber leer y escribir, si han adquirido esta cualidad posteriormente; y en los pueblos de más de 400 vecinos, contendrá además una casilla en que se exprese si el elector tiene ó no el carácter de elegible para cargos concejiles con arreglo á las disposiciones del art. 41 de la ley municipal. La tercera de las listas á que se refiere el dicho art. 12 de la ley electoral, contendrá también, en los pueblos que excedan de 400 vecinos, una casilla más, en que se ex-

se asimismo si los electores en ella comprendidos son ó no el carácter de elegibles para Concejales. Las listas las remitirán los Alcaldes á los Presidentes de las Juntas provinciales, con las demás de que habla el art. 18.

.ª Cuando en los libros del Censo no haya espacio suficiente para la casilla adicional en que se ha de expresar si el elector tiene ó no el carácter de elegible para cargos concejiles, y sean necesarios nuevos libros de Censo, las referencias de los nuevos á los antiguos se harán poniendo en unos y otros, bajo el epígrafe *mero de orden*, dos casillas: una para la inscripción general de cada elector, y otra para el que le corresponde en su sección, trasladando luego al libro nuevo el primer número como referencia al de su matriz y justificante del traslado.

.ª En aquellos pueblos cuyos términos municipales estén divididos en distritos para la renovación bien de sus Ayuntamientos, las Juntas provinciales del Censo tomarán estos distritos por base para la división en secciones á que se refieren los artículos 16 y 23 de la ley electoral de 26 de Junio de 1890, á fin de que en una de dichas secciones no contenga electores domiciliados en distintos distritos municipales:

.ª Las listas definitivas se formarán con paginación ajustada á la plantilla siguiente:

CENSO ELECTORAL

PROVINCIA DE..... Ayuntamiento de..... Distrito municipal de.....

SECCION NUM.

Núm. de orden de la ins- cripción general.	APELLIDOS Y NOMBRES de los electores.	Edad.	Domicilio.	Profesión.	Si es ó no elegible para cargos concejiles.	Sabe	
						leer.	escri- bir.
514	A y A (N).....				Si	Si	Si
515					No	Si	No
520					Si	Si	Si

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, y á fin de que se sirva trasladarlo á todos los Alcaldes Presidentes de las Juntas municipales de esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Palacio del Congreso 24 de Marzo de 1892.—El Presidente, Alejandro Pidal y Mon. Señor Presidente de la Diputación y de la Junta provincial del Censo electoral de....

l orden disponiendo, de acuerdo con la Junta Central, que las Salas de Gobierno de las Audiencias puedan nombrar Jueces especiales durante el periodo electoral. — («Gaceta» de 20 de febrero de 1893.)

Circular.—Por la Junta Central del Censo se ha comunicado con fecha 16 del corriente á la Presidencia Consejo de Ministros, lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Dada cuenta á la Junta Central de la instancia de D. José María Cellernelo, candidato á Diputación á Cortes por la circunscripción de Iruya, solicitando que declare «que el art. 91 de la ley electoral no coarta las atribuciones concedidas á las Salas de gobierno de las Audiencias en el art. 304 de la ley de Enjuiciamiento criminal», á fin de que la Sala de aquella capital pueda nombrar un Juez especial que juzgue en las denuncias formuladas contra varios funcionarios, esta Junta, en sesión celebrada en el día de hoy, bajo mi presidencia, y á la que han asistido los Sres. D. Práxedes Mateo Sagasta, D. Nicolás de Olaverri, Marqués de la Vega de Armijo, D. Rafael de la Haza, D. Francisco Silvela, D. Gaspar Núñez de Carvajal, D. Trinitario Ruiz Capdepón, D. Manuel Danvila, Marqués de San Carlos, Duque de Mandas y D. Félix García Gómez de la Serna, ha acordado:

1.º Que en opinión de la Junta, el art. 91 de la ley electoral no impide que las Salas de gobierno de las Audiencias puedan usar dentro del periodo electoral de la facultad que les concede el art. 304 de la ley de Enjuiciamiento criminal de nombrar Jueces especiales en casos determinados en el mismo artículo.

2.º Que se comuniqué este acuerdo al Gobierno de Madrid, remitiéndole copia de la reclamación para que,

si lo considera necesario, dicte alguna disposición aclaratoria del mencionado art. 304 de la ley de Enjuiciamiento criminal en sus relaciones con el 91 de la electoral.

Lo que por acuerdo de la misma Junta tengo la honra de comunicar á V. E., acompañando copia de la instancia, á los efectos que haya lugar. Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio del Congreso 16 de Febrero de 1893.—El Presidente, Alejandro Pidal y Mon. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

En su virtud, y por lo que el acuerdo de que se trata pueda relacionarse con la fiel observancia del artículo 91 de la ley electoral vigente, de Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1893.—González.

Sr. Gobernador civil de...

Real orden disponiendo que vuelvan á sus puestos durante el periodo electoral los Concejales suspensos pero no procesados.—(«Gaceta» de 19 de Febrero de 1893.)

Por la regla 4.ª de la Real orden circular de este Ministerio, fecha 6 de los corrientes, publicada en la *Gaceta* del siguiente día, se recordaron á V. S. las disposiciones legales vigentes acerca de la presidencia de las Mesas electorales, y, como complemento de aquéllas, considera el Gobierno de S. M. oportuno hacer también presente á V. S.:

Que el párrafo tercero del art. 36 de la ley electoral de 26 de Junio de 1890, establece que no podrán presidir las Mesas electorales los Alcaldes, Tenientes y Regidores que desempeñen sus cargos interinamente por causa de suspensión administrativa de los propietarios, cuando contra éstos no se hubiese dictado auto de procesamiento.

El siguiente del propio artículo determina que las suspensiones administrativas de Alcaldes y Concejales contra quienes no se haya dictado auto de procesamiento, cesarán diez días antes del señalado para la votación.

No necesita el Gobierno de S. M. encarecer á V. S. la conveniencia de que las disposiciones que quedan copiadas sean rigurosamente cumplidas, á fin de que, en su omisión, no puedan fundarse protestas en la próxima campaña electoral, y con el objeto de demostrar el celo y exquisito cuidado con que se procura la observancia de la ley, que regula y garantiza la solemne y trascendental función del ejercicio del sufragio.

Si surgieren, lo que no es de esperar, dificultades ó desobediencias, debe V. S. vencerlas, poniendo á los

Alcaldes, Tenientes y Concejales interinos, que en las últimas incurran, á disposición de los Tribunales de justicia, como responsables del delito de prolongación de funciones. Con el mismo rigor deberá V. S. exigir el cumplimiento de la Real orden de 13 de Febrero de 1891, la cual dispone que: «las suspensiones administrativas de Alcaldes, Tenientes y Concejales, que hubieran cesado diez días antes de la elección, por virtud del art. 36 de la ley de 26 de Junio de 1890, vuelvan en cuanto termine el período electoral á la normalidad de su estado de derecho para la aplicación íntegra de los preceptos de la ley Municipal. Es decir, que la palabra «cesarán», empleada en el artículo de la ley, no ha de tomarse en el sentido de cerrarse el término de la suspensión; y quedar éste anulado, sino en el de quedar meramente interrumpida en sus efectos durante el período de las elecciones.

En virtud de lo expuesto, S. M. el Rey (Q. D. G.); y en su nombre la Reina Regente, ha tenido á bien disponer:

1.º Que sin pretexto alguno haga V. S. que se cumplan los párrafos tercero y cuarto del art. 36 de la ley electoral de 26 de Junio de 1890, disponiendo que los Alcaldes, Tenientes y Concejales que estén suspensos, pero no procesados, vuelvan al libre ejercicio de sus funciones el día 23 del mes corriente.

2.º Que si los Alcaldes, Tenientes y Regidores interinos resistieran las órdenes de V. S. para que dejen temporalmente sus puestos á los propietarios, á pesar de ellas pretendieran continuar desempeñándolos haga V. S. que se respete el mencionado artículo por los medios que tiene á su alcance, incluso el de poner á los que desobedezcan á disposición de los Tribunales de justicia, á los efectos del art. 385 del Código penal.

3.º Que los Alcaldes, Tenientes y Regidores suspensos vuelvan á su estado de suspensión el 20 de Marzo, empleando V. S., para hacer respetar y cumplir la

l orden que así lo dispone, los mismos medios incluidos en el párrafo anterior.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes, encargándole que publique circular en el *Boletín oficial* de esa provincia. Queda á V. S. muchos años. Madrid 17 de Febrero 1893.—González.

Dr. Gobernador civil de la provincia de...

Circular de la Junta Central disponiendo que las provincias le remitan los «Boletines oficiales» en que se insertan sus acuerdos y que publiquen las listas antes del 15 de Julio.—
(20 de Abril de 1894.)

La Junta Central en sesión del día de ayer ha acordado lo siguiente:

1.º Que se prevenga á las Juntas provinciales del Censo que remitan á la Central un ejemplar de cada uno de los *Boletines oficiales* en que se publiquen sus acuerdos ó copia certificada con relación á las actas de los que no se publiquen.

2.º Que se les prevenga asimismo que debiendo procederse en la primera quincena del mes de Septiembre próximo á la renovación bienal de las Diputaciones provinciales, y debiendo verificarse las elecciones por las listas electorales cuya revisión se está verificando, es imprescindible que dichas listas estén impresas y publicadas antes del día 15 de Julio, como ordena la ley, y que en el caso de que alguna de ellas no pueda cumplir este servicio en el plazo señalado por absoluta imposibilidad, debe remitir los documentos que la justifiquen para no incurrir en la multa que prescribe el art. 98 de la ley.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Palacio del Congreso 20 de Abril de 1894.—El Presidente, El Marqués de la Vega de Armijo.

Sr. Presidente de la Junta provincial del censo electoral de...

Circular de la Junta Central del censo sobre formación de las listas de Vocales natos y suplentes de las Juntas provinciales.—(15 de Febrero de 1896.)

Con esta fecha digo al Sr. Presidente de la Diputación y de la Junta provincial del Censo de Canarias lo siguiente:

«Visto el expediente instruido con motivo de una comunicación del Presidente accidental de esa Junta, fecha 23 de Diciembre último, en la que participa que han sido incluidos en la lista de Vocales de la misma los cuatro Vicepresidentes de la Diputación provincial que renunciaron sus cargos los días 6, 7, 8 y 9 de Noviembre anterior, los tres últimos el día siguiente al de su nombramiento, y consultando si deben ser excluidos de dicha lista D. Blas Cabrera y Tophan, Vocal elegido por la Diputación, por haber sido declarado incompatible el cargo de Diputado provincial con el de Notario que ejerce en Santa Cruz de Tenerife, y D. Domingo Guerra y Rodríguez, que además de Vocal de esa Junta, se halla ejerciendo funciones de Magistrado, como auxiliar, de la Sala de justicia de la Audiencia territorial de Las Palmas:

Considerando:

1.º Que establecido en el art. 10 de la ley electoral que al constituirse las Diputaciones provinciales en cada bienio, elijan cuatro Diputados en ejercicio que han de formar parte de las Juntas provinciales del Censo, como Vocales natos, sustituyendo á los elegidos para el bienio anterior, es indispensable rectificar de seguida la lista de los Vocales de dichas Juntas, incluyendo además de dichos cuatro Diputados, los Presidentes y Vicepresidentes de las Diputaciones durante

el bienio anterior, que hayan cesado en estos cargos, y como suplentes los Diputados provinciales nuevamente elegidos.

2.º Que rectificadas la lista de Vocales en la forma indicada en el considerando anterior, no debe ser alterada hasta el bienio siguiente, pues en virtud de lo dispuesto en el art. 51 de la ley provincial, los Presidentes y Vicepresidentes que eligen las Diputaciones al constituirse, lo son para todas las sesiones que han de celebrar hasta la renovación, y, salvo circunstancias excepcionales, no puede haber en este periodo individuos que adquieran el carácter de ex-Presidentes y ex-Vicepresidentes, y, por tanto, el derecho á formar parte como Vocales de las Juntas provinciales del Censo.

3.º Que los actos realizados por la mayoría de la Diputación provincial de Canarias en las sesiones que celebró los días 6, 7, 8 y 9 de Noviembre último eligiendo Vicepresidentes que renunciaban su cargo á las veinticuatro horas, pero que en tan corto espacio de tiempo adquirirían el carácter de ex-Vicepresidentes, se realizaran ó no con propósito de modificar esencialmente la composición de la Junta provincial del censo, el hecho es que la modifican, y que de admitirse sin protesta este procedimiento, quedaría al arbitrio de las Diputaciones la constitución de las Juntas provinciales del censo, constitución que la ley ha querido hacer independiente de la voluntad de cualquier organismo, exigiendo á los individuos que deben formarlas, desde los de las municipales hasta los de la central, condiciones que deben haber adquirido antes del día en que se constituyan dichas Juntas, que debe ser en cada bienio, para las municipales, el siguiente á la constitución de los Ayuntamientos, y para las provinciales, el inmediato á la de las Diputaciones.

4.º Que prescindiendo por ahora de si los expresados individuos elegidos Vicepresidentes por la Dipu-

sión provincial de Canarias han adquirido ó no el derecho á ser admitidos como Vocales en la Junta provincial del censo, es evidente que si lo hubieran adquirido, siempre sería después de la fecha en que se constituyó la Diputación, y debió quedar también constituida nuevamente la Junta provincial del censo, por lo cual no podían ser incluidos ahora como Vocales de la, sin perjuicio de lo que se resuelva cuando verificada la renovación de la Diputación en el próximo biennio, se constituya con los nuevos Vocales la expresada Junta.

5.º Que declarado por Real orden de 27 de Noviembre último que existe incompatibilidad entre los cargos de Diputado provincial y de Notario en Santa Cruz de Tenerife que ejerce D. Blas Cabrera y Tophan, denando á la Diputación que declare vacante, á los efectos de la ley, el cargo que desempeña el referido Diputado, siendo éste uno de los cuatro Vocales de la Junta provincial del censo elegidos por la Diputación, no pudiendo desempeñar con arreglo á la ley este segundo cargo sino los que estén ejerciendo el primero, en pronto como D. Blas Cabrera cese en el de Diputado provincial, debe cesar también en el de Vocal de la Junta del censo, si no tuviera derecho á pertenecer á la por otro concepto.

6.º Que si bien D. Domingo Guerra y Rodríguez, Vocal de la Junta provincial del censo de Canarias, en concepto de ex-Vicepresidente de la Diputación, se halla en la actualidad ejerciendo funciones de Magistrado como auxiliar de la Sala de justicia en la Audiencia territorial de Las Palmas, no puede declararse que haya incompatibilidad entre ambos cargos, no existiendo, como no existe, precepto alguno en la ley electoral que declare la incompatibilidad del cargo de Vocal en las Juntas provinciales del Censo con ningún otro.

De conformidad con lo propuesto por la Ponencia, acordado lo siguiente:

1.º Que las listas de Vocales natos y suplentes de las Juntas provinciales del Censo deben rectificarse y publicarse al día siguiente de constituirse definitivamente las Diputaciones provinciales en cada bienio, sin que puedan ser incluidos en ellas los que posteriormente á dicha rectificación hayan adquirido las condiciones que exige la ley para desempeñar dichos cargos, hasta que, verificada la inmediata renovación bienal de las Diputaciones, se rectifique nuevamente la lista de Vocales de Junta.

2.º Que proceda V. S. á rectificar la lista de Vocales natos y suplentes de esa Junta provincial publicada en *Boletín extraordinario* el día 17 de Diciembre de 1895, excluyendo de ella á D. Antonio Lugo y García, D. Eustaquio García y González, D. Ignacio Lla-rena y Monteverde y D. Santiago de León y Molina, que dejaron de ser Vicepresidentes después del día en que debió quedar constituida para todo el bienio la Junta provincial del Censo.

3.º Que así que esa Diputación provincial haya declarado vacante el cargo de Diputado que desempeña D. Blas Cabrera y Tophan, cese éste en el de Vocal de dicha Junta, y que D. Domingo Guerra y Rodríguez puede continuar desempeñando el cargo de Vocal de la misma.»

Y como el primero de los expresados acuerdos es de carácter general y debe servir de regla á todas las Juntas provinciales del Censo, lo traslado á V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Palacio del Congreso 15 de Febrero de 1896.—El Presidente, El Marqués de la Vega de Armijo.

Sr. Presidente de la Diputación y de la Junta provincial del Censo electoral de...

orden disponiendo que los Magistrados supernumerarios e las Audiencias no puedan presidir las Juntas de escrutinio general.—(«Gaceta» de 13 de Marzo de 1896.)

Real orden.—Excmo. Sr.: En vista de la comunicación elevada á este Ministerio por el Presidente de la Audiencia provincial de León, de acuerdo con la Junta de gobierno del mismo Tribunal, consultando si los Magistrados supernumerarios pueden presidir las Juntas de escrutinio general de las elecciones para Diputados á Cortes:

Visto el expediente con tal motivo instruido:

Considerando que la presidencia de dichas Juntas, atribuida á los Magistrados de las Audiencias, y en su defecto, á los Jueces de primera instancia, por la ley de 1.º de Junio de 1890, es una función propia y privativa de cargo que ejercen en propiedad, con carácter permanente y con las responsabilidades anejas al mismo: Considerando que los Magistrados agregados en concepto de supernumerarios á las Audiencias territoriales y provinciales por Real decreto de 26 de Septiembre de 1895, lo fueron únicamente, aparte de otras razones de orden económico, para completar las Salas de audiencias de los Tribunales, suplir las deficiencias de servicio por falta de personal y facilitar el despacho de los asuntos, impidiendo el retraso en la tramitación de los mismos:

Considerando, por tanto, que el precepto de la ley electoral no puede ser extensivo á los supernumerarios, cuyas funciones, limitadas á una comisión de carácter circunstancial y transitorio, y sin sujeción á incompatibilidad alguna, no pueden equipararse á la de

los propietarios, fuera de lo que al despacho de los asuntos procesales hace referencia;

S. M. la Reina (Q. D. G.), Regente del Reino, en nombre de su augusto Hijo, ha tenido á bien declarar que los Magistrados supernumerarios de las Audiencias territoriales y provinciales, cualquiera que sea su categoría, no pueden presidir las Juntas de escrutinio general de las elecciones para Diputados á Cortes, á que se refieren los artículos 62 y 63 de la ley de 26 de Junio de 1890.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Marzo de 1896.—Tejada.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

len disponiendo que durante el periodo electoral puedanarse los expedientes administrativos de defraudación y más de carácter ordinario.—(«Gaceta» de 18 de Marzo 1906.)

minadas las consultas que se han elevado á este erio por varias dependencias del mismo acerca ateligencia, interpretación y alcance de la dis- n 2.ª, art. 91 de la vigente ley electoral de 26 io de 1890:

to el artículo citado, según el cual, cometen de- coacción electoral, aunque no conste ni apare- tención de cohibir ó ejercer presión sobre los es, é incurrén en la sanción del art. 90 «los fun- os públicos que promuevan ó cursen expedien- bernativos de denuncias, multas, atrasos de s, Propios, montes, Pósitos ó cualquiera otro e la Administración, desde la convocatoria has- se haya terminado la elección»:

las las Reales órdenes de 18 de Enero de 1871, diciembre de 1876, 20 de Marzo de 1879, 30 de le 1881 y 9 de Marzo de 1886, dictadas con mo- álogo para explicar el espíritu y concepto de los os de las leyes electorales precedentes y evitar juicios que por una errónea ó demasiado extensa ión de las mismas pudieran causarse á los inte- áblicos:

siderando que, ya se atienda al sentido grama- al contexto del art. 91 de la ley, ya se trate de gar su espíritu y su tendencia, claramente se re que lo taxativamente prohibido es que se pro- a, incoen ó cursen expedientes *gubernativos* de ias, multas y atrasos de cuentas referentes á

Propios, montes, Pósitos ó cualquier otro ramo de la Administración, desde la convocatoria hasta que se haya terminado la elección; es decir, expedientes que cualquiera que sea el ramo ó asunto sobre que versen, se dirijan á descubrir, denunciar ó exigir responsabilidades en que se haya incurrido, ó á remover los que se hallen paralizados sobre liquidación de cuentas y débitos atrasados; en suma, toda gestión que no sea urgente, indispensable y absolutamente necesaria para el constante y normal ejercicio de las funciones administrativas:

Considerando que el propósito del legislador al establecer la mencionada prohibición en garantía del derecho electoral no pudo ser, ni fué en modo alguno, el de suspender durante el período de su ejercicio las funciones y deberes que constituyen la vida de la Administración activa, ni menos detener ó entorpecer los actos y los procedimientos indispensables á los fines que le están encomendados, pues tanto valdría negar á los poderes públicos los medios de acción y de gobierno precisos para realizar los fines del Estado:

Considerando que confirman esta opinión, no sólo el idéntico criterio que informó la Real orden de 18 de Enero de 1871 y las posteriores que se dejan citadas, sino también la circunstancia importantísima de que la ley electoral se refiere á expedientes gubernativos, los cuales, en el tecnicismo oficial y usual, son de muy distinta índole que los puramente administrativos, puesto que éstos, con sujeción á las leyes y reglamentos, tienen un objeto fiscal y se dirigen á hacer efectivos los recursos de carácter ordinario que el Estado requiere para sus gastos, aunque en segundo término produzcan declaración de responsabilidades pecuniaras en concepto de penalidad, mientras que los expedientes gubernativos se dirigen principalmente á la corrección de actos ú omisiones penables;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina

del Reino, se ha servido resolver, como aclarar las dudas suscitadas, que el caso 2.º, art. 91 de la Ley de Enjuiciamiento civil vigente se refiere tan sólo, como de su contexto se desprende, á los expedientes gubernativos de investigación, denuncias, multas y cuentas de cualquiera de los ramos de la Administración pública, y por consecuencia que la prohibición del precepto establecida no impide ni suspensión de incoar, ni el deber de tramitar los expedientes administrativos de defraudación ni los demás de su órbita ordinario y corriente, cuyo objeto es hacer cumplir, con arreglo á las leyes, los recursos, rentas y enajenación de bienes del Estado, y en general, en todo acto ó gestión indispensable para el ejercicio de la gestión fiscal y recaudatoria, en relación con la Administración de la Hacienda pública. Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 17 de Marzo de 1896.—N. Reverter.
Director general de...

Circular de la Junta Central declarando que los Presidentes suspensos de las provinciales y los Diputados elegidos por las Diputaciones deben continuar presidiendo dichas Juntas y perteneciendo á las mismas mientras no se dicte contra ellos auto de procesamiento.—(«Gaceta» de 23 de Marzo de 1896.)

Enterada La Junta Central del Censo electoral de diferentes consultas que se le han dirigido acerca de quiénes deben convocar y presidir las Juntas provinciales del Censo cuando los Presidentes de las Diputaciones provinciales hayan sido objeto de suspensión gubernativa, y si los cuatro Diputados provinciales en ejercicio, elegidos por las Diputaciones al constituirse, que también hubiesen sido objeto de dicha suspensión gubernativa, continúan formando parte como Vocales natos de las expresadas Juntas provinciales del censo, y deben ser convocados á las sesiones que éstas celebren; la Junta Central, en sesión de hoy, á la que concurrieron bajo mi presidencia los Excmos. Sres. Don Práxedes M. Sagasta, D. Nicolás Salmerón, D. Alejandro Pidal y Mon, D. Rafael Cervera, D. Francisco Silvela D. Gaspar Núñez de Arce, Marqués de Sardoal, D. Fernando de León y Castillo y D. Trinitario Ruiz y Capdepon, ha adoptado los acuerdos siguientes:

1.º Que los Presidentes suspensos de las Diputaciones provinciales y los Diputados provinciales elegidos por las Diputaciones, al constituirse, para formar parte de las Juntas provinciales del Censo, deben continuar, el primero presidiendo dichas Juntas, y los segundos perteneciendo á las mismas mientras no se dicte contra ellos auto de procesamiento.

2.º Que este acuerdo se comunique al Gobierno de S. M. y se publique en la *Gaceta de Madrid*.

Palacio del Congreso 20 de Marzo de 1896.—El Presidente, El Marqués de la Vega de Armijo.

1 declarando qué funcionarios del orden judicial desempeñarse para presidir las Juntas de escrutinio.—(«Gaceta 24 de Marzo de 1896.»)

10. Sr.: La ley electoral para Diputados á Cortes de Junio de 1890 dispone en su art. 62 que las de escrutinio general sean presididas, en las de provincia, por el Magistrado más antiguo de la Audiencia de la misma capital, con exclusión de los Presidentes de Sala ó de Sección, y en los distritos por los Magistrados de la propia Audiencia, desempeñando además estas comisiones los Jueces de primera instancia de la misma provincia, y los Jueces de primera instancia cuando no hubiere en la de la capital número suficiente de Magistrados.

El precepto de la ley, expuesto en términos tan claros no debe ofrecer la menor duda en su aplicación, entendiéndose, como se establece, con tanta precisión y claridad que los funcionarios del orden judicial desempeñen la importante función que la ley encomienda.

En las Audiencias de lo criminal de poblaciones que no son capitales de provincia, los Jueces de primera instancia, según su categoría y antigüedad, los llamados en segundo término á presidir las Juntas de escrutinio, pero única y exclusivamente en el caso en que no hubiere en la Audiencia de la capital número suficiente de Magistrados. Mientras lo haya, se infringe el precepto de la ley si se confía la presidencia á los Jueces; sin que baste á excusarlo la razón de que el servicio de la administración de justicia se considere más ó menos retrasado en el

brevisimo tiempo que el desempeño de tal comisión especial exige.

Para prevenir, por tanto, toda interpretación contraria al precepto legal, y en el deseo de que se aplique y observe en toda su pureza;

S. M. la Reina (Q. D. G.) Regente del Reino, en nombre de su augusto Hijo, ha tenido á bien disponer que la designación de funcionarios del orden judicial para presidir las Juntas de escrutinio general se haga precisamente en Magistrados de la Audiencia respectiva, mientras los haya, destinándolos según su antigüedad á las Juntas de poblaciones de mayor número de habitantes; y que sólo en el caso de que no haya número bastante de Magistrados para todos los distritos, se designe los Jueces de primera instancia en el orden y con la limitación establecida en el art. 62 de la ley.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1896.—Tejada.

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

orden disponiendo cuándo deben alzarse las suspensiones administrativas de Alcaldes y Concejales para los efectos electorales.—(«Gaceta» de 7 de Abril de 1896.)

Circular.—Vistas las consultas que varios Gobernadores y también algunos particulares han dirigido al Ministerio sobre los efectos é interpretación de los acuerdos de la Junta Central del Censo publicados en la Gaceta del día 2 de este mes, y en los cuales consiguieron opinión respecto de cuatro cuestiones distintas resolviéndola en los términos siguientes:

1.º Que la reposición en sus cargos de los Alcaldes y Concejales suspensos y no procesados diez días antes del señalado para las elecciones, es un precepto explícito terminante de la ley electoral, y por consiguiente, tan pronto como se presenten dentro del plazo establecido en la ley á tomar posesión de sus cargos, deben volver á ellos por los interinos, so pena de incurrir en la sanción que la misma ley establece.

2.º Que los Alcaldes y Concejales que hayan sido procesados, pero cuyas causas hayan sido sobreesridas, deben volver al ejercicio de sus cargos diez días antes de las elecciones.

3.º Que deben volver asimismo aquellos contravenientes si se haya dictado auto de procesamiento que no firme por habérseles admitido la apelación.

4.º Y también los procesados cuando se haya entablado competencia y hubiese sido resuelta ésta en favor de la Administración.

Considerando que es en efecto precepto claro de la ley que cesen diez días antes del señalado para la elección las suspensiones administrativas de los Alcaldes

y Concejales contra quienes no se haya dictado auto de procesamiento, como ha recordado, anticipándose á las declaraciones de la Junta Central del Censo, la prevención 4.ª de la Real orden circular de 5 de Marzo último, expedida por este Ministerio y publicada en la *Gaceta* de 7 del mismo mes:

Considerando que si bien la letra del art. 36 de la ley electoral no favorece la interpretación que la Junta Central opina que debe dársele respecto de los Alcaldes y Concejales cuyas causas hayan sido sobreseídas, es evidente que esa interpretación debe estimarse conforme con el espíritu de la misma ley, por estar inquestionablemente arreglada á razón y á los dictados del buen sentido:

Considerando que en el mismo caso se encuentra la opinión de la Junta en lo que concierne á los casos de competencia resuelta á favor de la Administración, porque si una aplicación estricta de la letra de la ley obligaría á mantener la suspensión de los Alcaldes y Concejales por haberse dictado contra ellos auto de procesamiento, es asimismo indudable que éste debe conceptuarse anulado por el resultado de la cuestión de competencia:

Considerando que no sucede lo propio respecto á los Alcaldes y Concejales procesados y suspensos por providencia judicial cuando se les haya admitido un recurso de apelación, porque en este caso el espíritu de la ley no puede ser otro que el que se desprende de la rigurosa aplicación de su letra, y si se entendiera de otra manera, aun prescindiendo de las condiciones singulares del auto de procesamiento, resultaría la facilidad de eludir el precepto del legislador que ha querido apartar de la presidencia y dirección de las operaciones electorales á los Concejales contra quienes la autoridad judicial ha encontrado indicios de delincuencia mientras que la resolución que los incapacita no sea debidamente revocada,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:

1.º Que se observe rigurosamente la prevención cuarta de la Real orden-circular expedida por este Ministerio en 5 de Marzo último, por la cual se recuerda que el art. 36 de la ley electoral alza para los días de elecciones las suspensiones administrativas de Alcaldes y Concejales cuando no ha recaído auto de procesamiento.

2.º Que de conformidad con lo opinado por la Junta Central del Censo, se entienda que deben volver al ejercicio de sus cargos los Alcaldes y Concejales que hayan sido procesados, cuando en las causas se haya dictado auto de sobreseimiento.

3.º Que se hallan en el mismo caso los Alcaldes y Concejales que hubiesen sido procesados, si entablada competencia fuese ésta resuelta á favor de la Administración.

Y 4.º Que los Alcaldes y Concejales contra quienes se hubiere dictado auto de procesamiento y de suspensión de sus cargos, aun cuando haya sido admitido recurso de apelación, no pueden de ningún modo volver al ejercicio de sus funciones en cumplimiento del artículo 36 de la ley electoral.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Abril de 1896.—Cos-Gayón.

Gobernador civil de la provincia de...

Real orden dictando disposiciones sobre habilitaciones de los Notarios para facilitar su intervención en las operaciones electorales.—(«Gaceta» de 8 de Abril de 1896.)

Real orden.—Excmo. Sr.: En vista de la Real orden comunicada por V. E. con fecha 3 del corriente en la que se transcribe una comunicación de la Junta Central del Censo, reclamando la adopción de medidas gubernativas para facilitar la intervención de los Notarios en los actos y operaciones electorales, y en atención á lo dispuesto en la ley y en el reglamento general del Notariado sobre el ejercicio de la fe pública extrajudicial:

Considerando que los Notarios sólo pueden ejercer el cargo dentro de sus respectivos distritos notariales, careciendo de fe pública fuera de ellos, á tenor del artículo 26 del reglamento:

Considerando que sólo en el caso de imposibilidad absoluta para sustituirse recíprocamente, según lo dispuesto en el art. 6.º de la ley, pueden los Notarios de un distrito reemplazar á los de otro, previa habilitación de los respectivos Jueces de primera instancia, Presidentes de las Audiencias ó del Gobierno:

Considerando que se ha extendido la aplicación de dicho precepto legal, en casos particulares y por reclamación de partes interesadas, habilitando exclusivamente para asuntos y operaciones electorales á Notarios de fuera del distrito, cuando en alguno no los había en número suficiente para atender á las necesidades extraordinarias del período electoral, que ocasionan muchas veces diferentes y simultáneos requerimientos á dichos funcionarios, por distintos electores y candidatos:

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con los precedentes es-

tablecidos, se ha servido mandar que se adopten y comuniquen inmediatamente á los Presidentes de las Audiencias territoriales y Jueces de primera instancia, las disposiciones siguientes:

Primera. Que en los distritos notariales en donde ya ninguna Notaría servida, y en los que sólo hubiere uno ó dos Notarios en ejercicio, si este número considerase insuficiente para las urgentes necesidades de servicio extraordinario, en el período electoral, á fin de que los respectivos Jueces de primera instancia, permitan á estos funcionarios usar de las facultades que, en casos análogos, les concede el párrafo tercero del artículo 1.º de la ley del Notariado, habilitando, en caso de sustitutos accidentales, al Notario, ó en su defecto, á los Notarios, de entre los más inmediatos, que consideren idóneos para ejercer la fe extrajudicial en los distritos, sin que en los suyos propios resulte perjudicado el servicio público.

Segunda. Que estas habilitaciones sólo facultan á los Notarios á quienes se confieran para que en los distritos á que se les agregue, y durante el período electoral, puedan ejercer la fe pública, conforme á las leyes, en los actos y operaciones exclusivamente electorales, otorgando los documentos y actas á ellos correspondientes.

Tercera. Que los Presidentes de las Audiencias comunicasen al Ministerio de Gracia y Justicia de las disposiciones de esta clase que se confieran.

Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, debiendo manifestarle además que con esta misma fecha, se comunican telegráficamente las anteriores disposiciones á los Presidentes de las Audiencias territoriales de fuera de Madrid, y por el oportuno oficio al de la Audiencia de esta capital. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1896.—Manuel Aguirre de Tejada.

Por Ministro de la Gobernación.

Circular de la Junta Central del Censo indicando cuáles son los deberes que las Juntas provinciales ó sus Presidentes han de cumplir en las elecciones de Diputados á Cortes.—(8 de Marzo de 1898.)

La ley electoral vigente encomienda á las Juntas provinciales en primer término la revisión y custodia del censo; pero además tienen dichas Juntas otras y muy importantes funciones que desempeñar en las elecciones de Diputados á Cortes. Intervienen en la proclamación de candidatos y designación de interventores; han de comunicarle los Alcaldes cuáles son los locales en que se constituirán los colegios electorales; los Presidentes de las Mesas, las suspensiones de la votación cuando se altera materialmente el orden, y el resultado del escrutinio para que se publique en el primer número del *Boletín Oficial*; las Salas de Gobierno de las Audiencias, la designación de los Magistrados que hayan de presidir las Juntas de escrutinio general, y estas Juntas tienen la obligación de remitirle dos de los tres ejemplares del acta de escrutinio general con los documentos anexos que constituyen el expediente, uno de los cuales debe archivar remitiendo el otro con los documentos anexos á la Junta Central.

En las elecciones generales de Diputados á Cortes que se han verificado desde que en Junio de 1890 se promulgó la ley electoral vigente, no todas las Juntas provinciales del Censo han interpretado de igual modo algunas de las precedentes disposiciones, ni todas han mostrado el mismo celo en cumplir el precepto del artículo 20, que impone al funcionario público que deba recibir un documento ó comunicación de otro, la obligación de disponer, bajo su responsabilidad, que inme-

nte se recoja por comisionado especial á costa hubiera debido enviarle.

imo el día en que han de verificarse elecciones as de Diputados á Cortes, la Junta Central que ha considerado conveniente, además de reor- . S. cuáles son los preceptos legales que se re- i con las funciones que las Juntas provinciales esidentes han de ejercer en dichas elecciones, éstos le serán bien conocidos, hacer algunas ones indispensables para que la aplicación de receptos se haga en la misma forma por todas as provinciales del Censo.

one el art. 38 que dichas Juntas se constitui- esión pública el domingo inmediato anterior al o para la elección, á fin de proceder á la pro- ón de candidatos y designación de interventor- plentes para cada una de las Mesas que hayan tituirse en los respectivos distritos electorales; que de esta sesión se levantará acta expresiva ombres de los candidatos proclamados y los de rventores y suplentes, y dentro del siguiente ás tardar, la comunicarán por pliego certifi- a Junta Central del Censo electoral, á los Al- e las secciones respectivas y á todos los desig- ara interventores y suplentes, citando á éstos día y hora en que haya de comenzar la vota- inque el precepto del art. 40 de la ley dice con e claridad que lo que ha de comunicarse á la entral es el acta de la sesión, como en anterio- ciones algunas Juntas provinciales del Censo imitado á comunicar á la Central los nombres andidatos proclamados y los de sus interventor- plentes, omitiendo las protestas, reclamaciones i incidentes consignados en el acta, he de ad- V. S. que debe comunicar á esta Junta, como icho, certificación íntegra del acta de procla- de candidatos y designación de interventores;

porque debiendo poner á disposición de la Secretaría del Congreso todos los documentos referentes á las actas electorales, no podría éste formar juicio completo de la validez de una elección si respecto al primero y no el menos importante de sus actos, como es la designación de interventores, se omitía darle cuenta de las protestas y reclamaciones que en él se hicieran.

Los Alcaldes, ocho días antes del señalado para la elección, deben anunciar por medio de edictos los locales en que hayan de constituirse las secciones electorales y á la vez lo comunican á las Juntas provinciales, sin que después puedan variar la designación. Este precepto incluido en la ley actual á consecuencia de anteriores abusos, garantiza á los electores el conocimiento del lugar en que ha de verificarse la elección, y V. S. puede contribuir á que sea efectiva la garantía por la intervención que la ley le da en este acto. Así, pues, si V. S. no recibiera tan pronto como deba llegar á su poder la comunicación de un Alcalde participándole cuáles son los locales designados para la elección, debe disponer inmediatamente que se recoja por comisionado especial y dar cuenta á esta Junta de haber cumplido ese deber, á fin de no incurrir en la responsabilidad que para este caso determina el párrafo tercero del art. 98.

Es de la mayor importancia en el procedimiento electoral la función que desempeñan los Presidentes de las Juntas provinciales en la recepción y publicación del resultado del escrutinio en las secciones. La ley electoral, que ha procurado hasta donde ha sido posible que verificada una elección no se alterasen los documentos en que se consigna su resultado, dispone previsoramente que en el momento de terminar el escrutinio se publique éste en la parte exterior del edificio y se remita certificación del resultado al Presidente de la Junta provincial para su inserción, en el primer número que se publique, en el *Boletín oficial*.

Así es que si los Presidentes de las Secciones cumplen con exactitud lo que disponen los arts. 54 y 56 de la ley electoral, y entregan inmediatamente en la estafeta más cercana el pliego que el Administrador del Correo ha de enviar á V. S. con el resultado del escrutinio, ya no es posible variar en los demás documentos que expiden las Mesas dicho resultado. Debe, pues, V. S., usando de las facultades que la ley le concede, procurar que las expresadas certificaciones le sean remitidas inmediatamente y darles publicidad en el primer número que se publique del *Boletín oficial*, á medida que las vaya recibiendo.

Cuando el retraso de un documento electoral obliga al funcionario que debe recibirlo á disponer que se recoja por comisionado especial, los gastos que esto ocasiona, según el art. 20 de la ley, son á costa del que hubiera debido enviarle. En este caso debe V. S. tener presente que, por acuerdo de esta Junta de 13 de Octubre de 1890, las dietas que se señalen al comisionado no pueden exceder de 15 pesetas diarias.

Las Juntas de escrutinio general, terminado éste, extienden un acta por triplicado que han de suscribir todos los individuos de la misma que hubiesen asistido á la sesión. De estos tres ejemplares, uno se remite á la Junta municipal para su archivo, y los dos restantes, con los documentos anexos que constituyen el expediente, á la secretaria de la Junta provincial, la cual archivará el uno, y el otro lo remitirá inmediatamente á la Junta Central con los documentos anexos. Como en anteriores elecciones algunas de las secretarías de las Juntas provinciales se han limitado á remitir á esta Junta uno de los ejemplares del acta, y otras, aunque han enviado con el acta los documentos anexos, no han tenido el mismo criterio para determinar cuáles son estos documentos, es conveniente advertir á V. S. que al ejemplar del acta de escrutinio general que debe enviar á esta Junta, deben acompañar siempre los do-

documentos anexos que constituyen el expediente, y que éstos tienen que ser las actas que se han tenido presentes para hacer el escrutinio general, las protestas y reclamaciones y cualquier otro documento que se haya presentado á la Junta de escrutinio en este acto.

Las precedentes indicaciones creo que bastarán para que V. S. se penetre del propósito de esta Junta, que no es otro sino el de que, en todos aquellos actos en que las Juntas provinciales del Censo hayan de intervenir al verificarse las próximas elecciones, se cumplan estrictamente las disposiciones que rigen el procedimiento electoral, evitando así las quejas y reclamaciones que de otro modo se producirían y podrían obligarla, como la obligaron en elecciones anteriores, á usar de su facultad disciplinaria.

Lo que por acuerdo de la Junta Central del Censo participo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndole que debe disponer que esta circular se publique en el *Boletín oficial* de esa provincia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Palacio del Congreso 8 de Marzo de 1898.—El Presidente, Alejandro Pidal y Mon.

Sr. Presidente de la Diputación y de la Junta provincial del Censo electoral de...

ción de la Junta Central al Alcalde de Madrid dictando para la remisión y entrega de los documentos electorales en la Secretaría de la misma Junta.—(«Gaceta» de 9 de Julio de 1890.)

no. Sr.: En las cuatro elecciones generales de los á Cortes que se han verificado desde que la ley electoral de 26 de Junio de 1890, las Mesas electorales de Madrid no se ajustaron estrictamente á lo dispuesto en los artículos 54 y 56 de dicha ley al remitir en la Secretaría de esta Junta de las elecciones el resultado del escrutinio y de las actas literales de las actas de votación, no obstante que en las últimas elecciones se recordaron y se aplicaron las disposiciones de los expresados artículos por el Sr. D. V. E. en comunicación de 8 de Marzo de 1890, participándole las reglas á que debían atenerse los Presidentes de las secciones para desempeñar el servicio, reglas que el entonces Presidente de la Junta municipal del Censo de Madrid trasladó á los Presidentes de las secciones en fecha de 24 de dicho mes y año.

Considerada la Junta Central de estos antecedentes, y en el día en que deben reunirse por quinta vez, para aplicar la ley de sufragio universal, los Coletores de Madrid para elecciones generales de los á Cortes, en sesión celebrada el día de hoy, asistieron, bajo mi presidencia, los Excelentísimos. D. Práxedes Mateo Sagasta, D. Nicolás Salmerón, D. Rafael Cervera, D. Victor Balaguer, Don Juan Núñez de Arce, D. Trinitario Ruiz y Capdevila, Manuel de Eguilior, D. Manuel Danvila, Marqués de Teverga y D. Francisco Lastres, ha acordado,

de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y disposiciones dictadas para su ejecución, las siguientes reglas para la remisión y entrega de los documentos electorales en la Secretaría de esta Junta, y recordar algunos preceptos de la sanción penal establecida en la misma ley para las infracciones ó delitos más directamente relacionados con el servicio de que se trata, esperando que V. E. se servirá participarlo oportunamente á dichos Presidentes, para que á su vez lo comuniquen á los demás individuos de las Mesas:

1.ª Las Mesas de las secciones serán presididas por los Tenientes de Alcalde ó Concejales, por su orden, ó en su defecto por los Alcaldes de barrio; y á falta de estos por los suplentes de alcaldes de barrio y solamente en el caso de que éstos no bastaran, se designarán personas que hubieran sido Alcales de barrio, y, á ser posible, que sean electores de la sección cuya Mesa hayan de presidir. (Artículos 36 de la ley electoral y 1.º de la Real orden de 8 de Enero de 1891.)

2.ª El resultado del escrutinio se publicará inmediatamente por certificación fijada en la parte exterior del edificio en que se haya verificado la elección.

Dos certificaciones iguales se enviarán en el acto, bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa, y antes de cerrar las puertas del Colegio para extender y firmar el acta de la elección, una á la Secretaría de la Junta Central del Censo y otra al Presidente de la Junta provincial para su inserción en el primer número que se publique del *Boletín oficial*.

Dichas certificaciones serán remitidas en pliegos cerrados y sellados, en cuya cubierta certificarán de su contenido todos los individuos de la Mesa.

La Secretaría de la Junta Central del Censo electoral, que tiene su domicilio oficial en el Palacio del Congreso de los Diputados, y entrada por la puerta de la calle de Floridablanca, dará recibo con expresión del

día y hora en que le sean entregados los pliegos, para cuyo efecto estará abierta hasta las doce de la noche el día de la elección, y los siguientes, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche.

Los individuos comisionados por los Presidentes de las secciones para entregar en la Secretaría de la Junta Central los pliegos que contengan las certificaciones con el resultado del escrutinio, deberán exhibir al Oficial encargado de recibirlos su cédula personal y el documento suscrito por el Presidente de la Mesa confirándole dicha comisión; debiendo quedar este documento en la Secretaría de la Junta unido al respectivo pliego.

8.ª Terminado, como queda dicho, el escrutinio, extendidas las tres certificaciones de su resultado, fijada una en la parte exterior del edificio en que se haya verificado la elección, y enviadas las otras dos bajo sobres cerrados y con los requisitos establecidos por la ley y de que se ha hecho mención, una á la Secretaría de la Junta Central del Censo electoral, y otra al Presidente de la Junta provincial, que lo es al propio tiempo de la Diputación, domiciliada en la plaza de Santiago de esta corte, se cerrarán las puertas del Colegio, se extenderá el acta, que firmarán el Presidente y los Interventores de la Mesa, cuidando de expresar detalladamente en este documento el número de electores que haya en la sección, según las listas del Censo electoral, el de los electores que hubieran votado y el de los votos obtenidos, y de consignar sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas en su caso por los electores sobre la votación ó el escrutinio, y las resoluciones motivadas de la Mesa sobre ellas, con los votos particulares si los hubiere. (Art. 55 de la ley.)

Acto continuo se sacarán dos copias literales de dicha acta (cuyo destino y el de los documentos originales determina el párrafo segundo del art. 55 de la

ley), y después de autorizarlas con sus firmas todos los individuos de la Mesa, serán entregadas inmediatamente en pliegos cerrados y sellados, en cuya cubierta certificarán de su contenido los mismos individuos, una en la Secretaría de la Junta Central del Censo y la otra en la Secretaría del Ayuntamiento y Junta municipal del Censo, establecida en la plaza de la Villa.

La entrega de estos pliegos se hará personalmente por el Presidente de la Mesa, acompañado del Interventor nombrado para concurrir en nombre de la sección á la Junta de escrutinio general. siendo ambos responsables de la omisión ó del retraso, que no estén plenamente justificados, en el cumplimiento de esta obligación.

La Secretaría de la Junta Central dará recibo de estos pliegos, con expresión del día y hora en que le sean entregados y de las personas que los entreguen, las cuales identificarán el carácter con que lo verifican y su personalidad, exhibiendo en el acto de la presentación las credenciales de sus respectivos nombramientos de Presidente y de Interventor designado para concurrir á la Junta de escrutinio general, y sus cédulas personales. (Art. 56 de la ley.)

4.ª Toda falta de cumplimiento de las obligaciones y formalidades á que se refieren las reglas anteriores por cuantas personas intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales, será corregida con una multa de 25 á 1.000 pesetas, en caso de no constituir delito. (Art. 98 de la ley electoral.)

Los funcionarios que por cualquier causa que no sea la de absoluta imposibilidad justificada, dejen de cumplir cualquiera de los servicios á que se refieren las expresadas reglas, incurrirán en dicha multa, que decretará la Junta Central respecto á los servicios que ante ella deban prestarse.

5.ª Serán castigados con las penas de mayor y multa de 500 á 5.000 pesetas, cuando las disposiciones generales del Código penal no sean mayores, los funcionarios públicos que, por no cumplir íntegra y estrictamente los deberes por la ley electoral ó por las disposiciones para su ejecución, contribuyan, entre otras, con omisiones, á que no se extiendan con la exactitud y expresión debidas, ó no se firmen oportunamente y por todos los que deban hacerlo, ó á que no tengan el curso debido, las actas ó documentos electorales. (Art. 88 de la ley electoral.)

6.ª Para los efectos de la ley electoral se reputarán funcionarios públicos los de nombramiento del Gobierno y los que, por razón de su cargo, desempeñen alguna función relacionada con las elecciones, así como los Presidentes y los Vocales de las Juntas ordinarias ó especiales del Censo electoral y los Presidentes é Interventores de las Mesas y Juntas de escrutinio. (Art. 100 de la ley electoral.)

Al mismo tiempo ha acordado esta Junta interesar de V. E. que, con anticipación al menos de veinticuatro horas al día de la elección, la remita una relación de nombres y apellidos de los individuos designados por V. E. para presidir cada una de las Mesas de las secciones electorales de esta capital, con expresión de su respectivo domicilio, concepto en que cada cual ha sido designado, si como Teniente de Alcalde, Concejal, Alcalde de barrio, etc., y si le es posible, como es de esperar que suceda, indicación del número y clase de sus cédulas personales, cuidando de participar inmediatamente á la Secretaría de esta Junta cualquier variación que, por enfermedad de alguno de los primeramente designados, ó por otra causa, le fuera indispensable hacer hasta la hora de las siete de la mañana del 16 del corriente en que han de constituirse las Mesas, conforme al art. 44 de la ley.

Lo que, también por acuerdo de la Junta, tengo la honra de participar á V. E. á los efectos indicados.

Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio del Congreso 8 de Abril de 1899.—El Presidente, El Marqués de la Vega de Armijo.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento y de la Junta municipal del Censo electoral de Madrid.

Circular de la Junta Central declarando quiénes deben presidir las Mesas electorales.—(«Gaceta» de 9 de Abril de 1899.)

La Junta Central del Censo electoral, en sesión celebrada en el día de hoy, á que han asistido, bajo mi presidencia, los Exmos. Sres. D. Práxedes Mateo Sagasta, D. Nicolás Salmerón, D. Rafael Cervera, Don Víctor Balaguer, D. Gaspar Núñez de Arce, D. Trinitario Ruiz y Capdepón, D. Manuel de Eguilior, D. Manuel Danvila, Marqués de Teverga y D. Francisco Lastres, ha acordado lo siguiente:

1.º Que en todos los pueblos cuyos Ayuntamientos se compongan de Alcaldes, Tenientes y Concejales interinos por haber sido procesados aquellos á quienes sustituyen en sus cargos, y de Tenientes de Alcalde y Concejales propietarios, corresponde á éstos con preferencia y por el orden de mayor número de votos obtenidos al verificarse las elecciones municipales, la presidencia de las Mesas de los Colegios en las elecciones para Diputados á Cortes.

2.º Que esta resolución se publique en la *Gaceta de Madrid*.

Palacio del Congreso 8 de Abril de 1899.—El Presidente, El Marqués de la Vega de Armijo.

ÍNDICE

DE LOS APÉNDICES Á LA LEY ELECTORAL

	<u>Páginas.</u>
1.º A Artículo 2.º de la ley de 28 de Diciembre de 1878.....	111
1.º B Ley variando la división de distritos electorales de la provincia de Guipúzcoa.....	114
1.º C Ley variando la división de los distritos electorales de Tarrasa y Sabadell (Barcelona).....	116
1.º D Ley variando la división de los distritos electorales de la provincia de Alava.....	118
1.º E Ley variando la división de los distritos electorales de Játiva, Enguera y Alcira (Valencia).....	122
1.º F Ley variando la división de los distritos electorales de Salas de los Infantes y Aranda de Duero (Burgos)....	125
1.º G Ley segregando del distrito de Caldas de Reyes el Ayuntamiento de Cerdedo y agregándolo al de la Estrada (Pontevedra).....	126
1.º H Ley variando la división de los distritos electorales de la provincia de Zamora.....	127
1.º I Ley variando la división de los distritos electorales de la provincia de León.....	129

	<u>Páginas.</u>
1.º J Ley variando la división de los distritos electorales de la provincia de Vizcaya.....	131
1.º K Ley variando la división de los distritos electorales de la provincia de Sevilla.....	141
1.º L Ley variando la división de los distritos electorales de la provincia de Barcelona.....	143
2.º Circular de la Junta Central del Censo sobre constitución de las Juntas provinciales y municipales. (8 de Agosto de 1890).....	146
3.º Circular de la Junta Central del Censo relativa á la constitución de las Juntas municipales, su funcionamiento y forma legal de llenar su cometido las Juntas provinciales en la reunión del día 15 de Setiembre de 1890. (4 de Setiembre de 1890.).....	153
4.º Circular de la Junta Central del Censo dictando instrucciones para aclarar y desenvolver la regla 17.ª de la de 8 de Agosto de 1890. (18 de Setiembre de 1890.).....	160
5.º Circular de la Junta Central del Censo disponiendo que le sean remitidos los resultados de la formación del Censo electoral. (23 de Setiembre de 1890.)	166
6.º Real decreto concediendo franquicia postal á la correspondencia ordinaria ó certificados que envíen las Autoridades que intervengan en las operaciones electorales. (22 de Setiembre de 1890.).....	170

	<u>Páginas.</u>
7.º Acuerdos de la Junta Central del Censo sobre reclamaciones acerca de delitos, faltas ó relativas á la constitución de las Juntas municipa'les. (14 de Octubre de 1890.).....	172
8.º Real orden acerca del modo de subsanar las deficiencias en determinados padrones municipales. (29 de Octubre de 1890.).....	174
9.º Acuerdos de la Junta Central del Censo sobre formación de los censos especiales. (6 de Noviembre de 1890).....	176
10.º Real decreto sobre adaptación de la ley electoral á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales. (5 de Noviembre de 1890.).....	178
11.º Real decreto sobre creación y organización de las Cámaras agrícolas. (14 de Noviembre de 1890.).....	216
12.º Real decreto sobre formación de los Colegios especiales. (15 de Noviembre de 1890.).....	225
13.º Circular de la Junta Central del Censo relativa á los acuerdos tomados para la aplicación de la ley electoral. (17 de Noviembre de 1890.).....	231
14.º Circular de la Junta Central del Censo dictando algunas disposiciones sobre organización de los Colegios especiales. (29 de Noviembre de 1890).....	235
15.º Reales decretos declarando legalmente constituidas las Cámaras agrícolas de Segovia y Alba de Tormes. (21 de Noviembre de 1890.).....	251
16.º Real orden disolviendo las dificultades	

INDICE

Páginas.

al que ha dado lugar la revisión de los censos electorales de algunas provincias y las consultas acerca de la aplicación de los mismos á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales. (25 de Noviembre de 1890.)..	253
al orden aclarando algunas dudas acerca de la inteligencia del Real decreto sobre adaptación de la ley electoral á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales. (27 de Noviembre de 1890.).....	258
al orden circular disponiendo se cumplan las reglas acordadas por la Junta Central del Censo para constituir los Colegios especiales. (30 de Noviembre de 1890.).....	262
al decreto declarando oficialmente organizada la Cámara agrícola de Medina del Campo. (1.º de Diciembre de 1890.).....	263
al decreto declarando oficialmente organizada en Cámara agrícola la Liga de contribuyentes de Salamanca. (2 de Enero de 1891.	264
al orden dictando disposiciones respecto á las personas que podrán presidir las mesas electorales, declarando supletorias las Reales órdenes de 29 de Octubre y 27 de Noviembre de 1890 sobre Interventores, y sobre designación de Magistrados y Jueces para presidir las Juntas de escrutinio general. (8 de Enero de 1891.).....	265
al orden dictando disposiciones acer-	

	<u>Páginas.</u>
ca de varias consultas referentes á la declaración de candidatos, firma del nombramiento de Interventores y reclamación de actas electorales. (22 de Enero de 1891.)	268
23.º Real orden sobre nombramiento de empleados de Correos durante el periodo electoral. (6 de Febrero de 1891.)	270
24.º Real orden referente á nombramiento de empleados durante el periodo electoral. (12 de Mayo de 1891.)	272
25.º Circular de la Junta Central del Censo dictando reglas para la formación de las listas definitivas de electores, y remitiendo modelo para las mismas. (24 de Marzo de 1892.)	274
26.º Real orden disponiendo, de acuerdo con la Junta Central, que las Salas de Gobierno de las Audiencias pueden nombrar Jueces especiales durante el periodo electoral. (19 de Febrero de 1893.)	280
27.º Real orden disponiendo que vuelvan á sus puestos, durante el periodo electoral, los Concejales suspensos, pero no procesados. (17 de Febrero de 1893.)	282
28.º Circular de la Junta Central disponiendo que las provinciales le remitan los <i>Boletines oficiales</i> en que se inserten sus acuerdos, y que publiquen las listas antes del 15 de Julio. (20 de Abril de 1894.)	285
29.º Circular de la Junta Central del Censo sobre formación de las listas de Vocales natos y suplentes de las Juntas	

INDICE

	Páginas.
provinciales. (15 de Febrero de 1896.).	286
Real orden disponiendo que los Magistrados supernumerarios de las Audiencias no puedan presidir las Juntas de escrutinio general. (11 de Marzo de 1896.).....	290
Real orden disponiendo que durante el período electoral puedan incoarse los expedientes administrativos de defraudación y los demás de carácter ordinario. (17 de Marzo de 1896.)....	292
Circular de la Junta Central declarando que los Presidentes suspensos de las provinciales y los Diputados elegidos por las Diputaciones deben continuar presidiendo dichas Juntas y perteneciendo á las mismas mientras no se dicte contra ellos auto de procesamiento. (20 de Mayo de 1896.).....	295
Real orden disponiendo qué funcionarios del orden judicial deben nombrarse para presidir las Juntas de escrutinio. (23 de Marzo de 1896.).....	296
Real orden disponiendo cuándo deben alzarse las suspensiones administrativas de Alcaldes y Concejales para los efectos electorales. (6 de Abril de 1896.).....	298
Real orden dictando disposiciones sobre habilitaciones de los Notarios para facilitar su intervención en las operaciones electorales. (7 de Abril de 1896.).....	301
Circular de la Junta Central del Censo indicando cuáles son los deberes que	

	<u>Páginas.</u>
las Juntas provinciales ó sus Presidentes han de cumplir en las elecciones de Diputados á Cortes. (8 de Marzo de 1898.).....	303
37.º Comunicación de la Junta Central al Alcalde de Madrid dictando reglas para la remisión y entrega de los documentos electorales en la Secretaría de la misma Junta. (8 de Abril de 1899.)	308
38.º Circular de la Junta Central declarando quiénes deben presidir las Mesas electorales. (8 de Abril de 1899.).....	314

LEY DE INCOMPATIBILIDADES

Y CASOS DE REELECCIÓN

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El cargo de Diputado á Cortes sólo es compatible con los destinos del orden civil, del militar y judicial que tengan residencia fija en Madrid y que estén además dotados con el sueldo al menos de 12.500 pesetas anuales en los presupuestos del Estado; con el de presidente, fiscal y presidente de Sala de la Audiencia de esta corte; con el de rector y catedrático numerario de la Universidad central; con el de inspector de ingenieros y con los destinos que en Madrid desempeñen los oficiales generales del ejército y de la armada (1).

(1) Ampliado por la ley de 17 de Julio de 1895 publicada en la *Gaceta de Madrid* de 19 del mismo mes, que dice literalmente lo que sigue:

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. La compatibilidad con el cargo de Diputado á Cortes que el art. 1.º de la ley de 7 de Marzo de 1880 establece para los catedráticos numerarios de la Universidad Central, queda extendida, por virtud de la presente, á los de Institutos de segunda enseñanza y Escuelas superiores de Agricultura y Arquitectura de Madrid.

Los ingenieros no comprendidos en el párrafo erior quedarán, mientras desempeñen el cargo Diputados, en situación de excedentes.

art. 2.º El Gobierno, así que un Diputado pte empleo, pensión, destino ó comisión con ldo, ascenso que no sea de escala cerrada, ho- ó condecoración de cualquier clase, dará cuen- al Congreso en el término de diez días. Si las tes estuviesen suspensas, el Gobierno dará nta al Congreso en la primera sesión que ce- re.

Para los efectos de esta ley se entiende por ptado todo cargo, gracia ó condecoración, de lquier clase que sea, que no se renuncie den- de los quince días siguientes al de su con- ión.

art. 3.º Si el empleo concedido por el Gobier- y aceptado por el Diputado es de los compa- es según el art. 1.º de esta ley, el agraciado rá ser reelegido en cualquier tiempo.

Si el empleo ó destino no se halla comprendido re los enumerados en el citado art. 1.º, el agra- lo sólo podrá ser reelegido en elección parcial e renuncia antes de la convocatoria para dicha ión.

Y si lo concedido y aceptado es pensión, comi- i con sueldo, honor ó condecoración de cual- er clase, el agraciado que una vez la acepte no rá ser reelegido hasta nuevas elecciones gene-

or tanto:

mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna- s y demás autoridades así civiles como militares y ecle- ticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan dar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. do en Palacio á 17 de Julio de 1895.

o la Reina Regente.—El Ministro de la Gobernación, Fer- lo Cos-Gayón.

rales, aun cuando hubiese renunciado el cargo de Diputado antes de recibir la gracia.

Art. 4.º (1) El número de Diputados con empleos compatibles que tomen asiento en el Congreso no podrá exceder de 40. Si fuere elegido mayor número de ellos, la suerte decidirá cuáles han de quedar. Al efecto, así que se verifiquen las elecciones generales, y antes del día señalado para la apertura de las Cortes, el Gobierno remitirá á la Secretaría del Congreso la lista de todos los funcionarios que hayan sido elegidos Diputados. El Congreso examinará cuáles ejercen cargos compatibles, y si resultasen más de 40, se procederá á sortearlos dentro de los ocho días siguientes á su constitución definitiva, declarando vacantes los distritos de los excedentes, á no ser que éstos renuncien sus empleos, cargos ó destinos dentro de los quince días siguientes.

Si en elecciones parciales es elegido algún funcionario compatible, el Gobierno lo comunicará inmediatamente después del escrutinio general al Congreso, y el elegido tomará asiento en éste si no estuviese completo el número de los 40; pero si lo estuviere, se declarará vacante el distrito, á no ser que el electo renuncie al empleo dentro de los quince días siguientes al en que fuere aprobado el dictamen de la Comisión de incompatibilidades (2).

(1) Se inserta en la forma que quedó después de reformado por la ley de 31 de Julio de 1887.

(2) Real decreto de 27 de Octubre de 1887, publicado en la *Gaceta de Madrid* de 28 de Octubre del mismo año.

«Redactado el art. 4.º de la ley de incompatibilidades parlamentarias de 7 de Marzo de 1880 en la nueva forma que contiene el único de la de 31 de Julio del presente año, publicado en la *Gaceta* de 4 de Agosto siguiente, y á fin de uniformar y asegurar de un modo conveniente la puntualidad y exactitud en el cum-

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, s, Gobernadores y demás autoridades, así ci- s como militares y eclesiásticas, de cualquier e y dignidad, que guarden y hagan guardar, plir y ejecutar la presente ley en todas sus

Dado en Palacio á 7 de Marzo de 1880.—Yo REX.—El Ministro de la Gobernación, Fran- o Romero y Robledo.

lento de dicho artículo; en nombre de mi augusto Hijo el Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, ngo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Verificadas unas elecciones generales ó parciales putados á Cortes, todo funcionario público, sea ó no com- le, que fuere elegido Diputado, remitirá al Ministerio de lependa su nombramiento, un oficio participando el cargo- pleo que desempeña y el distrito por donde ha sido electo.

2.º El Centro, después de acusar en el acto recibo de di- omunicación al interesado y de trasladarla á la Presiden- el Consejo de Ministros, la remitirá original á la Secretaría ongreso de los Diputados, la que también acusará á su vez ibo al Centro comunicante.

3.º Todo Diputado electo que fuere funcionario público esentar su acta en el Congreso, acompañará á ella el citado e recibo que por el respectivo Ministerio se le haya di- D.

Dado en Palacio á 27 de Octubre de 1887.—MARIA CRISTINA.— nistro de la Gobernación, Fernando de León y Castillo.»

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

TÍTULO 1

DE LA SESIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS

Artículo 1.º En la primera legislatura de cada diputación, los Diputados electos que se hallen en la corte antes del día de la apertura, presentarán, personalmente ó por medio de oficio, el acta de su elección en la Secretaría del Congreso, con nota de su domicilio. En las ulteriores legislaturas pasarán sólo nota de su domicilio.

La Secretaría numerará las actas por el orden con que se vayan presentando.

Art. 2.º El día antes de la sesión de apertura de las Cortes, á las doce de la mañana, se reunirán los Diputados en el Palacio del Congreso á puerta cerrada.

La Secretaría pondrá de antemano sobre la mesa la lista de los Diputados que hubieren presentado sus actas.

Art. 3.º El primero de la lista de entre los Diputados presentes ocupará la silla de la Presidencia, y declarando abierta la sesión, dispondrá que por el Oficial Mayor de la Secretaría se lea la convocatoria de las Cortes, la lista de los Diputados y los artículos del Reglamento que hacen referencia á la sesión.

Art. 4.º Acto continuo ocupará la silla de la Presidencia el mayor de edad entre los Diputados

entes, y las de los Secretarios los cuatro más
mes; se sacarán por suerte las Comisiones que
dieren de recibir al Rey y Personas Reales á
entrada y salida en el edificio señalado para la
ertura, y se levantará la sesión.

TÍTULO II

DE LA CONSTITUCIÓN INTERINA DEL CONGRESO

art. 5.º Al día siguiente de la apertura de las
tes, á las doce de la mañana, celebrará su pri-
a sesión el Congreso, presidido por el mismo
sidente y con los mismos Secretarios que en
reparatoria.

Se leerá nuevamente la lista de los Diputados
a rectificarla, y se procederá, á nombrar la
a interina.

Esta Mesa se compondrá de un Presidente,
tro Vicepresidentes y cuatro Secretarios, y
empeñará su encargo hasta la constitución
nitiva del Congreso.

art. 6.º La votación se hará por papeletas, que
Diputados, llamados por lista, entregarán al
sidente, el cual las depositará en una urna.

art. 7.º Concluida la lista, y hecha dos veces
un Secretario la pregunta de si «falta algún
utado por votar», se procederá al escrutinio,
se verificará extrayendo el Presidente las pa-
etas de la urna, y después de haberlas leído
entregará á un Secretario para que lo haga en
voz. Los demás Secretarios formarán lista
cta de la votación con todos sus incidentes.

art. 8.º Para la elección de Presidente se es-
dirá un solo nombre en cada papeleta, y que-
á elegido el que obtuviere mayoría absoluta
votos.

Art. 9.º No resultando elección, se repetirá la votación entre los dos que más se hubieren aproximado á la mayoría, quedando elegido el que obtuviere mayor número de votos.

Art. 10. En los casos de empate decidirá la circunstancia de haber sido antes Presidente ó Vicepresidente, la de haberlo sido por más tiempo, y por último, la suerte.

Art. 11. Los cuatro Vicepresidentes se nombrarán en un mismo acto, escribiendo cuatro nombres en cada papeleta, quedando elegidos por orden de votos los cuatro que obtuvieren mayor número.

Art. 12. Para la elección de Secretarios se escribirán sólo dos nombres en cada papeleta, quedando elegidos por orden de votos los cuatro que obtuvieren mayor número de ellos.

En caso de empate, así en esta elección como en la de Vicepresidentes, se observará lo dispuesto en el art. 10.

Art. 13. Las papeletas en blanco, las ilegibles, las que contuvieren nombres de Diputados no presentados ó de los que quedau fuera de elección cuando ésta se repite, serán nulas, pero servirán para computar el número de Diputados presentes.

Si alguna contuviere nombres legibles ó ilegibles, se leerán y computarán aquellos.

Cuando una papeleta contuviera más nombres de los necesarios, se leerán sólo y computarán por su orden los que correspondan según la elección, y los demás se reputarán no escritos.

La que contuviere menos nombres de los necesarios, será válida.

Concluída la votación, los elegidos ocuparán sus puestos.

Art. 14. Cuando la apertura de las Cortes se verifique por decreto, leído á cada uno de los dos

Cuerpos Colegisladores en su palacio respectivo, se procederá desde luego á la constitución interna del Congreso y á lo demás dispuesto en los artículos 5.º al 12.

Art. 15. En la segunda y ulteriores legislaturas se constituirá desde luego definitivamente el Congreso, si se hubiere presentado el número competente de Diputados. En otro caso, se constituirá interinamente hasta la reunión de dicho número.

Art. 16. Hasta la constitución definitiva del Congreso, éste no se ocupará de otra cosa más que del examen de actas y de las comunicaciones del Gobierno ó del otro Cuerpo Colegislador, á no ser que ocurriere algún incidente extraordinario; pero nunca de proyectos ni de proposiciones de ley.

TITULO III (1)

DEL EXAMEN DE ACTAS, CAPACIDAD Y COMPATIBILIDAD DE LOS DIPUTADOS

Art. 17. En las primeras legislaturas, el mismo día en que se constituya interinamente el Congreso, y si no hubiere tiempo en la sesión inmediata, nombrará éste las Comisiones de actas y de incompatibilidades, compuestas cada una de 15 individuos, que han de ser necesariamente designados entre aquellos cuyas actas no contengan protesta ni reclamación, no pudiendo formar parte de la Comisión de incompatibilidades los Diputados electos que ejerzan funciones ó tengan destinos públicos, aunque fuesen de aquellos declarados compatibles.

Si por cualquier circunstancia y en cualquier

(1) Reformado en 16 de Diciembre de 1878 y 18 de Junio de 1887.

tiempo, alguno ó algunos de los elegidos para formar estas Comisiones dejare de pertenecer á ellas, el Congreso elegirá el Diputado ó Diputados necesarios para completar el número de 15, de que constantemente deben componerse.

Art. 18. Para la elección de las Comisiones de actas y de incompatibilidades se escribirán cinco nombres en cada papeleta, quedando elegidos los 15 que resultasen con mayor número de votos.

Art. 19. La Comisión clasificará las actas por el orden de su numeración, distribuyéndolas en tres clases. Comprenderá la primera las que no tengan protesta ni reclamación; la segunda las que sólo ofrezcan ligeros motivos de discusión, y la tercera las que ofrezcan dificultad más grave.

Se considerarán necesariamente comprendidas entre las de la tercera clase, todas aquellas actas en que resulte comprobada la existencia de alguna de las siguientes circunstancias:

Primera. Alteración ó sustitución ilegal de la Comisión del censo, realizada en el plazo que medió desde la disolución de las Cortes hasta después de celebrados los escrutinios generales de las nuevamente convocadas. Cuando se trate de una elección parcial, este plazo comenzará á contarse desde que el Congreso declare la vacante del distrito.

Segunda. Suspensión gubernativa impuesta á un alcalde de pueblo, cabeza de sección, realizada dentro de los plazos que en el caso anterior se dejan marcados.

Tercera. Negativa injustificada del presidente de la Comisión del censo á recibir pliegos que contengan propuestas de interventores y que hayan sido presentados oportunamente.

Cuarta. Negativa á dar posesión á los interventores legítimos al constituir las Mesas en las

respectivas secciones y á expedir las certificaciones de que habla la ley electoral, así como también el hecho de aparecer votando en una sección un número de electores que exceda del que tenga asignado en el censo.

Quinta. Tardanza injustificada en remitir al Congreso las copias literales de las actas parciales ó el ejemplar del acta del escrutinio general cuando de ella se inflera el propósito de alterar el resultado de la elección.

Sexta. Cualquier alteración material y esencial en el texto de estos documentos que influya en el cómputo de los votos.

Séptima. Evidente error aritmético cometido en el escrutinio general al hacer el recuento de votos, siempre que influya en el resultado de la elección, ó el hecho de haber impedido la presencia de los electores en dicho acto.

Octava. El hecho de rechazar é impedir la presencia é intervención de un notario en cualquiera de los actos y operaciones que constituye el procedimiento electoral en que la ley reconoce á los electores el derecho de utilizar la intervención notarial; y

Novena. Todos aquellos otros defectos ó vicios que, á juicio de la Comisión, alteren fundamentalmente el verdadero resultado de la elección.

La comprobación de las circunstancias y vicios expresados en los párrafos anteriores no será indicio ni razón de gravedad, cuando de alguna manera aparezca que se realizaron en daño de Diputado electo.

Art. 20. La Comisión empezará por examinar sus propias actas.

A este fin, toda ella, excepto su presidente, bajo la dirección de un vicepresidente, examinará el acta de aquél. Después la Comisión se dividirá

en dos Subcomisiones de siete vocales, y cada una de ellas, presidida á su vez por el presidente de la Comisión, examinará las actas de los vocales de la otra. Si las actas ó la aptitud legal de alguno ó algunos de los vocales ofreciese dificultad, al tenor de lo prevenido en el art. 19, el Congreso nombrará en lugar de ellos otros Diputados.

Examinadas en la forma que determina el párrafo anterior las actas de los individuos de que se compone la Comisión, ésta examinará inmediatamente la de los nombrados para la de incompatibilidades; y si las actas ó la aptitud legal de alguno ó algunos de los vocales de ésta última ofreciese dificultad, se seguirá el procedimiento prescrito en el párrafo anterior para los individuos de la Comisión de actas que se hallasen en idéntico caso.

Art. 21. De las actas comprendidas en la primera y segunda clase se dará cuenta por el orden respectivo de su numeración, en listas separadas, en que sólo se exprese el distrito, la provincia á que este corresponda y el nombre del elegido ó elegidos en cada acta. Concluída la lectura de las listas, se preguntará al Congreso si se aprueban las actas.

Art. 22. Si contra alguna de las actas contenidas en las listas pidieran la palabra uno ó más Diputados, usará de ella el primero que la pidió ó aquel á quien él la cediese; contestará la Comisión y el interesado, si quiere, y se procederá á la votación.

Art. 23. Si el dictamen fuese desaprobado, se considerará el acta comprendida entre las de tercera clase, y volverá á la Comisión.

Art. 24. Aprobadas las actas, el Presidente, en la misma sesión, proclamará Diputados á los que en ella resulten elegidos.

Art. 25. Cuando el acta no hubiere sido presentada por el mismo Diputado en la forma prevenida en el art. 1.º, no se dará dictamen sobre la aptitud legal y sí únicamente sobre el acta.

Art. 26. Los Diputados cuyos nombramientos y aptitud legal se examinen, podrán asistir á la discusión y tomar parte en ella usando de la palabra cuantas veces la pidan; pero se saldrán del salón de las sesiones al tiempo de votar.

Art. 27. Cuando en alguna votación sobre la legalidad de las elecciones de los Diputados ó las calidades de éstos resultare empate, se practicará lo dispuesto en el art. 182, con la diferencia de que al tercer empate quedará aprobada el acta ó admitido el Diputado.

Art. 28. En las segundas y ulteriores legislaturas se elegirá la Comisión lo mismo que en las primeras.

Art. 29. Si la Comisión, para dar su dictamen, creyere necesaria la práctica de algunas diligencias, lo propondrá al Congreso, con el cual se entenderán directamente las Autoridades y Tribunales á quienes corresponda cumplir estos acuerdos.

En cuanto á reclamación de documentos, se observará lo dispuesto respecto de las demás Comisiones.

Art. 30. Si del examen de un acta resultare culpabilidad de parte de la Mesa de un distrito ó sección, de los electores ó de algún funcionario público, la Comisión hará expresión de ello en el dictamen y se pasará el tanto al tribunal competente para que proceda á la formación de causa.

Art. 31. (1) Los candidatos que se crean cor

(1) Los arts. 31 y 32 deben considerarse anulados, pues se refieren á la ley electoral de 28 de Diciembre de 1878, que no está ya vigente.

derecho á ser proclamados Diputados en virtud de la votación acumulada de que trata el art. 115 de la ley electoral, dirigirán la solicitud al Congreso dentro del término que está prefijado, con expresión de los distritos y del número de votos que en cada uno hubieren obtenido.

Art. 32. La Comisión de actas, teniendo á la vista las que hayan sido definitivamente aprobadas, examinará la validez de los votos cuya acumulación se solicite; verificará el escrutinio y redactará el correspondiente dictamen, conforme á lo que dispone el citado art. 115, que someterá á la aprobación del Congreso.

Art. 33. Si verificado el escrutinio resultaren elegidos Diputados con igual número de votos dos ó más candidatos, se estará á lo que dispone el art. 105 de la ley electoral (1).

Art. 34. Hasta después de constituido definitivamente el Congreso no se dará cuenta de las actas comprendidas en la tercera clase, á no ser que falte el número de Diputados necesarios para constituirle definitivamente. En este caso, con acuerdo del Congreso, la Comisión de actas presentará aquellos dictámenes que, á juicio de la misma, ofreciesen menor dificultad.

Art. 35. Para la discusión de los dictámenes de las actas clasificadas como graves se concederán los tres turnos que el art. 117 determina, siendo aplicables á la discusión de tales dictámenes todas las demás disposiciones del título XI del Reglamento, excepto las establecidas en los arts. 115 y 116, y las contenidas bajo los epígrafes parciales del mismo título, que se refieren ex-

(1) Este artículo se refiere á la ley de 28 de Diciembre de 1878, que no está vigente, y concuerda con el 67 de la de 26 de Junio de 1890.

esamente á la discusión de asuntos determinados.

Art. 36. Para que los acuerdos que se adopten sobre la validez ó nulidad de las actas clasificadas de graves tengan carácter definitivo, se requerirá la concurrencia de un número de Diputados que en ningún caso podrá bajar de 140.

La votación de los dictámenes de actas graves deberá anunciarse en la orden del día, cuando puélla no siga inmediatamente á la discusión el dictamen, ó la que se intente no resulte válida por falta de número.

Si después de ponerse á votación tres veces en sesiones no consecutivas y separadas por intervalo no mayor de diez días un dictamen sobre esta grave no se reuniera número bastante de votantes, con arreglo al párrafo 1.º de este artículo,

Congreso procederá á declarar vacante el distrito á que el acta se refiera, y se comunicará al Gobierno para que convoque á nueva elección.

TITULO IV

DE LA CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL CONGRESO

Art. 37. En las primeras legislaturas, conculcido el examen de las actas comprendidas en las dos primeras clases de que habla el art. 19, verificado en su caso lo dispuesto en el art. 34 cuando resultasen admitidos tantos Diputados por lo menos como se necesitan para votar las leyes, se procederá á la constitución definitiva del Congreso (1)

Art. 38. Las votaciones para Presidentes, Vicepresidentes y Secretarios se verificarán en lo:

(1) Reformado en 18 de Junio de 1887.

términos prevenidos para la constitución interna, salvo las modificaciones siguientes:

1.ª No resultando elegido Presidente á la primera votación, se repetirá ésta entre los tres que hubieren obtenido mayor número de votos. Si todavía no resultare ninguno con mayoría absoluta, se repetirá la votación en los términos prevenidos en el art. 9.º

2.ª En la segunda elección para Vicepresidentes quedarán elegidos los que resulten con mayoría absoluta; si aún hubiere que repetir la elección, se observará lo prevenido en el art. 9.º

Art. 39. Los nombrados para la Mesa interna pueden ser reelegidos.

Art. 40. Concluídos estos nombramientos, el Presidente provisional tomará el juramento ó recibirá la promesa al nuevamente elegido, y éste, ocupando su asiento, á todos los Diputados, empezando por los Vicepresidentes y concluyendo por los Secretarios. Lo mismo se practicará respecto á los Diputados que no estén presentes, antes de tomar asiento como tales (1).

Art. 41. Para que tenga lugar el acto, uno de los Secretarios nuevamente nombrados leerá la fórmula siguiente: *¿Juráis ó prometéis guardar y hacer guardar la Constitución de la Monarquía española? ¿Juráis ó prometéis fidelidad y obediencia al Rey legítimo de las Españas Don Alfonso XIII y á la Regencia del Reino constituida con arreglo á la Constitución? ¿Juráis ó prometéis haberos bien y fielmente en el encargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien de la misma Nación?* Los Diputados se acercarán de dos en dos al lado derecho del Presidente, que estará senta-

(1) Este artículo y los dos que siguen fueron reformados en 10 de Abril de 1883, 2 de Enero y 11 de Junio de 1886.

y los que pusieren la mano sobre el libro de Evangelios y se incaren de rodillas, dirán: *Sí*; los que permanecieren en pie, con la mano esta sobre el pecho, dirán: *Sí prometo por mi honor*. El Presidente contestará: *Sí así lo hicierets, os lo premie; y si no, os lo demande*.

Art. 42. Durante el acto á que se refiere el artículo anterior estarán de pie todos los Diputados y concurrentes á las tribunas y galerías.

Art. 43. En seguida el Presidente declarará larse constituido el Congreso, y así se participará al Gobierno y al Senado.

Art. 44. Acto continuo, si hubiere tiempo en misma sesión, y si no en la inmediata, se dirán por suerte en siete Secciones de igual número todos los Diputados presentes, y los que en después serán destinados á la Sección que corresponda por turno.

TÍTULO V

DEL PRESIDENTE

Art. 45. El Presidente abrirá y cerrará las sesiones del Congreso, y con anuencia de éste designará los días en que debe haberlas; cuidará de mantener el orden; señalará y dirigirá las discusiones; concederá la palabra según el orden en que se hubiere pedido; fijará las cuestiones que han de discutir y votar; firmará las actas del Congreso y los proyectos de ley y mensajes que remitan al Gobierno y al Senado, y anunciará en de cada sesión las materias de que se deba ar en la siguiente.

Art. 46. El Presidente podrá llamar al orden orador que se exceda y á la cuestión al que oriamente se separe de ella.

Art. 47. Si el Presidente quiere tomar parte en una discusión, dejará la Presidencia y no volverá á ocuparla hasta que se haya votado el artículo ó punto que se discuta.

Art. 48. Si ocurriese algún suceso desagradable dentro del edificio del Congreso, el Presidente tomará las disposiciones preventivas que su prudencia le dicte, y será obedecido respetuosamente.

Art. 49. El Presidente dispondrá se fije con anticipación en la Sala de conferencias la orden del día, y que se comuniqué ésta al Gobierno.

Art. 50. Los Vicepresidentes ejercerán en su caso las mismas funciones que el Presidente.

Art. 51. El Presidente tendrá en la correspondencia el tratamiento de *Excelencia*.

TITULO VI

DE LOS SECRETARIOS

Art. 52. Los Secretarios del Congreso extenderán las actas de las sesiones, que deberán comprender una relación clara y sucinta de cuanto se trate y resuelva en el Congreso, á cuya aprobación se someterá la de cada sesión al abrirse la siguiente.

Art. 53. Las actas de las sesiones secretas se extenderán en libro separado.

Art. 54. Se firmarán por dos Secretarios las actas del Congreso y cuantos documentos y comunicaciones se expidan por la Secretaría.

Art. 55. Los Secretarios darán cuenta de todas las comunicaciones y expedientes que remitan al Congreso, y de cuantos asuntos se traten en él, extendiendo y rubricando las resoluciones que recaigan.

Art. 36. Corresponde asimismo á los Secreta-

declarar y publicar el resultado de las votaciones del Congreso.

t. 57. Estará á cargo de los Secretarios la Secretaría y Archivo del Congreso, dependiendo los todos los empleados de estas oficinas.

t. 58. Dos Secretarios recibirán y acompañarán á los Diputados que se presenten en el Congreso después de su constitución para el acto de juramento.

t. 59. Los Secretarios tendrán el tratamiento de *Excelencia* en la correspondencia de oficio.

TITULO VII

DE LAS SECCIONES

t. 60. Las Secciones se designarán por orden numérico desde el uno al siete.

t. 61. Cada Sección nombrará mensualmente la pieza destinada á sus reuniones un presidente, un vicepresidente, un secretario y un vicesecretario, por el mismo método que se nombra á los del Congreso, en cuyas actas constarán los nombramientos.

t. 62. Las Secciones discutirán separadamente las proposiciones, proyectos de ley ó cualquier otro asunto que se les pase, y concederán ó denegarán la autorización de que habla el art. 93.

t. 63. Los Ministros que sean Diputados tendrán voto en las Secciones á que correspondan.

t. 64. Los Ministros y los autores de las proposiciones de ley que se discutan podrán asistir con voto á cualquier Sección.

t. 65. Luego que cada Sección se declare competentemente instruida en el proyecto, proposición de ley ó asunto que se discuta, nombrará

un Diputado para que forme parte de la Comisión que ha de dar su dictamen al Congreso.

Art. 66. Los individuos nombrados con este objeto por las Secciones han de ser de su propio seno.

Art. 67. Estos siete individuos compondrán la Comisión.

Art. 68. Las Secciones se reunirán cuando el Congreso lo determine, á propuesta del Presidente ó de algún Diputado.

TITULO VIII

DE LAS COMISIONES

Art. 69. Cada Comisión nombrará su presidente y secretario, dando parte al Congreso de estos nombramientos.

Art. 70. Todas las Comisiones del Congreso serán especiales para objeto determinado, y se nombrarán por el método expresado.

Art. 71. No serán especiales las Comisiones de actas electorales, *la de incompatibilidades*, la de presupuestos, la de examen de cuentas, *la de concesión de gracias ó pensiones á persona ó personas determinadas*, la de peticiones, la de gobierno interior y la de corrección de estilo (1).

Art. 72. La Comisión de presupuestos será permanente para cada legislatura; se nombrará al principio de ésta, y se compondrá de 35 individuos, nombrados cinco por cada Sección.

Art. 73. Las Comisiones de examen de cuentas y de concesión de gracias ó pensiones serán también permanentes para cada legislatura, y se

(1) Lo subrayado en este artículo se adicionó en 18 de Junio de 1887 y en 18 de Junio de 1864.

nombrarán al principio de ésta; pero la última se compondrá más que de siete individuos, no las especiales (1).

art. 74. La Comisión de peticiones será permanente, y sus individuos se renovarán cada mes tiempo de renovarse las Secciones; pero se sustraerá existente cada una de las Comisiones suyas hasta que evacue los correspondientes informes de las peticiones que se le hayan pasado, se recaiga sobre ellas la resolución del Congreso.

art. 75. La Comisión de gobierno interior será permanente; constará de un individuo de cada Sección, nombrado al principio de cada legislatura, del Presidente del Congreso, que lo será de la Comisión, y del primer Secretario.

art. 76. La Comisión de corrección de estilo será permanente para cada legislatura, y constará de uno de los Secretarios nombrados por la Mesa, y otros dos Diputados. Para nombrar éstos, cada Sección designará un individuo, y los siete se elegirán de entre ellos mismos á los dos.

art. 77. De las Comisiones mixtas que se forman con arreglo al art. 10 de la ley de 19 de Julio de 1837, serán individuos los siete Diputados que hubiesen sido de la que examinó el proyecto de ley de que se trate, disminuyéndole ó aumentándole hasta el número igual al que designe el Estado para la suya. En el primer caso, se eliminarán por suerte los excedentes; en el segundo, se completarán con arreglo al artículo anterior (2).

Este artículo fué nuevamente redactado por acuerdo de Junio de 1864.

Aprobado definitivamente por el Congreso en 24 de Julio de 1864, variándose la numeración anterior de los artículos citados y las referencias de todos los demás del Reglamento, conforme á la inclusión de este nuevo artículo entre el 76 y el 77, antes llevaba el mismo número 77.

Art. 78. Las Comisiones podrán llamar para que las auxilie en sus trabajos á cualquiera individuo de dentro ó fuera del Congreso.

Art. 79. Las Comisiones tendrán derecho para reclamar del Ministerio, por medio de los Secretarios del Congreso, cuantas noticias crean necesarias para el acierto en sus dictámenes.

La Comisión de gracias ó pensiones comprobará los documentos que se la presenten, y reclamará del Gobierno las noticias que sean necesarias para fundar su dictamen, en el que nunca dejará de consignar el resultado de todos los datos (1).

Art. 80. Los Ministros y todos los Diputados podrán asistir sin voto á las Comisiones.

Art. 81. Si por ausencia, enfermedad ó nombramiento para algún cargo faltare algún individuo de la Comisión, se entenderá que ésta subsiste y podrá dar dictamen mientras queden cinco Diputados.

Si bajaren de este numero, nombrarán las Secciones respectivas los que faltaren; y si ya éstas se hubieren renovado, las designadas con el mismo número.

Art. 82. Ninguna Comisión se disolverá hasta que quede definitivamente votado el asunto para que ha sido nombrada.

Art. 83. Las Comisiones nombradas para el examen de los Códigos ó de otras leyes de mucha extensión, podrán continuar sus trabajos con autorización del Congreso y de acuerdo con el Gobierno, aun después de concluída la legislatura; en cuyo caso el Diputado que no pueda permanecer en la capital, lo hará presente para que se le reemplace.

(1) Este párrafo fué adicionado en 18 de Junio de 1864.

Art. 84. Cada Comisión extenderá su dictamen sobre el asunto que se le haya encargado, y lo presentará al Congreso.

Art. 85. Los votos de los individuos de la Comisión que disientan de la mayoría se extenderán separado, y se presentarán también al Congreso, como asimismo los votos de las diversas Secciones en que se divida la Comisión cuando tenga mayoría ningún dictamen.

Art. 86. Cuando el dictamen de una Comisión diga sobre una proposición de uno ó más Diputados, adquirirá ya ésta el carácter de proyecto de ley.

Art. 87. Para las Comisiones de etiqueta y de Mensaje turnarán los Diputados por el orden de la lista.

TITULO IX

DE LOS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Art. 88. Los proyectos de ley presentados por el Gobierno al Congreso ó remitidos por el Senado se pasarán inmediatamente al examen de las Secciones.

Art. 89. Las proposiciones de ley que hicieren Diputados deberán ser firmadas por sus autores y entregadas al Presidente.

Art. 90. Estas proposiciones deberán estar formuladas como los proyectos del Gobierno.

Art. 91. Ninguna proposición de ley podrá ser firmada por más de siete Diputados.

Art. 92. El Presidente pasará inmediatamente a todas las Secciones las proposiciones de ley que se le presenten.

Art. 93. Las Secciones resolverán en su reunión inmediata si autorizan ó no la lectura de la proposición.

Art. 94. Basta que una Sección autorice esta lectura, para que se verifique en la primera sesión del Congreso.

Art. 95. Uno de los autores de la proposición podrá exponer de palabra los motivos y fundamentos de ella en seguida de su lectura, ó el día que tenga á bien.

Art. 96. Verificada esta exposición de motivos, ó renunciando á ella el autor ó autores de la proposición, se preguntará al Congreso si la toma en consideración ó no. Para esta resolución no se permitirá debate alguno.

Art. 97. Tomada en consideración una proposición de ley, pasará á las Secciones, como los proyectos del Gobierno y del Senado.

Art. 98. En la segunda y ulteriores legislaturas de cada diputación puede continuar, á propuesta del Gobierno ó de un Diputado, cualquiera de los trabajos de la precedente, partiendo del estado en que se encontraba; pero concluída una diputación terminarán cuantos negocios pendían en el Congreso, y deberán comenzarse nuevamente si fueren promovidos por el Gobierno ó los Diputados. Exceptúanse de esta disposición los Códigos. en cuyo examen y discusión se podrá continuar.

TITULO X

DE LAS SESIONES

Art. 99. Habrá sesión ordinaria todos los días no festivos.

No habrá sesión los días y cumpleaños del Rey y del inmediato sucesor á la Corona, y los de fiesta nacional, salvo cuando á propuesta del Presidente ó de un Diputado, por motivos de grave urgencia, acuerde el Congreso otra cosa.

REGLAMENTO DEL CONGRESO

100. Con el mismo acuerdo se suspenderá por uno ó más días las sesiones á petición del rno; y por el Presidente, cuando el Congreso viere asuntos de que ocuparse.

101. Las sesiones ordinarias hasta la tución definitiva del Congreso durarán seis

la misma duración tendrán aquellas en que se lean dictámenes sobre presupuestos generales del Estado, destinando en cada una por lo menos cuatro horas á este asunto, y á cualquiera de los incluídos en la «Orden del día» que reciba carácter de urgencia á juicio del Presidente. Las demás sesiones ordinarias después de concluido definitivamente el Congreso, durarán cuatro horas.

En todos estos casos podrán ser prorrogadas las sesiones por acuerdo del Congreso, á propuesta del Presidente ó á petición de un Diputado.

Cuando la prórroga haya de durar menos de cuatro horas en las sesiones de cuatro, el Congreso será sin debate sobre la propuesta.

Se decidirá también sin debate cuando, comenzada y continuada durante algunas sesiones la discusión de las leyes anuales de presupuestos y de las fuerzas militares permanentes de mar y tierra, dispensable la prórroga indefinida para que se concluyan aprobadas dentro del plazo constitucional.

La propuesta de prórroga habrá de hacerse dentro de las horas reglamentarias de la sesión (1).

102. Con el mismo acuerdo, y cuando la sesión lo requiera, habrá sesiones extraordinarias que serán antes ó después de la ordinaria, ó días exceptuados.

Art. 103. Habrá sesión secreta para tratar de los asuntos de que dé cuenta la Comisión de gobierno interior, cuando lo determine el Presidente, á petición del Gobierno; por petición escrita de un Diputado, expresando el objeto, y siempre que el Congreso hubiere de resolver sobre cosas que conciernen á su decoro y al de sus individuos.

Art. 104. Aun cuando se haya empezado á tratar de un asunto en sesión pública, el Congreso, á propuesta del Presidente ó de un Diputado, puede acordar se continúe tratando del mismo asunto en sesión secreta.

Para hacer al Congreso la pregunta concerniente al caso previsto en este artículo, y para que el Congreso resuelva sobre la misma, con discusión ó sin ella, el Presidente podrá suspender la sesión pública, mandando despejar las tribunas.

Art. 105. De la misma manera, si empezada una sesión secreta estimare el Congreso que puede tratarse sin inconveniente en sesión pública del asunto que la motivó, lo acordará así.

Art. 106. A propuesta del Presidente, el Congreso acordará la hora en que ha de empezar sus sesiones ordinarias.

Art. 107. El Presidente abrirá la sesión con esta fórmula: *Abrese la sesión*, y la cerrará con la de *Se levanta la sesión*. Levantada la sesión, no se permitirá hablar á ningún Diputado, y será nulo cuanto se hiciere.

Art. 108. No se levantará la sesión sin haber destinado dos horas de ella, por lo menos, á los asuntos señalados en la «Orden del día», á no ser que no hubiera número de Diputados para continuarla, ó que el Presidente no hallara otro medio de hacer respetar su autoridad (1).

(1) Este artículo fué aumentado por acuerdo de 7 de Abril de 1894.

Art. 109. Para abrir la sesión deben hallarse presentes 70 Diputados por lo menos, y este número bastará para toda resolución que no sea la sanción definitiva de proyectos de ley.

Art. 110. En cada sesión, después de leída el acta de la anterior, y antes de pasar á discutir los asuntos señalados, se dará cuenta de los oficios que hubiere remitido el Gobierno y de las proposiciones que hayan hecho los Diputados.

Art. 111. Las comunicaciones del Gobierno remitiendo al Congreso los tratados de paz, ó dando parte de las declaraciones de guerra conforme al art. 45 de la Constitución (1), y aquellas en que diere cuenta de los resultados de una autorización concedida por las Cortes con esta calidad, quedarán sobre la Mesa durante tres sesiones, después de lo cual pasarán al Archivo.

Si en la comunicación sometiere el Gobierno juicio del Congreso alguno de sus actos, pasará ésta á las Secciones.

Art. 112. Habrá en el salón un asiento destinado exclusivamente para los Ministros.

TITULO XI

DE LAS DISCUSIONES

Art. 113. Leído el dictamen de una Comisión sobre cualquier materia, el Presidente señalará la hora para su discusión.

Esta no podrá verificarse en la sesión en que se dé cuenta.

Art. 114. En los negocios graves ó difíciles, deberá imprimirse y repartirse el dictamen de la Comisión.

1) Es el 54 de la Constitución de 1876.

Art. 115. En los dictámenes de mucha extensión y gravedad, se verificará la discusión primero en su totalidad, y después por párrafos. Cuando ocurriere duda sobre la calidad del negocio, se consultará al Congreso.

Art. 116. La discusión general recaerá sobre el principio, espíritu y oportunidad del proyecto.

Art. 117. No podrá cerrarse ninguna discusión, ni general ni particular, sin que hayan hablado por lo menos tres Diputados en contra, si los hay que tengan pedida la palabra, y otros tantos en pro.

Si puesto un dictamen á discusión, y en cualquier estado de ésta no hubiera quien tenga pedida la palabra en contra, se procederá á la votación.

Art. 118. En el caso de ampliarse, por acuerdo del Congreso, la discusión ordinaria, el mismo declarará, á petición de uno ó más Diputados, cuándo está el asunto suficientemente discutido.

CÓDIGOS

Art. 119. En los proyectos de Códigos y otros de igual naturaleza podrá haber varias discusiones generales sobre los diversos libros ó títulos que comprendan.

VOTOS PARTICULARES

Art. 120. Si los individuos de una Comisión presentaren dictámenes diferentes, discutido en la totalidad el que tenga preferencia con arreglo á lo dispuesto en el art. 122, se preguntará si el Congreso lo toma ó no en consideración; y en el último caso, el proyecto se entiende desechado.

Art. 121. Los individuos de una Comisión

discordaren de la mayoría no podrán excusarse de formar voto particular.

rt. 122. Si los individuos de una Comisión acordaren hasta el punto de no haber mayoría, emitirán los dictámenes parciales, empezando por el que más se separe del proyecto ó artículo sobre que recaigan.

ENMIENDAS Y ADICIONES

rt. 123. Las enmiendas y adiciones que se presenten al dictamen de la Comisión deberán imprimirse y repartirse, si hubiere tiempo para ello.

rt. 124. No se admitirá enmienda ni adición que no esté firmada por siete Diputados.

rt. 125. Las adiciones ó enmiendas se presentarán antes de anunciarse la discusión del artículo ó proyecto á que se contraigan, y leídas sean, pasarán á la Comisión.

rt. 126. Hecha segunda lectura de ellas, emendiando por las que más se separen del artículo ó proyecto á que se refieran, se concederá la palabra á uno de sus autores: contestará un individuo de la Comisión, y en seguida se preguntará si el Congreso toma en consideración la enmienda efectiva.

rt. 127. En el caso afirmativo se discutirán en el mismo tiempo que el artículo á que corresponden, salvo aquellos cuya importancia y gravedad tal que el Congreso resuelva se discutan presente y con separación.

PRESUPUESTOS

rt. 128. Los presupuestos se discutirán por ordenado por el orden que acuerde el Congreso. El de cada Ministerio se discutirá en la tota-

lidad, y discutido en la misma forma cada uno de sus capítulos ó secciones, se votará por párrafos.

DISCURSO DE LA CORONA

Art. 129. La contestación al discurso de la Corona se discutirá sólo en la totalidad.

Art. 130. La Comisión dará su dictamen dentro de los tres primeros días después de constituido definitivamente el Congreso. Impreso aquél, y después de haber estado dos días sobre la mesa, se procederá á la discusión, la cual se declarará cerrada cuando hayan hablado tres Diputados en pro y tres en contra.

Si se presentaren enmiendas al dictamen, se admitirán sólo las dos que más se aparten de él. Discutidas en la forma prescrita para las enmiendas, se procederá á la votación.

USO DE LA PALABRA

Art. 131. Las discusiones se verificarán siempre hablando los Diputados alternativamente en contra ó en pro de la proposición ó dictamen que se discuta, según el orden con que hubieren pedido la palabra en uno de los dos sentidos.

Art. 132. Ningún Diputado podrá hablar sin haber pedido y obtenido la palabra.

Art. 133. La palabra se pide desde su asiento ó acercándose á la mesa á escribir el Diputado por sí mismo su nombre.

Art. 134. Los Diputados dirigirán siempre la palabra al Congreso y no á un individuo ó fracción del mismo.

Art. 135. Aun cuando un Diputado haya usado de la palabra, podrá volver á usarla, caso de

ampliarse la discusión, si le tocara el turno, ó se lo cedieren.

Art. 136. En todos los casos el Diputado que haya usado de la palabra podrá volver á usar de ella para deshacer equivocaciones puramente de hecho ó de concepto, pero sin hacer discursos sobre la cuestión principal.

Art. 137. Los Diputados que hubieren pedido la palabra en un mismo sentido, podrán cederse el turno entre sí.

Art. 138. La Comisión cuyo dictamen se discuta, y el autor de una proposición sobre la cual no hubiera recaído dictamen de Comisión, tendrán preferencia en el uso de la palabra en todos los turnos en pro que permite el Reglamento.

Art. 139. Los Ministros obtendrán la palabra siempre que la pidan.

Art. 140. Todo discurso se pronunciará de viva voz y se continuará sin intermisión, salvo que fueren pasadas las horas de Reglamento, y el Congreso no acuerde prorrogar la sesión.

Art. 141. Para que un discurso pueda prorrogarse más tiempo que el de una sesión, se necesita el acuerdo del Congreso.

Art. 142. En cualquier estado de la discusión podrá pedir un Diputado la observancia del Reglamento, citando los artículos cuya aplicación reclame, y la lectura de los mismos si le conviene.

Art. 143. Cualquier Diputado podrá pedir también, durante la discusión ó antes de votar, la lectura de las leyes, órdenes y documentos que crea conducentes á la ilustración del asunto de que se trata.

DICTÁMENES RETIRADOS

Art. 144. Las Comisiones podrán retirar en

todo ó en parte los dictámenes que dieran, para presentarlos redactados de nuevo.

Art. 145. El autor de una proposición podrá retirarla antes de que el Congreso la haya tomado en consideración.

ALUSIONES PERSONALES

Art. 146. El que en los discursos pronunciados ó documentos que se leyeren fuere aludido en su persona ó en sus hechos propios, podrá usar de la palabra sin entrar en el fondo de la cuestión, para rectificar ó defenderse en la misma sesión; y si no se hallare presente, en la inmediata. Para hacerlo en lo sucesivo, lo acordará así el Congreso.

En estos casos no se permitirá más que el discurso del que se defiende y el del que hubiere hecho alusión, si quiere contestar, después de lo cual se pasará á otro asunto.

Art. 147. Si la alusión fuere relativa á un ausente ó á persona que hubiere fallecido, y un Diputado quisiere hablar en su defensa, se preguntará al Congreso.

Art. 148. Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino para ser llamado al orden ó á la cuestión por el Presidente.

LLAMADAS Á LA CUESTIÓN Y AL ORDEN

Art. 149. Los Diputados serán llamados á la cuestión siempre que notoriamente estuvieren fuera de ella, ya por digresiones extrañas al punto de que se trata, ya por volver nuevamente sobre lo que estuviere discutido ó aprobado.

Art. 150. Asimismo los Diputados serán llamados al orden siempre que en sus discursos fal-

en con insistencia á lo establecido para las sesiones; cuando profirieren palabras en cualquier sentido peligrosas, y cuando las profirieran sonantes ú ofensivas al decoro del Cuerpo ó de individuos, del Trono y del otro Cuerpo Coleador.

Art. 151. Cuando un Diputado sea llamado tres veces al orden en una misma sesión, el presidente podrá consultar al Congreso si se le dará y negará la palabra en lo que restare de misma sesión. Pero si hecha esta pregunta pidiendo al Diputado la palabra para justificarse, deberá ser concedida, y escucharle las razones que exponga, con moderación y decoro.

EXPRESIONES MALSONANTES

Art. 152. Si se profiriere alguna expresión sonante ú ofensiva á algún Diputado, éste podrá reclamar, luego que concluya de hablar el la profirió; y si éste no satisface al Congreso el Diputado que se creyere ofendido, mandará al presidente que se escriba por un Secretario; hubiere tiempo, se deliberará sobre ella aquel mismo día, y si no, se dejará para otra sesión, dejando el Congreso lo que estime conveniente al propio decoro y á la unión que debe reinar entre los Diputados.

DICTÁMENES DESECHADOS

Art. 153. Cuando fuere desechado un proyecto de ley ó un dictamen de Comisión en todo ó en parte, el Congreso decidirá si ha de volver á la sesión para que lo redacte de nuevo.

APROBACIÓN DEFINITIVA

Art. 154. Concluída la discusión y votación de un asunto por partes ó artículos, la Secretaría lo redactará, lo revisará la Comisión de corrección de estilo, y se someterá á la aprobación definitiva del Congreso.

TRIBUNAS

Art. 155. Los espectadores guardarán profundo silencio y conservarán el mayor respeto y compostura, sin tomar parte alguna en las discusiones por demostraciones de ningún género.

Art. 156. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán expelidos de las tribunas ó galerías en el mismo acto; y si la falta fuere mayor, se tomará con ellos la providencia que haya lugar, deteniéndolos en caso necesario y entregándolos á las autoridades competentes.

Art. 157. En el caso de que ocurra un desorden grave, que el Presidente no pueda calmar, levantará la sesión.

TITULO XII

DE LAS PROPOSICIONES QUE NO SON DE LEY

Art. 158. Si durante una discusión se hiciere alguna proposición incidental, ó que tenga por objeto determinar el curso que deba darse á los negocios, el Congreso, oyendo al autor de ella, acordará lo que tenga por conveniente.

El discurso del autor en este caso se ceñirá estrictamente al objeto de la proposición, sin entrar de ninguna manera en la cuestión principal.

Art. 159. La proposición de no haber lugar á deliberar tiene preferencia sobre cualquier otra; pero no podrá hacerse en la discusión de los proyectos de ley.

Art. 160. Las proposiciones que notengan por objeto una ley, se han de presentar firmadas por siete Diputados. Si estuvieren firmadas por un número menor, ha de completarse éste por Diputados que al menos apoyen la lectura bajo su firma al pie de la misma proposición.

Exceptúanse de esta formalidad las proposiciones de que tratan los dos artículos anteriores.

Art. 161. Las proposiciones así firmadas deberán leerse en la sesión en que se presenten, si se entregan antes de entrar en la discusión de los asuntos señalados, y si no, en la inmediata; y el Congreso decidirá si las toma ó no en consideración, oyendo para esto á uno de sus autores.

Art. 162. El Congreso decidirá también si han de pasar á las Secciones y ha de informar sobre ellas una Comisión, ó si se han de discutir sin este trámite.

TITULO XIII

DE LAS INTERPELACIONES Y PREGUNTAS

Art. 163. Cualquier Diputado tiene el derecho de interpelar á los Ministros, anunciándolo con anterioridad de palabra ó por escrito; pero expresando en ambos casos de un modo explícito el objeto de la interpelación.

Art. 164. El Diputado podrá anunciar la interpelación de palabra, cuando se halle presente el Ministro del ramo, el cual contestará en el acto o se tomará tiempo para contestar, si el Gobierno cree ó no conveniente dar explicaciones sobre e

objeto indicado, y en el día en que estará dispuesto á verificarlo.

Art. 165. Lo mismo hará el Gobierno cuando la interpelación se haya anunciado por escrito y se le haya comunicado por la Secretaría del Congreso.

Art. 166. En el día señalado por el Gobierno para la interpelación, el Diputado la explanará en los términos que tenga por conveniente; el Gobierno contestará y el Diputado interpelante ó cualquiera otro podrá replicar; pero luego que hayan hablado tres Diputados y contestádoles el Ministerio, si lo cree oportuno, podrá preguntarse si se pasará á otro asunto.

Art. 167. De resultas de la interpelación, podrán los Diputados presentar las proposiciones que crean convenientes en la misma sesión ó en la inmediata.

Art. 168. Los Diputados pueden también dirigir preguntas al Gobierno sobre asuntos de interés público, á que aquél contestará si lo tuviere por conveniente; ya en el acto, ya aplazando la contestación.

Si de resultas de la contestación á la pregunta tuviere por conveniente el Diputado hacer alguna interpelación, seguirá ésta los trámites determinados en los artículos anteriores.

Art. 169. En igual forma podrán los Diputados dirigir preguntas á la Mesa y á las Comisiones sobre el estado de los asuntos que penden de las mismas.

TITULO XIV

DE LAS VOTACIONES

Art. 170. El Congreso votará de uno de los cuatro modos siguientes:

3.° Levantándose los que aprueben, y quedansentados los que reprueben.

4.° Por votación nominal.

5.° Por papeletas.

6.° Por medio de bolas.

Art. 171. La votación ordinaria es la primera de las cuatro que quedan expresadas. Su resultado anunciará uno de los Secretarios.

Art. 172. Si el Secretario tuviere duda ó algún Diputado lo reclamare aun después de publicada la votación, el Presidente nombrará dos Diputados de los que estén de pie y dos de los sentados, para que uno de cada clase cuenten á los que aprueban, y los otros dos á los que reprueban, anunciando el número á continuación.

Art. 173. Ningún Diputado podrá entrar en el salón ni salir de él mientras se cuentan los votos.

Art. 174. Toda votación ordinaria se repetirá nominalmente siempre que la diferencia entre los que aprueban y reprueban no pase de tres, ó que los Diputados que cuenten los votos no estén concurridos después de haberlos contado dos veces.

Art. 175. También será la votación nominal cuando la pidan al menos siete Diputados antes de que esté publicada la votación ordinaria.

Art. 176. La votación nominal se verificará leyendo los Diputados sus nombres por el orden que estuvieren sentados, y añadiendo *sí* ó *no*, según sea el voto de aprobación ó reprobación.

Art. 177. Toda elección de personas se hará por papeletas (1).

Art. 178. El escrutinio por bolas servirá para cualquier votación en que se califiquen los actos ó conducta de alguna persona ó personas

ó cuando el Congreso lo acuerde por mayoría de dos terceras partes.

Art. 179. Para verificar esta clase de votación, cada Diputado, cuando sea llamado por el Secretario, que leerá la lista de todos, recibirá del Presidente una bola blanca y otra negra, y depositará en la urna destinada al efecto la bola blanca si aprueba, y la negra si reprueba, poniendo en otra urna separada la bola sobrante.

Art. 180. El Presidente y los Secretarios contarán las bolas, y uno de éstos publicará la votación.

Art. 181. La votación definitiva de las leyes en su totalidad es la única que, con arreglo al artículo 37 (1) de la Constitución, requiere la presencia de la mitad más uno del número total de Diputados que componen el Congreso.

En los proyectos ó proposiciones de ley para gracia ó pensión, se verificará la votación por medio de bolas (2).

Art. 182. Cuando ocurriere empate en alguna votación ordinaria, nominal, ó de las que se hagan por bolas á petición de los Diputados, se abrirá de nuevo el debate y se repetirá la votación. Si resultare nuevo empate, se volverá á votar en la sesión próxima; y si también hubiere entonces empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo ó proposición.

Art. 183. Lo mismo se hará en caso preciso respecto de las votaciones definitivas de los proyectos de ley, pero sin abrirse de nuevo la discusión.

Art. 184. Tiene derecho á votar todo Diputado que entre en el salón mientras no estén ce-

(1) Es el 43 de la Constitución de 1876.

(2) Este párrafo se adicionó en 18 de Junio de 1864.

as las votaciones que se hagan nominalmente por papeletas ó por escrutinio de bolas.

Art. 185. También tiene derecho cualquier ciudadano para hacer que se cuenten los presentes á la votación, á fin de comprobar si son ó no número suficiente.

Art. 186. Si un Diputado pidiera que un artículo, dictamen ó proyecto se vote por partes, el Congreso resolverá lo que estime conveniente.

Art. 187. Todo Diputado que se halle presente en una votación que no sea secreta, puede salvar su voto, sin motivarlo, en el acta de la sesión inmediata, y podrán adherirse á las resoluciones del Congreso todos los Diputados, aun cuando se estén ausentes al tiempo de tomarlas.

Art. 188. A toda votación precederá la pregunta de si *há lugar á votar*.

TITULO XV

DE LAS PETICIONES

Art. 189. De todas las peticiones que se dirijan al Congreso se dará cuenta por lista que indique el orden numérico de prioridad con que se recibieron en la Secretaría, y que exprese únicamente el nombre del petionario y el objeto de la petición.

Art. 190. Estas listas y las peticiones á que se refieran, pasarán inmediatamente á la Comisión, para que informe á la mayor brevedad posible.

Art. 191. Los informes de la Comisión se imprimirán por *Apéndice* en el *Diario de las Sesiones* y de que los sábados, por lo menos, de cada semana, se ocupe el Congreso en resolverlas por el mismo orden con que han sido presentadas.

Art. 192. Si la Comisión de peticiones creyere que alguna de ellas no debe tomarse en consideración, usará de la fórmula de *no há lugar á deliberar*.

Art. 193. Si creyere que son dignas de tomarse en consideración, pero que toca resolverlas al Gobierno ó á los Tribunales, propondrá su remisión al Ministerio á que corresponda.

Art. 194. Si creyere que deben tomarse en consideración, por ser útiles para trabajos legislativos, propondrá que se tengan presentes en tiempo oportuno. Estas peticiones quedarán en la Secretaría á disposición de todos los Diputados.

Art. 195. Ninguna petición se remitirá al Gobierno con recomendación directa ni indirecta por parte del Congreso.

TITULO XVI

DE LOS MENSAJES AL REY

Art. 196. Para la redacción de la contestación al discurso de la Corona y de los demás mensajes que el Congreso de los Diputados dirija á S. M., se nombrarán Comisiones especiales, del modo ordinario, por las Secciones.

Art. 197. El Congreso resolverá, cuando llegue el caso, si el mensaje que se ha de dirigir á S. M. se ha de discutir y votar de una vez, ó por partes.

Art. 198. Aun cuando los mensajes se voten de una vez, cualquier Diputado podrá presentar las enmiendas y adiciones que le parezca, las cuales se discutirán con prioridad y separadamente.

Art. 199. Las Comisiones de etiqueta y de mensaje serán presididas por el Presidente del

greso, ó por uno de los Vicepresidentes que designare.

TITULO XVII

LOS VOTOS DE CENSURA Y DE GRACIAS Y DE LAS DECLARACIONES HONORÍFICAS

Art. 200. La proposición de voto de censura formulará por escrito, firmada por siete Diputados, y después de apoyada por uno de sus autores, si fuese tomada en consideración, pasará á las Secciones para nombramiento de Comisión (1).

Art. 201. Los votos de gracias no están sujetos á esta formalidad.

Art. 202. Para las declaraciones honoríficas, como la de haber merecido bien de la Patria, y de haber de inscribirse algún nombre en las paredes del salón de sesiones, precederá siempre el dictamen de Comisión.

Art. 203. Para estas declaraciones debe estar el Congreso definitivamente constituido.

TITULO XVIII

DE LOS DIPUTADOS

Art. 204. Si algún Diputado tuviese necesidad ausentarse por más de ocho días, deberá pedir licencia al Congreso, exponiendo por escrito los motivos, y señalando el tiempo que necesite. El Congreso lo tomará en consideración, y acordará que estime conveniente.

.) Este artículo fué redactado nuevamente por acuerdo de 1.º de Abril de 1890.

Art. 205. Debiendo existir siempre presente en las sesiones el número de Diputados que la Constitución señala para la formación de las leyes, no se darán licencias á lo más sino á la tercera parte del número excedente.

No haciéndose uso de la licencia en el término de quince días, á contar desde la fecha de su concesión, queda sin efecto.

Art. 206. Los Diputados que no tengan uniforme ó traje particular, se presentarán con vestido negro en los días en que el Rey, el sucesor á la Corona, el Regente ó Regencia asistan á las Cortes, y los de galas mayores; y del mismo usarán para ir en Diputación al Palacio de S. M.

Art. 207. Cuando se pidiere al Congreso la autorización que se expresa en el art. 41 (1) de la Constitución, para proceder contra un Diputado, resolverá lo que estimare oportuno, oyendo á una Comisión nombrada por el método ordinario, pero sin la instrucción previa que previene el art. 65.

Art. 208. Los Diputados á que se refiere el párrafo primero del art. 31 de la Constitución cesarán de hecho en su cargo, y el Presidente del Congreso, sin que entienda en el asunto la Comisión de incompatibilidades, lo hará constar así en la primera sesión pública que celebre el Congreso después de transcurrido el plazo de quince días que marca el citado art. 31 de la Constitución (2).

TITULO XIX

DE LA ACUSACIÓN DE LOS MINISTROS

Art. 209. Para la acusación de los Ministros se formulará una proposición que pasará á las

(1) Es el 47 de la Constitución de 1876.

(2) Reformado en 18 de Junio de 1887.

iones, siguiendo los trámites de una proposición de ley, hasta que recaiga resolución del Congreso.

Art. 210. Si el Congreso en votación por bo- cordase haber lugar á la acusación, las Sec- es en votación por cédulas nombrarán una comisión de siete individuos, que formulará y pondrá la acusación ante el Senado.

Art. 211. Para decidir sobre la proposición de acusación se necesita el mismo número de Dipu- tos que para votar las leyes, y ha de hallarse el quórum definitivamente constituido.

Art. 212. La discusión para declarar haber ó no lugar á la acusación, será pública, y siempre oral.

Art. 213. Si los individuos de cuya responsabilidad se trata pretendieren concurrir á defen- derse, podrán verificarlo, ocupando el lugar que el fin le señale el Presidente, si no tuvieren abogado en el Congreso.

Art. 214. Los discursos que los mismos pro- duzcan en su defensa no consumen turno. Pueden asimismo pedir la lectura ó exhibición de tantos documentos les convinieren.

Art. 215. Si en vez de concurrir personalmen- te presentan escritos ó documentos en su defensa serán admitidos y leídos en la sesión.

Art. 216. Los interesados están en todos estos casos bajo la salvaguardia del Congreso.

TITULO XX

DEL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

Art. 217. El Congreso en cuerpo no asistirá á ningún acto fuera de sus sesiones,

Art. 218. La policía del Congreso y del edifi-

cio en que celebre sus sesiones, corresponderá á su Presidente, quien dará al efecto las órdenes oportunas á los empleados en él, y al jefe de la guardia militar.

Art. 219. Bajo la dirección é inspección de la Comisión de gobierno interior estará el *Diario del Congreso*, en el que se insertarán é imprimirán íntegra, fiel é imparcialmente todos los hechos que pasen y discursos que se pronuncien en sus sesiones públicas; debiendo organizarse su redacción é impresión de manera que no deje de publicarse desde el primer día de las sesiones.

Art. 220. La Comisión de Gobierno interior proveerá todos los empleos vacantes del Congreso, y concederá, en caso preciso, licencias temporales á sus dependientes; pero no podrán ni aumentarlos, ni disminuirlos, ni destituirlos, sin aprobación del Congreso.

Art. 221. La misma Comisión formará el presupuesto anual de los gastos del Congreso, percibirá y administrará los fondos que para cubrirlos se reciban del Tesoro público, y presentará mensualmente al Congreso la correspondiente cuenta, que se aprobará en sesión secreta, y se leerá luego en sesión pública el primer sábado de cada mes.

Art. 222. La misma Comisión formará los reglamentos particulares de las dependencias del Congreso.

En el intervalo de una á otra legislatura, el Presidente del Congreso con dos individuos de la Comisión de gobierno interior, que él designare, desempeñarán las funciones de ésta.

REGLAMENTO DEL CONGRESO

TITULO XXI

FORMAS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La proposición de reforma del Reglamento seguirá los trámites de una proposición

De las resoluciones del Congreso en los casos dudosos formará la Secretaría un libro que se repartirá á los Diputados al Congreso en cada legislatura, y se observarán en los casos como adiciones provisionales al Reglamento.

APÉNDICE AL REGLAMENTO

ACUERDOS DEL CONGRESO

Las discusiones tendrán lugar hablando los Diputados por el orden en que se hallen inscritos en las listas de la Presidencia.

(Sesión de 27 de Diciembre de 1848.)

Los dictámenes de las Comisiones mixtas se discutirán sólo en totalidad.

(Sesión de 24 de Marzo de 1849.)

Cuando ocurra el fallecimiento de algún Diputado, se nombrará una Comisión de 12 individuos que acompañen sus restos á la última morada.

(Sesión de 18 de Enero de 1851.)

El nombramiento de los tres Diputados que han de formar parte de la Comisión inspectora de las operaciones de la Dirección de la Deuda pública, se hará en la forma que para los Vicepresidentes del Congreso prescribe el art. 11 del Reglamento.

(Sesión de 31 de Enero de 1851.)

La Comisión del Congreso que ha de asistir al acto de la presentación del inmediato sucesor á la Corona, se compondrá del Presidente, dos Secretarios y 14 individuos designados por la suerte.

(Sesión de 8 de Noviembre de 1851.)

El cargo de individuo de una Comisión no es renunciable.

(Sesión de 21 de Febrero de 1861.)

Los individuos de la Comisión de gracias ó pensiones formarán parte de la mixta en los proyectos de ley para su concesión.

(Sesión de 14 de Junio de 1865.)

Los dictámenes de Comisiones mixtas sobre proyectos de ley de gracias ó pensiones se aprueban en votación ordinaria ó nominal.

(Sesión de 19 de Junio de 1865.)

Todo proyecto de ley referente á petición de créditos extraordinarios ó suplementarios, así como toda proposición de ley en la cual se contiene un aumento del presupuesto de gastos, pasan á la Comisión de presupuestos.

El Congreso, sin embargo, podrá determinar que dichas proposiciones pasen á una Comisión especial. En este caso, dicha Comisión, siempre que apruebe el gasto ó el crédito sometido á su examen, lo comunicará á la Comisión de presupuestos, la cual deberá dar su dictamen en el término de diez días. Si así no lo hiciere, se entenderá que aprueba lo propuesto por la Comisión especial.

(Sesión de 27 de Febrero de 1883.)

Se considerará á las Comisiones de presupuestos de Cuba y Puerto Rico como permanentes, y vestidas por lo que hace á créditos extraordinarios ó supletorios y á proposiciones de ley relacionados con aumentos de gastos, de las mismas facultades que disfruta desde el acuerdo tomado por la Cámara en 27 de Febrero de 1883 la Comisión general de presupuestos de la Península.

(Sesión de 9 de Mayo de 1887.)

Una vez remitido al Congreso un suplicatorio para proceder contra un Diputado, los Tribunales no podrán proceder contra el mismo hasta que el Congreso conceda el permiso exigido en el art. 47 de la Constitución de la Monarquía, aunque hubiera sido disuelto el Congreso ante el que se presentó el suplicatorio.

(Sesión de 2 de Julio de 1894.)

La Comisión de actas elegida en cada legislatura, es la única que tiene facultades y competencia bastante para entender y conocer, sin limitación en cuanto al desenvolvimiento de la misión que por su índole y finalidad le está encomendada, lo mismo de aquellas que pendan de dictamen que de las que por haberlas dictaminado la Comisión anterior figuren en el orden del día, siempre que no hayan entrado en el período de votación.

(Sesión de 10 de Enero de 1895.)

Los votos particulares emitidos sobre dictámenes de actas é incompatibilidades no se discutirán hasta la sesión siguiente á aquella en que fueron presentados, siempre que su presentación se haga dentro de la sesión inmediata á la en que se dé cuenta del dictamen de la mayoría y antes de abrirse discusión sobre éste.

(Sesión de 19 de Mayo de 1896.)

La Comisión de presupuestos generales del Estado reclamará del Ministerio de Fomento los antecedentes que justifiquen los aumentos de gastos, tanto en lo referente á la partida de conservación de carreteras, como de cualquiera otra que estime conveniente la Comisión.

(Sesión de 27 de Julio de 1896.)

INDICE

	<u>Páginas.</u>
ULO I.—De la sesión y actos preparatorios.	327
ULO II.—De la constitución interina del Congreso	328
ULO III.—Del examen de actas, capacidad y compatibilidad de los Diputados.....	330
ULO IV.—De la constitución definitiva del Congreso	336
ULO V.—Del Presidente.....	338
ULO VI.—De los Secretarios.....	339
ULO VII.—De las Secciones.....	340
ULO VIII.—De las Comisiones.....	341
ULO IX.—De los proyectos y proposiciones de ley.....	344
ULO X.—De las sesiones.....	345
ULO XI.—De las discusiones.....	348
gus	349
de particulares.....	349
niendas y adiciones.....	350
supuestos	350
curso de la Corona.....	351
de la palabra	351
ámenes retirados.....	352
ciones personales	353
nadas á la cuestión y al orden.....	353
resiones malsonantes.....	354
ámenes desechados.....	354
obación definitiva.....	355
unas.....	355
ULO XII.—De las proposiciones que no son ley.....	355

	<u>Páginas.</u>
TITULO XIII.—De las interpelaciones y preguntas	356
TITULO XIV.—De las votaciones	357
TITULO XV.—De las peticiones	360
TITULO XVI.—De los mensajes al Rey	361
TITULO XVII.—De los votos de censura y de gracias y de las declaraciones honoríficas..	362
TITULO XVIII.—De los Diputados	362
TITULO XIX.—De la acusación de los Ministros	363
TITULO XX.—Del gobierno interior del Congreso	364
TITULO XXI.—De las reformas del Reglamento del Congreso	366
APÉNDICE AL REGLAMENTO: Acuerdos del Congreso	367

REGLAMENTO

de las dependencias

DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

TITULO I

P R E S I D E N C I A

Artículo 1.º El Presidente es el jefe superior del Palacio del Congreso.

Art. 2.º Correspondiendo al Presidente por el art. 148 del (1) Reglamento del Congreso la policía interior del mismo y del edificio en que celebra sus sesiones, emanan de la Presidencia cuantas disposiciones se refieran á este objeto; á cuyo fin estarán á sus órdenes todos los empleados del Congreso y la guardia militar.

Art. 3.º Son objeto de la policía interior:

1.º La conservación del orden en el interior del Palacio.

2.º La conservación del edificio y del mobiliario.

3.º El régimen y distribución de las tribunas.

4.º Todo lo concerniente al servicio de los Diputados.

Art. 4.º El Presidente puede delegar en uno ó más individuos de la Comisión de gobierno interior las atribuciones de policía que competen á su autoridad.

(1) Es el 218 del actual Reglamento.

Art. 5.º El Mayor de la Secretaría rá las funciones de Secretario de la Presidencia, y por su conducto se comunicarán los decretos que de ella emanen.

Art. 6.º Un auxiliar de la Secretaría del Presidente, estará encargado de las comunicaciones y órdenes de la Presidencia.

TITULO II

SECRETARÍA

Art. 7.º Los Secretarios son jefes de la Secretaría y del Archivo, según prescribe el Reglamento del Congreso.

Art. 8.º Corresponde á los Secretarios la dirección é inspección de todos los trabajos de la Secretaría y del Archivo.

Art. 9.º Los Secretarios podrán delegar las atribuciones que les compete en el mayor número de auxiliares que les competan en el anterior artículo.

Art. 10. El Mayor es el jefe interino de las dependencias del Congreso.

Art. 11. Corresponde al Mayor:

1.º La distribución y revisión de los expedientes de la Secretaría y Archivo.

2.º Asistir á las sesiones del Congreso, tomar notas para el acta, y facilitar los documentos y precedentes que se necesiten para este objeto, ocupará un asiento á la izquierda de la Presidencia.

Art. 12. Corresponde á los oficiales de la Secretaría:

1.º Preparar los trabajos de sus dependencias.

1) Es el 57 del actual Reglamento.

negociados para el despacho del Congreso, de las Secciones y de las Comisiones.

2.º Poner las minutas de las comunicaciones oficiales.

3.º Extender las minutas de los proyectos de ley que pasen al Senado ó se presenten á la sanción Real.

4.º Extractar los documentos que por su naturaleza y extensión lo exijan para dar cuenta de ellos al Congreso.

5.º Reunir los antecedentes que puedan ilustrar á las Comisiones.

6.º Asistir á las sesiones de éstas, siempre que las mismas lo crean conveniente.

7.º Llevar un índice particular de los asuntos de su negociado.

8.º Unir á cada expediente una nota ó índice de los documentos que lo constituyen.

9.º Formar al fin de cada diputación un índice general de los expedientes que deban pasar al Archivo, y otro de los que se devuelvan al Gobierno. Los índices especiales de éstos últimos deberán quedar unidos á los fechos, y pasar también al Archivo.

Art. 13. Los auxiliares, bajo las inmediatas órdenes del oficial respectivo, desempeñarán los trabajos de los negociados de la Secretaría ó del Archivo á que fueren destinados por el Mayor.

Art. 14. Habrá en Secretaría:

1.º Un libro en que se copiarán las actas de las sesiones públicas con la mayor exactitud y esmero.

2.º Otro para las de las sesiones secretas.

3.º Otro para las de la Comisión de gobierno interior.

4.º Un registro general, por orden alfabético, de los expedientes que entren en la Secretaría, anotando la fecha de su entrada y trámites.

- 1.° Un registro de mensajes, en el cual se inscribirán íntegramente los proyectos de ley que se presenten al Senado ó se presenten á la sanción.
- 2.° Otro de la correspondencia oficial.
- 3.° Otro de órdenes.

TITULO III

ARCHIVO Y LIBRERÍA

Art. 15. El Archivero tiene á su cargo la custodia y conservación de los documentos, papeles y libros existentes en el Archivo y Librería, y es responsable de cualquier falta, auctorizada ó no, de los demás empleados de esta dependencia: sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso pueda exigirse á cada uno de ellos particularmente.

Art. 16. Los empleados afectos al Archivo y Librería están sujetos á las inmediatas órdenes del Archivero.

Art. 17. Corresponde al Archivero:

- 1.° Formar índices exactos y metódicos de los expedientes que constituyen el Archivo; y de los libros, con expresión del año de su adquisición.
- 2.° Llevar un registro general, con expresión de la adquisición, de las obras que sucesivamente ingresan en la Librería.
- 3.° Otro especial de los libros que se pierden ó se extravían accidentalmente, anotando la fecha de la pérdida y el nombre de las personas á quienes se entreguen, á fin de reclamarlos de la oportuna manera.
- 4.° Formar un catálogo en compendio alfabético ó de materias, de todas las obras que componen la Librería.
- 5.° Tomar nota de las obras que se

por las Comisiones ó por los Diputados, y no haya en la Librería, á fin de proponer su adquisición á quien corresponda.

Art. 18. El catálogo de que se hace referencia en el artículo anterior, se imprimirá y repartirá á los Diputados al principio de cada legislatura.

Art. 19. Todos los volúmenes pertenecientes á la Librería estarán marcados con el sello particular de la misma.

Art. 20. El Archivero tendrá á disposición de los Diputados los expedientes, documentos y libros que desearan consultar; pero no podrán extraerse del Archivo ó Librería sin recibo, el cual servirá de descargo al Archivero hasta que tenga efecto la devolución. Para el cumplimiento de esta disposición, se pondrán en el salón de sesiones y en las demás dependencias del Congreso. recibos impresos con inserción de éste y de los dos artículos siguientes.

Art. 21. Los expedientes, documentos y libros no podrán extraerse del Palacio del Congreso sin que preceda reclamación oficial.

Art. 22. Sólo en virtud de acuerdo del Congreso, comunicado por los Secretarios, se podrán extraer del Archivo las leyes originales.

Art. 23. Previa orden de los Secretarios, el Archivero expedirá certificaciones de los documentos que existen bajo su custodia.

Art. 24. Corresponde al Archivero cuidar del canje de documentos parlamentarios con las Cámaras extranjeras y de llevar la correspondencia que esto produzca.

Art. 25. Cuando vacare la plaza de Archivero, el sucesor se hará cargo del Archivo y Librería, con presencia de los índices.

TITULO IV

REDACCIÓN DEL «DIARIO»

- t. 26. La Redacción del *Diario* se compone de los redactores, taquígrafos y escribientes determina la plantilla de esta dependencia. Redactor primero es el jefe inmediato de la misma, y en tal concepto, le corresponde la dirección, inspección y distribución de todos los trabajos.
- t. 27. En las ausencias y enfermedades del Redactor primero, desempeñará sus funciones el Redactor segundo, y á falta de éste, los taquígrafos, por el orden de antigüedad.
- t. 28. Los redactores asistirán á las sesiones, repartiendo entre sí y compartiendo el tiempo el trabajo con la igualdad posible.
- t. 29. Cada redactor llevará un apunte exacto de todo lo que se trate y ocurra en la parte de la Sesión que le corresponda, indicando los acuerdos adoptados, el resultado de las votaciones, anotando los nombres de los Diputados que hablen, el orden en que hablen, las horas en que se abren y cierran las sesiones y la orden del día para la inmediata.
- t. 30. Cuidarán de recoger los textos, leyes, decretos, resoluciones, y de conferir con éstos cualquiera duda que ocurra acerca de sus discursos.
- t. 31. Pedirán á la Secretaría los dictámenes de las Comisiones y demás documentos que necesiten para redactar las sesiones; y los devolverán oportunamente, después de extractados ó copiados á la Secretaría, según lo requiera su mayor ó menor importancia, ó acordare el Congreso.
- t. 32. Revisarán y coordinarán los trabajos

de los taquígrafos, y con presencia de los demás datos, redactarán la sesión, cuidando de que se entregue el original á la imprenta luego que hayan terminado este trabajo.

Art. 33. Los taquígrafos se distribuirán en turnos de dos á dos, en la forma que sea más conveniente al mejor servicio.

Art. 34. Durante la sesión, se relevarán los turnos de media en media hora.

Art. 35. Los taquígrafos tomarán nota de cuanto se hable por los Diputados y por los Ministros advirtiéndolo el lugar en que lean algunos documentos.

Art. 36. Traducirán las notas sin pérdida de tiempo y las entregarán inmediatamente al redactor de turno.

Art. 37. El auxiliar y los escribientes de la Redacción deberán saber prácticamente taquigrafía, y estarán á las órdenes de los redactores para copiar todo género de documentos y escribir lo que se ofrezca en la Redacción.

Art. 38. El jefe de la Redacción podrá disponer que el auxiliar y los escribientes suplan á los taquígrafos en los casos que estime necesario.

Art. 39. En el intermedio de una legislatura á otra, se ocupará la Redacción:

1.º En formar y publicar los índices de la legislatura anterior.

2.º En cualquier otro trabajo análogo á los de su instituto que pueda convenir al buen servicio del Congreso.

Art. 40. Todo trabajo extraordinario que se encargue á la Redacción, lo distribuirá el jefe inmediato de ella entre los empleados de la misma.

Art. 41. Con el fin de asegurar la exactitud en la redacción de las sesiones del Congreso, tendrán los Diputados á su disposición los discursos

REGLAMENTO DE LAS DEPENDENCIAS

ayan pronunciado, por espacio de cuatro á contar desde aquella en que se levanta ón; á cuyo fin, la Comisión de gobierno indestinará el local conveniente; pero sin que permitido á ningún orador sacar de dichos discursos ni otro documento que haya artarse en la sesión.

TITULO V

CONSERJERÍA Y PORTERÍA MAYOR

42. Estará á cargo del Portero Mayor-je:

La conservación y aseo del edificio y cusel mobiliario.

Inspeccionar y vigilar las obras que se en el edificio, y tener bajo su guarda el to de materiales y herramientas.

Cuidar de que se cumplan con exactitud lenes y disposiciones de policía interior que omuniquen por el Presidente ó sus dele-

Llevar un registro exacto de los depen- s que habitan en el Palacio y de las perso- e componen sus familias.

No permitir que se haga en las habitacio- e ocupen, obra ni reparo alguno, sin per- el Presidente.

Exigir de ellos una nota firmada de los s propios del Congreso que se les entreguen, eclamárselos cuando dejen de habitar en el D.

Hacer oportunamente el pedido de los s necesarios para el servicio de todas las lencias del Congreso, acompañando un pre

supuesto ó nota de las cantidades y precios de los objetos que se necesiten.

Art. 43. El Portero Mayor-conserje cuidará:

1.º Que los dependientes desempeñen el servicio con arreglo á las órdenes que se les comuniquen.

2.º Que la Presidencia, Secretaría, Archivo y Redacción, estén servidas y provistas de los objetos de escritorio.

3.º Que la correspondencia oficial y particular se dirija con puntualidad á su destino.

4.º Que las citaciones y repartos de libros y documentos se hagan con exactitud.

5.º Que los dependientes se presenten con el mayor aseo, sin permitir que usen más prendas que las de uniforme, y que observen la compostura que exige el decoro del Cuerpo á quien sirven, guardando el mayor respeto á los Diputados, y tratando con el debido miramiento y urbanidad á cuantas personas tengan que entenderse con ellos en cualquier acto del servicio.

Art. 44. El Portero Mayor-conserje tendrá á su cargo las llaves de todas las puertas del Palacio.

TITULO VI

DE LOS INVENTARIOS

Art. 45. Se formará un inventario, clasificado por departamentos, de todos los objetos del Palacio del Congreso.

Art. 46. A la formación de este inventario asistirá un individuo de la Comisión de gobierno interior, nombrado por la misma; el Oficial primero como interventor, y el conserje.

Art. 47. Estos inventarios se harán por nu-

REGLAMENTO DE LAS DEPENDENCIAS

ción correlativa, poniendo bajo cada número junto de objetos de idéntica clase que haya departamento, la materia de que se compone, la forma y el precio ó título de su adquisición constare.

48. Estos inventarios se depositarán en el Inventario, conservando una copia de ellos el Interventor y otra el Conserje.

49. El Interventor y el Conserje llevarán cuenta de los efectos de nueva entrada que se com-adquieran.

50. Dentro del mes en que la Comisión de gobierno interior se constituya, se revisarán y se clasificarán los inventarios con presencia de las Comisiones que trata el artículo anterior, incorporándose á ellos los efectos de nueva entrada, y se-ando los que se hubiesen inutilizado.

51. Ningún objeto puede desecharse por sin conocimiento del interventor y autorización de la Comisión de gobierno interior.

TITULO VII

DEL VESTUARIO

52. Los porteros y demás dependientes de ingreso usarán uniforme, el cual se compone de casaca y pantalón azul con galón de color rojo, sombrero de tres picos con presilla también de color rojo.

El Portero Mayor usará dos galones anchos en la manga, y uno también ancho en el

53. Los dependientes que reciban uniforme tendrán obligación de conservarlo en buen estado, durante tres años la casaca y sombrero, y los pantalones.

Ningún dependiente podrá usar las prendas de uniforme fuera de los actos del servicio.

TITULO VIII

PROVISIÓN DE VACANTES

Art. 54. Los aspirantes á auxiliares de Secretaría han de tener 21 años cumplidos, buena forma de letra y cuatro años de servicio, al menos, en alguna de las dependencias del Estado, ó ser bachilleres en Facultad mayor, ó tener otros estudios ó méritos equivalentes, á juicio de la misma Comisión.

Art. 55. Las vacantes de taquígrafos que ocurran en la Redacción del *Diario* se proveerán por oposición. El tribunal lo comprondrán los cuatro taquígrafos primeros y los dos redactores, presididos por el Secretario de la Comisión de gobierno interior, ó en su defecto por el Mayor de la Secretaría.

TITULO IX

ORDEN DE ASCENSOS

Art. 56. Son de ascenso, por rigurosa escala de antigüedad, todos los empleos del Congreso dentro de sus respectivas dependencias.

Las dependencias del Congreso son:

- 1.ª La Secretaría y Archivo.
- 2.ª La Redacción del *Diario de Sesiones*.
- 3.ª La Conserjería y Portería mayor. Corresponden á esta dependencia los porteros del salón, los de entrada, los celadores de galería, los maceiros, el mozo de oficios y los dependientes auxiliares.

Art. 57 (1). Los oficiales de la Secienden entre sí hasta oficial primero.

El empleo de Mayor no es de rigor pero para su provisión, en caso de tendrán presentes con preferencia y p, dad, los Oficiales de Secretaría que circunstancias que exige el desempeño lizado encargo.

Los auxiliares, después de correr la escala de los de su clase, ascienden á Oficiales de Archivo, y éstos á Oficiales de Secretaría.

Los taquígrafos ascienden entre sí, por orden de antigüedad, hasta redactor primero.

Los ordenanzas, mozos de oficios y maceros, después de correr los ascensos dentro de cada una de estas clases, entran en la de celadores de galería; de ésta pasan á la de porteros de entrada, y así sucesivamente hasta portero primero de salón, de primera clase.

El empleo de Portero Mayor-conserje no es de rigurosa escala, pero para su provisión, en caso de vacante, se tendrán presentes con preferencia y por antigüedad los porteros de salón que reúnan las circunstancias que exige el desempeño de dicho empleo.

TÍTULO X

MOZOS AUXILIARES

Art. 58. No podrá ser admitido en lo sucesivo ningún mozo auxiliar, sino en virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno interior.

Art. 59. Para optar á la plaza de mozo auxiliar, es indispensable haber servido en el ejército

(1) Modificado por el Congreso en sesión secreta de 2 de Abril de 1895, á propuesta de la Comisión de gobierno interior.

ó armada, en la clase de cabo ó de sargento, ó profesar algún arte ú oficio de los que puedan tener útil aplicación en el servicio del Congreso.

Art. 60. Cuando resulte vacante la última plaza de dependiente efectivo, ascenderá el mozo auxiliar más antiguo, á no ser que por alguna circunstancia, á juicio de la Comisión, merezca ser postergado. En este caso, optará el que le siga por orden de antigüedad.

TITULO XI

DERECHOS PASIVOS DE LOS EMPLEADOS

Art. 61. Se declara vigente el art. 2.º del decreto de las Cortes de 7 de Febrero de 1823, para los efectos de clasificación y montepío de los empleados de dichas Cortes y de los Cuerpos Colegisladores.

Art. 62. Se entienden comprendidos en esta declaración, para los mismos efectos, los dependientes subalternos de los precitados Cuerpos.

Art. 63. Los empleados auxiliares permanentes tendrán los mismos derechos pasivos que los empleados efectivos, y se les computará para su cesantía y jubilación el tiempo que lleven de servicio.

TITULO XII

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Art. 64. El presupuesto del Congreso se divide en dos secciones: *personal y material*.

La del material se subdivide en los artículos que se estimen convenientes.

Art. 65. Entre estos artículos habrá uno denominado *gastos suplementarios*, al cual se cargará

excedente de lo asignado á cada artículo del presupuesto.

Art. 66. Se llevará un libro de cuenta del presupuesto, en el que por artículos se expresará presupuestado y gastado en cada uno, y á fin año se cerrará la cuenta con un estado general presivo de las diferencias.

Este libro se tendrá presente para la formación del presupuesto en los años sucesivos.

Art. 67. Habrá un Interventor del presupuesto, cuyo cargo desempeñará el Oficial primero de la secretaría.

Art. 68. El Interventor examinará todas las cuentas de gastos, extenderá los libramientos que expidan en virtud de los acuerdos de la Comisión de gobierno interior, y las nóminas de los empleados; intervendrá todas las entradas y salidas de los fondos de la caja, y llevará el correspondiente libro de cuenta y razón.

Art. 69. Habrá también un Depositario de los fondos, cuyo cargo desempeñará otro oficial de la secretaría, y llevará la correspondiente cuenta de caja por *debe y haber*.

Dicho Depositario percibirá, para gastos, el medio por ciento de los fondos que ingresen en la tesorería.

Art. 70. El Depositario presentará, á fin de cada mes, su cuenta de caja justificada.

Art. 71. El cargo ó debe se justifica con cargaremes firmados por el depositario, autorizados por el Presidente y Secretario de la Comisión, é intervenidos.

Art. 72. Estos cargaremes se comprobarán en un estado que á fin de cada año se reclamará al director general del Tesoro, de las cantidades entregadas á cuenta del presupuesto del Congreso, cuyo estado se presentará á la Comisión de gobier-

no interior para su conocimiento, con un resumen de los ingresos y gastos, que se unirá á las cuentas respectivas.

Art. 73. Para los gastos del personal, formará el Interventor las correspondientes nóminas, con arreglo á los acuerdos de la Comisión, y después de rubricadas por el Presidente y Secretario de la misma, se expedirán libramientos por su importe, que sirvan de comprobantes á la cuenta de caja.

Art. 74. No se concederán en lo sucesivo por ningún motivo sobresueldos personales.

Art. 75. Para los gastos del material es indispensable previo acuerdo de la Comisión si aquéllos exceden de la cantidad de 10.000 reales, y del Presidente ó delegado que nombre, excediendo de 200, y no llegando á los 10.000.

En ningún caso el conserje podrá hacer, sin orden previa del Presidente ó de su delegado, gasto alguno que exceda de 200 reales, y para los que no lleguen á esta cantidad, debe obtener el *páguese* del Oficial Mayor de la Secretaría.

Art. 76. Fuera de los casos prescritos en el artículo anterior, no se hará pago alguno sin previo acuerdo de la Comisión; y los que acordare, constarán en su libro de actas.

Art. 77. Para la ejecución de cualquiera obra precisa, el arquitecto ó perito correspondiente formará un presupuesto que exprese:

- 1.º La causa que la haga necesaria.
- 2.º Las circunstancias y requisitos que haya de tener.
- 3.º El cálculo de la cantidad de materiales, su calidad y coste.
- 4.º El importe de la mano de obra.
- 5.º El tiempo que podrá necesitarse.
- 6.º Los materiales, herramientas que existen

edificio ó cualquier otro género de auxilio queda disminuir el gasto.

t. 78. Al final de cada mes, el conserje for-
la cuenta de gastos del material, por artículo
el presupuesto; uniendo á ella la orden ó
autorizada del gasto ó pedido, el *vendedor*, fac-
ó cuenta de la persona á quien haya de abo-
el gasto.

t. 79. Estas cuentas, después de visadas por
cial Mayor de la Secretaría, y examinadas
el Interventor, á fin de que conste si los gas-
se comprenden: están competentemente auto-
rs, pasarán á informe del individuo de la
sión encargado de censurarlas, y aprobadas
ean por la misma, expedirá la Intervención
irrespondientes libramientos para su pago.

t. 80. El Portero Mayor-conserje será el
titado encargado de percibir los fondos; á
fin llevará un libro rubricado por el depo-
o, en donde éste pondrá recibo de las can-
as que entregue, y lo devolverá al habilitado
su resguardo.

t. 81. Para el cumplimiento de lo dispuesto
art. 152 (1) del Reglamento del Congreso, se
rá oportunamente la cuenta que debe so-
se en sesión secre'a á la aprobación del
o; se leerá en sesión pública, y se archivará.

alacio de las Cortes 23 de Junio de 1855.—
ido Infante, Presidente.—Pedro Calvo Asen-
iputado Secretario.—El Marqués de la Vega
mijo, Diputado Secretario.—José González
Vega, Diputado Secretario.—Pedro Bayarri,
ado Secretario.

TITULO XIII (1)**CORRECCIONES DISCIPLINARIAS**

Art. 82. Las faltas cometidas por los empleados y dependientes del Congreso, que no lleguen á revestir caracteres de delito, serán corregidas disciplinariamente con:

- 1.º Reprensión.
- 2.º Recargo en el servicio de guardias.
- 3.º Multa de uno á quince días de haber.
- 4.º Nota desfavorable en sus respectivos expedientes.
- 5.º Suspensión de empleo y sueldo, desde quince días hasta un año.
- 6.º Postergación para el ascenso.

Art. 83. Las correcciones disciplinarias que expresa el artículo anterior podrán ser impuestas, en su caso y con arreglo á lo que disponen los artículos siguientes, por la Comisión de gobierno interior en pleno; por el Presidente; por los Secretarios, individual ó colectivamente; por las Subcomisiones de gobierno interior encargadas de la Redacción del *Diario de las Sesiones*, Biblioteca y régimen interior; por el Oficial Mayor de la Secretaría; por el Redactor primero del *Diario de las Sesiones*, y por el Portero Mayor cuando la corrección recaiga en un dependiente.

Art. 84. La Comisión de gobierno interior, en

(1) Aprobado por el Congreso en sesión secreta de 2 de Abril de 1895, á propuesta de la Comisión de gobierno interior, compuesta de los Sres. Marqués de la Vega de Armijo, Presidente, D. Manuel Crespo Quintana, D. Manuel Ibarra, D. Juan Gualberto Ballesteros, D. Juan Felipe Sendín, D. Federico Arredondo, D. Alfonso Flórez de Losada, D. Juan José Gasca y D. Vicente Alonso Martínez, Secretario.

eno, podrá imponer todas las correcciones enumeradas en el art. 82, previa instrucción de expediente, con audiencia por escrito del interesado, cuando la suspensión de empleo y sueldo haya durar más de tres meses, ó en el caso de postergación para el ascenso. Contra sus resoluciones no se dará otro recurso que el de la súplica ante la misma Comisión en pleno.

Cuando un empleado ó dependiente se haya hecho acreedor, por tres veces, á la postergación para el ascenso, la Comisión de gobierno interior propondrá necesariamente al Congreso, en dictamen motivado, la separación definitiva del empleado ó dependiente.

Art. 85. El Presidente podrá imponer por sí propio las correcciones comprendidas en los cinco primeros números del art. 82, entendiéndose, respecto á la suspensión de empleo y sueldo, por cinco días á tres meses, previa audiencia verbal al interesado, si la considerase necesaria. Contra la resolución del Presidente no se dará recurso alguno.

Art. 86. Los Secretarios del Congreso, individual ó colectivamente, y las Subcomisiones indicadas en el art. 83, podrán imponer las correcciones comprendidas en los cuatro primeros números del art. 82, previa audiencia verbal del interesado, pudiendo éste suplicar de ellas á la Comisión de gobierno interior, en pleno, cuando se trate de nota desfavorable en su respectivo expediente, ó de multa que exceda de diez días de sueldo.

Art. 87. Al Oficial Mayor de la Secretaría corresponderá imponer las correcciones señaladas en los tres primeros números del art. 82, entendiéndose limitada su facultad en cuanto á las multas en el sentido de que no podrán exceder de uno

á cinco días de haber, y pudiéndose alzar los interesados de sus resoluciones ante el Sr. Presidente, quien resolverá sin ulterior recurso.

Art. 88. Las mismas facultades y con idénticos recursos, tendrá por lo tocante á los Taquígrafos y Redactores, el Redactor primero del *Diario de Sesiones*, siempre que la multa no exceda de tres días de haber.

Art. 89. El Portero Mayor podrá imponer á los dependientes las correcciones comprendidas en los números 1.º y 2.º del art. 82; pudiendo los interesados, cuando el servicio de recargo de guardias exceda de tres días, recurrir en alzada al Oficial Mayor, quien resolverá sin ulterior recurso.

Art. 90. Todo recurso de alzada ó de súplica por corrección disciplinaria, se formulará por escrito, y no se dará cuenta del mismo sin que acompañe el informe, también escrito, de la persona ó personas que hayan impuesto la corrección, las cuales no podrán excusarse de emitirlo.

Art. 91. Cuando aquellos que están facultados por los artículos anteriores para imponer correcciones disciplinarias, entendieren que por la gravedad de la falta debe imponerse un correctivo superior á los que están dentro de sus facultades, lo pondrán en conocimiento, por escrito, del superior inmediato, según los casos; considerándose como falta la omisión de lo preceptuado en este artículo.

Palacio del Congreso 2 de Abril de 1895.—El Marqués de la Vega de Armijo, Presidente.—Vicente Alonso Martínez, Diputado Secretario.—N. El Conde de la Corzana, Diputado Secretario.—Eduardo Gullón, Diputado Secretario.—Manuel García Prieto, Diputado Secretario.

ÍNDICE DE LOS TÍTULOS

	Páginas.
I.—Presidencia.....	878
II.—Secretaría.....	874
III.—Archivo y librería.....	876
IV.—Redacción del <i>Diario</i>	878
V.—Conserjería y Portería Mayor	880
VI.—De los inventarios.....	881
II.—Del vestuario.....	882
.II.—Provisión de vacantes.....	883
IX.—Orden de ascensos.....	883
X.—Mozos auxiliares.....	884
XI.—Derechos pasivos de los em- pleados.....	885
III.—Administración y contabilidad	885
III.—Correcciones disciplinarias...	889

LEY ELECTORAL DE SENADORES ⁽¹⁾

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

CAPITULO I

De los que tienen derecho á elegir Senadores.

Artículo 1.º Tienen derecho á elegir Senadores, con arreglo al núm. 3.º del art. 20 de la Constitución, las Corporaciones siguientes;

Los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos de cada una de las provincias que forman los Arzobispados de Toledo, Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos y Valladolid.

La Real Academia Española.

La de la Historia.

La de Bellas Artes.

La de Ciencias exactas, físicas y naturales.

La de de Ciencias morales y políticas.

La de Medicina de Madrid.

Cada una de las Universidades de Madrid, Bar-

(1) Conforme á lo dispuesto en el artículo 5.º adicional de la ley electoral de 26 de Junio de 1890, es aplicable á la elección de Senadores el tít. 6.º de dicha ley.

Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Valencia, Valladolid y Zaragoza, con asistiendo el rector y catedráticos de las mismas, a los matriculados en ellas, directores de Institutos de segunda enseñanza y jefes de las Escuelas especiales que haya en su respectivo territorio.

Sociedades económicas de Amigos del País, designarán un Senador por cada una de las provincias que á continuación se establecen, eligiendo un compromisario por cada 50 socios comprendidos en el párrafo 2.º del art. 12. Se agregarán á los representantes de la de Madrid el acto de la elección, los de Badajoz, Real, Mérida, Segovia, Soria y Toledo. Los de Barcelona, los de las Baleares, Cervera, Tarragona, Tudela y Zaragoza. Los de León, los de Rivadeo, Liébana, Oviedo, Santander, Santiago y Zamora. Los de Sevilla, los de Almería, Baena, Baeza, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez, Jérez de la frontera, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y

los de Valencia, los de Alicante, Cartagena

Sociedades Económicas actuales que no se comprendidas en los párrafos anteriores, y las que se formen con aprobación del Gobierno se agregarán por éste, luego que lo solicite una de las cinco regiones expresadas, para concurrir con las demás á la elección de Senadores.

2.º Los 150 Senadores, hasta completar el número de 180, serán elegidos por las Diputaciones provinciales y los compromisarios que nom-

se en el Apéndice á esta ley.

bren los Ayuntamientos y mayores contribuyentes de los pueblos. Reunidos los Diputados provinciales y los compromisarios en la capital de la respectiva provincia, elegirán tres Senadores en cada una de ellas.

CAPITULO II

De los electores y elegibles, incapacidades é incompatibilidades.

Art. 3.º Para ser elector de Senadores es necesario ser español, mayor de edad con arreglo á la legislación de Castilla, cabeza de familia, hallarse avencindado y con casa abierta en un pueblo de la Monarquía, y gozar de todos los derechos políticos y civiles.

Art. 4.º Son elegibles para Senadores los españoles comprendidos en el art. 22 de la Constitución.

Art. 5.º No podrán ser elegidos Senadores por las Diputaciones provinciales y compromisarios:

1.º Los que desempeñen ó hayan desempeñado tres meses antes de la elección, cargo ó comisión de nombramiento del Gobierno con ejercicio de autoridad en las provincias donde éstas se verifiquen.

2.º Los contratistas y sus fiadores de obras y servicios públicos que se paguen con fondos del Estado, provinciales ó municipales, ni los administradores de dichas obras y servicios.

3.º Los recaudadores de contribuciones y sus fiadores.

Art. 6.º En ningún caso podrán ser elegidos Senadores los deudores al Estado que lo sean por

era clase de contratos ó en concepto de contribuyentes.

7.º El cargo de Senador es incompatible con empleo activo retribuido con fondos del provinciales ó municipales, que no esté incluido en las categorías que designa el artículo 12 de la Constitución.

8.º También es incompatible con el de Alcalde de Cortes y con el de concejal de cualquier Ayuntamiento, excepto el de Madrid.

Diputados provinciales no podrán ser electores por su respectiva provincia.

Quien, ejerciendo un cargo incompatible con el de Senador, sea elegido para éste, deberá optar entre uno y otro dentro de los primeros ocho días de su admisión en el Senado.

9.º Los Senadores no podrán admitir empenos de censo que no sea de escala cerrada, títulos honoríficos, mientras estuvieren abiertas las elecciones.

Gobierno podrá, sin embargo, conferirles, dentro de sus respectivos empleos ó categorías, distinciones que exija el servicio público.

Excepcionalmente de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo el cargo de Ministro de la

10. El Senador que fuere elegido por dos Corporaciones ó provincias, optará en el plazo de ocho días, á contar desde la constitución del Senado, ó desde el en que sea admitido en el Cuerpo, por la Corporación ó provincia que le corresponda; y en el caso de no hacerlo, se decidirá por sorteo.

CAPITULO III (1)

De la convocación de la parte del Senado á que se refiere esta ley, y de la formación de las listas y elección de Senadores por las Corporaciones enumeradas en el art. 1.º

Art. 11. Cuando el Rey disuelva la parte del Senado á que se refiere esta ley, se señalará en el mismo Real decreto el día en que deban hacerse las nuevas elecciones, que será dentro de los tres meses siguientes, y éstas tendrán lugar por todas las Corporaciones y mayores contribuyentes, en el día que se designe.

Art. 12. (2) El día 1.º de Enero, todos los años, los directores ó presidentes de las Academias y de las Sociedades Económicas á quienes da derecho esta ley para nombrar Senadores, formarán y publicarán las listas de los académicos de número y socios que las compongan.

Los individuos de las Sociedades Económicas no tendrán derecho electoral sino después de tres años, contados desde el día de su ingreso en aquellas Corporaciones.

Art. 13. En el mismo día, los rectores de las Universidades formarán y publicarán las listas de los individuos que compongan los Claustros de las mismas, así catedráticos como doctores, incluyendo á los directores de Institutos de segunda enseñanza y de las Escuelas especiales que existan en el distrito universitario.

Para inscribirse en el Claustro electoral á que

(1) Véase la Real orden de 4 de Julio de 1884, publicada en la *Gaceta* del 7.

(2) Véase la Real orden de 29 de Noviembre de 1882, publicada en la *Gaceta* de 9 de Diciembre inmediato.

ere este artículo, será requisito indispensable más de poseer el título de doctor, tener cía en el distrito universitario donde haya rcitarse el derecho de sufragio.

s rectores incluirán en las listas electorales a los doctores matriculados, conforme pres-el párrafo precedente (1).

14. Todos los que se consideren electores n derecho á reclamar hasta el día 20 de contra las inclusiones ó exclusiones inde-en las referidas listas, á las respectivas Cor-ones, que antes de 1.º de Febrero resolverán estimen justo, sin ulterior recurso.

15. Para que los Cabildos eclesiásticos a usar del derecho que por esta ley se les e, se reunirán quince días antes del seña-ra la elección general, en su respectiva ca-y observando las reglas que tengan esta-is para elegir á sus individuos, nombrarán que el día señalado acuda á la cabeza me-tana á verificar la elección de Senador; el amiento podrá recaer en cualquiera pre-lo de los Cabildos de la respectiva provincia stica.

16. El Obispo-prior de Ciudad Real y el o de la iglesia prioral se agregarán para la n de Senador á la iglesia metropolitana y la de Toledo.

17. Dentro de los ocho días primeros des-e publicado en la *Gaceta* el Real decreto ndo proceder á la elección de Senadores, se án en su respectiva residencia las Socieda-onómicas que expresa el art. 1.º de esta ley esquiera otras que en lo sucesivo se estable-reconocidas por el Gobierno, y nombrarán,

iclonado tal como aquí se encuentra por la ley de 21 de e 1896, publicada en la *Gaceta* de 23 del mismo mes.

con las formalidades que acostumbren para otras elecciones, los compromisarios que según el artículo 1.º de esta ley han de concurrir á Madrid, Barcelona, León, Sevilla ó Valencia, para designar, en unión con los que nombren las Sociedades Económicas de dichas capitales, el Senador para que esta ley les autoriza.

Esta representación podrá delegarse.

Art. 18. El día señalado por Real decreto, á las diez de la mañana se reunirán en el local que tengan de costumbre, en sesión pública, las Corporaciones que por esta ley tienen derecho á nombrar un Senador.

Será presidida por el Presidente, Director ó Jefe del establecimiento.

Harán de escrutadores el más anciano y el más joven de los individuos que se hallen presentes, y de Secretario el de la misma Corporación, si tiene voto; si no lo tiene, el Presidente y escrutadores nombrarán á uno de los presentes que lo tenga.

Art. 19. Leído el Real decreto de convocación y los artículos de la Constitución del Estado y de esta ley que tienen relación con aquel acto, se procederá á la elección de un Senador, depositando cada elector en la urna, por mano del Presidente, una papeleta que contenga el nombre del individuo á quien dé su voto.

Art. 20. Cuando todos los presentes hayan votado, y después de preguntar el Secretario tres veces si queda algún individuo por votar, sin que ninguno lo haga, se declarará cerrada la votación y en el acto se procederá al escrutinio, sacando el Presidente una á una las papeletas, y después de examinadas por el mismo y los escrutadores, el Secretario publicará el nombre que contengan, teniendo derecho todos los electores á comprobar y examinar las mismas papeletas.

Art. 21. Si una papeleta contuviere más de un nombre, sólo valdrá el que primero se halle escrito, siendo nulos los restantes. También serán nulos los nombres que no puedan leerse y las papeletas en blanco; pero los que no puedan leerse las papeletas en blanco se contarán para hacer cómputo de los votos.

Art. 22. Concluido el escrutinio, si algún individuo reuniere mayoría absoluta de votos, será proclamado Senador. Si ninguno hubiese reunido mayoría absoluta, se procederá á nueva elección entre los dos que hubieren tenido mayor número de votos, observándose las mismas formalidades y proclamando Senador al que obtenga mayoría de votos, sea ésta la que quiera; en caso de empate, decidirá la suerte; lo mismo se hará si aparecieren también empatados algunos de los que dejen entrar en segundo escrutinio.

Art. 23. Para elegir el Senador que les corresponde según esta ley, cada una de las provincias eclesiásticas que forman los Arzobispados de Toledo, Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos y Valladolid, se reunirán en la cabeza de cada una de ellas, en el día señalado, el respectivo Arzobispo, los Obispos suagáneos y los individuos nombrados por los respectivos Cabildos; y en junta pública, presidida por el Metropolitano, y en su defecto por el Prelado á quien corresponda, se procederá á la elección, haciendo de Secretario y escrutadores el más moderno y los dos mas caracterizados de los concurrentes, observándose todas las demás formalidades que señalan los artículos anteriores. La elección recaerá precisamente en Prelados ó individuos del orden eclesiástico que con arreglo á la Constitución tengan capacidad para ello.

Art. 24. De la elección de Senadores que se

verifique en las Corporaciones á que se refieren los artículos anteriores, se extenderá en cada una el acta correspondiente, que quedará original en el Archivo de la Corporación.

De ella se sacará una copia, que se entregará al e egido para que le sirva de credencial, y que presentará en la Secretaría del Senado; otra se remitirá al Ministerio de la Gobernación, y otra, con toda la documentación, al Senado en el término de ocho días.

Estas copias serán autorizadas por el Presidente y Secretario de la Corporación respectiva.

CAPITULO IV

De la formación de las listas por los Ayuntamientos y elección de Senadores por las Diputaciones provinciales y compromisarios.

Art. 25. El día 1.º de Enero, todos los años, los Ayuntamientos formarán y publicarán listas de sus individuos y de un número cuádruplo de vecinos del mismo pueblo con casa abierta, que sean los que paguen mayor cuota de contribuciones directas, sin acumularse lo que satisfagan en ningún otro; y si para completar este número hubiere dos ó más que paguen la misma cuota, decidirá la suerte los que hayan de ser comprendidos en la referida lista.

Art. 26. Las listas á que se refiere el artículo anterior permanecerán expuestas al público hasta el día 20 de Enero, resolviendo el Ayuntamiento las reclamaciones que sobre las mismas se hagan en este término antes de 1.º de Febrero.

Art. 27. Los que no se conformen con la resolución de los Ayuntamientos, podrán apelar á la Comisión provincial de la Diputación, que en

los quince días siguientes resolverá lo que estime justo.

Art. 28. De las resoluciones de las Comisiones de las Diputaciones provinciales cabe el recurso de alzada ante la Audiencia del territorio hasta el día 20 de Febrero, que fallará lo que proceda hasta el 1.º de Marzo, sin causar costas.

Art. 29. Antes del día 8 de Marzo publicarán los Ayuntamientos las listas definitivas.

Art. 30. Ocho días antes del señalado por el Gobierno para la elección general de Senadores, tendrá lugar en cada pueblo la de compromisarios que han de concurrir á la capital de la provincia para verificar la referida elección.

Art. 31. Cada distrito municipal elegirá por los individuos de Ayuntamiento y mayores contribuyentes á que se refieren los artículos anteriores, un número de compromisarios igual á la sexta parte de los concejales.

Los distritos municipales donde el número de concejales no llegue á seis, elegirán, sin embargo, un compromisario.

Sólo serán elegibles para este cargo los individuos de Ayuntamiento y mayores contribuyentes que concurren al acto y sepan leer y escribir.

Art. 32. A las diez de la mañana del día designado se reunirán en las Salas Consistoriales, previamente citados por el Alcalde, y bajo su presidencia, los individuos de Ayuntamiento y los mayores contribuyentes, y despues de la lectura del Real decreto de convocatoria y de los artículos de la Constitución y de esta ley relativos al acto, que hará el Secretario de Ayuntamiento, se constituirá la Mesa interina, asociándose al Presidente los dos más ancianos como escrutadores, y el más joven como Secretario.

Art. 33. En el acto se procederá por papele-

tas á la elección de dos escrutadores y un Secretario, entregando cada uno de los electores al Presidente una papeleta escrita ó impresa con los nombres de un elector de los presentes para escrutador y o ro para Secretario: y hecho el escrutinio, quedarán elegidos los dos que reunan mayor número de votos para escrutadores, y el que tenga mayoría para secretario.

Art. 34. Constituída la Mesa definitiva, compuesta del Alcalde Presidente, los dos escrutadoras y Secretario elegidos, se procederá á la elección del compromisario ó compromisarios que correspondan al pueblo, por medio de papeletas que los electores depositarán en la urna por mano del Presidente, y se observarán las demás reglas establecidas en los artículos 20, 21 y 22, hasta proclamar los compromisarios elegidos.

Art. 35. Extendida el acta, que quedará en el Archivo del Ayuntamiento, se sacarán copias autorizadas por el Presidente, escrutadores y Secretario; una se entregará á cada uno de los compromisarios elegidos, para que les sirva de credencial, otra se remitirá al Gobernador de la provincia, y la otra á la Diputación provincial.

Art. 36. Los compromisarios elegidos en la forma determinada por los artículos anteriores se presentarán en la capital de la provincia dos días antes del señalado para la elección de Senadores con las certificaciones respectivas de sus nombramientos, de las que se tomará nota en la Secretaría de la Diputación provincial, expresando en ella el día de su presentación.

Art. 37. La Junta general para el nombramiento de Senadores, compuesta de la Diputación provincial y de los compromisarios elegidos por los distritos municipales, se celebrará en el sitio más á propósito de la capital, designado por el

ernador de la provincia el día antes del señalado para la elección general.

Art. 38. Reunidos los vocales á las diez de la mañana en el local designado, bajo la presidencia del Presidente de la Diputación provincial, previa lectura del decreto de convocatoria y de los artículos de la Constitución y de esta ley que tienen relación con el acto, y de la lista de compromisarios que hubieren presentado sus certificaciones, se procederá al nombramiento por dicho Presidente entre los compromisarios presentes, de cuatro Secretarios escrutadores interinos, recayendo el nombramiento en los dos más ancianos y en los dos más jóvenes.

Art. 39. Constituida la Mesa interina, se procederá á la elección de la definitiva, que se compondrá de un Presidente, que será siempre el de la Diputación provincial, ó el que haga sus veces, y cuatro Secretarios escrutadores elegidos en votación secreta por papeletas entre los mismos compromisarios presentes.

Art. 40. No se procederá á la elección de la definitiva, ni á ningún otro acto posterior, si no se hallen presentes para tomar acuerdo la mitad más uno de los que tengan derecho de votar en esta elección.

En el caso de que no se haya reunido el número necesario, el Presidente y los Secretarios escrutadores de la Junta interina dirigirán el oportuno aviso, por medio del *Boletín oficial* de la provincia, á todos los Ayuntamientos de los pueblos cuyos compromisarios no se hubieren presentado á la primera reunión, fijándoles el período de diez días para que lo verifiquen, con apercibimiento de que no haciéndolo en el día señalado, se considerará que aprueban en un todo cuanto á la junta electoral se determine, la que se ce-

lebrará, sea el que quiera el número que concurra.

Art. 41. Los Ayuntamientos de los pueblos á que se refiere el artículo anterior, cuidarán, bajo su responsabilidad, de poner en conocimiento de los compromisarios morosos el aviso de la Mesa interina de la Junta electoral provincial, dando cuenta al Presidente de esta Junta de haberlo verificado en tiempo hábil.

Art. 42. Nombrada la Mesa interina, y en el supuesto de que haya mitad más uno para tomar acuerdos, antes de pasar al nombramiento de la Mesa definitiva, se procederá por la interina al examen y revisión de todas las certificaciones de nombramientos de compromisarios, las cuales irán examinando y confrontando con las actas de los distritos de que habla el art. 35, y emitiendo su dictamen sobre ellas.

Este será votado sin discusión, causando acuerdo el voto de la mayoría, sin perjuicio de lo que resuelva después el Senado.

Una vez confrontadas las certificaciones, se devolverán á los interesados, haciendo constar en ellas, bajo la firma de un Secretario escrutador, si han sido ó no aprobadas.

La elección de los cuatro Secretarios escrutadores de la Mesa definitiva se verificará llevando cada elector, manuscrita ó impresa, en papel precisamente blanco, una papeleta, que también podrá escribir en el local de la elección, donde haga constar de una manera clara y distinta los nombres y apellidos de dos compromisarios entre los presentes.

Acercándose los electores á la mesa uno por uno, irán exhibiendo su certificación de nombramiento, de la cual se enterará el Presidente y devolverá sellada, anotando un Secretario escruta-

dor las palabras: *votó para Secretarios*, en la lista de votantes para este acto, después que el elector haya votado, entregando la papeleta de votación al Presidente, que la depositará en la urna.

Art. 43. No se suspenderá el acto de la elección de la Mesa definitiva hasta que todos los electores presentes hayan emitido sus votos, para lo cual, antes que el Presidente declare cerrada la votación, uno de los Secretarios escrutadores preguntará: *¿falta algún elector por votar?*

Un Secretario escrutador leerá después en alta voz los nombres de los electores que hayan tomado parte; contará y declarará su número al terminar la lectura, y en seguida el Presidente, abriendo la urna, dirá: *se procede al escrutinio*.

Art. 44. El escrutinio y los incidentes á que dé lugar, se ajustarán á las disposiciones de los artículos 20, 21 y 22.

Art. 45. Terminado el escrutinio con el recuento y resumen de los votos, el Presidente proclamará Secretarios escrutadores á los cuatro compromisarios que hubiesen obtenido mayor número de votos, y dará posesión de los cargos á los elegidos, declarando constituida definitivamente la Junta electoral provincial para la elección de Senadores.

Art. 46. El Presidente y Secretarios escrutadores interinos redactarán y firmarán el acta de la Junta preparatoria; esta acta será depositada en el Archivo de la Diputación provincial.

Art. 47. Reunida la Junta electoral á las diez de la mañana del siguiente día, el Presidente declarará que empieza la votación para Senadores.

Art. 48. Dará principio votando primero los cuatro Secretarios escrutadores, después los Diputados y compromisarios indistintamente, y por último el Presidente de la Junta.

Art. 49. La votación se hará por papeletas en papel blanco, impresas ó manuscritas, que el Presidente depositará en la urna á presencia del elector, después de haber examinado su certificación de nombramiento, que, sellada segunda vez, le devolverá. Un Secretario escrutador anotará el haber votado, en la correspondiente casilla de las listas de electores, con las palahras: *votó para Senadores.*

Los Diputados provinciales y el Presidente votarán con el carácter de tales, sin presentar ninguna clase de documento, y los Secretarios escrutadores anotarán que han votado, con la fórmula: *votó el Diputado provincial D...*, y *votó el señor Presidente.*

Art. 50. Las papeletas de votación contendrán sólo el nombre y apellido ó título de los Senadores que hayan de elegirse, contándose por el orden en que estén escritos, y teniendo por no escritos los que excedan del número fijado para cada elección.

Art. 51. Esta votación no podrá suspenderse, y cuando todos los electores hubieren ejercitado su derecho, para lo cual un Secretario escrutador preguntará en alta voz: *¿falta algún señor Diputado provincial ó compromisario por votar?* el Presidente declarará cerrada la votación y se procederá al escrutinio.

Art. 52. Este acto se verificará con arreglo á lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de esta ley.

Art. 53. Cuando los candidatos ó alguno de ellos no hayan reunido la mitad más uno de los votos, se procederá á segunda votación, pero no entrarán en ella sino los que hayan obtenido mayor número de votos, hasta el duplo de los que deban elegirse.

En todos los casos de empate decidirá la suerte.

En la segunda elección bastará alcanzar mayoría relativa.

Art. 54. Terminadas estas operaciones, el Presidente proclamará Senadores á los que hayan sido elegidos, y se extenderá por los Secretarios escrutadores la correspondiente acta de todo lo actuado, según el modelo que acompaña á esta ley. La acta original se depositará en el Archivo de la Diputación provincial.

Una copia de la misma acta, expedida por el Presidente y Secretarios escrutadores, se remitirá al Ministro de la Gobernación, y otra copia, autorizada por el Secretario de la Diputación provincial, con el V.º B.º de su Presidente y el sello de la Diputación, se entregará á cada uno de los Senadores electos, para que le sirva de título de su nombramiento, la cual presentará en la Secretaría del Senado. Una certificación del acta original, con su documentación, será remitida al Secretario del Senado dentro del término de ocho días.

Art. 55. Terminadas las operaciones de que trata el artículo anterior, el Presidente de la Junta electoral la declarará disuelta.

CAPITULO V

De las elecciones parciales para Senadores.

Art. 56. La renovación parcial de los Senadores electivos se hará por mitad cada cinco años, según se dispone en el art. 24 de la Constitución.

Art. 57. La designación de los Senadores á quienes corresponde salir en cada renovación parcial se hará en la forma que determine el Reglamento del Senado.

Art. 58. (1) Las vacantes naturales de Senadores, por muerte, renuncia, opción, ú otros motivos, serán reemplazadas por las Corporaciones ó provincias de que procediere el que las causare, debiendo publicarse en la *Gaceta* el Real decreto de convocatoria dentro de los ocho días, contados desde la fecha de la comunicación en que el Senado participe al Gobierno la vacante, y procederse á la elección en un plazo que no exceda de treinta días, contados desde la publicación de la convocatoria. La elección parcial se hará en el día señalado por los trámites y en la forma prescritos por esta ley para las elecciones generales.

Art. 59. Los Senadores nuevamente elegidos ocuparán el lugar y durante el tiempo por que debieran serlo aquellos á quienes reemplazan.

CAPITULO VI

De las vacantes que ocurran entre los Senadores por derecho propio y por nombramiento de la Corona, y del ingreso de los de la primera clase que lo soliciten después de cubierto el número de 180 que señala el art. 20 de la Constitución.

Art. 60. Las vacantes que ocurran en el número de Senadores por derecho propio y por nombramiento de la Corona, podrán ser cubiertas por el Rey, si no hubiere aspirantes que soliciten su ingreso en el Senado por derecho propio.

Art. 61. Los que soliciten su ingreso en el Senado por derecho propio después de estar cubierto el número de 180 que para los de su clase y la de los nombrados por la Corona señala el art. 20 de

(1) Modificado como aquí se encuentra por la ley de 23 de Febrero de 1896, inserta en la *Gaceta* de 20 de Marzo siguiente.

la Constitución, tendrán que aguardar admitidos, á que ocurra vacante en d Si hubiere más de un aspirante á Sen recho propio y perteneciesen á dis quías, entrarán á cubrir las vacantes que establece el art. 21 de la Consti

Si dos ó más aspirantes por de pertenecieren á la misma jerarquía vacantes para todos ellos, ingresarán de más edad, y aguardarán los otros n

ARTÍCULO ADICIONAL

Cuando el Gobierno determine, c artículo transitorio de la Constitución la forma de elegir sus representante isla de Cuba, el número de Senado haya de nombrar se rebajará á las p menos población de la Península.

ARTÍCULO TRANSITORIO

El Gobierno podrá anticipar, m riar los días y plazos señalados por formar las listas electorales y para l meras elecciones que se verifiquen c publicación de la misma.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunal Jefes, Gobernadores y demás Autori viles como militares y eclesiásticas, clase y dignidad, que guarden y ha cumplir y ejecutar la presente ley c partes.

Dado en Palacio á 8 de Febrero Alfonso.—El Presidente del Consejo Antonio Cánovas del Castillo.

ACTA DE ELECCIÓN DE SENADORES

En la ciudad ó villa de..... á... del mes de... año...., reunidos á las diez de la mañana en la capital de la provincia los señores compromisarios para nombramiento de Senadores con los Diputados provinciales, en el local designado, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la Diputación provincial, y constituida la Junta electoral con arreglo á las prescripciones de la ley, se procedió al nombramiento de la Mesa interina, que revisó y examinó las certificaciones presentadas por los compromisarios, que fueron aprobadas, y después á la definitiva, por hallarse presentes el número de compromisarios que la ley exige para tomar acuerdo. Verificada la elección, que dió principio votando primero los cuatro Secretarios escrutadores, después los Diputados provinciales y compromisarios indistintamente, y por último el Presidente, se procedió al escrutinio, que dió el resultado siguiente;

Para Senadores.

Don N. N. votos.

Don N. N. votos.

Don N. N. votos.

Siendo el número total de electores de la provincia entre compromisarios y Diputados provinciales (*tantos*), resulta que han tomado parte en la elección (*tantos*).

(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sobre el escrutinio, se expresarán en este lugar, así como las resoluciones que sobre ellas dictare la Mesa.)

Habiendo reunido los candidatos más de la mitad de los votos emitidos (no habiéndolo reunido alguno ó algunos, se procederá á nueva elección en los términos que prescribe el art. 53 de esta ley), el Presidente proclamó Senadores por la provincia de... á D. N. N., á D. N. N. y D. N. N.

Y en cumplimiento de la ley, firmamos esta acta, sacando de ella las correspondientes copias para el Sr. Ministro de la Gobernación y Sres. Senadores nombrados, que les servirá de título para presentarse en la Secretaría del Senado, quedando ésta original en el Archivo de la Diputación provincial. Una certificación de esta acta con toda la documentación se remitirá al Senado antes del término de ocho días, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 54 de la ley. De todo lo cual certificamos.

El Presidente de la Mesa y de
la Diputación provincial.

N. N.

El Secretario escrutador,

N. N.

El Secretario escrutador,

N. N.

El Secretario escrutador,

N. N.

El Secretario escrutador,

N. N.

(Las actas de nombramiento de Mesa interina y definitiva, con toda la documentación que se hubiese presentado, se archivarán en la Secretaría de la Diputación provincial, menos las que deban remitirse al Senado, conforme á lo dispuesto en el art. 54 de la ley.)

APENDICE

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con el dictamen del Consejo de Estado en pleno y con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien resolver lo siguiente:

1.º Quedan derogadas la Real orden de 23 de Diciembre de 1885 y la circular de esa Dirección fecha del día siguiente.

2.º La ley electoral de Senadores no modifica la organización de los Claustros extraordinarios de Doctores, sino en lo taxativamente prescrito en sus artículos 1.º y 18.

3.º Conforme al art. 276 de la ley de Instrucción pública, al 3.º de la ley Electoral del Senado, y á las demás leyes de la propia índole, para ser inscritos en la matrícula de los Claustros extraordinarios y ejercitar el derecho de sufragio político, necesitan los Doctores acreditar su residencia ó vecindad en la población en que radique la Universidad.

4.º Al objeto de tal inscripción no se admitirá otra prueba de la cualidad de Doctor que la presentación del título correspondiente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.

Madrid 28 de Diciembre de 1895.—Linares Rivas,
Sr. Director general de Instrucción pública.

ÍNDICE

	<u>Páginas.</u>
CAPÍTULO I.—De los que tienen derecho á elegir Senadores	393
CAPÍTULO II.—De los electores y elegibles, incapacidades é incompatibilidades	395
CAPÍTULO III.—De la convocación de la parte del Senado á que se refiere esta ley, y de la formación de las listas y elección de Senadores por las Corporaciones enumeradas en el art. 1.º ..	397
CAPÍTULO IV.—De la formación de las listas por los Ayuntamientos, y elección de Senadores por las Diputaciones provinciales y compromisarios.....	401
CAPÍTULO V.—De las elecciones parciales para Senadores	408
CAPÍTULO VI.—De las vacantes que ocurran entre los Senadores por derecho propio y por nombramiento de la Corona, y del ingreso de los de la primera clase que lo soliciten después de cubierto el número de 180, que señala el artículo 20 de la Constitución.....	409
ARTÍCULO ADICIONAL.....	410
ARTÍCULO TRANSITORIO.....	410
ACTA DE ELECCIÓN DE SENADORES.....	411
APÉNDICE.—CLAUSTROS DE DOCTORES.....	413

LEY FIJANDO EL PLAZO

EN QUE DEBEN PROBAR SU APTITUD LEGAL LOS SENADORES ELECTOS

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. Los Senadores electos, una vez aprobada su acta por el Senado, deberán presentar los documentos que acrediten su aptitud legal, en la Secretaría del mismo, antes de que termine el primer mes de sesiones de la segunda legislatura de las Cortes para que fueren elegidos, si la elección fué general. Para los elegidos en elección parcial, este plazo será el de la duración de la legislatura inmediatamente posterior á su elección.

Se entenderá que renuncia al cargo de Senador electo, el que no probase su aptitud legal dentro de los términos prefijados, y se declarará en su consecuencia la vacante, dando cuenta al Gobierno de S. M. á los efectos oportunos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los Senadores elegidos antes de haber empezado la legislatura actual, deberán acreditar su aptitud legal en el plazo de un mes, á contar desde la fecha de la publicación de esta ley. A los que hayan sido ó sean elegidos después de empe-

a la presente legislatura, sino hasta un mes después de su promulgación.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Gobernadores y demás Jueces como militares y eclesiásticos, que guarden y ejecuten la presente ley.

Dado en Palacio á 27 de Julio de 1890.—El Presidente del Consejo de Ministros, Mateo Sagasta.

LEY SEÑALANDO EL PLAZO

DENTRO DEL CUAL LOS SRES. SENADORES DEBEN PRESTAR JURAMENTO

· DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España. A todos los que la presente, vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Los aspirantes á Senadores por derecho propio que, no estando completo el número que fija el art. 20 de la Constitución, dejen de prestar juramento ó de hacer la promesa reglamentaria en la legislatura en que hubiesen sido admitidos y el primer mes de la siguiente, pierden su derecho al cargo, el cual será declarado vacante.

Art. 2.º Lo pierden igualmente los Senadores nombrados por la Corona en el intervalo de las legislaturas, si no prueban su aptitud legal, ó si no prestan juramento ó hacen la promesa reglamentaria en la primera que siga á su nombramiento, si su duración fuese lo menos de tres meses.

Si la legislatura durase menos tiempo, ó el nombramiento fuese hecho durante el curso de la misma, se entenderá prorrogado el plazo hasta finalizar el primer mes de la siguiente.

Art. 3.º Se entenderá que renuncia el cargo de Senador electo el que no prestase juramento ó hiciese la promesa en el mismo plazo que para probar la aptitud legal fija la ley de 27 de Julio de 1883.

LEY RESEALANDO EL PLAZO

plazos fijados en este artículo y los dos es, se entenderán prorrogados por tres más para los que se hallen en Cuba ó Rico, y por seis meses para los que se hallen en Filipinas. También se conceden dichos plazos para los que, residiendo en la Península, tienen que justificar su aptitud legal con documentos expedidos en los territorios.

.* El decreto especial que para el nombramiento de Senadores por el Rey exige el último párrafo del art. 22 de la Constitución, expresará más del título en que se funda, el nombramiento del Senador reemplazado y la causa de la vacante.

.* Las vacantes que ocurran en cumplimiento de los anteriores preceptos, ó por desistimiento, se comunicarán por la Mesa al Gobierno, después de dar cuenta al Senado cuando estén reunidas las Cortes; y por la Comisión de Interior, en el intervalo de las legislaturas, cuando las Cortes se hallen disueltas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los aspirantes á Senadores por derecho propio, ya nombrados por la Corona y á los electos por las Cortes, que no hubiesen cumplido en los casos comprendidos en los párrafos 2.º y 3.º á la publicación de esta ley, se les conceda el plazo para prestar juramento ó promesa reglamentaria, por las treinta y tres siguientes al día de su inserción en la Gaceta de Madrid.

Ante:

Yo, el Rey, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier

clase y dignidad, que guarden y hagan guarda
cumplir y ejecutar la presente ley en todas s
partes.

Dado en Palacio á 21 de Mayo de 1885.—
el Rey.—El Presidente del Consejo de Ministros
Antonio Cánovas del Castillo.

REGLAMENTO DEL SENADO

TITULO I (1)

PRELIMINARES PARA LA JUNTA PREPARATORIA

Artículo 1.º El Mayor de la Secretaría recibirá los expedientes necesarios para probar las condiciones exigidas en el art. 21 de la Constitución á los Senadores por derecho propio; los traslados de los Reales decretos nombrando Senadores vitalicios, con los justificantes que corresponda al caso del art. 22 de la Constitución en que fueren comprendidos, y las certificaciones de las actas originales, con todos los documentos que deben remitir las Diputaciones provinciales dentro de los ocho días marcados en el art. 54 de la ley electoral.

Art. 2.º Los Senadores electos presentarán asimismo al Mayor de la Secretaría sus respectivas actas con la documentación correspondiente.

Todo Senador dejará además en la Secretaría la nota de su domicilio.

Los Senadores ausentes podrán presentar sus credenciales por medio de oficio ó por conducto de cualquier Senador.

Art. 3.º Conforme fuere recibiendo el Mayor estas documentaciones, las numerará y formará una lista de los Senadores presentados.

(1) Los seis primeros títulos de este Reglamento, arts. 1.º al 46, fueron aprobados el 21 de Junio de 1877, en sustitución de los análogos del de 1871, arts. 1.º al 45.

TITULO II

DE LA JUNTA PREPARATORIA

4.° Los Senadores que se hallen en Madrid al principio de cada legislatura, se reunirán desde la mañana en el Palacio del Senado antes del señalado para la apertura de las

5.° A la una en punto, los Senadores, en el orden que sea su número, entrarán en el salón de sesiones, y se dará principio á la junta preparatoria, ocupando la silla de la Presidencia el de mayor edad y ejerciendo las funciones de Senadores los cuatro que la tuvieren menor.

6.° Acto continuo, uno de los Secretarios de Real convocatoria, la lista de los Senadores presentes y las comunicaciones del Gobierno. Después de éstas resultare haber sido nombrado por el Rey de entre los Senadores presentes el Presidente y Vicepresidentes del Senado, ocupará la silla de la Presidencia el primero, y á falta de éste los segundos, por el orden de su nombra-

7.° En seguida se fijará el número de invitados y suplentes de cada una de las Comisiones encargadas de recibir y acompañar al Rey y á las Reales al entrar y salir del Palacio de sesiones para la apertura; se sortearán los nombres de los Senadores que hayan de componer estas comisiones; se señalará la hora en que deba verificarse la primera sesión después de la Regia, y se terminará la junta.

TITULO III**DE LA CONSTITUCIÓN INTERINA DEL SENADO CUANDO
SE RENUEVE LA PARTE ELECTIVA**

Art. 8.º Al siguiente día de la apertura de las Cortes, si no fuere festivo, ó en el mismo si se hiciese por Real decreto, celebrará su primera sesión el Senado á la hora señalada, bajo la presidencia de la Mesa constituida en la junta preparatoria.

Art. 9.º Esta sesión principiará por la lectura del Acta de la anterior y de las dos listas de que hablan los arts. 3.º y 6.º, rectificándose la segunda si el número de Senadores presentes fuese mayor, y procediéndose á nombrar los cuatro Secretarios interinos si asistiesen la mitad más uno de los Senadores presentes en Madrid.

Art. 10. Los Secretarios serán elegidos en la forma que establecen los arts. 208, 209, 210 y 211, y desempeñarán su cargo hasta la constitución definitiva del Senado.

Art. 11. Si en la sesión de dicho día no pudiese verificarse el nombramiento por falta de número de Senadores concurrentes, se hará en la inmediata si se reúnen por lo menos 50, ó en la primera en que esto se verifique; pero siempre en la forma prescrita en el artículo anterior.

Art. 12. De los nombramientos de Secretarios se dará conocimiento al Congreso de los Diputados y al Gobierno.

Art. 13. Hasta su constitución definitiva, el Senado sólo se ocupará en el examen de las actas y credenciales, y de las comunicaciones del Gobierno ó del otro Cuerpo Colegislador, á no ser que á propuesta del Gobierno, ó de la Mesa, el Senado acor-

contrario; pero en ningún caso podrá tra-
proyectos y proposiciones de ley.

14. El Presidente no permitirá otras dis-
s que las de actas y calidades, y las que
n conforme al texto del artículo anterior.

TITULO IV

AMEN DE ACTAS, CREDENCIALES Y APTITUD LEGAL

15. En la primera legislatura de cada re-
n general ó parcial de la parte electiva, y
sión del mismo día en que se constituya
amente, ó en la inmediata si no hubiese
nombrará el Senado la Comisión perma-
e actas y calidades, compuesta de siete in-
s; y si tres ó más de éstos fuesen sólo Se-
electos, otro auxiliar del propio número.

16. Para la elección de estas Comisiones
rvarán las reglas establecidas en los ar-
79 y sus concordantes 208, 210 y 211.

17. La Comisión auxiliar examinará y da-
men tan sólo en las actas y credenciales
ndividuos de la Comisión permanente; y si
ó la aptitud legal del elegido presentase
ad, aunque fuese leve, el Senado, sin dis-
previa, le sustituirá con otro Senador cuya
legal no ofrezca duda alguna. Los dictá-
le esta Comisión serán los primeros que se
n y voten.

18. La Comisión permanente examinará
umentos á que se hace referencia en los ar-
1.º y 2.º, y clasificará los expedientes por
n de su numeración, en tres categorías, á

Primera. Los que no contengan protesta ni reclamación alguna.

Segunda. Los que sólo ofrezcan motivos ligeros de discustón.

Y tercera. Los que ofrezcan dificultad grave.

Art. 19. De las actas electorales comprendidas en las dos primeras categorías, extenderá la Comisión un solo dictamen por provincias y Corporaciones, proponiendo su aprobación. Presentará también por separado, en dos listas correspondientes á las mismas categorías, los nombres de los Senadores que, resultando electos en dichas actas, hubiesen probado su aptitud legal, y propondrá su admisión..

Al darse cuenta al Senado de las dos mencionadas listas, no se pasará á la segunda hasta que hubiere sido aprobada la primera.

Art. 20. En los expedientes de los Senadores por derecho propio y nombramiento de la Corona, propondrá la Comisión desde luego la admisión, una vez aprobada la aptitud legal de los interesados.

Art. 21. Si contra algunos de los dictámenes de la Comisión pidiesen la palabra varios Senadores, usará de ella el primero que la pidiese, contestando la Comisión ú otro de los mismos. El interesado podrá tomar parte en la discusión por una sola vez, sin consumir turno.

Art. 22. Cuando en el dictamen desechado se propusiese la validez del acta ó la admisión del Senador, pasará á la tercera categoría.

Art. 23. Aprobada el acta, la aptitud legal, y admitido el interesado, el Presidente le proclamará Senador.

Art. 24. No se dará dictamen sobre la aptitud legal de ningún Senador mientras no presente los documentos que la justifiquen, á juicio de la Co-

on; pero una vez presentados, no se podrá de-
r el dictamente más de diez días.

uando el interesado considerase bastantes los
mentos exhibidos, aunque la Comisión no lo
are así, tendrá derecho á que se le dé cuenta
expediente dentro del referido plazo, para la
ción del Senado.

t. 25. Hasta después de constituido el Se-
no se dará cuenta de los expedientes com-
lidos en la tercera categoría, á no ser que
número de Senadores para constituirlo. En
caso, con acuerdo del Senado, la Comisión
ntará los dictámenes que á su juicio ofrezcan
r dificultad.

t. 26. Los Senadores presentados, cuyos
ramientos y aptitud legal se examinen, po-
aun después de constituido el Senado, hacer
el derecho que se les concede por el art. 21.

t. 27. Cuando en alguna votación sobre la
ez ó nulidad de la elección de Senadores, ó
aptitud legal, resultare empate, se practi-
o dispuesto en el art. 215, y al tercer em-
quedará admitido el Senador.

t. 28. Si las Comisiones, para dar dicta-
creyesen necesaria la práctica de algunas
ncias, lo propondrán al Senado. En cuanto
amación de documentos, se observará lo pre-
ado respecto á las demás Comisiones.

t. 29. Cuando en el examen de los expe-
s resultase algún hecho penado por las le-
a Comisión dará cuenta al Senado para que
de lo que estime conveniente.

TÍTULO V

DE LA CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL SENADO

Art. 30 (1). Terminado el examen de las actas y expedientes de primera y segunda categoría, si resultasen admitidos la mitad más uno de los Senadores presentados, se procederá á la constitución definitiva del Senado, previo acuerdo del mismo.

Inmediatamente después, los Senadores prestarán juramento, ó harán promesa de fidelidad al Rey y á la Constitución, con esta fórmula, que leerá en alta voz uno de los Secretarios:

«¿Juráis ó prometéis guardar y hacer guardar la Constitución de la Monarquía española?

¿Juráis ó prometéis fidelidad y obediencia al Rey Don Alfonso XIII y á la Regencia del Reino, constituida con arreglo á la Constitución?

¿Juráis ó prometéis haberos bien y fielmente en el cargo de Senador?

El Senador, puesta la mano derecha sobre el libro de los Evangelios, responderá:

«Sí juro.»

O bien, poniendo la mano derecha sobre su pecho, responderá:

«Sí prometo.»

El Presidente concluirá diciendo:

Si así lo hiciéreis, Dios os los premie; y si no, os lo demande.»

Durante este acto estará arrodillado el Senador que presta el juramento, y de pie el que hace la promesa. Se pondrán de pie en uno y otro caso los Senadores y concurrentes á las tribunas. Sólo el Presidente permanecerá sentado.

(1) Quedó modificado en esta forma el 8 de Febrero de 1883.

La fórmula del juramento se acordó en 26 de Mayo de 1836.

REGLAMENTO DEL SENADO

senadores que no estén presentes jurarán promesa antes de tomar asiento.

1. Inmediatamente se procederá á la de los cuatro Secretarios, verificándose na establecida por los artículos 208, 209, f.

2. El cargo de Secretario es renun-

3. Concluída la votación, los elegidos i sus puestos; el Presidente declarará ha-nstituído definitivamente el Senado, y así ipará al Congreso y al Gobierno.

4. En las legislaturas en que no hubiere ón total ni parcial de la parte electiva do, se nombrarán los cuatro Secretarios mera sesión, ó en las siguientes á falta ro, con arreglo á lo establecido en los ar-0 y 14.

5. Terminada la elección de Secretarios, rará la Comisión permanente de actas, ta de siete individuos; y en la misma hubiere tiempo, se dividirá el Senado en ciones, de igual número de Senadores a, verificándose para ello un sorteo de Senadores que hubiesen tomado asiento mara, y los que entren después serán des-la Sección que les corresponda por turno.

TÍTULO VI

**EO DE SENADORES PARA LA RENOVACIÓN DE
CTIVOS, Y DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO**

6 (1). En una de las primeras sesiones le constituído el Senado, se hará el sorteo

ficado este y el siguiente en 12 de Julio de 1879, y al-tal como aquí están, en 12 de Julio de 1890.

para la renovación parcial de los Senadores electivos, en esta forma:

1.º De las nueve provincias eclesiásticas que forman los Arzobispados, correspondiendo la renovación á los cinco de éstos que salgan primero de la urna.

2.º De las seis Academias, para que la renovación tenga lugar en tres, de la misma manera que en el caso anterior.

3.º De las diez Universidades para que la renovación tenga lugar en cinco, de la misma manera que en los dos casos anteriores.

4.º De las cinco regiones formadas por las Sociedades Económicas, para que las dos primeras que salgan de la urna verifiquen la renovación.

Las regiones que forman las Sociedades Económicas y los Arzobispados alternarán, para su renovación, en la forma siguiente:

Siempre que la renovación haya de verificarse en cinco provincias eclesiásticas, tendrá lugar en dos regiones de las Sociedades Económicas, y en tres de éstas cuando se verifique en cuatro de aquéllas.

5.º De las 46 provincias de la Monarquía que eligen tres Senadores, para que en las 23 primeras que salgan de la urna se verifique la renovación de dos Senadores y de uno en las otras 23.

6.º Teniendo en cuenta que á cada una de las tres provincias de Madrid, Barcelona y Valencia, les corresponde elegir cuatro Senadores, no se incluirán en el sorteo de provincias á que se refiere este artículo, puesto que la renovación en ellas puede hacerse por mitad de los Senadores que las representan.

Art. 37. En cada una de las tres provincias de Madrid, Barcelona y Valencia, se determinará también, acto continuo, por sorteo, el orden de

mero de los cuatro Senadores que cada una de las elija, á fin de que en el caso de renovación el artículo anterior salgan los dos primeros números de cada provincia.

Se sortearán, además, los Senadores de cada una de las 46 provincias que eligen tres, á fin de que en la primera renovación salgan los números 1 y 2 que corresponden á la categoría de las provincias primeras, según orden fijado por el sorteo del caso 5.º del artículo anterior; y en las provincias de la segunda categoría, corresponderá la salida en dicha renovación al núm. 1 siguiente.

Art. 38. El Presidente y Secretarios harán el sorteo de estos seis sorteos por el orden en que están indicados, leyendo en alta voz uno de los Secretarios las papeletas que se hubiesen depositado en la urna, pudiendo todos los Senadores, por invitación de la Mesa, acercarse á comprobarlas.

Art. 39. Cuando el Rey suspenda las sesiones de las Cortes, ó declare terminada la legislatura, el Presidente del Senado pasará al Gobierno, en el término de ocho días, para los efectos del art. 60 de la ley de 8 de Febrero de 1877, una lista en la que conste, respecto á los Senadores por derecho propio:

- 1.º Los que hayan tomado asiento en el Senado.
- 2.º Los que habiendo sido admitidos por el mismo Cuerpo, no se hayan presentado á tomar asiento.
- 3.º Los que hayan solicitado su admisión, acerca de cuyos expedientes hubiese dado dictamen favorable la Comisión de calidades, sin haber caído resolución del Senado.

También pasará otra lista en que consten las

mismas circunstancias, respecto á los Senadores vitalicios nombrados por la Corona.

Art. 40. Aun cuando no haya vacante en el número de Senadores por derecho propio y de nombramiento de la Corona, el Senado recibirá las solicitudes de entrada por el primer concepto, sobre las que dará dictamen la Comisión de examen de calidades y el Senado resolverá en la forma ordinaria.

Una vez admitidos, serán considerados como aspirantes, con arreglo al art. 61 de la ley de 8 de Febrero de 1877.

TITULO VII

DEL PRESIDENTE

Art. 41. El Presidente llevará la voz y dirigirá los actos del Senado con sujeción á las prescripciones del Reglamento:

Corresponde á su autoridad:

- 1.º Abrir, suspender y cerrar las sesiones.
- 2.º Designar, con anuencia del Senado, los días en que no deba haberlas.
- 3.º Señalar anticipadamente los asuntos que en ellas deban discutirse.
- 4.º Dirigir las discusiones conforme al Reglamento.
- 5.º Conceder el uso de la palabra según el orden con que se hubiere pedido, ó negarla cuando no haya derecho á usarla.
- 6.º Cuidar de que se conserve el orden y de que las discusiones se limiten y concreten al asunto de que se trate.
- 7.º Dar el curso correspondiente á las proposiciones que en forma reglamentaria presenten los Senadores.

REGLAMENTO DEL SENADO

ijar, en caso de duda, los puntos sobre a de votar.

firmar las Actas del Senado y los proyectos y mensajes que se dirijan al Rey ó al

Anunciar al fin de cada sesión las materias que se ha de tratar en la siguiente.

Recomendar á los presidentes é individuos las Comisiones el pronto desempeño de go.

hacer el uso conveniente de las demás prerrogativas que le otorga el Reglamento, aunque no estén enumeradas en este artículo.

12. El Presidente tiene la facultad de llamar por tres veces al Senador que se extravíe en la discusión, y de excitarle á que se concrete á la discusión:

Retirarle la palabra si después de las tres veces persistiere en su propósito.

13. Llamar al orden por tres veces al orador que turbe el de las sesiones ó falte al Regla-

14. Llamar igualmente al orden al Senador ó al individuo que interrumpen al orador ó falten al decoro debido al Presidente.

15. Privar del uso de la palabra durante el discurso la sesión al Senador que hubiere sido llamado al orden tres veces.

16. Si el Presidente quisiere tomar parte en la discusión, dejará la Presidencia y no volverá á ocuparla hasta que se haya votado el artículo ó punto que se discuta.

17. El Presidente dispondrá que se fije el orden de la discusión en sitio conveniente la orden de la agenda y se comunique al Gobierno.

18. El Presidente tendrá en la correspondencia el tratamiento de *Excelencia*.

Art. 46. Si se cometiere algún delito dentro del Palacio del Senado, podrá el Presidente mandar detener á los culpados y entregarlos á disposición del Tribunal competente, dando conocimiento al Senado y al Gobierno. Caso de que hubiere guardia, el jefe de la misma estará á sus órdenes.

TÍTULO VIII

DE LOS SECRETARIOS

Art. 47. Los Secretarios reconocerán las comunicaciones, escritos y documentos que se dirijan al Senado, cuidando de que se extracten con precisión y exactitud aquellos de que deba darse cuenta al mismo, y acordando con el Presidente los asuntos que hayan de tratarse en cada sesión.

Art. 48. Los Secretarios extenderán las actas de las sesiones, que deberán comprender una relación sucinta y clara de cuanto se trate y resuelva en el Senado, á cuya aprobación se someterá la de cada sesión al abrirse la siguiente.

Art. 49. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no insertarán en las Actas los motivos ó fundamentos de las opiniones, ni los nombres de los opinantes, ni los llamamientos al orden ni á la cuestión, ni los discursos pronunciados ó los documentos leídos, ni tampoco autorizarán copia ni extracto alguno de las Actas, á no mediar acuerdo del Senado.

Art. 50. Las Actas de las sesiones secretas se extenderán en libro separado.

Art. 51. Se firmarán por los cuatro Secretarios las Actas del Senado, rubricando las minutas.

Art. 52. Los mensajes y proyectos de ley que se dirijan al Rey, llevarán, además de la firma del

Presidente, la de los cuatro Secretarios, y la de los mensajes y proyectos de ley que al Congreso, y cuantos documentos y ciones se expidan por la Secretaría.

Los Secretarios darán cuenta de todas comunicaciones y expedientes que se remitan, y de cuantos asuntos se traten en él, lo y rubricando las resoluciones que

Corresponde asimismo á los Secretarios publicar el resultado de las vo-

Estarán á cargo de los Secretarios la , Archivo y Redacción del *Diario*, de los todos los empleados de estas

Los Secretarios tendrán el tratamiento en la correspondencia de oficio.

TÍTULO IX

DE LOS SENADORES

Los Senadores deberán hallarse con anticipación en el pueblo en que lebrarse la apertura de las Cortes; y si notivo no pudiesen verificar su presencia manifestarán al Senado por medio de pido á los Secretarios.

Cuando los Senadores electos soliciten asiento en el Senado, presentarán en la por medio de oficio, los documentos de su elección y de las calidades que nstitución para desempeñar este cargo, lo establecido en el art. 2.º de este Re-

Si algún Senador tuviese precisión

de ausentarse por más de ocho días, deberá pedir licencia al Senado, exponiendo por escrito los motivos y señalando el tiempo que necesitare. El Senado los tomará en consideración y acordará lo que estime conveniente.

Art. 60. Las licencias que se otorguen á los Senadores no podrán exceder de la sexta parte de los admitidos.

Art. 61. No haciéndose uso de la licencia en el término de quince días, contados desde la fecha de su concesión, quedará sin efecto.

Art. 62. Los Senadores que no tengan uniforme ó traje particular, se presentarán en los actos solemnes con vestido negro.

Art. 63. Cuando se pidiere al Senado la autorización que se expresa en el art. 47 de la Constitución para proceder contra un Senador, resolverá lo que estime conveniente, oyendo á una Comisión de su seno.

Art. 64. Cuando ocurra el fallecimiento de un Senador, el Presidente nombrará una Comisión de 12 individuos que acompañen sus restos á la última morada, y el asiento que hubiere ocupado en el salón estará cubierto con una gasa negra durante nueve días, y no se consentirá que en ese período lo ocupe otro Senador.

TÍTULO X

DE LAS SECCIONES

Art. 65. Las Secciones se sortearán bimensualmente, y en la primera sesión, designándose los sorteados por el orden numérico del uno al siete.

El mes en que se haga el sorteo se contará por entero, cualquiera que sea el día en que se verifique.

REGLAMENTO DEL SENADO

66. Cada Sección elegirá un Presidente, vicepresidente, un Secretario y un Vicesecretario, y de sus nombramientos dará cuenta por escrito a la Secretaría del Senado.

Los cargos se renovarán en cada sorteo, y son incompatibles con el de Ministro de la Co-

67. Cuando las Secciones se reúnan para reunirse, presidirá en cada una de ellas, interinamente, el Senador que ocupe el primer lugar en la lista.

68. Es precisa la concurrencia de diez Senadores para celebrar sesión; pero transcurridos quince minutos después de la hora señalada, se verificará con los reunidos; y si faltasen el Presidente y Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, serán sustituidos por los que aquéllos designan para sólo aquel acto.

69. Las Secciones acordarán separadamente en su local respectivo sobre los asuntos que según el Reglamento les fueren sometidos.

70. Los Ministros de la Corona pueden asistir a todas las Secciones, pero únicamente emitir voto el que sea Senador, en la Sección a la que pertenece.

El mismo derecho asiste a los autores de las proposiciones de ley.

71. Luego que cada Sección se declare oficialmente instruida del proyecto, proposición de ley ó asunto que se discuta, nombrará un representante para que forme parte de la Comisión que dará dictamen al Senado.

72. Los individuos nombrados con este fin por las Secciones deberán ser de su propia Sección.

73. Estos siete individuos compondrán la Comisión en todos los casos, menos en los que

deba ser mayor ó menor el número de la misma.

Art. 74. Las Secciones negarán ó autorizarán la lectura de los proyectos ó proposiciones de ley que procedan de la iniciativa de los Senadores, para lo cual la Mesa los remitirá con este objeto dos días después de habérselos presentado.

Art. 75. Las Secciones se reunirán cuando lo determine el Senado, á propuesta del Presidente, del Gobierno ó de un Senador.

Art. 76. Las Secciones darán cuenta al Senado, por medio de los respectivos Secretarios, de los acuerdos que tomen y de los nombramientos que hagan.

Art. 77. Las Secciones se regirán en lo posible por el Reglamento del Senado.

TITULO XI

DE LAS COMISIONES

Art. 78. Las Comisiones serán siempre elegidas por las Secciones, fuera de los casos en que por este Reglamento se disponga que lo sean directamente por el Senado.

Art. 79. Cuando el nombramiento se haga directamente por el Senado, se escribirán en una papeleta tantos nombres cuantos sean los individuos que hayan de componer la Comisión, y quedarán elegidos los que resulten del escrutinio con mayor número de votos, siendo aplicables á esta elección las disposiciones contenidas en los artículos 208, 210 y 211.

Art. 80. Todas las Comisiones que se elijan para objeto determinado, se disolverán luego que quede definitivamente votado el asunto sometido á su examen.

Art. 81. Sin embargo, tendrán el carácter de permanentes durante cada legislatura:

1.º La Comisión de actas, que lleva este nombre, y que será además de calidades, incompatibilidades é incapacidades.

2.º La de fomento y conservación de la Biblioteca del Senado.

3.º La de gobierno interior.

4.º La de presupuestos generales del Estado.

5.º La de examen de cuentas generales del Estado.

6.º La de nombramiento y separación libre de los ministros del Tribunal de Cuentas del Reino (1).

7.º La de inspección de la deuda pública.

8.º La de concesión de gracias ó pensiones á persona ó personas determinadas.

9.º La de peticiones.

10.º La de corrección de estilo, y las demás que el Senado califique de carácter permanente.

Art. 82. Las Comisiones comprendidas en los núms. 1.º, 2.º y 6.º se nombrarán directamente por el Senado, conforme á lo establecido en el artículo 79.

Art. 83. La Comisión encargada de dar dictamen sobre toda propuesta de reforma constitucional, será elegida directamente por el Senado; se compondrá de nueve individuos, para cuya elección no podrá escribir cada Senador más que seis bres en su papeleta, y quedarán elegidos los resulten con mayor número de votos, aplicándose á esta votación las disposiciones de los arts 208, 210 y 211.

Como en virtud de la ley de 3 de Julio de 1877, el nombramiento del presidente y ministros del Tribunal de Cuentas del se ha de hacer por Real decreto acordado en Consejo de ros, el Senado no elige ya esta Comisión.

Art. 84. La de fomento y conservación de la Biblioteca se compondrá de un Secretario elegido por la Mesa, y de dos Senadores nombrados directamente por el Senado.

Art. 85. La Comisión de gobierno interior del Senado la compondrán, además de los siete Senadores elegidos por las Secciones, el Presidente y primer Secretario del Senado, que serán siempre individuos natos y ejercerán en ella sus respectivos cargos.

Art. 86. La de presupuestos generales del Estado será de 21 vocales, nombrados tres por cada Sección, y entenderá en el examen de los mismos desde que sean presentados en el Congreso.

Art. 87. La Comisión que haya de dar dictamen sobre el nombramiento y separación libre de los ministros del Tribunal de Cuentas del Reino, y la de inspección de la Deuda pública, se compondrán cada una del número de individuos que determinan las leyes (1).

Art. 88. La de corrección de estilo constará de uno de los Secretarios, elegido por la Mesa, y de dos Senadores. Para nombrar éstos, cada Sección designará un individuo, y los siete elegirán entre sí á los dos.

Art. 89. De las Comisiones mixtas que se formen con arreglo al art. 10 de la ley de 19 de Julio de 1837, serán individuos los siete Senadores que lo hubiesen sido de la que examinó el proyecto de ley de que se trate, disminuyéndole ó aumentándole hasta el número igual al que designe el Congreso para la suya. En el primer caso, se eliminarán por suerte los excedentes. En el se-

(1) No eligiendo ya el Senado la Comisión de nombramiento y separación libre de los ministros del Tribunal de Cuentas del Reino, este artículo debe entenderse sólo para la Comisión de inspección de la Deuda pública.

ando, se completarán con arreglo al artículo anterior.

Art. 90. El Presidente y Secretario de una Comisión pueden ser individuos de las Comisiones.

Art. 91. Si pareciese insuficiente el número de siete Senadores para alguna Comisión, podrá aumentarse por acuerdo del Senado.

Art. 92. Si por ausencia ó enfermedad faltase algún individuo de la Comisión, se entenderá que está subsistente y podrá dar dictamen mientras pueden cinco Senadores en ella.

Si no llegasen á este número, nombrarán las Comisiones respectivas, ó el Senado en su caso, los que faltasen; y si aquéllas se hubiesen renovado, las designadas con el mismo número de orden.

Art. 93. Las Comisiones podrán llamar, para que las auxilie en sus trabajos, á cualquier individuo de fuera ó dentro del Senado.

Art. 94. Cada Comisión nombrará su Presidente y Secretario en la primera reunión, y participará los nombramientos al Senado.

La convocación para esta primera reunión se hará por el individuo nombrado por la primera Comisión.

Art. 95. Toca al Presidente de cada Comisión convocarla, con señalamiento de día y hora; dirigir sus sesiones, y distribuir los trabajos entre sus individuos (1).

Art. 96. Las Comisiones no podrán deliberar si hallarse presentes cuatro de sus individuos por lo menos.

Art. 97. Será obligación del Secretario tomar nota de los expedientes y documentos que se le presenten, y de los que se le devuelvan, así como de las resoluciones que se adopten; redactar el dic-

(1) Véase el acuerdo tercero del Apéndice á este Reglamento.

tamen que la Comisión acuerde, cuando de ello no se haga cargo otro individuo, y dar cuenta á la Secretaría del Senado del día, hora y local donde se reuna la Comisión, para que lo haga poner en un cuadro y puedan tener conocimiento de ello todos los Senadores.

Art. 98. Las Comisiones tendrán el derecho de reclamar del Gobierno, por medio de los Secretarios del Senado, cuantos documentos y noticias crean necesarias para el acierto en sus dictámenes.

Art. 99. Solamente los Ministros y los Senadores podrán asistir sin voto á las Comisiones, así como las personas que por acuerdo de la mayoría de la Comisión fueren llamadas á su seno ó autorizadas para concurrir á sus sesiones.

Art. 100. Todos los Senadores pueden presentar á las Comisiones los documentos que juzguen convenientes, siempre que lo verifiquen por conducto de la Mesa del Senado, salvo el caso en que sean autores de la proposición de ley para que fué nombrada la Comisión, ó Senadores electos, y el documento ó documentos se refieran á su acta ó persona, en cuyo caso podrán entregarlos directamente á la Comisión.

TITULO XII

DE LAS SESIONES

Art. 101. Habrá sesión ordinaria todos los días no festivos.

Art. 102. A propuesta del Presidente, el Senado determinará la hora en que deberán empezar las sesiones, las cuales durarán seis hasta la constitución definitiva del Senado, y cuatro en lo sucesivo, pudiendo en uno y otro caso prorrogarse indefinidamente por acuerdo del mismo, á propuesta

del Presidente ó á petición del Gobierno ó de un Senador.

Art. 103. Con el mismo acuerdo, y cuando la urgencia lo requiera, habrá sesiones extraordinarias, que serán antes ó después de la ordinaria.

Art. 104. Habrá sesión secreta en los casos siguientes:

- 1.º Para tratar de los asuntos de que dé cuenta la Comisión de gobierno interior.
- 2.º Cuando lo pida el Gobierno.
- 3.º Cuando lo determine el Presidente.
- 4.º Cuando el Senado lo acuerde en virtud de petición suscrita por siete Senadores.

Y 5.º Siempre que se hubiere de deliberar y resolver sobre asuntos que conciernan al decoro del Senado ó al de sus individuos.

Art. 105. Aun cuando se haya empezado á tratar un asunto en sesión pública, el Senado, á propuesta del Presidente ó de un Senador, podrá acordar que se continúe tratando en sesión secreta.

Para hacer al Senado la pregunta concerniente al caso previsto en este artículo, y para que el mismo resuelva con discusión ó sin ella, el Presidente suspenderá la sesión pública, mandando despejar las tribunas.

Art. 106. De la misma manera, si empezada una sesión secreta, el Senado estimare que puede tratarse sin inconveniente en sesión pública el asunto que la motivó, lo acordará así.

Art. 107. El Presidente abrirá la sesión con esta fórmula: *Abrese la sesión*, y la cerrará con la de: *Se levanta la sesión*. Levantada la sesión, no se permitirá hablar á ningún Senador, y será nulo cuanto se hiciere.

Art. 108. No se levantará la sesión sin haber destinado dos horas de ella por lo menos á los asuntos señalados en la orden del día, á no ser que

no hubiere número de Senadores para continuarla, ó que el Presidente no hallare otro medio de hacer respetar su autoridad.

Art. 109. Para abrir la sesión y continuarla, deberán estar presentes 30 Senadores cuando menos, y 40 bastarán para toda resolución que no sea la votación definitiva de proyectos de ley, en cuyo caso será necesaria, conforme al art. 43 de la Constitución, la presencia de la mitad más uno de los Senadores que tengan aprobadas sus actas y hayan sido admitidos en el Senado.

Art. 110. En cada sesión, después de leída el Acta de la anterior, y antes de pasar á discutir los asuntos señalados en la orden del día, se dará cuenta de las comunicaciones que se hubieren recibido y de las proposiciones de ley cuya lectura haya sido autorizada por las Secciones.

Art. 111. Las comunicaciones del Gobierno dando cuenta del uso que hubiere hecho de una autorización concedida por las Cortes con esta calidad, se pasarán á las Secciones para el nombramiento de una Comisión que examine el asunto y dé su dictamen.

Art. 112. Cuando los Ministros asistan á las sesiones, ocuparán el banco especial que les estará destinado.

• Art. 113. El Senado puede acordar la suspensión de sus sesiones por uno ó más días á petición del Gobierno, y no habiendo asuntos de que tratar, á propuesta del Presidente.

TITULO XIII

DE LOS PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY Y PROPOSICIONES DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Art. 114. Leído un proyecto de ley presentado por el Gobierno ó remitido por el Congreso,

se pasará á las Secciones para el nombramiento de Comisión (1).

Art. 115. Las proposiciones de ley que hicieren los Senadores, deberán formularse como los proyectos del Gobierno, y firmadas por su autor ó autores se entregarán á la Mesa para que las pase á las Secciones, en los términos dispuestos en el art. 74.

Art. 116. Ninguna proposición de ley deberá presentarse firmada por más de siete Senadores.

Art. 117. Las Secciones resolverán en su primera reunión si autorizan la lectura de la proposición sometida á su examen.

Art. 118. Basta que una Sección autorice esta lectura, para que se lea en la primera sesión del Senado.

Art. 119. Se exceptúan de la regla establecida en el artículo anterior las proposiciones que tengan por objeto la reforma de la Constitución ó alguno de sus artículos, de las cuales no podrá darse cuenta á no haber autorizado su lectura la mayoría de las Secciones.

Art. 120. El autor ó uno de los autores de toda proposición de ley podrá exponer de palabra los motivos y fundamentos de ella, terminada que sea su lectura, ó el día que tenga por conveniente.

Art. 121. Verificada esta exposición de motivos, ó renunciando á ella el autor ó autores de la proposición, se preguntará al Senado si la toma ó no en consideración, sin permitirse debate alguno.

Art. 122. El autor de una proposición podrá retirarla antes que el Senado la haya tomado en consideración.

Art. 123. Tomada en consideración una pr

(1) Véase el acuerdo segundo del Apéndice á este Reglamento.

posición de ley, se procederá como en los proyectos del Gobierno ó del Congreso.

Art. 124. En las últimas legislaturas, y mientras no se disuelvan el Senado ó el Congreso, podrá continuar, á propuesta del Gobierno ó de un Senador, cualquiera de los trabajos de la precedente, partiendo del estado en que se encuentre.

Art. 125. Cuando se verifique la disolución de uno de los Cuerpos Colegisladores ó de ambos, se darán por terminados cuantos trabajos penden en el Senado.

TÍTULO XIV

DE LAS DISCUSIONES

Art. 126. Leído el dictamen de una Comisión sobre cualquier materia, el Presidente señalará día para su discusión.

Esta no podrá verificarse sino á los tres días, lo menos, después estar impreso y repartido.

A propuesta del Presidente, podrá, no obstante, acordar el Senado que es urgente la discusión de un dictamen, y señalar cuando deba verificarse.

Art. 127. En los dictámenes de mucha extensión é importancia, se procederá á la discusión, primero en la totalidad y después por artículos ó párrafos.

Art. 128. La discusión general recaerá sobre el principio, espíritu y oportunidad del proyecto.

Art. 129. No podrá cerrarse ninguna discusión general ni particular sin que hayan hablado tres Senadores en contra, si los hay que tengan pedida la palabra, y otros tantos en pro, salvo lo dispuesto en este Reglamento para casos especiales.

Art. 130. Si puesto un dictamen á discusión,

REGLAMENTO DEL SENADO

alquier estado de ella, no pedida la palabra en contracción.

31. En el caso de ampliado la discusión general, declarará, á petición de cuándo está el asunto :

Presupuestos y Códigos

32. Los presupuestos se de preferencia que acuerda del Presidente.

gastos de cada Ministerio en su totalidad; después presente por artículos, y aunuerda el Senado, á petición de un Senador; cuanto al artículo ó párrafo presentado enmiendas ó será siempre por artículo. Presupuesto de ingresos se la misma forma que el a permita su diferente índ

33. En los proyectos de naturaleza, además de s l, podrá haber varias disc bros, títulos ó capítulos, de el Senado, á propuesta ión de un Senador; y en t los artículos á los que se niendas ó adiciones. En á el mismo orden, y nui os artículos discutidos.

TÍTULO XV

VOTOS PARTICULARES

Art. 134. Los votos particulares se presentarán dentro de las veinticuatro horas de haberse leído el dictamen de la mayoría de la Comisión, y se discutirán antes que dicho dictamen, pero después de impresos y repartidos.

Art. 135. Si se presentase más de un voto particular, se discutirán por el orden siguiente:

1.º Los que se refieran á la totalidad del proyecto de ley ó proposición.

2.º Los que afecten á uno ó más artículos, debiendo tener lugar su discusión cuando llegue el turno á cada uno de los artículos á que se refieran.

Art. 136. Cuando se hallen en el mismo caso dos ó más votos particulares, se dará la preferencia al que, á juicio de la Mesa, oyendo á la Comisión, se separe más del dictamen de la mayoría.

Art. 137. Abierta la discusión sobre un voto particular relativo á la totalidad, lo apoyará su autor ó uno de sus autores; contestará uno de los individuos de la mayoría de la Comisión, y el Senado resolverá si lo toma ó no en consideración.

Art. 138. Si el acuerdo fuere negativo, quedará desechado el voto particular; y si fuere afirmativo, se abrirá discusión sobre el mismo, pudiendo pronunciarse dos discursos en contra y dos en pro. Los individuos de la mayoría de la Comisión sera preferidos para impugnarlo, y su autor ó autores para defenderlo.

Art. 139. Discutido en su totalidad el voto particular que conste de más de un artículo ó parte, la votación del Senado recaerá sobre si se pasa ó no á la discusión por artículos ó partes. Si

fuese negativa la resolución, quedará desechado el voto particular; y si hubiese otro ú otros que afecten á la totalidad, se procederá en la misma forma. Agotados los votos particulares sobre la totalidad, se pasará á la discusión del dictamen de la mayoría.

Art. 140. En el caso de afectar el voto particular á solo un artículo, no se preguntará si se toma en consideración, sino que, después de hablar dos Senadores en contra y dos en pro, se procederá á la votación. Si ésta no fuese favorable, quedará desechado, pasándose á la discusión del otro voto particular, en caso de haberse presentado, y en su defecto á la del artículo del dictamen de la mayoría de la Comisión. Si en la votación fuese aprobado el voto particular, éste sustituirá al artículo del proyecto ó proposición de ley; mas si su contenido no estuviese en armonía con el resto del dictamen de la mayoría, y ésta resistiese variar de opinión, se observará lo dispuesto en el art. 150.

Art. 141. La aprobación de un voto particular envuelve la desaprobación de todos los demás que se refieren al mismo proyecto ó artículo.

TITULO XVI

ENMIENDAS Y ADICIONES

Art. 142. Las enmiendas y adiciones que se hicieren al dictamen de una Comisión, se presentarán á la Mesa, ó en la Secretaría el día antes, o menos, de anunciarse ó de abrirse la discusión del proyecto ó artículo á que se contraigan, cuyo requisito no podrá darse *primera* lectura si mismas, ni pasarán á la Comisión. Presen

tadas con la anticipación expresada, se imprimirán y repartirán á los Senadores.

Art. 143. Cumplidos los requisitos de que habla el artículo anterior, y dada *segunda* lectura de las enmiendas ó adiciones por su orden, al abrirse la discusión del artículo á que se refieran, la Comisión dirá si las admite ó no. En el primer caso, se discutirán con el proyecto ó artículo á que afecten.

Art. 144. Si no las admite la Comisión, se concederá la palabra para su apoyo al autor ó á uno de sus autores, empezándose por la que, á juicio de la Mesa, oyendo á la Comisión, se separe más del artículo ó proyecto á que se refieran. Contestará un individuo de la Comisión, y en seguida se preguntará al Senado si la toma ó no en consideración.

Art. 145. En caso negativo se considerará completamente desechada la enmienda ó adición; y en el afirmativo, se discutirá con el artículo ó proyecto á que corresponda, salvo aquellas cuya importancia sea tal, que el Senado acuerde que se voten previamente y con separación.

Art. 146. De lo dispuesto en el art. 142 se exceptúan las enmiendas y adiciones que se presenten en una sesión por consecuencia de otras aprobadas en la misma, y que de algún modo tengan relación ó puedan afectar á otros artículos no discutidos ni aprobados. De estas enmiendas ó adiciones se dará primera lectura en el acto de presentarlas, pasando á la Comisión, y se podrán discutir cuando se llegue al artículo sobre que recaigan, después de su segunda lectura y de manifestar la Comisión si las acepta ó no, sin que se impriman ni repartan, y en la misma sesión. Si la discusión no pudiese verificarse hasta otro día, se imprimirán y repartirán.

o dispuesto en este artículo es aplicable á las enmiendas y adiciones á dictámenes declarados válidos por el Senado.

TÍTULO XVII

DISCURSO DE LA CORONA

Art. 147. La contestación al discurso de la Corona se discutirá sólo en la totalidad.

Art. 148. La Comisión dará su dictamen á los diez días de su nombramiento.

Impreso aquél, y después de haber estado dos días sobre la mesa, se procederá á la discusión, la cual se declarará cerrada cuando hayan hablado tres Senadores en contra y tres en pro.

Si se presentaren enmiendas al dictamen, se discutirán sólo las dos que, á juicio de la Mesa, se estimen más de él.

Discutidas en la forma prescrita para las enmiendas, se procederá á la votación.

TÍTULO XVIII

DICTÁMENES RETIRADOS Ó DESECHADOS

Art. 149. Cuando se desapruuebe el dictamen en la Comisión, después de haberlo sido también los votos particulares y las enmiendas ó adiciones, el Senado resolverá si ha de ponerse á discusión el proyecto de ley ó proposición que dió origen al dictamen, ó si ha de volver el asunto á la Comisión.

Art. 150. Si la Comisión creyese no deber dar dictamen, se procederá por las Secciones al nombramiento de nueva Comisión. Si la desaprobación fuese de uno ó más artículos, y la Comisión prestase á la reforma, se encargará la nueva discusión al Senador que hubiere hecho la im-

pugnación de palabra ó por medio de adiciones ó enmiendas, y el Senado procederá en otra sesión á su discusión y votación.

Art. 151. Las Comisiones pueden retirar sus dictámenes, antes de que se pongan á votación, para enmendarlos, variarlos y presentarlos de nuevo.

También pueden retirar alguna parte ó artículo para que quede suprimido ó para redactarlo nuevamente.

Art. 152. Las Comisiones que informen sobre proyectos de ley, aunque provengan del Rey ó del Congreso, podrán proponer que se desechen.

Si se desaprueba el dictamen de la Comisión y ésta repugna variarlo, se nombrará otra por las Secciones.

TÍTULO XIX

APROBACIÓN DEFINITIVA

Art. 153. Concluída la discusión y votación de un proyecto de ley ó de cualquiera otra clase, la Secretaría lo redactará, de conformidad con lo acordado por el Senado, lo revisará la Comisión de corrección de estilo y se someterá á la aprobación definitiva, debiendo permanecer sobre la mesa veinticuatro horas después de anunciada, para que puedan los Senadores ver si está conforme con lo resuelto, salvo los casos en que el Senado declare urgente el proyecto, en los que deberá votarse en el acto, á no ser de mucha extensión.

TÍTULO XX

USO DE LA PALABRA

Art. 154. Las discusiones se verificarán siempre hablando los Senadores alternativamente en

REGLAMENTO DEL SENADO

va y en pro de la proposición ó dictamen que scuta, según el orden en que se hallen inscrites en las listas de la Presidencia.

t. 155. Ningún Senador podrá hablar sin después de leído un dictamen ó asunto para discusión, haya pedido la palabra pública y le fuere concedida.

t. 156. No se podrá pedir nunca la palabra para anunciar la discusión del asunto sobre el cual se quiere hacer uso de ella.

t. 157. Los Senadores dirigirán siempre la palabra al Senado, y no á un individuo ó fracción del mismo.

t. 158. Aun cuando un Senador haya hablado, podrá volver á usar de la palabra si se anuncia la discusión y le tocara el turno ó se lo señalan.

t. 159. En ambos casos el Senador podrá también rectificar equivocaciones puramente de hecho ó de concepto, pero sin entrar en la cuestión principal.

t. 160. Los Senadores que hubieren pedido la palabra en un mismo sentido, podrán cederse el turno entre sí.

t. 161. Las Comisiones cuyo dictamen se discute, y el autor de una proposición sobre la cual no hubiere recaído dictamen de Comisión, tendrán preferencia en el uso de la palabra en todos los turnos en pro que permite el Reglamento.

t. 162. Los Ministros obtendrán la palabra antes que la pidan, y harán uso de ella sin perder turno.

t. 163. Todo discurso se pronunciará de pie, y se continuará sin intermisión, salvo en las horas de descanso de Reglamento y el Presidente no acordara prorrogar la sesión.

t. 164. Para que un discurso pueda prorrogar

garse más tiempo que el de una sesión, se necesita el acuerdo del Senado.

Art. 165. En cualquiera estado de la discusión podrá pedir un Senador la observancia del Reglamento, citando los artículos cuya aplicación reclame, y la lectura de los mismos, si le conviene.

Art. 166. Cualquier Senador podrá pedir, durante la discusión, ó antes de votar, la lectura de las leyes, órdenes y documentos que sean conducentes á la ilustración del asunto de que se trate.

Art. 167. Nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino para ser llamado al orden ó á la cuestión por el Presidente.

Art. 168. Las discusiones de reforma constitucional, de los presupuestos y de cualquiera otro proyecto de ley, no podrán interrumpirse para hacer preguntas ó tratar de interpelaciones y de proposiciones que no sean de ley, sin un acuerdo del Senado, á propuesta del Presidente ó á petición de un Senador, excepto los lunes, días especialmente destinados á estos asuntos y á peticiones, sin perjuicio de continuar después los ordinarios.

Esto no obsta para que en cualquier día, y antes ó después de la orden del mismo, puedan los Senadores dirigir á los Ministros las preguntas que tengan por conveniente, si la Mesa los autorizase para ello ó si lo acordase el Senado, cuando el Senador interesado proponga que se le consulte.

Podrán también, sin dicha autorización y acuerdo, anunciar de palabra ó por escrito interpelaciones á los Ministros en los términos establecidos en los artículos 181 y 182.

Art. 169. El que en los discursos pronunciados ó documentos que se leyeren fuere aludido en su persona, nombrándole, ó en sus hechos propios ó personales, podrá usar de la palabra sin entrar

REGLAMENTO DEL C

fondo de la cuestión, y a
en la inmediata. Para h
es necesario el acuerdo d
a estos casos no se permi
del que se defiende y de
a alusión, si quiere conte
se pasará á otro asunto.

L. 170. Si la alusión f
te ó persona que hubiese fallecido, y un Se-
quisiere hablar en su defensa, se consul-
al Senado.

L. 171. Los Senadores serán llamados á la
ión siempre que notoriamente estuvieren fue-
ella, ya por digresiones extrañas al punto
e se trate, ya por renovar la discusión del
discutido y aprobado.

L. 172. Asimismo los Senadores serán lla-
s al orden siempre que en sus discursos fal-
con insistencia á lo establecido para las
siones, ó cuando profieran palabras en cual-
sentido peligrosas ú ofensivas al decoro del
o ó de un individuo de la Familia Real ó
nado.

L. 173. Cuando un Senador sea llamado al
por tres veces en una misma sesión, el
dente hará uso en el acto de las facultades
e concede el Reglamento; pero si el Senador
se la palabra para justificarse, deberá con-
sela sólo para que exponga las razones que
re por conveniente, resolviendo en su vista
ado lo que crea oportuno.

L. 174. Si se profiriese alguna expresión
nante ú ofensiva á algún Senador, éste po-
exclamar luego que concluya de hablar el que
ofirió; y si éste no satisface al Senado ó al
lor que se crea ofendido, mandará el Presi
que se escriba por un Secretario; si hubiere

tiempo, se deliberará sobre ella aquel mismo día, y si no, se dejará para la sesión inmediata, acordando el Senado lo que estime conveniente á su propio decoro y á la unión que debe reinar entre todos los Senadores.

TÍTULO XXI

DE LAS PROPOSICIONES QUE NO SON DE LEY

Art. 175. Si durante una discusión se hiciese alguna proposición incidental ó que tenga por objeto fijar el curso que deba darse á los negocios, el Senado, oyendo al autor de ella, acordará lo que juzgue oportuno.

El discurso del autor en este caso se ceñirá estrictamente al objeto de la proposición, sin entrar de ninguna manera en la cuestión principal.

Art. 176. La proposición de *no haber lugar á deliberar*, tendrá preferencia sobre cualquiera otra, y procederá su apoyo cuando el Senado haya tomado en consideración aquella á que se refiere; pero no podrá presentarse en la discusión de los proyectos de ley.

Art. 177. Las proposiciones de que tratan los dos artículos anteriores podrán presentarse con la firma de un solo Senador.

Art. 178. Las demás proposiciones que no tengan por objeto una ley, necesitarán la firma de siete Senadores.

Art. 179. De estas últimas proposiciones se dará lectura en la sesión en que se presenten, si se entregan antes de entrar en la orden del día, y si no, en la inmediata. El Senado, sin discusión, acordará, á propuesta del Presidente, y cuando la presentación no se haya hecho en el día señalado,

REGLAMENTO DEL

a de apoyar acto cont
destinado á estos asun
ra su apoyo, cuando lle
o, se concederá la palab
y el Senado decidirá
eración.

180. El Senado dec_____ , _____
madas en consideración, si han de pasar á
cciones y ha de informar sobre ellas una
ión, ó si se discutirán sin este trámite.

se dará, sin embargo, cuenta en el Senado,
on las formalidades prescritas para propo-
es de ley, de aquellas que tengan por objeto
sación de algún Ministro.

TÍTULO XXII

DE LAS INTERPELACIONES Y PREGUNTAS

. 181. Todo Senador tiene el derecho de
elar á los Ministros, anunciándolo con an-
idad de palabra ó por escrito, y expresando
bos casos de un modo explícito el objeto de
rpelación.

. 182. Podrá hacer el anuncio de palabra
o se halle presente el Ministro del ramo, el
ontestará en el acto, ó se tomará tiempo
ontestar si el Gobierno cree ó no conve-
dar explicaciones sobre el objeto indicado.
l día en que estará dispuesto á verificarlo.

mismo hará el Ministro cuando la inter-
ón se haya anunciado al Gobierno por la
aría del Senado.

. 183. El día señalado para la interpela-
el Senador interpelante la explanará en los
os más convenientes; podrá replicar á la
tación del Gobierno, y sin que pueda tomar

parte en el debate más que otro Senador, se pasará en seguida á otro asunto.

Art. 184. De resultas de la interpelación, podrán los Senadores presentar las proposiciones que crean convenientes, en la misma sesión ó en la inmediata.

Art. 185. Los Senadores pueden también dirigir preguntas al Gobierno sobre asuntos de interés público, á que aquél contestará, si lo tuviere por conveniente, ya en el acto, ya aplazando la contestación, y sobre ellas, aunque sean contestadas, no habrá discusión.

Art. 186. En igual forma podrán los Senadores dirigir preguntas á la Mesa y á las Comisiones sobre el estado de los asuntos sometidos á su examen.

TÍTULO XXIII

DE LOS MENSAJES AL REY

Art. 187. Para la redacción de los mensajes que el Senado dirija á S. M., se nombrarán Comisiones especiales del modo que acuerde el Senado.

Art. 188. El mismo resolverá, cuando llegue el caso, si el mensaje que se haya de dirigir á Su Majestad se habrá de discutir y votar de una vez ó por partes.

Aun cuando los mensajes se voten de una vez, cualquier Senador podrá presentar las enmiendas y adiciones que le parezcan, y el Senado determinará las que deben ser admitidas, las cuales se discutirán con prioridad al mensaje.

Art. 189. Las Comisiones de etiqueta y de mensaje serán presididas por el Presidente del Senado ó por uno de los Vicepresidentes que él designare.

TÍTULO

OS VOTOS DE CENSURA DECLARACIONES

.. 190. Siempre que
ar un voto de censur
o, firmando la propo
ho, pasará á las Secc
.. 191. Los votos de
r también siete Sena
á las Secciones y si

.. 192. Para las dec
la de haber merecid
ber de inscribirse alg
el salón de sesiones,
i de Comisión.

.. 193. Para hacer e
estar el Senado defin

TÍTULO

DE LAS PET

.. 194. De todas las p
iado se dará cuenta j
de prioridad con qu
Secretaría, expresan
el peticionario y el o

.. 195. Estas listas,
leran, pasarán inme
para que informe á la mayor brevedad po-

.. 196. Los informes de la Comisión se im-
rán por Apéndice en el *Diario de las Sesio-*

nes, á fin de que los lunes por lo menos de cada semana se ocupe el Senado en resolverlas por el mismo orden con que han sido presentadas.

Art. 197. Si la Comisión de peticiones creyese que alguna de ellas no debe tomarse en consideración, usará de la fórmula *no há lugar á deliberar*.

Art. 198. Si creyese que son dignas de tomarse en consideración, pero que toca resolverlas al Gobierno ó á los Tribunales, propondrá su remisión al Ministerio á que correspondan.

Art. 199. Si creyese que deben tomarse en consideración, por ser útiles para trabajos legislativos, propondrá que se tengan presentes en tiempo oportuno. Estas peticiones quedarán en la Secretaría á disposición de todos los Senadores.

Art. 200. Ninguna petición se remitirá al Gobierno con recomendación directa ni indirecta por parte del Senado: pero sí se podrá acordar que dé cuenta de la resolución que sobre ella recaiga.

TÍTULO XXVI

DE LAS VOTACIONES

Art. 201. El Senado votará de los cuatro modos siguientes:

- 1.º Levantándose los que aprueban y quedando sentados los que reprueben.
- 2.º Por votación nominal.
- 3.º Por papeletas.
- 4.º Por bolas.

Art. 202. La votación ordinaria es la primera de las cuatro que quedan expresadas. Su resultado lo anunciará uno de los cuatro Secretarios.

Art. 203. Si el Secretario tuviese duda, ó algún Senador lo reclamase, aun después de publi-

ión, el Presidente nombrará un Se-
que estén en pie, y otro de los que
sentados, para que cuenten los que
otros dos en la propia forma para
quen de los que reprueben, publi-
uida el resultado.

Ningún Senador podrá entrar en el
r de él mientras se recuenten los

Toda votación ordinaria se repetirá
te siempre que la diferencia entre los
1 y reprueben no pase de uno, y ade-
siete Senadores, ó cuando los que
votos no estén conformes después de
tado dos veces.

También será la votación nominal
lan al menos siete Senadores antes
licada la votación ordinaria.

La votación nominal se verificará
Senadores sus nombres por el orden
ieren sentados, y añadiendo *sí* ó *no*,
voto de aprobación ó desaprobación.

Toda elección de personas se hará

3.
aciones se verificarán por el mismo
as nominales, permaneciendo cada
n puesto, y pasando dos porteros por
del salón con sus urnas á recoger
, que, concluída la operación, serán
n la mesa para proceder al escrutí-
e á lo dispuesto en los artículos 210

tarios llevarán la lista de los votantes.

La elección de personas se hará siem-
una y por mayoría absoluta, menor
le excepción marcados en este Regla-
lándose la precedencia de aquéllas en

los casos en que hubiere lugar, según el orden del nombramiento.

Art. 210. Si no hubiese elección por mayoría absoluta en la primera votación, se procederá á la segunda entre los dos Senadores que hayan obtenido mayor número de votos.

Si resultaren más de dos con igual número, decidirá la suerte quién ó quiénes hayande entrar en la segunda votación.

Si en ésta hubiese empate, quedará nombrado el de mayor edad.

Art. 211. Son nulas las papeletas que contengan nombres ininteligibles, pero servirán para hacer el cómputo del número de los Senadores votantes y para fijar la mayoría de la votación.

Art. 212. El escrutinio por bolas servirá para cualquiera votación en que se califiquen los actos ó la conducta de una persona ó personas ó cuando el Senado lo acuerde por mayoría de dos terceras partes.

Art. 213. La votación por bolas se verificará permaneciendo los Senadores en sus asientos. Un portero por cada lado entregará una bola blanca y otra negra á cada Senador; otro portero pasará en seguida la urna de votación, en la cual irán los Senadores depositando la bola blanca ó la negra según aprueben ó desaprueben; y otro tercer portero pasará después á recoger en la urna de sobranes la bola que cada Senador hubiera dejado de emplear en su voto.

Los Senadores dirán su nombre en alta voz al tiempo de votar, y los Secretarios llevarán lista de los votantes.

El Presidente y los Secretarios contarán las bolas, y uno de éstos publicará la votación.

Art. 214. La votación definitiva de las leyes es la única que, con arreglo al art. 43 de la Cons-

lón, requiere la presencia de
del número total de Senadores
badas sus actas y hayan sido
nado (1).

t. 216. Cuando ocurriere en
ción ordinaria, nominal ó de l
bolas á petición de los Senado
o el debate y se repetirá la v
i resultase nuevo empate, se
sesión proxima; y si también
mpate, se entenderá desecha
ulo ó proposición,

t. 216. Lo mismo se hará c
cto de las votaciones definiti
s de ley, pero sin abrirse de nue

t. 217. Tiene derecho á vot
entre en el salón mientras no
otaciones que se hagan nom
etas ó por escrutinio de bola

t. 218. También tiene derec
r para hacer que se cuenten
tación, á fin de comprobar si
suficiente.

t. 219. Si un Senador pidie
ictamen ó proyecto se vote p
resolverá lo que estime con

t. 220. Todo Senador que s
na votación que no sea secret
to, sin motivarlo, en el Acta
ata, y podrán adherirse á las
do todos los Senadores, aun c
tes al tiempo de tomarlas.

t. 221. A toda votación pr
a si *«ha lugar á votar»*.

Véase el acuerdo primero del Apén

Antes que el Presidente declare cerrada la votación, se preguntará dos veces seguidas en alta voz por uno de los Secretarios si *«ha dejado algún Sr. Senador de votar»*.

TITULO XXVII

DE LAS TRIBUNAS

Art. 222. Los espectadores guardarán profundo silencio y el mayor respeto y compostura, sin tomar parte alguna en las discusiones con demostraciones de ningún género.

Art. 223. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán expulsados de las tribunas ó galerías en el mismo acto; y siendo el exceso mayor, se tomará con ellos la providencia que haya lugar, á juicio del Presidente, deteniéndolos en caso necesario y entregándolos á las Autoridades competentes.

En el caso de que ocurra un desorden grave que el Presidente no pueda calmar, levantará la sesión.

Art. 224. Si ocurriese algún suceso desagradable dentro del edificio del Senado, el Presidente tomará las disposiciones preventivas que su prudencia le dicte, y será obedecido respetuosamente.

TITULO XXVIII

DEL GOBIERNO INTERIOR DEL SENADO

Art. 225. El Senado en cuerpo, no asistirá á ningún acto fuera de sus sesiones.

Art. 226. La policía del Senado y del edificio en que celebre sus sesiones corresponderá á su Presidente, quien dará al efecto las órdenes oportunas.

pleados en él y al jefe de la guardia cubiere.

Bajo la dirección é inspección de la obierno interior estará el *Diario de* , el que se insertarán é imprimirán imparcialmente todos los hechos que sos que se pronuncien en sus sesiones, organizarse su redacción é manera que no deje de publicarse r día de las sesiones.

La misma Comisión, con los Secretos, hará las propuestas de los em-ecretarla, Archivo y Redacción del drá aumentarlos, disminuirlos ni n la aprobación del Senado. Ella rgo, nombrará los otros dependien-nta al Senado, y concederá en caso as temporales á los mismos y á los los.

La referida Comisión hará el pre-l de los gastos del Senado, percibirá i los fondos que para cubrirlos se oro público, y presentará mensual-do la correspondiente cuenta, que sesión secreta y se leerá luego en el primer sábado de cada mes.

La expresada Comisión formará los articulares de las dependencias del

In el intervalo de una á otra legis-idente del Senado, con dos indivi-sión de Gobierno interior que la , y su Secretario, desempeñarán las sta.

Art. 233. De las resoluciones del Senado en casos omisos ó dudosos formará la Secretaría un Apéndice, que se repartirá á los Senadores al principio de cada legislatura, y se observarán en casos análogos como adiciones provisionales al Reglamento.

TITULO XXIX

DE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DEL SENADO

Art. 232. La proposición de reforma del Reglamento seguirá los trámites de una proposición de ley.

ÍNDICE

	<u>Páginas.</u>
TITULO I.—Preliminares para la Junta preparatoria.....	421
TITULO II.—De la Junta preparatoria.....	422
TITULO III.—De la constitución interina del Senado cuando se renueve la parte electiva. ...	423
TITULO IV.—Del examen de actas, credenciales y aptitud legal.	424
TITULO V.—De la constitución definitiva del Senado.....	427
TITULO VI.—Del sorteo de Senadores para la renovación de los electivos y de las solicitudes de ingreso.	428
TITULO VII.—Del Presidente.	431
TITULO VIII.—De los Secretarios.....	433
TITULO IX.—De los Senadores.	434
TITULO X.—De las Secciones.....	435
TITULO XI.—De las Comisiones.	437
TITULO XII.—De las sesiones.	441
TITULO XIII.—De los proyectos y proposiciones de ley y proposiciones de reforma constitucional.....	443
TITULO XIV.—De las discusiones.....	445
Presupuestos y Códigos.....	446
TITULO XV.—Votos particulares.....	447
TITULO XVI.—Enmiendas y adiciones.	448
TITULO XVII.—Discurso de la Corona.....	450
TITULO XVIII.—Dictámenes retirados ó desechados.	450
TITULO XIX.—Aprobación definitiva.....	451

INDICE

	Páginas.
XX.—Uso de la palabra.....	451
XXI.—De las proposiciones que no son y.....	455
XXII.—De las interpelaciones y pre- sas.....	456
XXIII.—De los mensajes al Rey.....	457
XXIV.—De los votos de censura y de las y de las declaraciones honoríficas....	458
XXV.—De las peticiones.....	458
XXVI.—De las votaciones.....	459
XXVII.—De las tribunas.....	463
XXVIII.—Del gobierno interior del Se-	463
XXIX.—De las reformas del Reglamento Senado.....	465
ce al Reglamento.—Acuerdos del Senado.	466

LEY DE PROCEDIMIENTO

CUANDO EL SENADO SE CONSTITUYE EN TRIBUNAL DE JUSTICIA

Doña ISABEL II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

TITULO PRIMERO

DE LA JURISDICCIÓN DEL SENADO, DE SU ORGANIZACIÓN
Y DE LA FORMA DE CONSTITUIRSE EN TRIBUNAL

SECCION PRIMERA

De la jurisdicción del Senado.

Artículo 1.º Corresponderá al Senado como Tribunal:

1.º Juzgar á los Ministros, cuando para hacer efectiva su responsabilidad sean acusados por el Congreso de los Diputados.

2.º Conocer, en virtud del Real decreto acordado en Consejo de Ministros, de las causas sobre delitos graves contra la persona ó dignidad del Rey, ó contra la seguridad interior ó exterior del Estado.

3.º Conocer también de todos los delitos que cometan los Senadores que hayan jurado su cargo.

.. 2.º El Senado conocerá así del delito principal como de los conexos con él que aparezcan en el proceso.

.. 3.º No obstante lo dispuesto en el párrafo del art. 1.º, cuando en virtud de lo que ordena el art. 41 (1) de la Constitución del Reino se le autoriza para procesar á un Senador, si fuese militar y hubiese delinquido en campaña podrá el Senado permitir, si lo estimare conveniente al bien del Estado, que conozca de la causa el Tribunal que sea competente, con arreglo al prescrito ó que en adelante prescribieren las Leyes y Ordenanzas militares.

.. 4.º Normalmente los Senadores eclesiásticos, por delitos y delitos puramente eclesiásticos, serán juzgados por los Tribunales de su fuero, con arreglo á los cánones de la Iglesia y á las leyes del Reino.

SECCION SEGUNDA

La organización del Senado como Tribunal.

.. 4.º El Senado, como Tribunal, se compone de los Senadores del estado seglar que han jurado su cargo. Será Presidente el que lo fuere del Senado, y hallándose cerradas las Cortes, el que lo hubiere sido en la última legislatura. En su defecto, en uno y otro caso, el Vicepresidente á quien corresponda.

.. 5.º Incumbirá al Presidente del Tribunal:

1.º Mantener el orden y el decoro en los sesiones.

2.º Dirigir la actuación del proceso y decretar las diligencias que estime conducentes para la aclaración de la verdad.

.. 3.º El art. 47 de la Constitución de 1876.

3.º Firmar las sentencias definitivas é interlocutorias que dicte el Tribunal.

Art. 6.º El Presidente será auxiliado en el ejercicio de su cargo por los Comisarios que el Tribunal crea conveniente elegir entre los individuos de su seno para cada causa. Cada uno de los Comisarios desempeñará las atribuciones que el Presidente le delegare.

Art. 7.º El Presidente nombrará en cada caso el Secretario del Tribunal.

Art. 8.º En cada proceso desempeñará el cargo de fiscal un Comisario nombrado por el Gobierno por medio de Real decreto acordado en Consejo de Ministros. Le asistirán en calidad de abogados fiscales los letrados que el fiscal nombre.

Art. 9.º Los porteros del Senado ejercerán el oficio de porteros de estrados del Tribunal, á las órdenes del Presidente.

SECCION TERCERA

De la forma de constituirse el Senado en Tribunal.

Art. 10. Para constituirse el Senado y celebrar sus sesiones como Tribunal, ha de preceder Real convocatoria acordada en Consejo de Ministros, y han de concurrir 60 Senadores cuando menos.

Art. 11. Todos los Senadores del estado seglar estarán obligados á concurrir. Los que tengan motivos justos para excusarse, los expondrán por escrito al Senado, y éste resolverá lo que estime.

Art. 12. No podrán ser jueces los Senadores que hubiesen sido nombrados con posterioridad á la perpetración del hecho que motive el procedimiento.

TITULO II

ORDEN DE PROCEDER EN EL SUMARIO Y EN EL JUICIO PÚBLICO

SECCION PRIMERA

Del orden de proceder en el sumario.

Art. 13. En el sumario podrán emplearse todos los medios de investigación admitidos en el derecho común, excepto la confesión.

Art. 14. A excepción de las Personas de la Familia, ninguna otra podrá excusarse de parecer á prestar declaración como testigo á o de exención ó de fuero. La que resistiere asistirle impedimento justo, podrá ser compelida por todos los medios legítimos de apremio, hasta por el de hacerla conducir á la audiencia á fuerza pública.

Art. 15. Cuando el Comisario ó Comisarios no pudiesen, por la distancia ú otro motivo igualmente fundado, instruir por sí alguna diligencia, el Presidente delegará el encargo en el juez local que le parezca más á propósito.

Art. 16. El arresto de los culpables, el embargo de los bienes y la concesión de libertad condicional á derecho, se acordarán por el Presidente y los Comisarios á pluralidad de votos. En caso de empate, el voto del Presidente será decisivo. Cuando habiendo de proceder como Tribunal estuviere reunido el Senado, el Presidente designará Senadores que en calidad de jueces adicionales le asistan interinamente, hasta que, concurrido aquél, se nombren los Comisarios.

Art. 17. A la posible brevedad, desde que á juicio

cio del Presidente estuviere completo el sumario, el Comisario que aquél designe dará cuenta al Senado, por medio de informe, del resultado de las actuaciones.

Con igual brevedad el Tribunal declarará concluso el sumario, ó decretará las diligencias que estime indispensables.

Art. 18. Instruída información sumaria ante cualquier otro Juzgado ó Tribunal, si resultare que el delito es por su naturaleza de los atribuídos á la jurisdicción del Senado, el juez remitirá el proceso al Ministerio de Gracia y Justicia para los efectos del art. 1.º de esta ley.

Art. 19. Cuando se dé cuenta del resultado del sumario, si se dudare de la competencia del Tribunal, el Presidente someterá á la decisión de éste la cuestión preliminar de competencia.

Art. 20. En el término de tres á ocho días después de concluso el sumario, ó resuelta en su caso la cuestión de competencia, el Tribunal, á puerta cerrada y por votación secreta, declarará si há ó no lugar á la acusación.

Art. 21. Para que se declare haber lugar á la acusación, será necesaria la mayoría absoluta de los Senadores presentes.

SECCION SEGUNDA

Del orden de proceder en el juicio público.

Art. 22. Luego que se declare concluso el sumario, se requerirá al procesado para que nombre el defensor ó defensores que le hayan de asistir y defender en el progreso de la causa. Si no los nombrare, el Presidente lo hará oficio.

Art. 23. En el término más breve posible, el

cretario entregará al Fiscal una copia del sumario, y otra á cada uno de los acusados.

Art. 24. El Fiscal, dentro del término que le fije el Tribunal, á propuesta del Presidente, desde que haya recibido la copia del sumario, presentará el escrito de acusación y lista de los testigos de cargo que hayan de ser á su instancia examinados.

Art. 25. Al fin del escrito de acusación, y ante la petición correspondiente, hará el Fiscal resumen en párrafos numerados, en que se presente:

1.º El delito cometido y sus circunstancias agravantes ó atenuantes.

2.º La participación que en él hubieren tenido los acusados como autores, cómplices ó encubridores.

3.º La pena legal que debe imponérseles.

Art. 26. Para que prepare su defensa, se le concederá al acusado el término que el Tribunal estime bastante, no pudiendo bajar de diez días. Al efecto, se le comunicará al acusado copia del escrito de acusación y lista de los testigos de cargo y de los Senadores que hayan de juzgarle.

Dentro de aquel término presentará el acusado la de los testigos de descargo, la cual se comunicará al acusador veinticuatro horas antes, por menos, del día que se señale para la audiencia pública.

Art. 27. No podrá ser examinado en el juicio público ningún testigo cuyo nombre no haya sido comunicado al acusador ó al acusado con la anticipación prevenida en el artículo anterior.

Art. 28. Sin expresar causa, podrán recusar respectivamente el acusador y el acusado ó acusados la décima parte de los Senadores.

Art. 29. Transcurridos los términos de que ha-

bla el art. 26, el Presidente señalará día para la vista pública.

A ésta concurrirán el acusado y sus defensores, y en ella leerá el Secretario todo el proceso, el escrito de acusación, y la lista de los testigos de cargo y descargo.

Art. 30. Los testigos serán colocados en sala separada de la de audiencia, y entrarán en ésta cuando sean llamados á declarar.

Adoptará el Presidente las demás precauciones que le aconseje su prudencia, para evitar confabulación entre los testigos.

Art. 31. En cada uno de los días de la audiencia pública se leerá por el Secretario del Tribunal la lista de los Senadores presentes, haciéndose constar así en el proceso.

No podrá tomar parte en votaciones ulteriores el Senador que deje de asistir á cualquiera de las sesiones de la vista pública.

Art. 32. El testigo no podrá ser interrumpido mientras no concluya su declaración.

Art. 33. Terminada que sea la declaración del testigo, las partes podrán dirigirle preguntas y repreguntas acerca de ella, por medio del Presidente, á menos que éste no las deseche por inoportunas.

Art. 34. Así el Presidente como los Senadores harán al acusado y á los testigos las preguntas que se les ofrezcan en vista de las declaraciones dadas en la audiencia pública, de los documentos que se produzcan, ó de los otros medios de cargo y descargo que se hayan suministrado.

Art. 35. El Secretario irá extendiendo un acta de cada sesión en el Tribunal, á medida que ésta se celebre.

Art. 36. Empezada la vista en audiencia pública, se continuará diariamente y sin otras inte-

pciones que las que, á ju
esarias.

art. 37. Concluido el a
cusador sostendrá de pa
modificaciones á que ha
es, y le contestará el de
ando el primero y col
do, si lo estimaren conveniente.

Cuantas veces pida la palabra el acusado, le
concedida.

art. 38. El Presidente, ó el Comisario que él
gue, hará en sesión secreta el resumen del de
exponiendo antes los méritos de la causa, y
seguida propondrá la cuestión en esta forma:
s culpable el acusado del delito que se le
uta?»

art. 39. En el caso de resolverse afirmativa-
te esta pregunta, se hará la siguiente: «¿Es
pable el acusado con las circunstancias expre-
as en el resumen del escrito de acusación?»

art. 40. Si de la vista pública hubiere apare-
alguna circunstancia agravante ó atenuante
tida en el escrito de acusación, se preguntará
tribunal si el acusado ha cometido el delito
aquella circunstancia.

art. 41. Si el acusado hubiere alegado en su
ensa alguna de las circunstancias que según
leyes eximen de responsabilidad, el Presidente
guntará antes de la pregunta prevenida en el
38, si tal circunstancia está probada.

art. 42. En las votaciones sobre la calificación
hecho se atenderán los Senadores á lo que les
e su conciencia.

art. 43. La declaración de culpabilidad se vo-
í siempre separadamente de la imposición de
ena.

art. 44. Para la declaración de culpabilidad y

de sus circunstancias agravantes, se necesitarán las dos terceras partes de votos.

Art. 45. Cuando la declaración de culpabilidad y de sus circunstancias se hubiere hecho en conformidad de la acusación, se pondrá á discusión la pena que en ésta se pida.

Cerrada la discusión se hará la votación por bolas.

Art. 46. Si no se aprobare la pena pedida en la acusación, ó si la declaración de culpabilidad se hubiere hecho con circunstancias diferentes de las expresadas en el resumen de la acusación, se nombrará por el tribunal una Comisión de cinco individuos, la cual propondrá la nueva pena que crea procedente.

El dictamen de esta Comisión se discutirá, y en seguida se votará por bolas.

Art. 47. Si no resultare sentencia, la Comisión propondrá una nueva pena, y su dictamen se discutirá y votará como en el anterior. En el caso de ser aquél desaprobado, propondrá la Comisión nuevos dictámenes hasta que resulte sentencia.

Art. 48. Para la imposición de la pena de muerte se necesitarán las tres cuartas partes de votos de los Senadores presentes; para las demás bastará la mayoría absoluta.

Art. 48. La sentencia será siempre motivada.

No podrán imponerse en ella más penas que las señaladas por la ley, graduándolas según ésta prevenga.

Constituído el Tribunal para dictar sentencia, no podrá separarse sin haberla dictado.

Art. 50. Cuando el Tribunal condenare á la reparación de daños ó indemnización de perjuicios, sin determinar la cantidad, corresponderá á los Tribunales ordinarios la acción civil sobre la reclamación del importe.

51. En sesión el procesado, pucia, la cual causa inmediatamente n e pasará copia a

52. Cuando el sposición del Tri en rebeldía.

53. El Tribuna o común del Rein esente.

TITU

SICIONES PARTICUL PROCESOS DE

54., En las cau ros de la Corona p ad, se guardarán lvo las modificac os siguientes.

55. Para la acu ará en el Congre ición, que seguirá ley, hasta que re greso.

56. Si el Congre usación, nombrar de su seno para

57. Para decidi ón, se necesitará s que para votar l greso definitivame

58. La discusió

no lugar á la acusación, será pública, y siempre ordinaria.

Art. 59. Todas las votaciones relativas á la acusación de los Ministros serán secretas.

Art. 60. Si los individuos de cuya responsabilidad se trate pretendieren concurrir á defenderse, podrán hacerlo, ocupando el lugar que á este fin les señale el Presidente, si no tuvieren asiento en el Congreso.

Art. 61. Los discursos que los mismos pronuncien en su defensa, no consumen turno en la discusión.

Si en vez de concurrir personalmente, remittieren escritos ó documentos para su defensa, les serán admitidos y leídos en la sesión.

Art. 62. Los Ministros de cuya acusación se trate, estarán bajo la salvaguardia del Congreso hasta que se haya declarado haber ó no lugar á la acusación ante el Senado.

Art. 63. Sin necesidad de Real convocatoria se constituirá en Tribunal el Senado, luego que reciba el mensaje de acusación que le dirija el Congreso.

Art. 64. La Comisión nombrada por el Congreso sostendrá la acusación ante el Senado. El Ministro acusado podrá nombrar los defensores que tenga por conveniente. Acusadores y defensores guardarán lo prescrito en el art. 37 de esta ley.

Art. 65. En procesos contra Ministros no se procederá por el Senado á la declaración de si há ó no lugar á la acusación.

Art. 66. Cuando por cualquiera causa cese de ejercer sus funciones el Congreso, la Comisión nombrada por éste para sostener la acusación continuará desempeñando las suyas hasta la terminación del juicio.

LEY DE PROCEDIMIENTO

to:

nos á todos los Tribunales, Justicias, rnadores y demás Autoridades, así ci-militares y eclesiásticas, de cualquiera uidad, que guarden y hagan guardar, ejecutar la presente ley en todas sus

1 Aranjuez á 11 de Mayo de 1849.==

2.==El Ministro de Gracia y Justicia, razola.

INDICE

	<u>Páginas.</u>
TITULO I. —De la jurisdicción del Senado, de su organización y de la forma de constituirse en Tribunal.— <i>Sección primera.</i> —De la jurisdicción del Senado.....	469
<i>Sección segunda.</i> —De la organización del Senado como Tribunal.....	470
<i>Sección tercera.</i> —De la forma de constituirse el Senado en Tribunal.....	471
TITULO II. —Del orden de proceder en el sumario y en el juicio público.— <i>Sección primera.</i> —Del orden de proceder en el sumario...	472
<i>Sección segunda.</i> —Del orden de proceder en el juicio público.....	473
TITULO III. —Disposiciones particulares relativas á los procesos de los Ministros.....	478

LEY PROVINCIAL ⁽¹⁾

Don ALFONSO XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

TITULO PRIMERO

CAPITULO PRIMERO

De las provincias, su territorio y habitantes.

Artículo 1.º El territorio de la Nación española en la Península é islas adyacentes se divide para su administración y régimen en provincias.

Art. 2.º El número de provincias, sus límites y capitales, son los que están determinados por las disposiciones vigentes.

Art. 3.º No se hará alteración alguna en los límites y capitalidad de ninguna provincia sino por medio de una ley.

Sin embargo, el Gobierno podrá cambiar, oyendo al Consejo de Estado en pleno, la dependencia de un término municipal de una provincia á otra,

(1) Para la aplicación de los capítulos 2.º y 5.º del título 2.º de esta ley deberá tenerse en cuenta lo dispuesto acerca de los particulares que comprende, el Real decreto de 5 de Noviembre de 1890, sobre adaptación de la ley electoral de 26 de Junio de este año á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales.

que concurre la conformidad de los Ayun-
s y Diputaciones provinciales interesados.

• Son aplicables á los habitantes de las
as las disposiciones de la ley municipal
ativo á su condición y derechos.

TITULO II

CAPITULO II

la administración de las provincias.

.º El régimen y administración de las
as corresponde:

1.º Gobernador.

2.º la Diputación provincial.

3.º la Comisión provincial.

• Corresponde al Gobierno el nombra-
separación de los Gobernadores, así como
os los empleados que bajo sus órdenes
nciones no reservadas por esta ley ni por
a Diputación ó á la Comisión provincial.

• La Diputación provincial se compone
putados elegidos por los habitantes de la
a á quienes la presente ley reconoce este
y en la forma que la misma ley y la
determinen.

1.º (1). Habrá en cada provincia el nú-
Diputados que resulte de la agrupación

—
artículo y los dos siguientes continúan en vigor por
el Real decreto de adaptación de la ley electoral de
de 1890 á las elecciones de Diputados provinciales y
es.

división de distrito, véase el Real decreto de 31 de
1882, cuyo art. 1.º fué puesto también en vigor por el
decreto de adaptación anteriormente citado, con las
ones introducidas por las leyes de 3 de Julio de 1893
ro de 1838.

de cada dos partidos judiciales precisamente colindantes en un distrito, que elegirá cuatro Diputados.

Cuando el número de partidos judiciales sea impar, aquel que cuente mayor número de habitantes formará por sí un solo distrito, que elegirá cuatro Diputados.

En las provincias que tengan seis, siete u ocho partidos judiciales, se formarán cinco agrupaciones electorales, y para ello constituirán distritos por sí solos los partidos judiciales de mayor número de habitantes.

Cuando las provincias se compongan de cinco ó de menos partidos judiciales, cada uno formará por sí solo distrito, eligiendo cuatro Diputados.

Art. 9.º Para formar las agrupaciones ó distritos se procurará la mayor igualdad posible en cuanto al número de habitantes que hayan de constituirlos, sin desatender por esto la circunstancia indispensable de que sean colindantes los partidos judiciales que los compongan.

Art. 10. La capitalidad de cada distrito se fijará en el pueblo cabeza de partido cuyo Juzgado sea de mayor categoría. Si los dos que compongan un distrito son de la misma categoría, la capitalidad se establecerá en la población cabeza de partido de mayor número de habitantes.

Art. 11. Cada elector votará tres candidatos. Si las papeletas de votación contuvieren más nombres, el voto se computará solamente á los que ocupen los tres primeros lugares.

Art. 12. La Comisión provincial se compone de tantos Diputados cuantos sean los distritos que formen la provincia.

Será su Presidente el Gobernador, y tendrá un Vicepresidente que elegirá la Diputación todos los años en su primera sesión, entre los individuos

van componer en aqu
elección se hará sien

13. La Diputación e
sesiones después de c
ibución de los Diputa
igual número, cuida
utados de un mismo

i una de estas seccion
io la Comisión provin
á el turno que aquell

os casos de suspensió
enfermedad ó licencia
o ausente el de su di
ntes indicado.

CAPITULO

Del gobierno de las j

.4. El Gobierno de la
l Gobernador, como r
le S. M.

.5. El nombramient
rovincia y su separaci
es decretos acordados
xpedidos por la Presi
len ser nombrados Gc
ayores de 30 años qu
iciones siguientes:

haber desempeñado d
uos con categoría de
primera clase, ó ha
de un año con la ca
ás de dos con la de t
tener más de quince a

ministrativos prestados al Estado ó á la provincia, siempre que el último destino haya sido de categoría superior á la de Jefe de Negociado de tercera clase.

3.º Haber sido Diputado á Cortes ó Senador electivo durante una legislatura completa.

4.º Haber sido elegido Diputado provincial por lo menos dos veces, habiendo tomado posesión y desempeñado el cargo, sin haber cesado en él por renuncia.

5.º Haber sido Magistrado de cualquiera Audiencia ó Teniente Fiscal por más de dos años, ó haber desempeñado un cargo superior á los dos expresados en la carrera judicial.

6.º Haber desempeñado el cargo de Alcalde en propiedad por más de dos años en capitales de provincia de primera ó de segunda clase, ó haber pertenecido por el mismo plazo á la Comisión provincial.

7.º Haber sido Secretario de Gobierno por más de dos años en provincias de primera clase.

8.º Ser ó haber sido Secretario por oposición de Diputación provincial cuatro años en provincias de primera clase.

También podrán ser nombrados Gobernadores los militares que cuenten veinticinco años de servicios, y de ellos diez con empleo efectivo de Jefes.

También podrán ser nombrados Gobernadores de provincia los oficiales del Consejo de Estado que cuenten diez años de servicios en aquel alto Cuerpo, siempre que en el mismo ó en la Administración general del Estado hubiesen desempeñado por más de dos años destinos con la categoría de Jefe de Negociado (1).

(1) Modificado, como aquí se encuentra, por la ley de 21 de Agosto de 1896, publicada en la *Gaceta* de 25 del mismo mes.

periores del mismo Gobierno en el o y administrativo.

Art. 20. El Gobernador cuidará circular, ejecutar y hacer que se ej provincia de su mando las leyes, de nes y disposiciones que al efecto le Gobierno, y las de observancia gene serten en la *Gaceta de Madrid* (1).

Art. 21. Corresponde al Goberna el orden público y proteger las perso piedades en el territorio de la provi fin las Autoridades militares le pres lio cuando lo reclame.

Art. 22. También deberá reprim contrarios á la moral ó á la decenci faltas de obediencia ó de respeto á y las que en el ejercicio de sus ca los funcionarios y Corporaciones de la misma, pudiendo imponer con esta tas que no excedan de 500 pesetas, torizado para mayor suma por ley.

En defecto de pago de las multa poner el arresto supletorio hasta el quince días.

Contra la imposición de las mult interesados interponer recurso de a Ministerio de la Gobernación, previa del importe de la multa y en el tér días.

Interpuesto este recurso, el Gob tirá los antecedentes al Ministerio d mino de tercero día (2).

Art. 23. El Gobernador velará i

(1) Véase la regla 18 de la circular de la J de Agosto de 1890. (Apéndice 2.º)

(2) Idem id. id.

llo intelectual y moral del país y al fomento de sus intereses materiales.

Art. 27. Corresponde asimismo á los Gobernadores, como atribución exclusiva, provocar competencias á los Tribunales y Juzgados de todos los órdenes, cuando éstos invaden las atribuciones de la Administración.

Art. 28. Corresponde también al Gobernador, como jefe de la Administración provincial:

1.º Presidir con voto la Diputación provincial y la Comisión cuando asista á sus sesiones.

2.º Comunicar y ejecutar los acuerdos de la Diputación provincial

3.º Ejercer, respecto de los ramos de Gobernación, Hacienda y Fomento, la autoridad que determinan las leyes y reglamentos, y en la administración económica provincial y municipal las atribuciones que se le confieren por esta ley, y en general por cualesquiera otras leyes, decretos, órdenes y disposiciones del Gobierno en la parte que requiera su intervención.

4.º Inspeccionar por sí, ó por medio de sus delegados, las dependencias de la provincia y las de los Ayuntamientos,, comprobando el estado de sus Cajas, Archivos y cuentas, cuidando de que se cumplan, así las leyes y disposiciones generales, como los acuerdos de la Diputación y de la Comisión provincial, y procurando que éstas observen y cumplan su ley orgánica.

5.º Suspender los acuerdos de la Diputación y de la Comisión cuando proceda según las leyes, dando cuenta razonada al Gobierno dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la suspensión, y poniéndola también en conocimiento de la Diputación.

Art. 29. Los Gobernadores de provincia no podrán modificar ó revocar sus resoluciones cuando

las listas del censo electoral del distrito á que corresponda su domicilio respectivo, todos los españoles varones mayores de edad que acrediten saber leer y escribir.

Art. 34. Tendrán también derecho á ser inscritos, aunque no supieren leer ni escribir, los que se hallasen en alguno de los casos siguientes:

1.º Ser contribuyente dentro ó fuera del distrito de su domicilio con cualquiera cuota pagada con un año de antelación, por la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, y con dos años por subsidio industrial y de comercio.

2.º Ser licenciado, con licencia limpia de toda nota desfavorable, del servicio del Estado en el ejército ó en la marina de guerra.

No tendrán este derecho, aunque supieren leer y escribir, los que, careciendo de medios de subsistencia, reciban ésta en establecimientos sostenidos por la beneficencia pública ó privada, ó estuvieren empadronados como mendigos y autorizados para implorar la caridad pública.

Art. 35. Pueden ser Diputados provinciales los que tengan aptitud para serlo á Cortes y sean naturales de la provincia, ó lleven cuatro años consecutivos de vecindad dentro de la misma.

Art. 36. El cargo de Diputado provincial es incompatible:

1.º Con el de Diputado á Cortes.

2.º Con el de Alcalde, Teniente de Alcalde ó Concejal.

3.º Con todo empleo activo del Estado, de la Provincia ó de alguno de sus Municipios.

Se exceptúan únicamente de esta incompatibilidad los cargos de Catedráticos de Universidad, de Escuelas superiores ó de Institutos cuyos sueldos no sean satisfechos con fondos de la provincia.

Art. 37. El Diputado electo que ocho días des-

oba
 omp
 tari
 a el
 inc
 ipu
 acar
 to c
 stár
 es:
 atra
 ser
 m
 as y
 aud
 a, y
 e te
 dien
 raje
 esta
 udo
 Est
 Mu
 se c
 ido
 hab
 as
 imi
 clar

ani
 1 p
 mu

viso ó denuncia de los electores de
 rito de la provincia, que en tal caso

deberá dirigirse al Presidente de la Diputación, autorizada con la firma de tres electores.

Art. 40. Las incapacidades consignadas en el art. 38 surtirán sus efectos en cualquier tiempo en que se produzcan ó demuestren, aunque se halle admitido el Diputado á quien afecten.

Art. 41. La Diputación, bajo su responsabilidad, examinará y resolverá los casos de incapacidad antes enumerados, en una de las dos sesiones que celebre inmediatamente después de haber llegado la incapacidad á su conocimiento.

Art. 42. No se computarán á los Diputados electos los votos que hubieren obtenido en localidades en que ejercieran jurisdicción al verificarse las elecciones, ó la hubieran ejercido seis meses antes, aunque esta jurisdicción corresponda á funciones municipales ó á cargos desempeñados en comisión.

Se exceptúan de esta disposición los Diputados provinciales y los Vocales de la Comisión provincial que puedan ser reelegidos.

Art. 43. Pueden excusarse de ser Diputados provinciales antes ó después de aceptado el cargo:

1.º Los mayores de 60 años y los físicamente impedidos.

2.º Los que hayan sido Senadores, Diputados á Cortes, Diputados provinciales, Alcaldes y Concejales, hasta dos años después de haber cesado en sus respectivos cargos.

Art. 44 (1). La elección de Diputados provinciales tendrá lugar en la primera quincena del tercer mes del año económico.

(1) Téngase presente el art. 12 de la ley de 19 de Julio de 1890, publicada en la *Gaceta* de 22 del mismo mes, por el cual se prorrogó el plazo para la renovación de las Diputaciones provinciales.

los colegios electorales serán los mismos que en para las elecciones municipales.

Art. 45. Los Diputados electos presentarán sus actas en la Secretaría de la Diputación, que las recibirá en el acto por el orden de presentación, dos días antes de aquel en que deba celebrarse la apertura de las sesiones. En este día, sin necesidad de previa convocatoria, se reunirán los Diputados que hayan presentado sus actas, bajo la presidencia del Gobernador, y procederán a la constitución interina de la Diputación.

Art. 46. La Diputación provincial se constituirá interinamente ocupando la presidencia el Vocal más edad, y haciendo de Secretarios los dos jóvenes de entre los presentes.

Art. 47. Constituida la Diputación interinamente, y en la propia sesión que lo verifique, elegirá una Comisión de actas: la primera, permanente, estará compuesta de cinco Vocales, y examinará todas las actas que no se refieran a la elección de los cinco Vocales; la segunda, auxiliar, estará compuesta de tres Diputados electos y examinará las actas de los que componen la permanencia, dictando inmediatamente dictamen acerca de las mismas.

Estos dictámenes quedarán veinticuatro horas en la mesa de la Diputación, la cual resolverá sin interrupción las reclamaciones y proposiciones a que hubieran dado lugar las operaciones anteriores.

La Diputación interina no podrá anular ninguna acta; pero si al discutirse la de los Vocales la Comisión permanente de actas declarase alguna grave, se procederá a completar la Comisión, eligiéndose otro Vocal en la misma sesión.

En las provincias cuyos partidos judiciales

sean menos de cinco, la Comisión permanente de actas á que se refiere este artículo se compondrá de tantos Vocales como distritos contenga la provincia.

Art. 48. No podrán figurar en una Comisión de actas dos Diputados elegidos por una misma agrupación ó distrito. En el caso de resultar elegidos dos Diputados que representen la misma agrupación ó distrito, quedará en la Comisión aquel que hubiere obtenido más votos, y si los dos alcanzaran el mismo número, el que designe la suerte.

Art. 49. Aprobadas las actas de los Vocales de la Comisión permanente, ésta procederá al examen de las de los demás Diputados, distribuyéndolas en dos clases. Comprenderán: la primera, las que no contengan protestas ni reclamaciones, ó que las presenten fundadas en hechos ú omisiones conocidamente leves, y la segunda, aquellas actas que descubran hechos ó susciten dudas de mayor gravedad.

Art. 50. La Diputación interina sólo podrá discutir las actas declaradas leves por la Comisión permanente; las declaradas graves pasan al examen y discusión de la Diputación definitivamente constituida.

Art. 51. Aprobadas las actas leves, procederá la Diputación á constituirse, eligiendo de su seno un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios para todas las sesiones que han de celebrarse hasta la renovación.

Los Diputados que quince días después de constituida definitivamente la Diputación no hubiesen presentado sus actas en la Secretaría, se entenderá que renuncian al cargo. La Diputación declarará la vacante, procediéndose á elección parcial en la forma y tiempo que la ley determina.

art. 52. Constituida definitivamente la Diputación, se procederá al examen de las actas gra-. Si alguna fuese anulada, se declarará la va- te y se procederá á nueva elección en la mis- forma, sin perjuicio de los recurso á que liere lugar.

Si las vacantes declaradas en un distrito fue- dos, cada elector tendrá derecho á votar dos utados; si fuesen tres, tendrá derecho á vo- dos.

art. 53. Contra la resolución de la Diputación vincial anulando ó declarando la validez de una elección, se establece recurso contencioso e la Audiencia respectiva. Los interesados in- pondrán el recurso dentro de los quince días nientes á la publicación del acuerdo ó á la no- cación administrativa del mismo.

art. 54. Si la Diputación no hubiere resuelto nitivamente acerca de la validez ó nulidad de .elección antes de la tercera sesión de la re- ón semestral que se celebre inmediatamente pués de aquella en que el acta fué presentada, endrá por firme y eficaz la proclamación del utado hecha en el distrito electoral, y con de- io al electo para ser admitido á tomar parte os acuerdos de la Diputación.

La admisión del Diputado en este caso, se co- nicará á los interesados en las reclamaciones otestas contra la validez de la elección, para puedan interponer el recurso á que se refiere rtículo anterior, reclamando la nulidad del , ó la incapacidad del admitido.

Para que un acta grave se someta á discusión uerdo, bastará que lo soliciten tres de los Di- dos proclamados.

art. 55. La Diputación provincial se reunirá esariamente en la capital de la provincia todos

los años el primer día útil de los meses quinto y décimo del año económico.

Art. 56. La primera sesión de cada período será abierta por el Gobernador en nombre del Gobierno.

Art. 57. El cargo de Diputado es gratuito, honorífico, sujeto á responsabilidad, y no renunciable sino por justa causa, una vez aceptado.

Su duración es de cuatro años, haciéndose cada dos la renovación de la mitad de los distritos ó agrupaciones.

La primera designación se hará por sorteo, cesando el número mayor si el total no fuera susceptible de exacta división, y en las renovaciones sucesivas saldrán los más antiguos (1).

Art. 58. Las vacantes extraordinarias que por cualquier concepto ocurran cuando antes de la renovación general haya de verificarse alguna de las sesiones ordinarias de la Diputación, serán cubiertas por elección parcial, ingresando el elegido ó elegidos en el lugar que corresponda al Diputado ó Diputados salientes.

Cuando la vacante ocurriese por suspensión gubernativa ó judicial, ó después del plazo arriba expresado, el Gobierno la proveerá interinamente en cualquiera de los que hayan desempeñado por elección el cargo de Diputado en alguno de los partidos judiciales que compongan el distrito representado por el Diputado saliente ó suspenso. El nombrado continuará hasta que se resuelva definitivamente sobre la suspensión del Diputado á quien reemplaza, hasta la primera renovación, si

(1) Para la aplicación de los dos últimos párrafos de este artículo téngase presente el 14 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890, sobre adaptación de la ley electoral de 26 de Junio del mismo año á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales.

en ella debiera cesar aquél por el turno establecido.

En las elecciones parciales para cubrir vacantes extraordinarias, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 52.

Art. 59. A la Diputación provincial corresponde admitir ó desechar las renunciaciones y excusas y declarar las vacantes por estas causas ó la de incapacidad.

El Gobernador dispone las elecciones ordinarias y extraordinarias cuando según las leyes deban verificarse, y en la forma que las mismas determinen. Las elecciones serán anunciadas en los ocho días siguientes al acuerdo en que se funden, y se verificarán dentro de un plazo que no baje de quince días ni exceda de treinta después de la convocación.

Art. 60. La Diputación fija en su primera sesión de cada período semestral el número de las que haya de celebrar, en días consecutivos no feriados, durante el mismo. En caso de necesidad puede acordar la prórroga de sus sesiones, poniéndolo en conocimiento del Gobernador.

Si durante la celebración de las sesiones sobrevinieren causas que hicieran peligrosa su continuación, el Gobernador puede, bajo su responsabilidad, suspenderlas ó aplazarlas, dando cuenta al Gobierno dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Art. 61. La Diputación se reúne en sesión extraordinaria cuando para asuntos determinados, necesario, á juicio del Gobierno, del Gobernador ó de la Comisión provincial.

Art. 62. El Gobernador hace la convocatoria dando por escrito y en su domicilio á cada uno de los Diputados con ocho días de antelación, expresando el objeto si se trata de sesión extraordinaria. La reunión será anunciada con la misma

antelación en el *Boletín oficial* de la provincia.

Art 63. Cuando por fundados motivos crea el Gobernador que de una reunión extraordinaria pueden sobrevenir alteraciones en el orden público, suspenderá la convocatoria, dando cuenta al Gobierno y comunicándolo á la Comisión provincial en el término de tercero día.

Dentro de los quince días siguientes á la comunicación, el Gobierno resolverá precisamente lo que proceda, aprobando el acuerdo del Gobernador ó levantando la suspensión.

Esta se entiende levantada cuando pasado un mes desde el acuerdo de la convocatoria no se hubiese comunicado á la Comisión provincial resolución alguna superior en contrario.

Los plazos señalados en el párrafo anterior, y los demás análogos preceptuados por esta ley, se entienden ampliados por quince días más cuando se trate de las islas Baleares ó Canarias.

Art. 64. Las sesiones serán públicas, y de ellas se insertará diariamente un extracto en el *Boletín oficial*.

Pueden celebrarse en secreto cuando la naturaleza del asunto lo exija, y la Diputación, á petición del Presidente, del Gobernador ó de cinco Vocales, lo acuerde. En ningún caso dejarán de ser públicas las sesiones en que se trate, así de cuentas, presupuestos y otros objetos relacionados con ellos, como de las actas de elecciones provinciales.

Art. 65. Después de constituída definitivamente la Diputación, fijará, en una de las primeras sesiones, el número de Comisiones permanentes en que ha de dividirse para informar acerca de uno ó más ramos de los que la ley pone á su cargo, determinando el número de individuos de que han de componerse.

elección de personas se
a y por papeletas, qued
tuvieren mayor número
la suerte en caso de em
también podrá nombrar la
reuniones semestrales, ó
inarias, si lo estima con
peciales que cesarán con
30.

. 66. Es obligatoria la

Diputado que sin causa
dejase de cumplir lo qu
pone, incurrirá en una m
da vez, que como correc
pondrá el Presidente de l
se hubiese cometido, sié
les los perjuicios á que su
lugar.

reincidencia en la falta
o la primera multa, será
ediencia grave para los e
re que la segunda ó suce
hecho con apercibimien
rante las sesiones se ne
licencia de la Diputació
rá concederla en cuanto
an al precepto contenido
te.

. 67. Para deliberar es
de la mayoría absoluta
Diputados que correspon

. 68. Para tomar acue
le la mayoría de los conc
pate se repetirá la votaci
en la misma sesión si el
urgente, á juicio de los

biese segundo empate, será resuelto por el Presidente.

Art. 69. Los Diputados provinciales son responsables de los acuerdos que autoricen con su voto, sin que por ningún concepto les sea permitido abstenerse de emitirlo.

Art. 70. Será nula toda sesión que se celebre con carácter de ordinaria, fuera del número de las prefijadas para cada reunión semestral, y no se halle tampoco en el número de las prorrogadas con conocimiento del Gobernador. Serán asimismo nulas las que se celebren con carácter de extraordinarias sin haberlas convocado el Gobernador en la forma y con las circunstancias que previenen los artículos 61 y 62, y aquellas en que se tratase de un asunto no anunciado en la convocatoria, considerándose en su virtud nulos también los acuerdos que en dichas sesiones se adopten.

Art. 71. De cada sesión se extenderá por los Secretarios de la Diputación un acta en que han de constar los nombres del Presidente y de los Diputados presentes, los asuntos que se trataren y lo resuelto sobre ellos, el resultado de las votaciones y la lista de las nominales cuando las hubiere.

Siempre constarán en el acta la opinión de las minorías y sus fundamentos.

El acta será firmada por el Gobernador si ha presidido la sesión, y por el Presidente de la Diputación ó quien haya hecho sus veces, y por los Secretarios.

Art. 72. La Diputación forma su reglamento para el despacho de los negocios, orden de las sesiones y modo de funcionar; pero los trámites de instrucción de los expedientes y la discusión de los asuntos no servirán de excusa á las Diputa-

es para dilatar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes les imponen.

CAPÍTULO VI

Competencia y atribuciones de las Diputaciones provinciales.

Art. 73.- Las Diputaciones provinciales no pueden ejercer otras funciones que aquellas que por leyes se les señalen.

Art. 74. Corresponde exclusivamente á las Diputaciones provinciales la administración de los intereses peculiares de las provincias respectivas, con arreglo y sujeción á las leyes, reglamentos y disposiciones generales dictados para su ejecución, y en particular cuanto se refiere á los puntos siguientes:

.* Creación y conservación de servicios que tengan por fin la comodidad de los habitantes de la provincia y el fomento de sus intereses morales y materiales, tales como establecimientos de instrucción ó de enseñanza, caminos, canales de irrigación y de riego, y de toda clase de obras públicas de interés provincial, así como concurrencias, exposiciones y otras instituciones de fomento.

.* Administración de los fondos de la provincia, y su inversión conforme al presupuesto aprobado.

.* Custodia y conservación de los bienes, acciones y derechos que pertenezcan á la provincia, establecimientos que de ella dependan, reparado é invirtiendo los productos en la realización de los servicios que están confiados á la Diputación.

.* Nombramiento y separación, con arreglo á las leyes especiales, de todos los empleados y de

pendientes pagados de los fondos provinciales. Los funcionarios destinados á servicios profesionales tendrán la capacidad y condiciones que en las leyes relativas á aquéllos se determinen.

Art. 75. Como á superior jerárquico de los Ayuntamientos, corresponde á la Diputación:

1.º Revisar los acuerdos de los Ayuntamientos con arreglo á lo que disponga la ley municipal.

2.º Encargar á cualquiera de sus Vocales que gire visitas de inspección á los Ayuntamientos, con el fin de enterarse del estado de sus servicios, cuentas y Archivo.

La Diputación adoptará, en vista del resultado de estas visitas, las disposiciones que estime convenientes, dentro de sus facultades, para mejorar la administración municipal.

Art. 76. Los establecimientos de beneficencia y los de enseñanza, creados ó sostenidos por las Diputaciones provinciales, se acomodarán á lo que dispongan la ley de beneficencia y de instrucción pública.

La Diputación no podrá suprimir ninguno de estos establecimientos sin la aprobación del Gobierno.

Art. 77. Los edificios provinciales declarados inútiles para el servicio á que estaban destinados pueden ser vendidos por la Diputación en pública subasta.

Para la permuta de dichos bienes ha de preceder la aprobación del Gobierno. Es necesaria la misma aprobación para todos los contratos relativos á la enajenación ó hipoteca de los demás bienes inmuebles, derechos reales y títulos de la deuda pública, y á la emisión de empréstitos ó estipulación de préstamos.

Art. 78. Los acuerdos tomados por la Diputación provincial de conformidad á lo dispuesto

artículos 74 y 75, se ejerce sin perjuicio de los recursos de ley.

t. 79. Los acuerdos de la Diputación serán comunicados en primer término al Gobernador, el cual podrá, si lo cree conveniente, elevarlos á instancia de parte de la Diputación en el plazo de cuatro días.

Por recaer en asuntos de carácter especial, no sean de competencia de la Diputación.

Por delincuencia en el ejercicio de sus funciones, la Diputación haya incurrido.

Por infracción manifiesta de las leyes que resulten directa o indirectamente en perjuicio de los intereses generales del Estado.

t. 80. El Gobernador podrá declarar nulos los acuerdos de la Diputación que causen perjuicios de difícil reparación ó derechos de los particulares, si los agraviados lo piden dentro de diez días y al propio tiempo comparecerán contra dichos acuerdos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como se refiere el art. 88.

t. 81. El Gobernador podrá declarar nulos los acuerdos de la Diputación si procede, dentro de los diez días siguientes á aquel en que se le comunicaron, si los perjudicados la hubieren solicitado.

t. 82. La suspensión de los acuerdos de la Diputación, si estuviera reunida la Comisión provincial, será decretada por ella, á contar desde aquélla en que se emita con expresión de las causas y de los fundamentos legales que la justifiquen. También se notificará dentro de los diez días al interesado que la hubie

Art. 83. Si el Gobernador, en el indicado plazo de tres días, pidiere el expediente ú otros documentos con el fin de examinarlos antes de resolver, no correrá el plazo de los tres días sino desde que aquéllos le fuesen entregados.

Art. 84. En ningún otro caso podrá ser suspendida la ejecución de los acuerdos de la Diputación provincial, aun cuando por ellos se infrinja alguna de las disposiciones de esta ley ó de otras especiales.

Art. 85. Contra las providencias del Gobernador decretando ó negando la suspensión del acuerdo, según lo dispuesto en el art. 79, se concede á los particulares ó Corporaciones y á la misma Diputación provincial recurso de alzada ante el Gobierno.

Art. 86. Los Gobernadores remitirán al Ministerio de la Gobernación, en el término de diez días, los recursos de alzada que se interpongan según el artículo anterior.

El Gobierno resolverá dichos recursos dentro del plazo de sesenta días después de la remisión del expediente, oyendo antes al Consejo de Estado, el cual emitirá su informe en un término que no podrá exceder de cuarenta días. Si transcurriera el primero de dichos plazos sin resolución alguna del Gobierno, quedarán firmes los acuerdos de las Diputaciones provinciales, sin que sea ya posible, por lo tanto, modificarlos ni revocarlos en la vía gubernativa. No se tomará en cuenta para el cómputo de estos plazos el período de vacaciones del Consejo de Estado.

La resolución será siempre motivada, y se publicará en la *Gaceta* y en el *Boletín oficial* de la provincia.

Si el Gobierno disintiere del parecer del Consejo de Estado, se publicará el dictamen de este

po al mismo tiempo y en resolución del Gobierno.

Contra las resoluciones de todos los casos el recurso es rativo.

Art. 87. Contra los acuerdos provincial comprendidos en los previstos en el art. 79, se da para ante el Gobierno,

la suspensión de dichos. Son aplicables al indicado las reglas contenidas en el artículo

Art. 88. Los que se crean en los juicios civiles por los acuerdos, haya sido ó no suspendido, de lo dispuesto en el artículo. Para interponer contra ellos mediante recurso ante el tribunal competente, según la naturaleza del asunto, disponiendo el tribunal que entienda en el recurso, por primera providencia, la ejecución del acuerdo, si no hubiese tenido lugar según lo dispuesto en el artículo 80 de esta ley.

Para interponer dicha demanda de treinta días, pasado el término, queda levantada la suspensión gubernativa si se hubiera también consentido el recurso.

Art. 89. Reclamado el acuerdo, dispuesto en el artículo anterior, ante los antecedentes al recurso, queda en el asunto, dentro de los diez días siguientes á aquel en que le hubiera remitido al Gobierno, para que al mismo la reclamación sea admitida.

Art. 90. Los Gobernadores y Diputados provinciales son personalmente responsables, con arreglo á las leyes, de los daños y perjuicios que se originen por la ejecución ó suspensión de los acuerdos de las Diputaciones provinciales.

Art. 91. Los repartimientos de todo género que haga la Diputación entre los pueblos de la provincia para cubrir los cupos señalados á ésta, y el necesario para atender á los gastos provinciales, se ejecutarán desde luego, pero con apelación al Gobierno, que necesariamente deberá resolver.

Para que puedan acordarse dichos repartimientos, deberán concurrir á la sesión las dos terceras partes por lo menos de los Diputados provinciales.

CAPITULO VII

Organización y modo de funcionar de la Comisión provincial.

Art. 92. La Comisión provincial tiene las atribuciones que le concede esta ley, ó las que le correspondan por otras especiales; está siempre en funciones, y reside en la capital de la provincia.

Cada uno de los Vocales podrá reclamar como dietas una indemnización de 20 pesetas por cada sesión á que asista, en las provincias de primera y segunda clase, y de 15 pesetas en las de tercera.

En los casos de enfermedad ó licencia, y en los de suspensión gubernativa ó judicial, sustituirá al Diputado ausente el que le siga en número, según el acuerdo á que se refiere el art. 13.

Los suplentes tendrán el mismo derecho que los propietarios por las sesiones á que asistan en reemplazo de éstos.

Art. 93. En los casos de suspensión guberna-

judicial, ó de ausencia
encia ó cualquiera otra
residente de la Comisión
e los que asistan á la s

94. La Comisión pr
is veces lo exijan los n
go, según el orden que
esión de cada mes.

reunirá además en se
re que el Gobernador
algún asunto que consi

95. Para deliberar es
la mitad más uno de l
a la Comisión, y para
lo ha de reunir la mi
de los concurrentes.

el caso de empate se
ón para la sesión inmed
ate, decidirá el voto de

96. Es obligatoria la
de la Comisión provir
án todas las actas de
ran.

Secretario pasará al Ge
le fondos provinciales l
tales que hayan asistido
cta, para que con vista
en á fin de mes, por r
iento justificado con di
cada uno de los Vocal

97. Las sesiones sera
acuerde la mayoría, po
de expedientes, acuerd
ó relativos al orden pú
de la Corporación, ó po
misma ó de cualquiera
én será secreta la sesió

sión haya de emitir algún informe que el Gobierno ó el Gobernador le hubiere pedido.

Serán públicas en los demás casos, y en ningún concepto pueden dejar de serlo cuando, con arreglo á lo que disponga la ley municipal, intervenga la Comisión en los acuerdos de los Ayuntamientos, ya revisándolos por sí, ya informando acerca de ellos.

CAPÍTULO VIII

Competencia y atribuciones de la Comisión provincial.

Art. 98. Como Cuerpo administrativo corresponde á la Comisión provincial:

1.º Procurar la exacta ejecución de los acuerdos de la Diputación provincial, recurriendo al Gobernador ó al Gobierno, según proceda, en casos de omisión, negligencia ú oposición por parte de las Corporaciones, empleados, dependientes ó particulares encargados de cumplir dichos acuerdos.

2.º Preparar todos los asuntos en que ha de ocuparse la Diputación en cada reunión semestral, y presentar una Memoria en cada una de estas reuniones, que exprese los asuntos de interés que merezcan el examen y la resolución de la Diputación, y dé noticia circunstanciada de los negocios pendientes y estado de las cuentas, fondos y administración provincial.

3.º Resolver interinamente los asuntos encomendados á la Diputación, cuando su urgencia no consintiere dilación y su importancia no justifique la reunión extraordinaria de ésta, dando cuenta de los acuerdos que adopte á la Diputación en la primera sesión que celebre, la cual podrá modificar ó revocar dichos acuerdos.

Para que la Comisión declare o de los que, según el párrafo anterior especialmente, será siempre o adoptado por dos terceras partes de los Diputados que á la misma Comisión.

4.º Suspender por justas causas y dependientes de la Diputación, cuando ésta en la primera sesión.

5.º Cuidar de la gestión de los negocios judiciales seguidos en nombre de la provincia.

6.º Interponer demandas ordinarias ó contencioso-administrativas, previo acuerdo de la Diputación, cuyo nombre y representación llevará el Vicepresidente de la Comisión en todos los negocios judiciales.

Art. 99. Como superior jerárquico de los Ayuntamientos, corresponde á la Comisión provincial:

1.º Decidir todas las incidencias de quintas, allando los recursos que se promuevan, con sujeción á la ley de reemplazo del ejército.

2.º Resolver las reclamaciones y protestas en las elecciones municipales, así como las incapacidades, incompatibilidades y excusas de los Concejales en los casos y en la forma que la ley municipal y la ley electoral establezcan.

Art. 100. Corresponden asimismo á la Comisión provincial las atribuciones que el art. 75 de esta ley confiere á la Diputación, cuando ésta no se halle reunida, con la obligación de dar cuenta á la Diputación en la primera sesión, del uso que hubiere hecho de dichas atribuciones.

Art. 101. Son aplicables á los acuerdos de la Comisión provincial las disposiciones de los artículos 78, 79, 82, 83, 84 y 85 de esta ley.

Art. 102. La Comisión provincial, como Cuerpo consultivo, dará dictamen cuando las leyes y

reglamentos lo prescriban, y siempre que el Gobernador, por sí ó por disposición del Gobierno, estime conveniente pedirselo.

CAPITULO IX

Empleados y agentes de la administración provincial.

Art. 103. Las dependencias de la Diputación provincial se componen:

- 1.º De la Secretaría.
- 2.º De la Contaduría.
- 3.º De la Depositaria.

Al frente de cada una de estas secciones habrá un Jefe, bajo cuyas órdenes servirán los empleados necesarios.

Art. 104. La Diputación nombra y separa sus empleados, fija el sueldo de los mismos y arregla las plantillas dentro de lo prevenido en las leyes, y acuerda el reglamento de servicio interior de sus oficinas.

Para el nombramiento de Secretarios y Contadores se entenderán estas atribuciones sin perjuicio de los derechos adquiridos.

Art. 105. El Jefe de la Secretaría tiene á su cargo la preparación y tramitación de los asuntos de que hayan de conocer la Diputación y la Comisión provincial, la redacción de sus actas y acuerdos, la correspondencia y el cuidado y conservación de su Archivo.

Firma con el Presidente los acuerdos y decretos de la Comisión provincial y los testimonios que se libren de las actas de la Diputación, autorizándolos con el sello de la provincia, cuya guarda le estará encomendada, y cuida de que se comuniquen á quien corresponda.

Art. 106. El Contador tiene á su cargo la

ina de cuenta y razón y l
los provinciales.

En tal concepto, registra l
de los fondos, autoriza cor
os de los libramientos, hac
os en los libros que lleva a
presupuestos y cuentas, qu
s á la Diputación.

art. 107. El Depositario e
o de la custodia de los fond
estará como tal las fianzas
a.

Si la entidad de los fondos l
Cajas: una general, con tre
n el Ordenador de pagos, el
tario, y otra diaria, donde
iva de este último estarán
á las atenciones de cada m
El Depositario no hará pag
des sino en virtud de un m
el Ordenador de pagos y C

CAPITULO 5

Presupuestos y cuentas

rt. 108. Son aplicables á
ial las disposiciones de la l
ral del Estado en cuanto
ente.

El año económico provincial
para los presupuestos y cu
ación.

rt. 109. Las Diputaciones l
un presupuesto que com
por cualquier concepto h
ngresos destinados á cubrir

brará de su seno una de las Comisiones de que habla el art. 65.

Art. 110. Los gastos comprendidos en los presupuestos provinciales serán cubiertos con ingresos independientes de los del Estado, que se recaudarán y repartirán con arreglo á lo dispuesto en la presente ley.

Art. 111. Terminado el año económico, quedan anulados los créditos abiertos y no invertidos en aquel ejercicio.

Durante el período de ampliación se terminarán las operaciones de cobranza de los recursos presupuestos, y la liquidación y pago de los servicios realizados durante el año. Las resultas que quedaren después de este período, serán objeto de un presupuesto adicional, previas las consiguientes liquidaciones, que se terminarán en el mes siguiente.

Art. 112. Cuando para cubrir atenciones imprevistas, satisfacer alguna deuda, ó para cualquier otro objeto de importancia no determinado en el presupuesto ordinario, sean insuficientes los recursos consignados en éste, la Diputación formará un presupuesto extraordinario en la misma forma y por el mismo procedimiento que el ordinario.

Art. 113. Las deudas de las provincias que no estuviesen aseguradas con prenda ó hipoteca, no serán exigidas á las Diputaciones por los procedimientos de apremio.

Cuando alguna provincia fuere condenada al pago de una cantidad, la Diputación, después de ejecutoriada la sentencia, procederá á formar un presupuesto extraordinario, á no ser que el acreedor convenga en enlazar el cobro de modo que puedan consignarse en los presupuestos ordinarios sucesivos las cantidades necesarias para el pago del capital y rédito estipulado.

Los Diputados provinciales serán personalmente responsables de los perjuicios que ocasione la falta ó retraso en la formación del presupuesto extraordinario á que se refiere este artículo.

art. 114. Para hacer efectiva la recaudación, son aplicables los medios de apremio en primeros y segundos contribuyentes, dictados en favor del Estado.

art. 115. Los presupuestos provinciales cubrirán precisamente las partidas necesarias, según los recursos de la provincia, para atender á servicios siguientes:

1.º Personal y material de sus oficinas y dependencias y establecimientos provinciales de beneficencia, sanidad é instrucción pública.

2.º Conservación y administración de las fincas de la provincia.

3.º Construcción, conservación y administración de las obras públicas.

4.º Suscripción á la *Gaceta oficial* y *Colección legislativa*.

5.º Fondo de imprevistos y para calamidades públicas.

6.º Anuncios, impresiones y otros gastos que consideren necesarios ó convenientes.

7.º Todos los demás gastos que clara y terminantemente exijan esta y otras leyes, en la parte que deban ser cumplidas por la provincia.

8.º Gastos de representación al Presidente.

art. 116. Para la aprobación del presupuesto requiere el voto de la mayoría absoluta del total de Diputados que correspondan á la provincia. Si al principiar el año económico no estuviere aprobado el presupuesto, seguirá rigiendo el anterior.

art. 117. Para cubrir los gastos consignados en los presupuestos provinciales, la Diputación

utilizará los recursos que procedan, así de rentas y productos de toda clase de bienes, derechos ó capitales que por cualquier concepto pertenezcan á la provincia ó á los establecimientos que de ella dependan, como los de obras públicas, instituciones ó servicios costeados de sus fondos.

Si éstos no fueran suficientes, la Diputación verificará por el resto un repartimiento entre los pueblos de la provincia, en proporción de lo que por contribuciones directas y por el impuesto de consumos pague cada uno al Tesoro.

Para aprobar este repartimiento se requieren las condiciones señaladas en el art. 116.

Art. 118. Esta cuota será incluída en el presupuesto de cada pueblo, y su importe ingresará íntegro en la Depositaria provincial en la época de recaudación ordinaria, ó antes si voluntariamente lo entregan los Ayuntamientos.

En ningún caso podrá ser embargada ni detenida por las oficinas de Hacienda, sino cuando procedan contra la misma Diputación como deudora al Estado.

El embargo, ni aun en este caso, podrá exceder del importe de la recaudación verificada.

Art. 119. Las provincias que de antiguo hayan utilizado algún arbitrio especial ordinario ó extraordinario, con la aprobación del Gobierno y la aquiescencia de los pueblos de su demarcación, podrán continuar aplicando sus productos á cubrir las atenciones de su presupuesto, en la forma en que lo hayan hecho hasta hoy, y siempre que medien las expresadas condiciones.

Las Diputaciones provinciales podrán establecer, con la aprobación del Gobierno y el consentimiento de los pueblos, arbitrios de la misma índole y de fácil recaudación, cuando lo juzguen conveniente.

LEY PROVINO

20. Las Diputaciones discutirán y aprobarán dentro de los quince días, y el adicional durante 20 de Abril remitirán al Ministerio de la Gobernación, el presupuesto adicional para corregir las extralimitaciones legales, siempre que no hubiera, é impedir que se perjudiquen los intereses generales de los pueblos. El Gobierno dictará resolución antes del día 15 de Mayo, y si para esta fecha no hubiese sido remitido el presupuesto por el Ministerio á la Diputación, regirá el que votó la Corporación provincial, siempre que hubiese sido remitido por el Ministerio dentro del plazo marcado en el interior.
- El presupuesto adicional será remitido al Ministerio de la Gobernación antes del 28 de Febrero, y si para esta fecha no hubiese sido remitido por el Ministerio, se entenderá que queda acordado, y empezará á regir.
21. Corresponderá exclusivamente á la Diputación, y si no estuviere reunida, á la Corporación provincial, la distribución mensual de los fondos.
22. La ordenación de pagos corresponde al Ayuntamiento elegido por la Diputación, ó á quien el Ayuntamiento delegare.
23. La administración y recaudación de los fondos provinciales está á cargo de las respectivas Diputaciones, y se efectuará por sus agentes locales.
24. Los agentes de la recaudación de los fondos son responsables ante la Diputación, pero no ésta en todo caso civilmente para la

provincia, siempre que medie negligencia ú omisión probadas.

Art. 125. Las Diputaciones publicarán al principio de cada reunión semestral un estado de la recaudación é inversión de sus fondos durante el semestre anterior.

En las obras provinciales que se hagan por administración, se publicará mensualmente por la Comisión nota de los gastos causados, especificando el pormenor de los jornales, materiales empleados y personas que los han vendido, contratistas, sitio en que se construye la obra, y demás circunstancias análogas.

En la Secretaría estarán de manifiesto todo el año, en los días y horas útiles, á cualquier particular, y con especialidad á los Diputados provinciales, las cuentas y documentos originales referentes á las mismas obras, de las cuales el Jefe de la Secretaría permitirá, bajo su inspección, sacar apuntes y copias.

Art. 126. La Contaduría formará las cuentas correspondientes á cada año económico, y las someterá á la Comisión provincial, con los documentos justificativos, dentro de los dos meses siguientes al ejercicio de que procedan.

Un extracto de ellas se insertará en el *Boletín oficial*, y las originales quedarán expuestas al público en la Secretaría hasta que la Diputación provincial se reuna para su aprobación:

Art. 127. La Diputación procederá al examen de las cuentas generales, semestrales, notas y extractos á que se refieren los artículos 125 y 126, nombrando al efecto una Comisión especial, si lo cree necesario.

La Diputación puede pedir los documentos relacionados con las cuentas, y llamar á su seno, para recibir su informe oral, á cuantas personas

no intervenido en las operaciones que se refieren.

Art. 128. Las cuentas que devengan el voto de la mayoría componen la Diputación, no la Comisión provincial, que no interviene en este acto.

En otro caso, y en el de protuberancia de ley ó malversación de fondos por la Comisión provincial, la cual podrá hacer observaciones que estime oportuno, remite el expediente á la Diputación, la cual dictamen y le dé el curso que le parezca oportuno.

Art. 129. Las cuentas aprobadas por la Diputación provincial se remiten al Ministerio de la Gobernación y á las del Reino para su revisión definitiva.

Se considera á los Ayuntamientos como interesados en las cuentas, para el efecto de reclamar y proporcionar de las mismas.

TÍTULO III

CAPÍTULO X

Dependencia y responsabilidad de los jefes y agentes de la administración

Art. 130. Las Diputaciones provinciales obran bajo la dependencia del Gobierno, y están, por consiguiente, sujetas á la responsabilidad que proceda en todo caso, según esta ley y otras especiales, no les atribuyen exclusivamente, ejerciendo con absolu-

ta independencia las atribuciones que les son propias.

Incurren en responsabilidad, aun cuando ejerzan atribuciones propias, las Diputaciones y Comisiones provinciales que cometen infracciones manifiestas de la ley.

El Ministro de la Gobernación es el único encargado de transmitir á las Diputaciones y Comisiones provinciales, por conducto del Gobernador, las disposiciones del Gobierno en la parte que deban ser ejecutadas por estas Corporaciones, y de ejercer la alta inspección que al mismo corresponde para impedir las infracciones de la Constitución y de las leyes.

Art. 131. Las Diputaciones provinciales incurren en responsabilidad:

1.º Por infracción manifiesta de la ley en sus actos ó acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades que no les competan, bien abusando de las propias.

2.º Por desobediencia al Gobierno en los asuntos en que proceden por delegación y bajo la dependencia de éste.

3.º Por desacato á sus superiores jerárquicos.

4.º Por negligencia ú omisión de que resulte perjuicio á los intereses ó servicios que les están encomendados, abuso ó malversación en la administración de sus fondos.

Art. 132. La responsabilidad podrá exigirse á las Diputaciones ó á los Diputados provinciales ante la Administración ó ante los Tribunales de justicia. Ante la Administración por hechos y omisiones culpables en el ejercicio de sus funciones, cuando no llegan á constituir delito. Ante los Tribunales de justicia, por hechos ú omisiones en el ejercicio de sus funciones, cuando éstos constituyen delito según el Código.

responsabilidad sólo se exigirá á los Diputados que hubieren incurrido en la omisión ó to-participado en el acto ó acuerdo que la motive.

133. Corresponde exclusivamente al Gobierno exigir la responsabilidad administrativa. Comprende el apercibimiento, la multa y la suspensión.

Ocupa el apercibimiento en los casos de omisión, negligencia y abuso de facultades, cuyas consecuencias no sean irreparables.

Ocupa la multa siempre que las leyes y disposiciones generales lo determinen, y en los casos de concurrencia en faltas castigadas ya con apercibimiento, así como en los de negligencia cuyas consecuencias sean irreparables, y en los de abuso de autoridad y desobediencia que no produzcan responsabilidad criminal.

Ocupa la suspensión en los casos de reincidencia en faltas castigadas ya con multas; en los casos de rebeldía grave con carácter político, y de resistencia á la autoridad del Gobierno. Se añaden estas dos últimas de cualquiera de las circunstancias siguientes:

Haber dado publicidad al acto.

Excitar á otras Corporaciones á cometerlas.

Producir alteración del orden público.

Por último, en los casos de abuso ó malversación demostrados en la administración de sus bienes.

134. Para la imposición de las multas se observarán las reglas siguientes:

La declaración de estas correcciones corresponde al Gobierno, con audiencia del interesado y del Consejo de Estado.

Las multas no excederán de 500 pesetas.

Las multas serán satisfechas por los Diputados responsables según el art. 132.

Art. 135. Para la exacción de las multas se observarán además las reglas siguientes:

1.^a La resolución del Gobierno se comunicará por escrito al multado; del pago se le expedirá el competente recibo.

2.^a Las multas y los apremios se cobrarán en papel del sello correspondiente.

3.^a Las multas serán pagadas precisamente del peculio particular del multado.

Art. 136. Para el pago de toda multa se concede un plazo proporcionado á la cuantía de la multa, y que no baje de diez días ni exceda de veinte, pasado el cual, procede el apremio contra los morosos.

El apremio no será mayor de 5 por 100 diario del total de la multa, sin que exceda en ningún caso del duplo de la misma.

Contra la imposición gubernativa de la multa procede el recurso contencioso-administrativo, previa consignación ó depósito de su importe.

Art. 137. En ningún caso, para hacer efectiva la multa, se expedirán comisionados de ejecución contra la Diputación y sus Vocales. Cuando los multados dejasen de pagar la multa no obstante el apremio, el Gobernador, como delegado del Gobierno, oficiará al Juez de primera instancia á quien corresponda, comunicándole la orden ministerial imponiendo la multa, y la cuantía y liquidación de ésta, y requiriendo su autoridad para hacerla efectiva.

El Juez procederá á la exacción por la vía de apremio.

Art. 138. Para imponer la suspensión gubernativa á las Diputaciones ó á sus Vocales, se observarán las reglas siguientes (1):

(1) Véase la Real orden de 13 de Mayo de 1891, que se inserta como nota al art. 193 de la ley municipal.

1.º El Gobernador transmitirá á sus interesados, en el mismo día en que la reciba, la orden de suspensión que le comunique el Gobierno, con expresión de la causa en que dicha medida se funde. El Diputado ó Diputados suspensos podrán exponer al Gobierno, por conducto del mismo Gobernador y en el término de tercero día, los hechos ú observaciones que á su defensa convengan.

2.º Sólo en el caso de que los interesados no utilicen en el plazo indicado esta facultad, se resolverá definitivamente la suspensión sin oírles.

3.º La suspensión no pasará de sesenta días. Transcurrido este plazo sin que se hubiese mandado proceder á la formación de causa, ó sin que la Audiencia haya dictado auto declarando procesados á los Diputados suspensos, éstos volverán de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones.

Los que les hubiesen reemplazado, serán considerados como culpables de usurpación de atribuciones, si después de requeridos ó de publicado en la *Gaceta* el acuerdo alzando la suspensión, continuaran desempeñando funciones de Diputados provinciales, sin que les sirva de excusa el no haber recibido la orden de cesar en sus cargos.

Art. 139. El Gobierno, para proceder á la suspensión, formará el oportuno expediente, oyendo al Consejo de Estado. En los casos de urgencia puede resolver por sí y bajo su responsabilidad, sin que preceda la expresada audiencia.

La Real orden que alce ó confirme la suspensión, se publicará de todos modos en la *Gaceta* oficial, insertándose los dictámenes del Consejo de Estado siempre que se hubiere oído á este Cuerpo; y si transcurrieren los sesenta días antes señalados sin que la citada Real orden apareciese en la *Gaceta*, los Diputados suspensos volverán tam-

bién de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones.

Art. 140. Las Diputaciones provinciales no pueden ser disueltas, ni destituidos sus Vocales, sino por sentencia ejecutoriada de los Tribunales.

Art. 141. Para los delitos que comentan las Diputaciones provinciales y los Diputados en el ejercicio de sus funciones, será Juez competente en primera instancia la Audiencia de la capital de la provincia.

Art. 142. Los empleados y agentes de la Administración provincial nombrados por la Diputación ó por la Comisión, están sujetos á su obediencia y son responsables ante ella con arreglo á esta ley.

DISPOSICIONES COMUNES

Art. 143. Las providencias de los Gobernadores que según las leyes hayan puesto término á la vía gubernativa y hubiesen causado perjuicio á los intereses ó derechos de un particular ó de una Corporación, serán reclamables por la vía contenciosa dentro de treinta días.

Las decisiones que versen sobre las demás materias podrán ser revocadas ó modificadas por el Ministerio respectivo.

Las reclamaciones que susciten contra sus providencias por incompetencia ó exceso de atribuciones, se decidirán siempre por el Gobierno, oído el Consejo de Estado.

Art. 144. Los recursos gubernativos que se interpongan contra las providencias de los Gobernadores y los acuerdos de la Diputación ó Comisión provincial, se presentarán ante la Autoridad ó Corporación que haya dictado aquellas resoluciones.

do recurrente se le facilitará recibo en el presente el recurso, haciendo constar la que se haya presentado y el objeto del

45. Los Gobernadores, dentro del plazo de ocho días siguientes al de la presentación del recurso, lo remitirán, con todos los antecedentes que formen el expediente, al Ministro de Fomento.

El mismo harán en dicho plazo, y por conducto del Gobernador, las Diputaciones provin-

Por cualquier causa no se cumpliera lo dispuesto en este artículo, los interesados tendrán derecho para recurrir directamente al Ministro de la Gobernación, el cual reclamará desde el momento de haberse presentado el recurso y el expediente.

46. Para la interposición de los recursos administrativos contra las providencias y acuerdos de los Ayuntamientos, en los casos no comprendidos en el art. 144, que no tengan un plazo especial señalado, se concede el término de tres días.

La notificación administrativa deberá contener el contenido de la providencia ó acuerdo íntegros, la expresión de los hechos que en su caso procedan según la ley, y el artículo en que se establezcan, la fecha en que se hace la notificación, la firma del notificador que la verifique y la del interesado ó representante de la Corporación con quien se efectúa dicha notificación.

Si el interesado no supiere ó no quisiere firmar la notificación, firmarán dos testigos presenciales. Si el interesado no tenga domicilio conocido la persona a quien se le ha de ser notificada, se publicará la providencia ó acuerdo en el *Boletín oficial* de la provincia, y se remitirá además al Alcalde del pueblo de su última residencia de aquélla, para que

la publique por medio de edictos que fijará en las puertas de la Casa Consistorial.

Art. 147. Todos los términos que se establecen en esta ley son improrrogables; comenzarán á contarse desde el día siguiente á la notificación, y no se comprenderán en ellos los días de fiesta religiosa ó nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Interin no se publique la ley que establezca los Tribunales que hayan de entender de lo contencioso-administrativo, corresponderá el conocimiento de estos asuntos en primera instancia á las Comisiones provinciales.

Segunda. Hasta que sea reformada la ley electoral para Diputados á cortes vigente, las elecciones de Diputados provinciales se harán en la forma establecida en los títulos 3.º y 4.º de la misma, con las siguientes modificaciones:

1.º Tendrán derecho á votar y á ser inscritos en las listas los comprendidos en los artículos 33 y 34 de esta ley.

2.º El Gobierno señalará los plazos para la formación y rectificación del censo y de las listas electorales, ajustándose en todo lo posible á las disposiciones del capítulo 3.º, título 3.º de la ley electoral.

3.º Las operaciones á que se refieren los artículos 66 al 71 de la ley electoral, tendrán lugar en el viernes inmediatamente anterior al domingo que esté señalado para la elección de Diputados.

4.º Las cédulas y actas notariales á que se refieren los artículos 64 y 65 de la ley electoral, no podrán llevar fecha anterior en más de ocho días á la del señalado para la elección de Diputados.

LEY PROVINCIAL

La copia del acta á que se refiere el art. 90, será remitida en la forma que el mismo sa, al Ministro de la Gobernación.

El escrutinio á que se refiere el art. 97 de electoral, se hará el miércoles inmediatamente al domingo en que se haya verificado la ón de Diputados.

cera. La división y agrupación en distri- ara las primeras elecciones de Diputados nciales en las provincias de Canarias y Ba- a, se harán por el Gobierno, atemperándose posible á las disposiciones de esta ley y lo previamente á las Diputaciones respec-

arta. Mientras subsista el concierto econó- consignado en Real decreto de 28 de Febre- 1878, y las Diputaciones de las Provincias ngadas hayan de cumplir las obligaciones es imponen los artículos 10 y 11 del mismo, nsiderarán investidas dichas Corporaciones, lo de las atribuciones consignadas en los ca- os 6.º y 10 de la presente ley, sino de las que osterioridad á dicho convenio han venido tando en el orden económico para hacerlo vo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

mera. Quedan derogadas todas las leyes y siciones anteriores relativas al régimen de rovincias.

gunda. El Gobierno dictará, con sujeción á ey, los reglamentos necesarios para su eje- n.

rcera. Las actuales Diputaciones continua- n el ejercicio de sus funciones tales como se n constituidas, sin la renovación bienal que

debiera tener lugar en el próximo mes de Septiembre, hasta que en cumplimiento de la presente ley se proceda á la elección para constituir las nuevas Diputaciones.

Las elecciones se harán en el mes de Diciembre y los Diputados electos tomarán posesión el 1.º de Enero de 1883.

Cuarta. La primera renovación de la mitad de las nuevas Diputaciones tendrá lugar en el tercer mes del año económico de 1884 á 1885.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en San Ildefonso á 29 de Agosto de 1882.
Yo el Rey.=El Ministro de la Gobernación,
Venancio González.

ÍNDICE

	<u>Páginas.</u>
I. PRIMERO.—Capítulo primero.—De las provincias, su territorio y habitantes.....	483
o II.—Capítulo II.—De la administración de las provincias.....	484
o III.—Del gobierno de las provincias.....	486
o IV.—De las atribuciones y deberes de gobernadores.....	488
o V.—Organización y modo de funcionar de la Diputación provincial.....	492
o VI.—Competencia y atribuciones de diputaciones provinciales.....	504
o VII.—Organización y modo de funcionar de la Comisión provincial.....	509
o VIII.—Competencia y atribuciones de la Comisión provincial.....	511
o IX.—Empleados y agentes de la administración provincial.....	513
o X.—Presupuestos y cuentas provinciales.....	514
III.—Capítulo XI.—Dependencia y responsabilidad de los Diputados y agentes de la administración provincial.....	520
o Atribuciones comunes.....	525
o Atribuciones transitorias.....	527
o Atribuciones adicionales.....	528

LEY MUNICIPAL ⁽¹⁾

TÍTULO PRIMERO

DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES Y DE SUS HABITANTES

CAPITULO PRIMERO

De los términos municipales y sus alteraciones.

Artículo 1.º Es Municipio la asociación legal de todas las personas que residen en un término municipal.

Su representación legal corresponde al Ayuntamiento.

Art. 2.º Es término municipal el territorio á que se extiende la acción administrativa de un Ayuntamiento.

Son circunstancias precisas en todo término municipal:

1.º Que no baje de 2.000 el número de sus habitantes residentes.

2.º Que tenga ó se le pueda señalar un territorio proporcionado á su población.

3.º Que pueda sufragar los gastos municipa-

(1) Para la aplicación del capítulo 2.º del título 2.º de esta ley, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Real decreto de 5 de Noviembre de 1890, sobre adaptación de la ley electoral de 28 de Junio de este mismo año á las elecciones de Diputados provinciales y de Concejales.

gatorios con los recursos que las leyes
n.

sistirán, sin embargo, los actuales térmi-
nicipales que tengan Ayuntamiento, aun
no reunan las circunstancias anteriores.

4.° Los términos municipales pueden ser
es:

Por agregación total á uno ó varios tér-
colindantes.

Por segregación de parte de un término,
para constituir por sí ó con otra ú otras
es Municipio independiente, ó bien para
se á uno ó á varios de los términos colin-

1.° Procede la supresión de un Municipi-
agregación á otro ó á varios de sus co-
es:

Cuando por carencia de recursos ú otros
fundados, lo acuerden los Ayuntamientos
yoría de los vecinos de los Municipios in-
es.

Cuando por ensanche y desarrollo de edi-
es se confundan los cascos de los pueblos
fácil determinar sus verdaderos límites.

5.° Procede la segregación de parte de
nino para agregarse á otros existentes,
lo acuerde la mayoría de los vecinos de
ón que haya de segregarse, y pueda tener
in perjudicar los intereses legítimos del
el Municipio ni hacerle perder las condi-
expresadas en el art. 2.°

Segregación de parte de un término para
uir uno ó varios Municipios independien-
sí ó en unión de otra ú otras porciones c-
rminos colindantes, puede hacerse me
acuerdo de la mayoría de los interesados y
udicar intereses legítimos de otros pue-

blos, siempre que los nuevos términos que hayan de formarse reúnan las condiciones expresadas en el art. 2.º

Art. 6.º En cualquiera de los casos de agregación ó segregación, los interesados señalarán las nuevas demarcaciones de terrenos y practicarán la división de bienes, aprovechamientos, usos públicos y créditos, sin perjuicio de los derechos de propiedad y servidumbres públicas y privadas existentes.

Art. 7.º Las Diputaciones provinciales resolverán los expedientes sobre creación, segregación y supresión de Municipios y términos.

Sus acuerdos serán ejecutivos cuando fueren adoptados de conformidad con los interesados.

En caso de disidencia la aprobación será objeto de una ley.

Art. 8.º Todo término municipal forma parte de un partido judicial y de una provincia de la Nación, y no podrá pertenecer bajo ningún concepto á distintas jurisdicciones de un mismo orden.

Art. 9.º Para hacer pasar un término municipal de uno á otro partido, se oirá á los Ayuntamientos del pueblo y de las cabezas de partido, á la Diputación y al Gobernador y al Ministerio de Gracia y Justicia.

La resolución del expediente corresponde al Ministerio de la Gobernación, con audiencia del Consejo del Estado.

Art. 10. Los grupos de población, aunque tengan Ayuntamiento propio, situados á una distancia máxima de 10 kilómetros del término de la capital de la Monarquía, podrán ser agregados á él por Real decreto, previa consulta al Consejo de Estado, dando cuenta á las Cortes.

de igual modo y con los mismos trámites podrán ensancharse el término de las poblaciones que tienen más de 100.000 habitantes, hasta una distancia máxima de seis kilómetros.

CAPITULO II

los habitantes de los términos municipales.

. 11. Los habitantes de un término municipal se dividen en

residentes y

transeuntes.

Los residentes se subdividen en

vecinos y

domiciliados.

. 12. Es vecino todo español emancipado que reside habitualmente en un término municipal y se halla inscrito con tal carácter en el padrón del pueblo.

Es domiciliado todo español que sin estar emancipado reside habitualmente en el término municipal formando parte de la casa ó familia de un vecino.

Es transeunte todo el que, no estando comprendido en los párrafos anteriores, se encuentra en un término accidentalmente.

. 13. Todo español ha de constar empadronado como vecino ó domiciliado en algún Municipio.

El que tuviere residencia alternativa en varios Municipios optará por la vecindad en uno de ellos.

Nadie puede ser vecino de más de un pueblo:

Si uno se hallare inscrito en el padrón de dos pueblos, se estimará como válida la vecindad del primero.

Si fuere simultáneamente declarada, quedando desde entonces anuladas las anteriores.

Art. 14. La cualidad de vecino es declarada de oficio ó á instancia de parte, por el Ayuntamiento respectivo.

Art. 15. El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á todo español emancipado que en la época de formarse ó rectificarse el padrón lleve dos años de residencia fija en el término municipal.

También hará igual declaración respecto á los que en las mismas épocas ejerzan cargos públicos que exijan residencia fija en el término, aun cuando no hayan completado los dos años.

Art. 16. El Ayuntamiento, en cualquier época del año, declarará vecino á todo el que lo solicite, sin que por ello quede exento de satisfacer las cargas municipales que le correspondan hasta aquella fecha en el pueblo de su anterior residencia.

El solicitante ha de probar que lleva en el término una residencia efectiva continuada por espacio de seis meses á lo menos.

CAPITULO III

Del empadronamiento.

Art. 17. Es obligación de los Ayuntamientos formar el padrón de todos los habitantes existentes en su término, con expresión de su calidad de vecinos, domiciliados y transeuntes, nombre, edad, estado, profesión, residencia y demás circunstancias que la estadística exija y el Gobierno determine.

Art. 18. Cada cinco años se hará un nuevo empadronamiento, el cual será rectificado todos los años intermedios, con las inscripciones de oficio ó á instancia de parte, y las eliminaciones por

ciudad legal, defunción ó
 i, ocurridas durante el año
 os vecinos que cambien de c
 b tutores de los que se in
 eros y testamentarios de lo
 dos á dar al Ayuntamiento
 pondiente para que tenga
 1.

. 19. Hecho el empadrona
 su rectificación anual, e
 rá dos listas en extracto:
 eraciones ocurridas duran
 ensiva de todos los habita
 distrito al ultimarse la op
 tas listas se publicarán in

. 20. El empadronamien
 se verificarán en el mes
 n, así como las listas, á dis
 uieran examinarlos, en la
 tamiento, los días y horas
 a los quince días siguientes
 ibirá las reclamaciones qu
 en el término hiciere con
 nto ó sus rectificaciones, y
 as en lo restante del mes.
 ro de actas el acuerdo que
 nteresado, á quien lo con
 inmediatamente.

. 21. Contra estas decisio
 ntos procede el recurso d
 utación provincial.

recurso será entablado ant
 los tres días siguientes
 a del acuerdo.

Alcalde remitirá sin dilac
 nte á la Diputación provin
 a Diputación, en término d

verá ejecutivamente, en vista de las razones alegadas por los interesados y el Ayuntamiento, y comunicará á éste su fallo circunstanciado, después de lo cual, y hechas en la semana siguiente las rectificaciones á que hubiere lugar, se declarará ultimado el padrón y se publicarán las listas rectificadas.

Art. 22. El padrón es un instrumento solemne, público y fehaciente, que sirve para todos los efectos administrativos.

Art. 23. Los Ayuntamientos remitirán todos los años á la Diputación provincial, en el último mes de cada año económico, un resumen del número de vecinos, domiciliados y transeuntes, clasificado en la forma que para el censo de población determine el Gobierno.

CAPITULO IV

De los derechos y de las obligaciones de los habitantes en los términos municipales.

Art. 24. Todo el que recurra á la Autoridad municipal, tiene derecho á exigir de la misma un resguardo en el cual se haga constar la demanda ó la queja, y la fecha y la hora en que hubiesen sido producidas.

Art. 25. Todos los habitantes de un término municipal tienen acción y derecho para reclamar contra los acuerdos de los Ayuntamientos, así como para denunciar y perseguir criminalmente á los Alcaldes, Regidores y Vocales de las Asambleas de asociados, en los casos, tiempo y forma que prescriban esta ley y la especial á que se refiere el art. 77 de la Constitución.

Art. 26. Todos los vecinos tienen participación en los aprovechamientos comunales y en los

echos y beneficios concedidos al pueblo; así no están sujetos á las cargas de todo género para los servicios municipales y provinciales impongan, en la forma y proporción que esta determina.

Los vecinos adquieren el pleno dominio de la parte que en los aprovechamientos comunes les ha sido adjudicada; pero no entrarán en su disfrute, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 75, sino en cuanto acrediten estar al corriente del pago de todas sus obligaciones con el presupuesto municipal.

Art. 27. Para cuanto se refiere á la administración económica municipal y á los derechos y obligaciones que de ella emanan respecto á los contribuyentes, tendrán la consideración de propietarios por las fincas que labren, ocupen ó administraren, los siguientes:

1.º Los administradores, apoderados ó encargados de los propietarios forasteros, sin perjuicio de los casos siguientes, ya sea que por cuenta y nombre de éstos se hallen al frente de algún establecimiento agrícola, industrial ó mercantil situado en el distrito, ó ya se limiten á la cobranza y recaudación de rentas.

2.º Los colonos arrendatarios ó aparceros de fincas rústicas, residan ó no en el distrito los propietarios ó administradores.

3.º Los inquilinos de fincas urbanas, cuando hubieren arrendadas á una sola persona, y su dueño, administrador ó encargado no residiere en el distrito.

Art. 28. Los extranjeros gozarán de los derechos que les correspondan por los tratados ó por la ley especial de extranjería.

TITULO II**DEL GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS****· CAPÍTULO PRIMERO***De los Ayuntamientos y de las Juntas municipales.*

Art. 29. En todo término habrá un Ayuntamiento y una Junta municipal.

Art. 30. El gobierno interior de cada término municipal será encomendado á un Ayuntamiento, compuesto de Concejales, divididos en tres categorías:

Alcalde.

Tenientes.

Regidores.

El Ayuntamiento será elegido por los residentes en el término que tengan derecho electoral según el art. 40, y en la forma que determinen las leyes.

Art. 31. La formación de los presupuestos corresponderá á los Ayuntamientos, y su aprobación á las Juntas municipales. También pertenece á éstas el establecimiento y creación de arbitrios en el tiempo y forma que esta ley ordena.

Art. 32. La Junta municipal estará compuesta:

1.º De todos los Concejales que debe tener el Ayuntamiento.

2.º De un número de Vocales asociados igual al de Concejales.

Esta Asamblea será designada en la forma que expresa el capítulo 3.º de este título II.

Art. 33. La revisión y censura de las cuentas de los Ayuntamientos corresponderá á las Juntas municipales.

CAPÍTULO II (1)

De la organización de los Ayuntamientos.

Art. 34. El censo de población determina el número de Concejales correspondiente á cada Municipio y su división en categorías; el número de Alcaldes y Tenientes determina el de los distritos que se divide cada término, y el número de regidores en cada uno de estos distritos determina el número de barrios, de colegios electorales y de secciones de cada colegio, todo conforme á los siguientes artículos.

Art. 35. El número de Concejales, distritos y regidores se ajustará á la siguiente escala:

Puesto en vigor este capítulo por el art. 12 del Real decreto de adaptación de la ley electoral de 26 de Junio de 1890 á elecciones de Diputados provinciales y de Concejales con la modificación consiguiente á la aplicación del art. 23 de la ley electoral antes citada, quedando redactados estos dos artículos como continuación del 12 antes mencionado, en la forma que se queda, pero sin dejar por eso de tener presente la disposición 2.ª transitoria del mismo Real decreto de adaptación

		Alcaldes...	Tenientes..	Regidores..	Total de Concejales..	Distritos...	Colegios...
Hasta 500	residentes	1	n	5	6	1	1
De 501	á 800.	1	n	6	7	1	1
801	1.000.	1	1	6	8	2	1
1.001	2.000.	1	2	6	9	2	1
2.001	3.000.	1	2	7	10	2	1
3.001	4.000.	1	2	8	11	2	3
4.001	5.000.	1	2	9	12	2	3
5.001	6.000.	1	2	10	13	2	3
6.001	7.000.	1	3	10	14	3	4
7.001	8.000.	1	3	11	15	3	4
8.001	9.000.	1	3	12	16	3	4
9.001	10.000.	1	3	13	17	3	4
10.001	12.000.	1	4	13	18	4	5
12.001	14.000.	1	4	14	19	4	5
14.001	16.000.	1	4	15	20	4	5
16.001	18.000.	1	4	16	21	4	5
18.001	20.000.	1	5	16	22	5	6
20.001	22.000.	1	5	17	23	5	6
22.001	24.000.	1	5	18	24	5	6
24.001	26.000.	1	5	19	25	5	6
26.001	28.000.	1	6	19	26	6	7
28.001	30.000.	1	6	20	27	6	7
30.001	32.000.	1	6	21	28	6	7
32.001	34.000.	1	6	22	29	6	7
34.001	36.000.	1	7	22	30	7	8
36.001	38.000.	1	7	23	31	7	8
38.001	40.000.	1	7	24	32	7	8
40.001	45.000.	1	8	24	33	8	9
45.001	50.000.	1	8	25	34	8	9
50.001	55.000.	1	8	26	35	8	9
55.001	60.000.	1	8	27	36	8	9
60.001	65.000.	1	8	28	37	8	9
65.001	70.000.	1	9	28	38	9	10
70.001	75.000.	1	9	29	39	9	10
75.001	80.000.	1	9	30	40	9	10
80.001	85.000.	1	9	31	41	9	10
85.001	90.000.	1	9	32	42	9	10
90.001	95.000.	1	10	32	43	10	11
95.001	100.000.	1	10	33	44	10	11

100.000 residentes en adelante no se hará variación que la de aumentar un Regidor por 0.000, hasta que el Ayuntamiento llegue á concejales, de cuyo número no pasará.
 3 distritos en que se divida cada término se-
 óximamente iguales en número de habi-

36. Cada distrito se dividirá en barrios
 o contenga más de 4.000 habitantes.
 s barrios de cada distrito serán próxima-
 iguales en población, y cada barrio queda-
 comprendido en un solo distrito.

do arrabal separado del casco de la pobla-
 así como cualquiera otra parte del término
 ipal apartado del mismo casco, ha de cons-
 un barrio, sea la que fuere su población.

cada barrio habrá un Alcalde del mismo,
 ado por el Alcalde de entre los electores
 ngan su residencia fija en la demarcación.
 Alcalde podrá separar libremente á los Al-
 de barrio.

los pueblos á que se refiere el capítulo 2.^o
 3.^o de esta ley, desempeñarán las fun-
 de Alcalde de barrio los Presidentes de las
 s que deben elegirse en conformidad á los
 los 91, 92 y 93, y no podrán ser removidos
 or las causas que se expresan en esta ley
 os Alcaldes y Tenientes.

37 (1). Los términos municipales se di-
 a en tantos colegios electorales como el
 amiento crea conveniente, con tal que no

ra la aplicación de este artículo, véase lo dispuesto en
 o párrafo del art. 12 del Real decreto de adaptación ec-
 ectoral de 26 de Junio de 1890 á las elecciones de Dipu-
 ovinciales y de Concejales, publicado en la *Gaceta* de
 mbre de 1890, y por el cual se sustituye aquel artícu-
 l de la ley electoral citada de 26 de Junio de 1890.

sean menos que el número de Alcaldes y Tenientes, y que un mismo colegio no forme parte de diferentes distritos. En los pueblos que no excedan de 800 vecinos, se constituirá una sola Mesa.

El Ayuntamiento podrá dividir los colegios en tantas secciones como sean necesarias para facilitar la libre emisión del sufragio, siempre que el número no exceda del de Alcaldes de barrio.

Los grupos de población rural que según esta ley deben formar barrios, constituirán sección si excedieren de 800 vecinos.

Art. 38. La primera división del término en distritos, barrios, colegios y secciones se hará en conformidad á las siguientes reglas:

1.º El Ayuntamiento acordará la división y la hará pública en el *Boletín oficial* de la provincia y por medio de los periódicos locales, ó por edictos en su defecto.

2.º Los vecinos y domiciliados del término pueden hacer dentro del mes siguiente, á contar desde la fecha de la publicación del acuerdo, las reclamaciones que contra éste creyeran oportunas.

3.º Si no hubiere reclamación alguna, el acuerdo será ejecutivo finalizado el plazo antedicho; si las hubiere, el Ayuntamiento las examinará y remitirá informadas, juntamente con la copia certificada del acuerdo de división, á la Diputación provincial, dentro de los quince días siguientes á la expiración del plazo.

4.º La Diputación provincial, examinados los antecedentes y reclamaciones, resolverá lo que proceda en cuanto á los puntos á que éstas se contraigan, y comunicará su acuerdo dentro de un mes desde que le fuere remitido el expediente.

Art. 39. Hecha la división de un término municipal conforme á las prescripciones de esta ley.

drá alterarse hasta pasados dos años por los, y sólo en el caso de que por el transcurso de tiempo no corresponda á las condiciones y circunstancias anteriormente expresadas, y nunca á tres meses que precedan á cualesquiera sesiones ordinarias.

El expediente de variación dará principio por iniciativa del Ayuntamiento y seguirá los mismos límites expresados en el artículo anterior.

Art. 40. Serán electores los vecinos cabezas de familia con casa abierta que lleven dos años por lo menos de residencia fija en el término municipal, vengán pagando por bienes propios alguna clase de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería ó de subsidio industrial y de comercio, con anterioridad á la formación de listas electorales, ó acrediten ser empleados civiles del Estado, la Provincia ó el Municipio en servicio activo, cesantes con haber por clasificación, jubilados ó retirados del ejército y armada.

También serán electores los mayores de edad que llevando dos años por lo menos de residencia fija en el término del Municipio, justifiquen su capacidad profesional ó académica por medio de título ó diploma.

En los pueblos menores de 100 vecinos, todos los mayores de edad serán electores, sin más excepciones que las que establece el art. 2.º de la ley electoral de 20 de Agosto de 1870.

Art. 41. Serán elegibles, en las poblaciones mayores de 100 vecinos, los electores que, además de llevar cuatro años por lo menos de residencia fija en el término municipal, paguen una cuota directa que comprendan en la localidad los dos primeros de las listas de contribuyentes por el impuesto territorial y por el de subsidio industrial y de comercio; y en los Municipios menores de 1.000

y mayores de 400 vecinos, los que satisfagan cuotas comprendidas en los primeros cuatro quintos de las referidas listas. En los pueblos que no excedan de 400 vecinos, serán elegibles todos los electores.

Serán, además, incluídos en el número de los elegibles todos los que contribuyan con cuota igual á la más baja que en cada término municipal corresponda pagar para serlo con arreglo al párrafo anterior.

Los que siendo vecinos paguen alguna cuota de contribución y acrediten por medio de título oficial su capacidad profesional ó académica, serán también elegibles.

Igualmente lo serán los que acrediten que sufren descuento en los haberes que perciben de fondos generales, provinciales ó municipales, siempre que el importe del descuento se halle comprendido en la proporción marcada anteriormente para los elegibles en las poblaciones de 1.000 y 400 vecinos respectivamente.

Se estimará la cuota acumulando las que satisfagan los contribuyentes dentro y fuera del pueblo por impuesto directo del Estado y por recargos municipales. Para computar la contribución á los electores y á los elegibles, se considerarán bienes propios: respecto de los maridos, los de sus mujeres, mientras subsista la sociedad conyugal; respecto de los padres, los de sus hijos que legítimamente administren; respecto de los hijos, los suyos propios cuyo usufructo no tuvieren por cualquier concepto.

Art. 42 (1). Se procurará que á cada colegio electoral corresponda elegir cuatro Concejales, ó

(1) Para la aplicación de este artículo, véase el 13 del Real decreto de adaptación anteriormente citado, publicado en la *Gaceta* de 8 de Noviembre de 1890.

el número que más á éste se aproxime. Cada elector votará únicamente dos Concejales cuando ha de elegirse tres en el colegio electoral; tres cuando cuatro; cuatro cuando seis, y cinco cuando siete.

Promulgada esta ley, se procederá á formar listas electorales con arreglo á lo prevenido en los párrafos anteriores, sujetándolas en su formación, plazos y demás requisitos y trámites á la ley electoral, según queda dispuesto.

Art. 43. En ningún caso pueden ser Concejales:

1.º Los Diputados provinciales ó á Cortes y Senadores, excepto en la capital de la Moravia.

2.º Los Jueces municipales, Notarios y otras personas que desempeñen cargos públicos declarados incompatibles con el de Concejal por leyes especiales.

3.º Los que desempeñen funciones públicas atribuidas, aun cuando hayan renunciado el cargo. Los Catedráticos de Universidad ó de Instituto podrán ser Concejales en las poblaciones donde desempeñen sus destinos.

4.º Los que directa ó indirectamente tengan interés en servicios, contrataciones ó suministros dentro del término municipal, por cuenta de su Ayuntamiento, de la Provincia ó del Estado.

5.º Los deudores como segundos contribuyentes á los fondos municipales, provinciales ó generales, contra quienes se haya expedido embargo.

6.º Los que tengan contienda administrativa judicial pendiente con el Ayuntamiento ó con los establecimientos que se hallan bajo su dependencia ó administración.

Para el desempeño de los cargos de Alcalde ordinario se necesita saber leer y escribir.

Pueden excusarse de ser Concejales:

1.º Los mayores de 60 años y los físicamente impedidos.

2.º Los que hayan sido Senadores, Diputados á Cortes, Diputados provinciales y Concejales, hasta dos años después de haber cesado en sus respectivos cargos.

Los Concejales cesarán en sus cargos si dejaren de tener las condiciones que marca esta ley.

Cada colegio nombrará el número de Concejales que le corresponda proporcionalmente al de sus electores.

Las secciones de cada colegio votarán el mismo número de Concejales señalados á éste.

Art. 44. Las elecciones municipales se harán en la primera quincena del undécimo mes del año económico.

Art. 45. Los Ayuntamientos se renovarán por mitad de dos en dos años, saliendo en cada renovación los Concejales más antiguos.

En los casos de renovación ordinaria ó extraordinaria, la elección de los Concejales se hará por los mismos colegios electorales que hubieren hecho la de los salientes (1).

Art. 46 (2). Se procederá á la elección parcial cuando medio año antes, por lo menos, de las elecciones ordinarias ocurran vacantes que asciendan á la tercera parte del número total de Concejales (3).

Si las vacantes ocurrieren después de aquélla

(1) Para la aplicación de este párrafo 2.º, téngase presente el art. 14 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890 sobre adaptación de la ley electoral de 26 de Junio del mismo año á la elecciones de Diputados provinciales y de Concejales.

(2) Véase la 3.ª de las disposiciones transitorias del Real decreto de adaptación citado en la nota anterior.

(3) Véase el párrafo 1.º de la disposición 1.ª de la Real orden de 14 de Agosto de 1890, publicada en la *Gaceta* del día 15.

poca y ascendieron al número indicado, serán cubiertas interinamente, hasta la primera elección ordinaria, por los que el Gobernador designe entre los que en épocas anteriores hayan pertenecido por elección al Ayuntamiento (1).

Art. 47. Los Ayuntamientos darán cuenta de las antedichas vacantes al Gobernador, el cual, en el preciso término de diez días, mandará proceder á la elección dentro de un plazo que no exceda de quince ni exceda de veinte, contados desde que el acuerdo sea comunicado al Ayuntamiento respectivo.

Art. 48. Para los efectos de esta ley, en cuanto al turno de salida, serán considerados los electos, en caso de vacantes, como los Concejales á quienes reemplacen.

Art. 49. Los Ayuntamientos elegirán de su seno á los Alcaldes y Tenientes de Alcalde. El Rey podrá nombrar de entre los Concejales los Alcaldes de las capitales de provincia, de las cabezas de partido judicial y de los pueblos que tengan igual ó mayor vecindario que aquéllas dentro del mismo partido, siempre que no bajen de 6.000 habitantes.

El Alcalde de Madrid será de libre nombramiento del Rey; también podrá el Rey nombrar en Madrid los Tenientes de Alcalde, pero del seno de la Corporación municipal.

Art. 50. En los pueblos donde la elección de Alcalde y Tenientes corresponda á los Ayuntamientos, se verificará en la forma que disponen los artículos 53 y siguientes de esta ley.

Art. 51. Los Alcaldes nombrados por el Rey se presentarán á tomar posesión de sus cargos el día en que deba constituirse la Corporación municipal.

(1) Véase el párrafo 2.º de la disposición 1.ª de la Real orden de 14 de Agosto de 1810, publicada en la *Gaceta* del día 15.

pal, previo aviso del Alcalde saliente, y el nuevo Alcalde conferirá la posesión de su cargo á los Tenientes y Concejales.

Art. 52. Las vacantes de Alcaldes y Tenientes cuyo nombramiento corresponda á los Concejales, serán cubiertas por los que hayan sido elegidos por mayor número de votos, ó superiores en edad en caso de empate, si ocurrieren dentro del medio año que precede á las elecciones ordinarias, y en otro caso por elección en la forma que disponen los artículos 53 y siguientes. En la primera elección general ó parcial, y despues de completo el Ayuntamiento, se procederá á cubrir la vacante en la forma que disponen dichos artículos.

El primer día del año económico, después de hecha la elección ordinaria, cesarán en sus cargos los Concejales salientes y tomarán posesión los electos.

El Alcalde saliente concurrirá á este acto para recibir á los nuevos Concejales é instalarlos en sus cargos, y se retirará en seguida con los demás Concejales salientes.

Art. 53. Constituído el nuevo Ayuntamiento bajo la presidencia interina del Concejal que hubiere obtenido mayor número de votos, procederá á la elección del Alcalde.

Art. 54. La votación se hará por medio de papeletas, que los Concejales, llamados por orden de votos, irán depositando uno á uno en la urna destinada al efecto.

Art. 55. Terminada la votación, el Presidente sacará de la urna las papeletas una á una, leyendo en alta voz su contenido, que el Secretario del Ayuntamiento anotará en el acta. Todos los Concejales tienen derecho para examinar y reconocer en el acto las papeletas.

Quedará elegido el que obtenga la mayoría

soluto del número total de Concejales. En caso empate se repetirá la votación, y si hubiere segundo empate, decidirá la suerte.

Art. 56. Proclamado por el Presidente interior el resultado de la votación, el elegido pasará á ocupar la Presidencia y recibirá las insignias de cargo. En seguida, por el mismo orden, y uno por uno, se procederá á la elección de los Tenientes.

Terminada la elección de los Tenientes, el Ayuntamiento nombrará uno ó dos Concejales que, en el nombre y carácter de Procuradores Síndicos, representen á la corporación en todos los negocios que deba sostener en defensa de los intereses del Municipio, y censuren y revisen todas las cuentas y presupuestos locales.

Art. 57. Hechas estas elecciones, y dada posesión por el Alcalde de los cargos de Tenientes y de Síndicos á los Concejales electos, el Ayuntamiento fijará los días y horas en que ha de celebrarse sus sesiones ordinarias, que no serán menos de una vez por semana; con lo cual se dará por terminada la sesión inaugural.

Art. 58. En el mismo día el Alcalde nombrará entre los electores á los Alcaldes de barrio. Los nombrados desempeñarán el cargo de Alcaldes de barrio hasta la próxima renovación de Ayuntamiento, si antes no fuesen separados por el Alcalde.

Art. 59. El Alcalde dará conocimiento á la corporación municipal, en la sesión inmediata, de los nombramientos de Alcaldes de barrio á los que se refiere el artículo anterior.

Art. 60. En la segunda sesión fijará el Ayuntamiento el número de Comisiones permanentes que ha de dividirse, confiando á cada una de ellas los negocios generales de uno ó más ramos ó

los que la ley pone á su cargo, y determinando el número de individuos de que han de componerse.

Tomado el acuerdo, se procederá inmediatamente á la elección de personas en votación secreta y por papeletas, quedando elegidos los que obtuvieren mayor número de votos, y decidiendo la suerte en caso de empate.

Art. 61. En el trascurso del año podrá nombrar el Ayuntamiento, cuando lo estime conveniente, Comisiones especiales, que serán elegidas como las permanentes, pero cesarán concluido que sea su encargo.

Cuando un Alcalde, ó Teniente, ó Síndico, fuere electo para una Comisión, será su Presidente.

Art. 62 (1). Entretanto que el Gobierno no prepare un proyecto de ley para el régimen especial de los Ayuntamientos de poblaciones que exceden de 100.000 almas, según el Censo oficial, los Concejales de las mismas no podrán ser reelegidos hasta cuatro años después de haber cesado en el cargo por cualquiera causa.

Igual incompatibilidad tendrán, durante el mismo plazo de cuatro años, los que hayan de ser nombrados Concejales interinos en las poblaciones á que se refiere el párrafo anterior si ocurrieren los casos previstos en los arts. 46 y 193 de esta ley.

En las demás poblaciones que no excedan de 100.000 almas, lo mismo que en los Ayuntamientos constituídos por agregación, con arreglo al art. 3.º de esta ley, podrán ser reelegidos los Concejales. Son asimismo reelegibles en todas partes los Vocales asociados.

Lo mismo los Concejales que los individuos

(1) Modificado, como aquí se encuentra, por la ley de 22 de Agosto de 1896, publicada en la *Gaceta* de 25 del mismo mes.

de la asamblea de asociados, dejarán de ser reelegibles si incurrieren en alguno de los casos de responsabilidad.

Art. 63. La investidura de Alcalde, Teniente ó Síndico, y los cargos de Concejales, de Vocales asociados y de Alcaldes de barrio, son gratuitos, obligatorios y honoríficos.

Los Alcaldes, Tenientes y Regidores no tendrán como tales tratamiento alguno especial.

En las capitales de provincia de primera clase pueden los Ayuntamientos conceder cierta suma al Alcalde para gastos de representación.

El Alcalde, los Tenientes y los Alcaldes de barrio usarán como símbolo de su Autoridad las insignias que el reglamento determine.

CAPITULO III

De la organización de la Junta municipal.

Art. 64. La Junta municipal se compone del Ayuntamiento y de los Vocales asociados en número igual al de Concejales, designados de entre los contribuyentes del distrito.

Art. 65. Pueden ser designados para este objeto todos los vecinos que hayan de contribuir por repartimiento á sufragar las cargas municipales, y donde no hubiere repartimiento, los que paguen contribución directa al Estado.

Quedan, sin embargo, exceptuados los que no tengan capacidad para ser Concejales, los que lo fueren á la sazón, sus asociados y sus parientes dentro del cuarto grado, y los empleados y dependientes del Ayuntamiento.

En los pueblos que no excedan de 2.000 habitantes, la exclusión por parentesco se limitará al segundo grado.

Art. 66. La designación se hará por sorteo entre los contribuyentes, repartidos en secciones, en conformidad á las reglas siguientes:

1.ª El número de secciones será determinado en una de las cuatro primeras sesiones del año por cada Ayuntamiento, en conformidad al vecindario del pueblo y á la cuantía y clase de riqueza del mismo, no siendo en ningún caso menor que el de la tercera parte de los Concejales.

2.ª Ingresarán en cada sección los vecinos ó hacendados cuya profesión ó industria tenga entre sí más analogía con arreglo á las agremiaciones y clasificaciones para el pago de las contribuciones directas, de suerte que los individuos de una misma clase contributiva no formen parte de secciones diferentes. Los vecinos que contribuyan por más de un concepto, ó acumulen dos ó más industrias, ingresarán en una sección á su elección.

3.ª En las poblaciones donde no se pueda hacer distinción de clases por ser uniforme el concepto contributivo de sus habitantes, ó no tener ramos industriales cuya importancia exija la formación de una sección especial, el repartimiento de éstas tendrá lugar por calles, barrios ó parroquias.

Esto mismo se verificará cuando alguna de las secciones formadas según la regla anterior resultare tan numerosa, que comprenda por sí sola el cuarto de los Vocales asociados de la Junta municipal:

4.ª A cada sección se designará el número de Vocales ó asociados que corresponda en proporción al importe de las contribuciones que paguen todos sus individuos.

Art. 67. El Ayuntamiento, antes de finalizar el primer mes de cada año económico, publicará

el resultado de la formación el cual puede reclamar con el término de ocho días por provincial.

La Diputación resolverá dentro de los quince días siguientes ejecutivo en los dos años.

68. Ultimada así la

Ayuntamiento, en con dos días de anticipa

ción, y una hora antes

de campana, procederá

a los trabajos de repartidos entre las secciones

de publicar el resultado

de la Junta deberá quedar

dentro del segundo día

de los elegidos desempeñen

el respectivo año económico.

69. El Ayuntamiento

de término de ocho días,

procediendo á su vez

sin perjuicio del resto

de la Diputación provincial.

70. Siempre que el

grupo de vocales asociado

sorteo con las formas

que siempre esté con

TÍTULO

DE LA ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

de las atribuciones de

71. Los Ayuntamientos de carácter económico-administrativo

ejercer aquellas funciones que por las leyes les están cometidas.

Su tratamiento es el impersonal.

Art. 72. Es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos con arreglo al núm. 1.º del art. 84 de la Constitución, y en particular cuanto tenga relación con los objetos siguientes:

Primero. Establecimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y ornato de la vía pública, comodidad é higiene del vecindario. fomento de sus intereses materiales y morales, y seguridad de las personas y propiedades, á saber:

1.º Apertura y alineación de calles y plazas y de toda clase de vías de comunicación.

2.º Empedrado, alumbrado y alcantarillado.

3.º Surtido de aguas.

4.º Paseos y arbolados.

5.º Establecimientos, balnearios, lavaderos, casas de mercado y mataderos.

6.º Ferias y mercados.

7.º Instituciones de instrucción y servicios sanitarios.

8.º Edificios municipales, y en general todo género de obras públicas necesarias para el cumplimiento de los servicios, con sujeción á la legislación especial de obras públicas.

9.º Vigilancia y guardería.

Segundo. Policía urbana y rural, ó sea cuanto tenga relación con el buen orden y vigilancia de los servicios municipales establecidos, cuidado de la vía pública en general, y limpieza, higiene y salubridad del pueblo.

Tercero. Administración municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado y conserva-

ción de todas las fincas, bienes y derechos dependientes al Municipio y es él dependan, y la determinación de la recaudación, inversión y créditos y contribuciones é impuestos necesarios para el sostenimiento de los servicios municipales.

Es obligación de los Ayuntamientos la conservación y mejora de los caminos y obras públicas. En cuanto á los caminos y obras públicas los Ayuntamientos obligarán á los interesados á su reparación y conservación.

Para lograr tan útiles y provechosos medios en junta de asociados y en junta de interesados por el bien común.

Los Gobernadores velarán por el cumplimiento de esta parte tan interesada de la ley provincial, en virtud de las facultades que les confiere la ley provincial.

Art. 73. Es obligación de los Ayuntamientos procurar por sí ó con los asociados el cumplimiento de los deberes y necesidades del pueblo, de los que según la presente ley, están á su cargo y vigilancia, y en particular:

- 1.º Conservación y arreglo de las obras públicas.
 - 2.º Policía urbana y rural.
 - 3.º Policía de seguridad.
 - 4.º Instrucción primaria.
 - 5.º Administración, custodia y conservación de todas las fincas, bienes y derechos dependientes al Municipio.
- Las instituciones de beneficencia serán administradas por el Municipio, sin perjuicio de la alta inspección que confiere la legislación general y particular.

En los asuntos que no sean de su exclusiva competencia, están igualmente obligados á auxiliar la acción de las Autoridades generales y locales para el cumplimiento de aquella parte de las leyes que se refiera á los habitantes del término municipal ó deba cumplirse dentro del mismo, á cuyo efecto procederán en conformidad á lo que determinen las mismas leyes y los reglamentos dictados para su ejecución.

Art. 74. Para el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, corresponden á éstos muy especialmente las atribuciones siguientes:

1.º Formación de las ordenanzas municipales de policía urbana y rural.

2.º Nombramiento de sus empleados y agentes en todos los ramos.

Los agentes de vigilancia municipal que usen armas, dependerán exclusivamente del Alcalde en su nombramiento y separación.

3.º Establecimiento de prestaciones personales.

4.º Asociación con otros Ayuntamientos.

Art. 75. Es atribución de los Ayuntamientos arreglar para cada año el modo de división, aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales del pueblo, con sujeción á las siguientes reglas:

1.º Cuando los bienes comunales se presten á ser utilizados en igualdad de condiciones por todos los vecinos del pueblo, el disfrute y aprovechamiento será adjudicado en pública licitación entre los mismos vecinos exclusivamente, previas las tasaciones necesarias y la división en lotes, si á ello hubiere lugar.

2.º Si los bienes fueren susceptibles de utilización general, el Ayuntamiento verificará la distribución de los productos entre todos los vecinos, formando al efecto divisiones ó lotes, que

adjudicará á cada uno con a.
de las tres bases siguientes;

Por familias ó vecinos.

Por personas ó habitantes

Por la cuota de repartimi

3.ª La distribución por v
stricta igualdad entre cada u
ere el número de individuo
nilia, ó que vivan en su c
pendencia.

La distribución por person
ado á cada vecino la parte
proporción al número de
de que conste su casa ó fa

La distribución por la cuo
verificará entre los vecinos
judicando á cada uno la pa
on á la cuota repartida le c
so se adjudicará á los vecin
s del pago una porción que
responda al contribuyente

4.ª En casos extraordina
ciones del pueblo así lo
untamiento acordar la sub
los aprovechamientos com
hos, ó fijar el precio que c
er por el lote que le haya

En todo lo referente al ré
ento y conservación de los
, regirán la ley de 24 de
plamento de 17 de igual me
Art. 76. Las ordenanzas
la urbana y rural que l
erden para el régimen de
tos, no serán ejecutivas sin
bernador, de acuerdo con
rcial.

En caso de discordia, si el Ayuntamiento insiste en su acuerdo, la aprobación en los puntos á que aquélla se refiera, corresponde al Gobierno, previa consulta al Consejo de Estado.

Ni en ellas, ni en los reglamentos y disposiciones que los Ayuntamientos formaren para su ejecución, se contravendrá á las leyes generales del país.

Art. 77. Las penas que por infracción de las ordenanzas y reglamentos impongan los Ayuntamientos, sólo pueden ser multas que no excedan de 50 pesetas en las capitales de provincia, 25 en las de partido y pueblos de 4.000 habitantes, y 15 en los restantes, con el resarcimiento del daño causado é indemnización de gastos y arresto de un día por duro en caso de insolvencia.

Para la exacción de estas multas se procederá en conformidad á lo dispuesto en los artículos 185, reglas primera, segunda y tercera, 186 y 188. El Juez municipal desempeñará las funciones que en el art. 188 se encomiendan al de primera instancia.

Contra la imposición gubernativa puede el multado reclamar conforme al art. 187.

Art. 78. Es atribución exclusiva de los Ayuntamientos el nombramiento y separación de todos los empleados y dependientes pagados de los fondos municipales, y que sean necesarios para la realización de los servicios que están á su cargo, con la excepción establecida en el párrafo 4.º del art. 74.

Los funcionarios destinados á servicios profesionales tendrán la capacidad y condiciones que en las leyes relativas á aquéllos se determine.

Art. 79. La prestación personal se concede como auxilio para fomentar las obras públicas municipales de toda especie: los Ayuntamientos tie-

nen facultad para imponerles mayores de 16 y menor cuando los acogidos en la caridad, los militares en acapostados para el trabajo.

El número de días no año, ni de diez consecutivos uno por el valor que tenga localidad.

Fuera de los casos de este artículo se expresan, ni tación ni servicio personal curriendo en responsabilidad que así lo hiciere.

Art. 80. Los Ayuntamientos entre sí y con los inmediatas para la construcción de caminos, guardería rural, cinales y otros objetos de Estas comunidades se regirán por una Junta puesta de un delegado por cada una presidida por un Vocal que

La Junta formará las que serán sometidos á la pueblo, y en defecto de alguna, al Gobernador, o la Comisión provincial.

Art. 81. El Gobierno de fomentar y proteger por medio de asociaciones y comunidades para fines de seguridad, policía, construcción y conservación de caminos, aprovechamientos vecinales ú otros servicios de índole análoga, sin perjuicio de los derechos adquiridos hasta hoy. Estas comunidades serán siempre voluntarias y estarán regidas por Juntas de delegados de los Ayuntamientos, que celebrará

alternativamente sus reuniones en las respectivas cabezas de los distritos municipales asociados.

Cuando se produzcan reclamaciones sobre la manera como actualmente son administradas las antiguas comunidades de tierra, el Gobierno, oyendo al Consejo de Estado, podrá someter dichas comunidades á lo dispuesto en el párrafo anterior, salvas las cuestiones relativas á los derechos de propiedad hasta hoy adquiridos, que quedan reservadas á los Tribunales de justicia.

Art. 82. Los Ayuntamientos pueden representar acerca de los negocios de su competencia, á la Diputación provincial, al Gobernador, al Gobierno y á las Cortes.

Fuera del caso en que representen en queja del Alcalde, del Gobernador ó de la Diputación, habrán de hacerlo por conducto del primero, y del segundo además cuando se dirijan al Gobierno.

Si en el término de ocho días no dieren curso esas Autoridades á las representaciones de los Ayuntamientos, podrán éstos repetirlas en queja directamente á los Poderes públicos.

Art. 83. Todos los acuerdos de los Ayuntamientos en asuntos de su competencia son inmediatamente ejecutivos, salvo los recursos que determinan las leyes.

Art. 84. Necesitan la aprobación del Gobernador, oída la Comisión provincial, para ser ejecutivos, los acuerdos que se refieran á lo siguiente:

1.º Reforma y supresión de establecimientos municipales de beneficencia é instrucción.

2.º Podas y cortas en los montes municipales con sujeción á la ley y reglamento del ramo.

Art. 85. Las enajenaciones y permutas de los bienes municipales se acomodarán á las reglas siguientes:

1.º Los terrenos sobrantes concedidos al dominio particular, pueden ser vendidos al Ayuntamiento.

Los contratos relativos a los bienes inútiles para el servicio, y créditos particulares, necesitan la aprobación de la Comisión provincial.

Es necesaria la aprobación del Gobierno provincial, para todo lo relativo a los demás bienes inmuebles, derechos reales y títulos.

Art. 86. Es necesaria la aprobación provincial, para los pueblos menores de 4.000 habitantes.

El acuerdo del Ayuntamiento en todo caso, previo dictamen de los Ayuntamientos vecinos.

No se necesita autorización ni consentimiento para utilizar los interdictos de obra, y los de obra nueva ó vieja, en los pleitos en que el Ayuntamiento sea parte.

Art. 87. Siempre que por causas enumeradas en los artículos precedentes, no se obtenga la aprobación del Gobierno, el Alcalde cuidará de ejecutar lo mandado dentro de un plazo que no exceda de diez días, contados desde la fecha de la resolución.

Art. 88. Los Ayuntamientos, que según la ley no les compete, y en que obren por delegación, deberán cumplir lo mandado por las leyes del Gobierno que á ellos se refieren.

Art. 89. Los Juzgados y Tribunales no admitirán interdictos contra las providencias administrativas de los Ayuntamientos y Alcaldes en los asuntos de su competencia.

Los interesados pueden utilizar para su derecho los recursos establecidos en los arts. 171 y 177 de esta ley.

CAPITULO II

De la administración de los pueblos agregados á un término municipal.

Art. 90. Los pueblos que, formando con otros término municipal, tengan territorio propio, aguas, pastos, montes ó cualesquiera derechos que les sean peculiares, conservarán sobre ellos su administración particular.

Art. 91. Para dicha administración nombrarán una Junta, que se compondrá de un Presidente y de dos ó cuatro Vocales, elegidos directamente uno y otros por los vecinos del pueblo y de entre ellos mismos.

Serán cuatro los Vocales para los pueblos de 60 ó más vecinos, y dos cuando sea menor el vecindario.

Art. 92. La elección de Presidente y Vocales indicadas se hará con arreglo á la ley electoral, pero en un solo día y sin que transcurran más de ocho desde la posesión del Ayuntamiento del término, el cual cuidará de la ejecución.

Art. 93. Elegidos los tres ó cinco individuos para la Junta, corresponderá el cargo de Presidente á quien haya obtenido más votos, y si hubiera empate, decidirá la suerte.

Art. 94. Serán tachas para la elección de individuos de la Junta con relación al pueblo respec

las mismas que establece esta ley para los municipales.

t. 95. El Ayuntamiento del término respectivamente inspeccionará la administración particular á la que se refiere este capítulo, bien por su iniciativa, ó á solicitud de dos ó más vecinos del pueblo interesado.

t. 96. La administración y la inspección expresadas, así como los deberes y las obligaciones de la Junta y de sus Vocales, se arreglarán á las disposiciones de la presente ley en todo lo que no halla determinado en este capítulo.

CAPITULO III

De las sesiones y del modo de funcionar los Ayuntamientos.

t. 97. Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas. Sólo serán secretas cuando así lo acordare la mayoría de los asistentes, por ser los asuntos que en ellas hayan de tratarse relativos al interés público, régimen interior de la Corporación, ó afectar al decoro de ésta ó de cualquiera de sus miembros.

Las sesiones se celebrarán precisamente, penales, en las Casas Consistoriales, salvo los casos de fuerza mayor.

Los días y horas en que deban celebrarse las sesiones ordinarias.

t. 98. Los Alcaldes, Tenientes y Regidores estarán obligados á concurrir puntualmente á todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, no inculcándosele justa causa, que acreditarán en contrario.

La falta de asistencia hace incurrir por cada

vez en una multa con arreglo á la siguiente escala:

En los pueblos de más de 30.000 habitantes...	5 pesetas.
Idem de más de 15.000 »	4
Idem de más de 8.500 »	2
En los demás.....	1

Esta disposición es aplicable á los Vocales de la Junta municipal; pero las multas serán por cantidad cuádruple respecto á la primera, y doble de ésta respecto á la segunda.

Art. 99. Los Alcaldes, Tenientes y Regidores tienen todos voz y voto en las sesiones y acuerdos del Ayuntamiento.

Son igualmente responsables por los acuerdos que autoricen con su voto, sin que por ningún concepto les sea permitido abstenerse de emitirlo.

Art. 100. La presidencia del Ayuntamiento corresponde al Alcalde. En su defecto presidirán los Tenientes, y á falta de todos, el Regidor decano y los demás por el orden que se determina en el art. 52.

El Gobernador preside sin voto cuando asiste á las sesiones del Ayuntamiento.

Art. 101. El Alcalde podrá convocar á sesión extraordinaria cuando lo juzgue oportuno, y debe hacerlo siempre que se lo prevenga el Gobernador ó lo reclame la tercera parte de los Concejales.

Art. 102. En toda convocatoria para sesión extraordinaria se expresarán los asuntos que hayan de tratarse en ella, y no podrá el Ayuntamiento ocuparse de ningún otro en la misma sesión.

Las convocatorias se harán con un día de anticipación por lo menos, á no ser en los casos de mayor urgencia, y quedarán sujetos los acuerdos á ratificación en la sesión inmediata.

Secretario del Ayuntamiento un acta en que han de constar los nombres del Presidente y demás Concejales presentes, los asuntos que se trataren y lo resuelto sobre ellos, el resultado de las votaciones y la lista de las nominales cuando las hubiese.

Siempre constarán en el acta la opinión de las minorías y sus fundamentos.

El acta será firmada por los Concejales que concurrieron á la sesión; por los presentes cuando se dé cuenta de ella, y por el Secretario.

El acta de la sesión inaugural de cada Ayuntamiento será firmada por todos los que á ella concurran, expresando los que no saben firmar.

Art. 108. El libro de actas del Ayuntamiento es un instrumento público y solemne; ningún acuerdo que no conste explícita y terminantemente en el acta á que se refiere, tendrá valor alguno.

Este libro estará extendido en papel del sello correspondiente, y todas sus hojas llevarán la rúbrica del Alcalde y el sello del Ayuntamiento.

Art. 109. A fin de cada mes, en las capitales de provincia y de partido y pueblos que tengan más de 4.000 habitantes, y de cada trimestre en los demás, se formará por el Secretario un extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el mismo, y aprobado por la Corporación, se remitirá al Gobernador de la provincia para su inserción en el *Boletín oficial*.

Art. 110. Las reglas anteriores se aplicarán á las actas y sesiones de la Junta municipal. Se llevarán sus actas en libros separados de las del Ayuntamiento y con análogas formalidades, precauciones y requisitos, salvo lo en contrario dispuesto por esta ley.

Art. 111. Los trámites de instrucción y dis-

ón no servirán nunca
 ientos para dilatar e
 gaciones que las leyes

CAPÍTU

*as funciones administr
 mtes, Síndicos, Regidor*

art. 112. El Alcalde
 ón municipal lleva su
 i en todos los asuntos
 cedidas á los Síndicos

art. 113. Correspond
 nero, donde haya más
 .° Presidir las sesio
 ies.

.° Cuidar, bajo su re
 aplán por el Ayuntam
 ones de sus superiore

.° Corresponderse, .
 unto, con las Autorid
 se necesario.

art. 114. Corresponde
 co, ó primero en su c
 nistración municipal:

.° Publicar, ejecuta
 erdos del Ayuntamier
 os y no mediaré caus
 a, procediendo, si fue
 apremio y pago é imp
 gún caso excedan de
 10 77, y arresto por i

.° Suspender la ejec
 untamiento en los cas
 10s 169 y 170 de esta

.° Transmitir á la

al Gobernador de la provincia, según lo que en esta ley se prescribe, los acuerdos del Ayuntamiento que requieran la aprobación superior para ser ejecutivos, y publicarlos, ejecutarlos y hacerlos cumplir cuando lo obtuvieren.

4.º Transmitir á quien corresponda las exposiciones que los Ayuntamientos, en uso de su derecho, hicieren á la Diputación provincial, al Gobernador de la provincia, al Gobierno ó á las Cortes.

5.º Dirigir todo lo relativo á la policía urbana y rural, dictando al efecto los bandos y disposiciones que tuviere por convenientes, conforme á las Ordenanzas y resoluciones generales del Ayuntamiento en la materia.

6.º Dirigir y vigilar la conducta de todos los dependientes del ramo de policía urbana y rural, castigándolos con suspensión de empleo y sueldo hasta treinta días, y proponer su destitución al Ayuntamiento.

7.º Ejercer todas las funciones propias de Ordenador y Jefe de la inversión de fondos municipales y su contabilidad.

8.º Inspeccionar, activar y dirigir en lo económico y gubernativo las obras, establecimientos de beneficencia y de instrucción pública costeados por fondos municipales, con sujeción á las leyes y disposiciones para su ejecución.

9.º Cuidar de que se presten con exactitud los servicios de bagajes, alojamientos y demás cargas públicas.

10. Presidir los remates y subastas para ventas, arrendamientos y servicios municipales, salvo las disposiciones de las leyes.

11. Corresponderse, en los asuntos de su competencia administrativa, con las Autoridades y Corporaciones de la provincia, haciéndolo por

acto del Gobernador de la misma cuando
bre de entenderse con los de otras ó con el
erno, y desempeñar cuantas funciones espe-
s le confieran las leyes y reglamentos.

t. 115. Donde sólo hubiere un Teniente, el
de y el Teniente tendrán cada uno á su car-
go de los distritos en que se haya dividido
municipio municipal.

Donde hubiere más de un Teniente, los dis-
tritos se dividirán sólo entre los Tenientes.

t. 116. Los Tenientes ejercerán cada uno
en su distrito las funciones que la ley atribuye
al Alcalde, bajo la dirección de éste, como Jefe
superior de la administración municipal.

Los Alcaldes de barrio están á las órdenes de
los Tenientes y ejercen la parte de funciones ad-
ministrativas que éstos les deleguen.

t. 117. El Alcalde y los Tenientes necesi-
tando licencia del Ayuntamiento para ausentarse
por término por más de ocho días.

En ningún caso dejarán de dar aviso previo
y se haya de reemplazarlos, y además lo comu-
nicarán por escrito al Ayuntamiento cuando la
ausencia exceda de dos días.

Esto mismo tendrá lugar respecto al Alcalde
cuando por asunto urgente tuviere precisión de
ausentarse antes de poder obtener la licencia del
Ayuntamiento. Para estos casos puede el Alcalde
autorizar la ausencia de los Tenientes.

La licencia concedida, y el nombre del que ha
de reemplazar al ausente, serán comunicados al
Gobernador en la fecha de aquélla.

t. 118. Los Alcaldes de barrio no pueden
dejar su cargo nunca del de su cargo por más
de cuatro horas, sin licencia del Alcalde, qui-
enará persona que los reemplace durante
su ausencia.

Art. 119. Los Tenientes reemplazarán al Alcalde en todas sus atribuciones, y los Regidores á los Tenientes, por el orden establecido en el artículo 52, en casos de ausencias, enfermedades ó vacantes interinas.

Art. 120. No pueden los Concejales, sin licencia del Ayuntamiento, ausentarse en día de sesión ordinaria ó extraordinaria, ni por más tiempo que el que medie entre dos ordinarias.

Sólo se concederá licencia á la par á la cuarta parte del número total de Concejales.

Art. 121. Los Concejales desempeñarán sus funciones dentro del término municipal á que pertenecen, sin que para su ejercicio puedan ser obligados por nadie á salir de él.

CAPITULO V

De los Secretarios de Ayuntamientos.

Art. 122. Todo Ayuntamiento tendrá un Secretario, pagado de sus fondos.

El nombramiento corresponde exclusivamente al Ayuntamiento, previo concurso, comunicando el nombramiento al Gobernador.

Art. 123. Para ser Secretario se necesita ser español, mayor de edad, estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y poseer los conocimientos de instrucción primaria.

No pueden ser Secretarios en propiedad ni interinamente:

- 1.º Los Concejales del mismo Ayuntamiento.
- 2.º Los Notarios y Escribanos, en tanto que desempeñen las funciones propias de estos cargos.
- 3.º Los empleados activos de todas clases.
- 4.º Los particulares ó facultativos que tengan

tratos ó compromisos de
ciento ó común de vecin

.° Los que directa ó in
te en servicios, contrata
distrito municipal, por
vincia ó del Estado.

.° Los que tengan pen
rativa ó judicial con el
establecimientos que se
cia ó su administración

.° Los deudores á fonde
andos contribuyentes.

El cargo de Secretario
ó otro cargo municipal.

art. 124. Los Alcaldes y
retarios, dando al Gober
a para su conocimiento
da cuando la acuerden
a totalidad de los Conce
ormará al Gobernador, y

El Gobernador, median
bién suspender y destitu
ntamiento, dando parte
ancia ó con audiencia de
spenso, y oyendo al Con
la resolución que estir

art. 125. Las obligacio
Ayuntamiento son:

.° Asistir sin voz ni vo
Cuerpo municipal, para
spondencia y de los expe
en que el Presidente se

.° Redactar el acta de
incipio de la siguiente, y
a transcribir fielmente
efecto, cuidando de rec

previene el art. 107, y estampando la suya entera en el lugar correspondiente.

3.º Preparar los expedientes para los trabajos de las Comisiones y la resolución del Ayuntamiento.

4.º Anotar bajo su firma, en cada expediente, la resolución del Ayuntamiento.

5.º Extender las minutas de los acuerdos y resoluciones del Cuerpo municipal y de las Comisiones en su caso.

6.º Preparar los expedientes, anotar las resoluciones y extender las minutas de los acuerdos del Alcalde, cuando no hubiere Secretario especial al efecto.

7.º Certificar de todos los actos oficiales del Cuerpo municipal y del Alcalde donde no hubiere Secretario especial, y expedir las certificaciones á que hubiere lugar.

Estas, sin embargo, para ser valederas, requieren el V.º B.º del Alcalde.

8.º Dirigir y vigilar á los empleados de la Secretaría, de que es jefe.

9.º Auxiliar á las Juntas periciales, sin retribución especial, en la confección de amillaramiento y repartos.

10. Cualquier otro encargo que las leyes le atribuyan ó el Ayuntamiento le confiare, dentro de la esfera y objeto de su empleo.

Art. 126. Donde no hubiere Archivero, será cargo del Secretario custodiar y ordenar el Archivo municipal. Formará inventario de todos los papeles y documentos, y lo adicionará cada año con un Apéndice, del cual, así como del inventario, remitirá copia con el V.º B.º del Alcalde á la Diputación provincial.

Arto. 127. En los Ayuntamientos en que no hubiere Contador será cargo del Secretario llevar

os de entradas y
os libramientos y
ago.

. Los Ayuntamientos
Secretarios las correcciones
por conveniente,
as faltas ó abusos
de su cargo y no de
minal.

Los Secretarios
Alcalde; pero en las
pueblos de más de
tiene facultad par
ial, cuyo sueldo s
municipal.

. Los Secretarios
, quedarán, en cu
los á los del respo
diferencias consigu
as.

. El Secretario c
Junta municipal.

TÍTULO I

DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO

los presupuestos y

. Son aplicables
posiciones de la
Estado, en cuant

económico municipi

rija para los presupuestos y cuentas generales de la Nación.

Art. 133. Los Ayuntamientos formarán todos los años un presupuesto que comprenda los gastos que por cualquier concepto hayan de hacerse, y los ingresos destinados á cubrirlos. Al efecto, constituirán de su seno una de las Comisiones permanentes de que habla el art. 60.

Art. 134. Los presupuestos anuales ordinarios contendrán precisamente las partidas necesarias, según los recursos del Municipio, para atender y llenar las obligaciones á que se refiere el párrafo primero, art. 73 de esta ley; los servicios establecidos de entre los que según el art. 72 sean de la competencia de los Ayuntamientos; los gastos que en virtud del párrafo 2.º del citado art. 73 expresen clara y terminantemente las leyes como obligatorios, y además los siguientes:

1.º Personal y material de las dependencias y oficinas.

2.º Pensiones, censos y cargas de justicia que pesen sobre los fondos municipales, así como las deudas reconocidas y liquidadas y réditos y consecuencias de contratos.

3.º Fomento del arbolado.

4.º Medios preventivos y de socorro contra incendios y de salvamento en las poblaciones marítimas.

5.º Suscripción al *Boletín oficial* de la provincia en todos los Ayuntamientos y á la *Gaceta de Madrid* en las cabezas de partido y pueblos que excedan de 2.000 habitantes.

6.º Contingente del Municipio en el repartimiento provincial.

7.º Una partida para imprevistos y calamidades públicas, que no exceda del 10 por 100 del presupuesto de gastos.

Las impresiones, anuncios y demás necesarias para la publicidad de los actos municipales. Valor de los aprovechamientos comunales dados ó distribuidos entre los vecinos será en los presupuestos municipales y de ingreso y figurará como data en los de gastos en los lotes adjudicados ó repartidos por tributativo.

135. Los gastos comprendidos en los presupuestos municipales serán cubiertos con los ingresos, recargos y arbitrios que autorizan esta ley, dentro del presupuesto del Estado y las demás disposiciones vigentes, sin continuar los Ayuntamientos en la obligación de subordinarse estrictamente al orden establecido en el art. 136.

136. Los ingresos serán: los impuestos y productos procedentes de bienes, derechos ó capitales que por cualquier concepto pertenecen al Municipio ó los establecimientos de enseñanza, instrucción y otros análogos que denotan.

Los arbitrios é impuestos municipales sobre determinados servicios, obras é industrias, así como los aprovechamientos de policía urbana y rural, y los é indemnizaciones por infracción de las ordenanzas municipales y bandos de policía.

El repartimiento general entre todos los vecindarios hacendados, en proporción á los medios ó recursos de cada uno, para cubrir los servicios municipales en la totalidad ó en la parte á que no cubren los anteriores recursos.

Los impuestos sobre artículos de comer, beber y

Ayuntamientos de poblaciones mayores de 50 habitantes, si renuncian al repartimiento general, podrán acudir á otros impuestos, recargos y arbitrios además de los enumerados en las leyes.

con la aprobación del Gobierno, que oirá, para concederla, al Consejo de Estado.

Art. 137. Para cumplimiento del párrafo 2.º del art. 136, se observarán las reglas siguientes:

1.ª Sólo será autorizado el establecimiento de arbitrios sobre aquellas obras ó servicios costeados con los fondos municipales, cuyo aprovechamiento no se efectúe por el común de vecinos, sino por personas ó clases determinadas, siempre que los interesados no le hayan adquirido anteriormente por título oneroso, así como sobre industrias que se ejerzan en la vía pública ó en terrenos y propiedades del pueblo, entendiéndose que el Ayuntamiento no podrá atribuirse monopolio ni privilegio alguno sobre aquellos servicios sino en lo que sea necesario para la salubridad pública.

2.ª En conformidad á lo dispuesto en el artículo anterior, puede autorizarse el establecimiento de arbitrios sobre los objetos siguientes:

Aprovechamiento y abastecimiento de aguas para usos privados.

Alcantarillado.

Establecimientos balnearios en aguas públicas.

Guardia rural.

Establecimientos de enseñanza secundaria, superior ó especial.

Licencias para construcción de edificios.

Mataderos.

Puestos públicos y sillas en plazas, calles, ferias, mercados y paseos.

Alquiler de pesas y medidas.

Almotacén ó repeso.

Enterramientos en los cementerios municipales.

Coches de plaza y de servicios funerarios, y carros de transporte en el interior de las poblaciones.

Expedición de certificación
ntamiento ó documentos
vivos.

Parte que concedan las le
ocumentos de vigilancia,
a y de navegación y flote
amiento de aguas.

Y los demás análogos.

* En ningún caso puede
os los servicios siguiente
Aprovechamiento y abasto
, uso comunal.

Alumbrado público.

Aceras y empedrados.

Vigilancia pública.

Beneficencia.

nstrucción pública eleme
limpieza, sin perjuicio de
i que diere lugar.

Y otros de igual naturale.

* Se autoriza la creación
enta de bebidas espiritu
sea en establecimiento
por mercaderes ambul
los mismos cosecheros ó
s, fondas, botillerías, pose
s establecimientos del mi
s de baños; sobre toda cl
icos, y sobre juegos per
arte que las leyes conce
atos.

* Los derechos de matad
, de consumos (cuando los
en junto exceder de 25 p
ud con el párrafo 2.º, regl
le no hubiere sobre carno
os, sólo se impondrá por d

una cantidad que jamás exceda del 10 por 100 del valor de la res.

6.ª Los arbitrios expresados en la regla 4.ª de este artículo, salvo los relativos á casas de baños, espectáculos públicos, juegos y rifas, no serán autorizados, caso de existir los impuestos de consumos; pero los establecimientos enumerados pueden ser en todo caso objeto de un arbitrio especial por razón de vigilancia, que no exceda del 5 por 100 de la cuota con que contribuyan al Estado.

7.ª Los arbitrios sobre industrias que se ejerzan en la vía pública no existirán cumulativamente con el repartimiento general, sin perjuicio de lo cual, las cuotas que por este concepto correspondan á los industriales, pueden ser recargadas con un 5 por 100 por razón de arriendo ó uso de la vía.

8.ª Las cuotas que se impongan á las industrias mencionadas en esta ley, que se hallen incluidas en las tarifas de la contribución industrial correspondiente al Estado, no excederán del 25 por 100 de la cantidad señalada en éstas.

Y 9.ª El pago de multas é indemnizaciones se hará en un papel especial que la Hacienda emitirá para el caso, y entregará á los Ayuntamientos que lo soliciten, cobrando sobre él, por razón de sello, un derecho que no exceda del 10 por 100 de su valor nominal.

Art. 138. Para el cumplimiento del párrafo 3.º del art. 136, se observarán las reglas que á continuación se expresan:

1.ª El repartimiento general será extensivo á las personas siguientes, por todas las utilidades que tengan en el distrito, sea cual fuere su naturaleza:

Primero. A los vecinos del distrito municipal.

do. A los propietarios forasteros que art. 27 tengan consideración de vecinos.

co. A los que, según el mismo artículo, el concepto y consideración de propieta-

o. A los colonos, arrendatarios ó apar-
fincas rústicas que no residan en el dis-

utilidades que procedan de pensiones, in-
le capitales, sueldos ó rentas públicas, se-
utadas á sus poseedores en el pueblo don-
an.

lan exceptuados del repartimiento los po-
solemnidad, los acogidos en los estableci-
de beneficencia y las clases de tropa de
mar.

Para fijar la utilidad imponible de cada
yente, se procederá con arreglo á las si-
bases:

ra. A los propietarios de fincas urbanas
duará como utilidad imponible el impor-
rentas que por este concepto perciban, ó
pudieran percibir, atendidas la naturale-
diciones de las fincas, si están ocupadas
mismos ó por otros que no paguen renta.

da. A los propietarios que labren fincas
ó en su caso los colonos, arrendatarios
eros, se les imputará una suma igual á
edia el importe de la renta que produzca
ó que pudiera producir, según los tipos
del pueblo, si estuviera arrendada.

ra. Cuando los propietarios de las fincas
rústicas ó urbanas, no sean vecinos del
se rebajará de la utilidad imponible un
le la suma á que según las bases anterio-
era ascender.

a. A los que perciban sueldos, pensio-

nes, censos ó intereses de cualquiera clase ó procedencia, se les valuará como utilidad líquida el importe de estas sumas.

Quinta. A los comerciantes, industriales y demás comprendidos en las tarifas de la contribución industrial, se les valuará la utilidad imponible en proporción á la cuota que por este concepto satisfagan al Estado, no bajando de cinco ni excediendo de veinte veces el importe de la misma cuota, con arreglo á las escalas que, según la naturaleza de cada industria, determine el Gobierno.

Sexta. Los jornaleros ó braceros, y en general todos los que vivan de un salario eventual, contribuirán en razón de la tercera parte de la suma á que según costumbre de cada localidad pueda alcanzar por término medio su haber durante el año.

Séptima. Cuando no sea posible conocer la utilidad de algún vecino, se hará la evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 27 y regla 3.ª de éste, teniendo en cuenta los signos exteriores de la riqueza, tales como el valor del mueblaje, alquiler de la casa, número de criados y otros análogos.

Octava. De la utilidad valuada á cada vecino ó hacendado se deducirá en todo caso el importe de la contribución directa que pague al Estado.

3.ª La determinación de la utilidad imponible se verificará por los mismos contribuyentes, reunidos en secciones, en la forma que el capítulo 3.º, tít. 2.º de esta ley dispone.

Cada sección formará una relación que comprenda las utilidades de todos los individuos, procurando especificar en lo posible la naturaleza y número de los objetos que las produzcan.

4.ª Los individuos de cada sección, designados

el sorteo, procediendo como Síndicos y reuniéndose con el Ayuntamiento, examinarán y comprobarán estas relaciones, resolviendo las reclamaciones á que dieren lugar y fijando la cantidad total ponible.

La Junta repartirá lo que á cada sección corresponda, bien sea por el tanto por ciento proporcional á la utilidad total valuada, ó por categorías fijas.

5.º Los Síndicos de cada sección verificarán y comunicarán el repartimiento á los individuos de misma. El Ayuntamiento resolverá las reclamaciones á que este repartimiento diere lugar.

6.º Todas las operaciones de evaluación y repartimiento serán publicadas en la forma ordinaria, y se comunicarán además en la Secretaría Ayuntamiento á todo interesado que lo solici-
tase.

7.º Contra las decisiones del Ayuntamiento y la Junta de evaluación se establece recurso de revocación para ante la Diputación provincial. El recurso habrá de entablarse dentro de los quince días siguientes á la publicación, y no obstará para el pago de la cuota repartida ínterin no recaiga resolución definitiva.

Tanto estas reclamaciones como las que se interpongan por las operaciones de cada sección, habrán fundarse en hechos concretos, precisos y determinados, aduciendo las pruebas necesarias para justificación.

8.º El repartimiento comprenderá un tanto de aumento que no exceda del 6 por 100 de la cuota al para gastos de distribución, cobranza y parafiscales fallidas.

Quedan exentos del pago de este aumento los contribuyentes que satisfagan anticipadamente las cuotas por trimestres, semestres ó anualidad.

des en las Depositarias de las respectivas Municipalidades, y se les abonará en el segundo y tercer caso el tanto por ciento anual que se fije por razón del anticipo.

9.ª Los propietarios y los colonos, arrendatarios, aparceros ó inquilinos, arreglarán por medio de contratos particulares la proporción en que sobre cada uno ha de pesar la cuota repartida á éstos por razón de las fincas, y la forma y tiempo de indemnizarse entre sí de esta cuota. A falta de contrato, pueden los inquilinos retener, al hacer el pago de la renta, el importe total, y los colonos, arrendatarios ó aparceros los dos tercios de la cuota.

Art. 139. Para el cumplimiento del párrafo 4.º del art. 136, se observarán las reglas siguientes:

1.ª El Ayuntamiento y asociados, reunidos en junta, determinarán las especies que han de ser objeto del impuesto de consumos, así como las tarifas por que se ha de regir su exacción y la forma en que ésta haya de hacerse.

Las tarifas no excederán en ningún caso del 25 por 100 del precio medio del artículo en la localidad respectiva, según su clase.

2.ª El acuerdo del Ayuntamiento y de los asociados será ejecutivo, sin perjuicio de los recursos á que según la presente ley hubiere lugar, y salva la inspección y atribuciones del Gobernador, con arreglo al art. 150.

3.ª Los impuestos de consumos sólo serán autorizados sobre los frutos ó sobre las bebidas que se consuman en cada pueblo, quedando absolutamente prohibido sobre ellos y todos los demás cualquier otro impuesto que embarace el tráfico, circulación y venta, sean cuales fueren los nombres con que se intentara establecerlos, como de-

rechos de piso ó tránsito,
comajante.

En los pueblos qu
las, los artículos ex
idos por el pago de
pueden ser objeto d
nsumos, dentro de l
sobre el valor que
o el importe de aqu

t. 140. Se concede
los interesados para
al, cuando las cuotas
puestos de toda cla
t importancia del se
se apliquen, ó con
pueblo.

stos recursos, y cua
ntentarse, serán for
ctivo, el cual, bajo
, queda obligado á
icto del Gobernador
de ocho días, con l
ios.

t. 141. Terminado
nulados los créditos
te su ejercicio.

urante el periodo d
as operaciones de c

puestos, y las de liquidación y pago de los
cios realizados durante el año. Las resultas
uedaren después de este período, serán objeto
a presupuesto adicional, previas las consi-
tes liquidaciones, que se terminarán dentro
es siguiente.

t. 142. Cuando para cubrir atenciones im-
stas, satisfacer alguna deuda, ó para cual

quier otro objeto de importancia no determinado en el presupuesto ordinario, sean insuficientes los recursos consignados en éste, los Ayuntamientos formarán un presupuesto extraordinario en la misma forma y por el mismo procedimiento determinado para los ordinarios.

Art. 143. Las deudas de los pueblos que no estuviesen aseguradas con prenda ó hipoteca, no serán exigidas á los Ayuntamientos por los procedimientos de apremio.

Cuando algún pueblo fuese condenado al pago de una cantidad, el Ayuntamiento, en el término de diez días después de ejecutoriada la sentencia, procederá á formar un presupuesto extraordinario, á no ser que el acreedor convenga en aplazar el cobro de modo que puedan consignarse en los presupuestos ordinarios sucesivos las cantidades necesarias para el pago del capital y rédito estipulado.

Art. 144. Si los recursos de que puede disponer el pueblo no fueren suficientes á cubrir sus deudas, ó no creyese el Ayuntamiento posible recargar las cuotas impuestas á los vecinos, y los acreedores no se conformaren con los medios que se les ofrezcan para solventar sus deudas, se remitirá el expediente á la Diputación provincial, á fin de que, oyendo á los interesados, disponga lo conveniente para que tengan efecto los pagos, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales y Juzgados ordinarios para resolver acerca de la legitimidad y prelación de los créditos.

Art. 145. No pueden ser aplicados al pago y cumplimiento de servicios ú obligaciones permanentes los recursos procedentes de arbitrios de carácter eventual y transitorio.

Art. 146. El proyecto de presupuestos, ya sea ordinario, adicional ó extraordinario, aprobado

por el Ayuntamiento, previa censura del Síndico, quedará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días desde la fecha en que se haga el anuncio en la forma ordinaria.

Art. 147. El Ayuntamiento formará el presupuesto, y lo aprobará la Junta municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 150.

Art. 148. La Junta municipal se reunirá, previa citación personal y anuncio, en los plazos y forma señalados en el art. 68.

Art. 149. Para formar acuerdo es necesario el voto de la mayoría absoluta del total de Vocales que componen la Junta. Si no se reúne este número en la primera sesión, se procederá á nueva convocatoria para ocho días después, y en ella formará acuerdo la mayoría de los concurrentes.

En los pueblos menores de 800 habitantes, formará acuerdo el voto de la mitad más uno de los concurrentes, si éstos llegan á la cuarta parte lo menos, del número total de vecinos que tienen derecho á componer la Junta. En caso de no reunirse este número, se procederá con arreglo dispuesto en el párrafo anterior.

. 150. El día 15 de Marzo comunicarán los Ayuntamientos al Gobernador el presupuesto aprobado, para el solo efecto de que corrija las imitaciones legales, si las hubiere. De los autos del Gobernador en materia de presupuestos podrán alzarse las Juntas municipales en término de ocho días, ante el Gobierno de S. M., resolviendo en el de sesenta, oyendo al Consejo de Estado. Si llegase el 15 de Junio sin resolverse el Gobierno, regirán los presupuestos aprobados por las Juntas. Los acuerdos de la Junta municipal serán de igual modo para ante el Gober-

nador cuando por ellos se infringiere alguna de las disposiciones de esta ley, salvo lo en contrario ordenado por la misma, pero sólo en la parte que contuviere la infracción.

Todos los Ayuntamientos remitirán al Gobierno de S. M., por conducto de los Gobernadores civiles, resúmenes de sus presupuestos de gastos é ingresos definitivamente aprobados.

Art. 151. Son en todo caso ejecutivos, con aprobación de la Junta municipal, y sin perjuicio de los ulteriores recursos á que según esta ley hubiere lugar, los presupuestos formados para atender á las medidas sanitarias de absoluta urgencia en las calamidades públicas, y obras de carácter perentorio, cuando el importe no exceda de 2 pesetas 50 céntimos por vecino, ni de la tercera parte del presupuesto ordinario.

Art. 152. Para hacer efectiva la recaudación serán aplicables los medios de apremio en primeros y segundos contribuyentes, dictados en favor del Estado.

Art. 153. Las dudas y reclamaciones sobre recargos ó arbitrios municipales serán resueltas por el Ministro de la Gobernación, oyendo al de Hacienda y al Consejo de Estado, cuando lo estime oportuno.

CAPITULO II

De la recaudación, distribución y cuenta de los fondos municipales.

Art. 154. La recaudación y administración de los fondos municipales está á cargo de los respectivos Ayuntamientos, y se efectuará por sus agentes y delegados.

Art. 155. La distribución é inversión de los

acordará m
on sujeción a
56. La orden
le.

intervención e
hubiere, y e
lor elegido p
s poblaciones
de 100.000 pe
nunicipales,
ntre los que
a pública que
eglamento de
ses y sueldo
as bases del c
adquiridos p
paración de l
os con arregl
nderá á los A
sino por cau
nteresados p
Gobernador,
provincial.

57. Los Ay
remente á lo
lación de tod
o.

ismas Cor
lar la retribu
disfrutar y l
el pueblo no
se de la cust
rio será decl
levará aneja
s que origina

58. Los age

nicipal son responsables ante el Ayuntamiento, quedándolo éste en todo caso civilmente para el Municipio, caso de negligencia ú omisión probada, sin perjuicio de los derechos que contra aquéllos se puedan ejercitar.

Art. 159. Todos los fondos municipales ingresarán precisamente en la Caja del Ayuntamiento, cuyas tres llaves custodiarán el Depositario, el Ordenador y el Interventor.

Art. 160. El Contador ó el Concejal interventor, auxiliados, si fuere necesario, por el Secretario y demás dependientes del Ayuntamiento, formarán las cuentas de cada ejercicio en las épocas correspondientes, y con los documentos justificativos serán sometidas al Ayuntamiento, previa censura del Síndico.

Art. 161. Fijadas definitivamente las cuentas por el Ayuntamiento, será pasadas, con el dictamen del Síndico y los documentos justificativos, para su revisión y censura, á la Junta municipal.

Esta, en el primer día útil del segundo trimestre del año económico, se reunirá en la casa de Ayuntamiento, bajo la presidencia del Alcalde, y asistiendo el Secretario, y nombrará una Comisión de su seno para que, examinando las cuentas, emita su dictamen en término que no exceda de quince días.

Durante los quince días que precedan á la reunión, estarán las cuentas de manifiesto en la Secretaría, y cualquier vecino puede examinarlas y formular por escrito sus observaciones, que serán comunicadas á la Junta.

Art. 162. Las sesiones que la Junta dedique á la discusión del dictamen de la Comisión, serán presididas por un vocal que la misma elija.

Art. 163. Examinadas y discutidas las cuentas y practicadas cuantas diligencias é informa-

rea necesarias la Junta y votar por mayoría a lo definitivo.

dictamen irá suscritos, sea cual fuere su orden. no obstante, salvado, el cual, original, ante, haciéndose constar

64. Las Juntas municipales primera quincena de Febrero las cuentas del año en forma determinada por el

165. La aprobación de gastos no excedan de 10 de al Gobernador, oída y si excediese de esa suma de Cuentas del Reino, pador y de la Comisión

166. Los Ayuntamientos de cada trimestre unánime inversión de sus

as obras públicas que se, se publicará semana ausados, especificando, materiales, vendedores obra y demás circunstancias Secretaría estarán de los días y horas útiles, en especialidad á los Vocales municipales, las cuentas, de las cuales el Ayuntamiento apuntes y copias.

cuentas cuya data excedan impresas en extracto de la Junta y las

Ayuntamiento, y se pondrán en venta al público.

Art. 167. Los Ayuntamientos remitirán á los Gobernadores una copia íntegra, certificada por el Secretario, con el V.º B.º del Alcalde, de los presupuestos y cuentas definitivamente aprobadas, con las actas literales de la Junta municipal.

Art. 168. Quedan suprimidas las Juntas especiales que estableció la ley de 29 de Junio de 1864, referente al ensanche de las poblaciones. La cuenta de ingresos y gastos del ensanche será separada de la general del Ayuntamiento y continuará sujeta á la división por zonas, cuyo número podrá reducir el Gobierno.

TITULO V

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES QUE NACEN DE LOS ACTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

CAPITULO PRIMERO

Recursos contra los acuerdos de los Ayuntamientos.

Art. 169. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 114, el Alcalde está obligado á suspender por sí y á instancia de cualquier residente del pueblo la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento en los casos siguientes:

1.º Por recaer en asuntos que, según esta ley ú otras especiales, no sean de la competencia del Ayuntamiento.

2.º Por delincuencia. La suspensión en uno y otro caso será razonada, con expresión concreta y precisa de las disposiciones legales en que se funde.

En los casos de incompetencia, perjuicio de los intereses generales ó peligro del orden público, podrá el Alcalde suspender los acuerdos del Ayun-

ando cuenta al Gobernador, que aprobará la suspensión y propondrá la al Gobierno cuando la crea justa, si mere á su autoridad.

El Alcalde suspenderá también la los acuerdos á que se refiere el pá- el artículo anterior, cuando de ella resultar perjuicio en los derechos ci- tercero.

nsión en este caso se acordará sola- do el interesado lo solicitare, recla- ismo tiempo contra el acuerdo.

No podrá ser suspendida la ejecu- acuerdos dictados en asuntos de la del Ayuntamiento, aun cuando por a forma se infrinjan algunas de las s de esta ley ú otras especiales, salvo en el último párrafo del art. 169.

caso se concede recurso de alzada á sea ó no residente en el pueblo, que ndicado por la ejecución del acuerdo. rsos de alzada que autoriza este ar- ederán ante el Gobernador, oída la rovincial, debiendo ser interpuestos no de treinta días, contados desde la administrativa, ó en su defecto, des- ación del acuerdo.

urso será entablado con arreglo á lo el art. 140.

Los que se crean perjudicados en s civiles por los acuerdos de los Ayun- haya sido ó no suspendida su ejecución e lo dispuesto en los artículos anterior- , reclamar contra ellos mediante de- el Juez ó Tribunal competente, según dida la naturaleza del asunto. dispon- is.

El Juez ó Tribunal que entienda en el asunto, puede suspender por primera providencia, á petición del interesado, la ejecución del acuerdo apelado, si ya no lo hubiese sido según lo dispuesto en el art. 170, cuando á su juicio proceda y convenga, á fin de evitar un perjuicio grave é irreparable.

Para interponer esta demanda se concede un plazo de treinta días después de notificado el acuerdo ó comunicada la suspensión en su caso, pasado el cual sin haberlo verificado, queda esta suspensión levantada de derecho y consentido el acuerdo.

Art. 173. Suspendido ó apelado algún acuerdo en virtud de lo dispuesto en los artículos 169, 170 y 171, remitirá el Alcalde los antecedentes al Gobernador de la provincia en el término de ocho días, para los fines á que haya lugar.

Si la suspensión hubiese tenido efecto mediante el caso de delincuencia, pasará los antecedentes dentro del mismo plazo de ocho días al Juez ó Tribunal.

Art. 174. Cuando el acuerdo se refiera á asuntos que por esta ley, la provincial ú otras especiales, no estén sometidos á las Corporaciones ó Autoridades locales, el Gobernador, oída la Comisión provincial, dejando subsistente la suspensión del acuerdo, remitirá el expediente al Gobierno para su ulterior resolución.

Si el acuerdo hubiese sido apelado en virtud de lo dispuesto en el art. 171, el Gobernador, oyendo á la Comisión provincial, resolverá sobre el fondo del mismo, confirmandole, si á ello hubiese lugar, ó revocándole en la parte que excediese de las atribuciones del Ayuntamiento.

La resolución en todo caso será fundada, con

ción de las disposiciones legales.

t. 175. Los acuerdos así aprobados por el Gobernador son ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que procedan y de la responsabilidad que por ellos hubiere lugar.

t. 176. Cuando el Gobierno crea que una resolución no procede, la levantará inmediatamente por otro procedimiento, revocando la anterior.

En otro caso, pasará el expediente a la Comisión de Estado, oído cuyo parecer, resolverá.

El Gobierno también resuelve por sí y bajo su responsabilidad, cuando la urgencia del asunto lo requiera, mayores dilaciones.

La resolución será siempre motivada y se publicará en la *Gaceta* y en el *Boletín* de la Presidencia. Si el Gobierno disintiere con el Consejo de Estado, se publicará en la *Gaceta* y en el *Boletín* de la Presidencia y en el *Boletín* del Cuerpo al mismo tiempo y en la forma que la resolución del Gobierno determine.

t. 177. Contra la resolución que deniega el recurso contencioso-administrativo, no cabe recurso, salvo en los casos que las leyes determinen.

t. 178. Los Gobernadores, los Alcaldes de los Ayuntamientos son responsables de los daños y perjuicios que originados por la ejecución de los acuerdos de las Corporaciones locales.

Esta responsabilidad será siempre de la Autoridad ó Tribunal que en último término resuelve el expediente, y se ha de entender en los Tribunales ordinarios en la forma que las leyes determinen.

CAPITULO II

Dependencia y responsabilidad de los Concejales y de sus agentes.

Art. 179. Los Ayuntamientos, los Alcaldes y los Regidores, en todos los asuntos que la ley no les comete exclusiva é independientemente, están bajo la autoridad y dirección administrativa del Gobernador de la provincia.

El Ministro de la Gobernación es el Jefe superior de los Ayuntamientos y el único autorizado para transmitirles las disposiciones que deban ejecutar en cuanto no se refiera á las atribuciones exclusivas de estas Corporaciones.

Art. 180. Los Ayuntamientos y Concejales incurrén en responsabilidad:

1.º Por infracción manifiesta de ley en sus actos ó acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades que no les competen, ó abusando de las propias.

2.º Por desobediencia ó desacato á sus superiores jerárquicos.

3.º Por negligencia ú omisión de que pueda resultar perjuicio á los intereses ó servicios que están bajo su custodia.

Art. 181. La responsabilidad será exigible á los Concejales ante la Administración ó ante los Tribunales, según la naturaleza de la acción ú omisión que la motive, y sólo será extensiva á los Vocales que hubiesen tomado parte en ella.

Art. 182. Cuando el Alcalde, los Tenientes ó los Concejales de un Ayuntamiento se hicieren culpables de hechos ú omisiones punibles administrativamente, incurrirán, según los casos, en las penas de amonestación, apercibimiento, multa ó suspensión.

Art. 183. Procede la amonestación en los casos de error, omisión ó negligencia leves, no mediando reincidencia y siendo de fácil reparación el daño causado.

Procede el apercibimiento en los casos de reincidencia en falta reprendida y en los de extralimitación de poder y abuso de facultades y negligencia, cuyas consecuencias no sean irreparables.

Art. 183.

Procede la multa siempre que las leyes y disposiciones generales, con arreglo á las mismas, lo imponen, y en los casos de reincidencia en faltas castigadas con apercibimiento, y de extralimitación, abuso de autoridad, negligencia ó desidia graves, que no exijan la suspensión ó produzcan responsabilidad.

Art. 184. El máximo de la cuota de las multas que los Gobernadores pueden imponer á los Alcaldes y Regidores por las faltas en que respectivamente incurriesen, y según lo prescrito en la presente ley, será proporcional al número de Concejales de cada pueblo, en la forma siguiente:

Número de Concejales.	Alcaldes.	Regidores.
6 á 9	17,50 pesetas.	7,50 pesetas.
10 á 16	37,50	20
17 á 24	125	50
25 á 32	175	75
33 á 40	250	100
41 á 50	375	125

Art. 185. Para la imposición y exacción de las multas se observarán precisamente las reglas siguientes:

1.ª No se impondrá ninguna sin resolución por escrito y motivada.

2.ª La providencia se comunicará por escrito al multado: del pago se le expedirá el competente recibo.

3.ª Las multas y los apremios se cobrarán en papel del sello correspondiente.

4.ª Las multas serán precisamente pagadas del peculio particular de los multados.

5.ª Las multas serán extensivas á todos los Concejales que según esta ley sean responsables por el acto ó acuerdo que las motive.

Art. 186. Para el pago de toda multa se concederá un plazo proporcionado á la cuantía de la multa, y que no baje de diez días ni exceda de veinte, pasado el cual procede el apremio contra los morosos. El apremio no será mayor de 5 por 100 diario del total de la multa, sin que exceda en ningún caso del duplo de la misma.

Art. 187. Contra la imposición gubernativa de la multa puede el interesado reclamar por la vía administrativa ó por la judicial.

La primera procede para ante el Gobierno que la resolverá por sí ó con audiencia del Consejo de Estado, y sin perjuicio en todo caso de la reclamación contenciosa ante el Consejo de Estado.

La judicial procede ante la Audiencia en primera instancia, previa reclamación gubernativa á la Autoridad que impuso la multa.

En caso de ser ésta declarada improcedente, serán impuestas las costas y daños causados por su exacción á la Autoridad que la ordenó, sin que sirva de excusa la obediencia en los casos de infracción clara y terminante de una ley.

Art. 188. En ningún caso se expedirán comisiones de ejecución contra los Ayuntamientos y Concejales.

do ocurra el caso previsto en el artículo 87, y los multados dejasen de satisfacer la multa, no obstante el apremio, el Gobernador o el Jefe de primera instancia del partido, exco-
 o la causa que ha motivado la imposición multa, y la cuantía y liquidación de ésta, y dando su autoridad para hacerla efectiva. El Jefe procederá á la exacción por los trámites de apremio.

89. Los Gobernadores civiles de las provincias podrán suspender á los Alcaldes y Tenientes de Ayuntamiento, en caso de grave causa, dando cuenta al Gobierno en el término de ocho días. El Ministro de la Gobernación, en el de sesenta, alzará la suspensión ó la confirmará, oyendo al interesado, expediente de suspensión, que será resuelto en Consejo de Mi-

Ayuntamientos pueden ser suspendidos el Gobernador de la provincia, cuando cometen falta grave con carácter político, cualquiera de las circunstancias siguientes:

Haber dado publicidad al acto.

Excitar á otros Ayuntamientos á come-

Producir alteración del orden público.

La suspensión tendrá efecto la suspensión cuando los Ayuntamientos incurriesen en desobediencia grave, dando en ella después de haber sido apercibidos y multados.

190. (1) La suspensión gubernativa de los Ayuntamientos no excederá de cincuenta días.

(1) Véase el art. 36 de la ley electoral. Por Real orden de 13 de Mayo de 1891 (*Gaceta* de 14 del mismo mes y año), se dispuso la suspensión administrativa de Ayuntamientos, Alcaldes y Concejales, que hubieran cesado diez días antes de la elección, por virtud del art. 36 de la ley de 26 de Jun-

Pasado este plazo sin que se hubiese mandado proceder á la formación de causa, volverán los suspensos de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones.

Los que se hubiesen reemplazado serán considerados como culpables de usurpación de atribuciones, si ocho días después de expirado aquel plazo, y de requeridos para cesar por los Concejales propietarios, continuaran desempeñando funciones municipales.

Art. 191. Si el Gobierno entiende que la suspensión de los Regidores no es procedente, revocará por sí y dentro de quince días el acuerdo del Gobernador; en caso contrario, pasará el expediente al Consejo de Estado, oído el cual, y en un plazo que no exceda de cuarenta días, dictará la resolución definitiva. Declarada improcedente la suspensión, serán los Regidores inmediatamente repuestos en sus cargos.

de 1890, vuelvan en cuanto termine el período electoral á la normalidad de su estado de derecho, para la aplicación íntegra de los preceptos de la ley municipal.

Por otra Real orden también de 13 de Mayo del mismo año (*Gaceta* del 17), se dispuso asimismo:

1.º Los Alcaldes, Tenientes, Concejales ó Ayuntamientos que se hallasen suspensos en sus cargos al comenzar el período electoral, volverán al ejercicio de sus funciones diez días antes del señalado para la votación, cesando en ellas desde el siguiente al del escrutinio general, en estricto cumplimiento de lo prevenido en el art. 36 de la citada ley de 26 de Junio de 1890 y Reales órdenes de 13 de Febrero de 1891 y 17 de Febrero de 1893, descontándose del plazo de los sesenta días que señala el art. 189 ó de los cincuenta que fija el 190 de la ley municipal, todo el tiempo en que la suspensión estuviese interrumpida, según lo prescrito por ley electoral.

Los Gobernadores cuidarán, bajo su responsabilidad, de dar cuenta inmediata, exacta y justificada de la fecha en que los suspensos empezaron á cumplir la corrección, de la en que hubiesen vuelto á sus cargos para las funciones electorales y del día en que de nuevo cesen en ellos.

Si hubiere lugar á destitución, el Gobierno mandará pasar los antecedentes al Juzgado ó Tribunal competente.

Este, previas las actuaciones en derecho necesarias, decretará la destitución, sin perjuicio de las demás penas á que hubiere lugar, cuando apareciese que los Regidores se han hecho culpables en alguna de las infracciones determinadas en el art. 189.

En uno y otro caso, el decreto del Gobierno será publicado en la *Gaceta de Madrid* y en el *Boletín oficial* de la provincia, con inserción de los dictámenes del Consejo de Estado.

Una vez publicado el decreto mandando pasar los antecedentes á los Tribunales de Justicia, los Regidores suspensos no volverán al ejercicio de

pasado el período electoral si aún no hubiese transcurrido el plazo de la suspensión gubernativa, se resolverá acerca de ella según los arts. 189 y 191 de la ley municipal.

Si al terminar el período electoral hubiese expirado el plazo de la suspensión, el Gobierno podrá examinar el expediente del modo que si el plazo no hubiese caducado, al solo objeto de declarar, previo informe del Consejo del Estado, si ó no méritos para poner los hechos en conocimiento de los Tribunales, á los fines procedentes en justicia.

Lo propio se observará en cuanto á las suspensiones de Alcaldes y Diputaciones provinciales en los casos de que trata el art. 138 y 139 de la ley de 29 de Agosto de 1832.

De conformidad con las precedentes reglas, se resolverá sobre los expedientes de suspensión que se hallasen en trámite de actualidad.

Que en cumplimiento del párrafo segundo del art. 191 de la ley municipal, los Gobernadores se abstengan de pasar los antecedentes á los Tribunales por los hechos que hayan motivado el expediente de suspensión hasta que así se ordene por resolución definitiva.

Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Mayo de 1883. Los Gayón.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

sus cargos en tanto que no recaiga sentencia absoluta, definitiva y ejecutoriada.

Art. 192. Los Regidores no pueden ser destituidos sino en virtud de sentencia ejecutoriada del Juez ó Tribunal competente.

Lo será el que ejerza la jurisdicción ordinaria de primera instancia en el partido á que corresponda el distrito municipal de que aquéllos forman parte.

Decretará el Juez la suspensión de los Concejales procesados cuando apareciesen motivos racionales para creer que han cometido delito que el Código penal castigue con suspensión de cargos ó derechos políticos, y lo pondrá en conocimiento del Gobernador de la provincia.

Art. 193. Las vacantes ocurridas en un Ayuntamiento por suspensión legal de sus Vocales serán cubiertas en la forma que dispone el art. 46.

Art. 194. Los Alcaldes y Regidores que por sentencia ejecutoriada fueren absueltos, volverán á ocupar sus cargos, si durante el procedimiento no les hubiese correspondido cesar, mediante lo dispuesto en el art. 45, teniendo efecto respecto á ellos lo dispuesto en el art. 190.

Art. 195. Los Regidores destituidos estarán inhabilitados para ejercer este cargo durante seis años á lo menos.

Art. 196. Los Alcaldes de barrio están, relativamente á los Alcaldes y Ayuntamientos, en la misma dependencia jerárquica que los Alcaldes y Tenientes respecto á los Gobernadores.

Les son, por tanto, aplicables las disposiciones del presente título en cuanto á la responsabilidad, salvo las modificaciones siguientes:

1.º El máximo de las multas que se les impongan será el menor de las fijadas para los Concejales.

Para la suspensión y separación hasta la el Alcalde. La suspensión no excederá de dos sesiones ordinarias del Ayunta-

la absolución no les da derecho, pero sí habilita para ser repuestos en su cargo.

97. Todos los agentes del Ayuntamiento nombrados y pagados están sujetos á su jura, y son responsables gubernativamente asimismo con sujeción á esta ley, y judicialmente los Tribunales, por los delitos y faltas cometieren.

98. Además de los recursos administrativos establecidos por la presente ley, cualquier hacendado del pueblo tiene acción ante los tribunales de justicia para denunciar y perseguir penalmente á los Alcaldes, Concejales y Regidores, siempre que éstos en el establecimiento, distribución y recaudación de los arbitrios ó impuestos se hayan hecho culpables de fraude ó de acciones ilegales, y muy especialmente en las siguientes:

1.ª Si cualquiera de los Concejales y asociados al año que lo son, pagan una cuota menor que el repartimiento, impuesto ó licencia, común al año anterior al desempeño de su cargo, cuando el producto total de los repartimientos y arbitrios distribuidos excediese de la presupuesta y 6 por 100 de recargo, aun cuando por la regla 8.ª, art. 138 de esta ley, cuando las cuotas determinadas por los Regidores fuesen superiores á lo que la ley permite. Cuando establecieren y recaudaren cual-

quiera clase de impuestos no comprendidos en la presente ley.

Los Tribunales de justicia, una vez probado el hecho, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal, harán las declaraciones siguientes:

Primer caso. Imposición de doble cuota á los culpables.

Segundo y tercer caso. Anulación del repartimiento en lo que exceda á la cantidad autorizada, y devolución de las recaudadas, con multa igual al sobrante mancomunadamente impuesta á los Concejales y asociados culpables.

Cuarto caso. Anulación del arbitrio impuesto y devolución de las cantidades recaudadas, con multa igual á su importe, exigida en la forma expresada en el caso anterior.

TITULO VI

GOBIERNO POLÍTICO DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES

CAPITULO UNICO

Art. 199. El Alcalde es el representante del Gobierno, y en tal concepto desempeñará todas las atribuciones que las leyes le encomienden, obrando bajo la dirección del Gobernador de la provincia, conforme aquéllas determinen, así en lo que se refiere á la publicación y ejecución de las leyes y disposiciones generales del Gobierno, ó del Gobernador y Diputación provincial, como en lo tocante al orden público y á las demás funciones que en tal concepto se le confieran.

Si el Alcalde, requerido por el Gobernador, se negase á cumplir algunas de las obligaciones á que el presente artículo se refiere, ú omitiese hacerlo en el plazo bastante, el Gobernador puede

er su ejecución al Juez municipal del pue-
cualquiera de sus suplentes.

ta delegación se limitará al tiempo y á los
absolutamente precisos, y no envuelve fa-
alguna para intervenir en ninguno de los
del Ayuntamiento.

. 200. En todo lo relativo al gobierno po-
del distrito municipal, la autoridad, deberes
onsabilidad del Alcalde son independientes
yuntamiento respectivo.

. 201. Los Tenientes de Alcalde en sus sec-
respectivas obran siempre por delegación
la dirección del Alcalde, como represen-
del Gobierno, en los mismos términos que
lo es en el distrito municipal.

. 202. Los Alcaldes de barrio en los suyos
tivos ejercerán las funciones de gobierno
o que con arreglo á las leyes les delegasen
nientes de Alcalde, conformándose con las
iciones del Alcalde y del Gobernador de la
cia.

. 203. Por las faltas que en el desempeño
funciones gubernativas en lo político co-
ren los Alcaldes y Tenientes, podrán ser amo-
los, apercibidos y multados los Alcaldes por
ernador de la provincia, y los Tenientes por
nero y el Gobernador igualmente, en los tér-
que se previene en los artículos 183, 184,
86 y 187 de esta ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Quedan derogadas todas las leyes y dispo-
ones anteriores relativas al régimen muni-

El Gobierno dictará, con arreglo á esta ley,
glamentos necesarios para su ejecución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.º El Gobierno de S. M. procederá tan pronto como sea posible á la renovación total de los Ayuntamientos con sujeción á esta ley y á la electoral, dictando además las disposiciones y reglamentos que juzgue necesarios.

Podrá el Gobierno anticipar y variar por esta sola vez los días y plazos señalados por la ley á las operaciones electorales, y modificar la división de colegios para las elecciones de Ayuntamientos en cuanto lo exija la aplicación de lo dispuesto en el art. 42, referente al número de Concejales que puede votar cada elector.

2.º Se aplicará esta ley á la provincia de Puerto Rico con arreglo á las disposiciones contenidas en el art. 89 de la Constitución de la Monarquía.

Madrid 2 de Octubre de 1877.—El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero y Robledo.

APENDIC

A LA LEY MU

Real decreto dictando disposiciones para
formen los empadronamientos y haga
mismos y sobre la resolución de los
nidad de las elecciones de Conceja
Marzo de 1891.)

Exposición. — Señora: Confor
puesta de la Junta central del Ce
bierno optó por el procedimiento
literal de los preceptos de la ley de
que se hizo para las elecciones de l
les y de Concejales. Mas este m
seguido en el Real decreto de 5 d
traía como inevitable resultado el
de la economía del expresado Real
terias de carácter reglamentario d
nicipal, relacionadas con el siste
nese, por tanto, como consecuen
dad de aclarar y completar los pr
con relación al empadronamiento

mente respecto á los ac
ión de los Concejales, h
ede debidamente constit
sto, los preceptos de la l
1870, que se mandaron
to por la ley de 2 de M
terior renovación bianal
redado modificados en s
osiciones de la nueva le
escrutinio general, una

mación de los Concejales elegidos y de los presuntos, quedan disueltas y carecen, por tanto, de facultades para realizar el sorteo en caso de empate y resolver por sí solas, ni en unión con el Ayuntamiento, las reclamaciones sobre validez ó nulidad de la elección y la incapacidad de los elegidos.

De aquí que, á menos de crear organismos nuevos en sustitución de las antiguas reuniones de los Comisionados de las Juntas de escrutinio, se haga preciso reservar á las Comisiones provinciales la resolución de los recursos y protestas de esta especie, conservando en los Ayuntamientos la preparación é instrucción de los expedientes.

Llegado parece también el momento de poner el límite de racional prescripción á los vicios de constitución que pudieran tener nuestras Corporaciones municipales, y que vienen dando lugar á que, á título de la alta inspección del Gobierno y en cumplimiento forzoso de la ley de 2 de Mayo de 1889, se declarara en cualquier tiempo y por extemporánea que sea la reclamación, ilegalmente constituidos á los Ayuntamientos, dándose hasta el caso de haberlo hecho con Corporaciones cuya vida legal estaba próxima á extinguirse.

La normalidad de la Administración exige que cese este estado de perturbación y de incertidumbre, y á este propósito responde el señalar un término preciso para formular las reclamaciones sobre validez ó nulidad de las elecciones municipales, transcurrido el cual quede legitimada *ipso jure* la elección, sin que puedan instruirse en ningún caso expedientes de esta índole.

Expuestos someramente los dos puntos principales que informan el criterio del Gobierno en tan importante materia, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 24 de Marzo de 1891.—Señora: A L. R. P. de V. M., Francisco Silvela.

reto.—De acuerdo con el Consejo de Ministros del Ministro de la Gobernación;
re de mi augusta Hijo el Rey Don Alfonso
Reina Regente del Reino,

decretar lo siguiente:

1.º Los Ayuntamientos continuarán formando padronamientos y efectuando las rectificaciones mismos en la forma y plazos establecidos en los artículos 2.º y 3.º, título I de la ley Municipal. Mientras el Gobierno no diere nuevas disposiciones sobre el modo y forma de llevar el empadronamiento, se considerarán supletorias las de los artículos 19 y 21 al 25 del Reglamento aprobado por el Estado para la ejecución de la ley de 1870, y por Real orden de 6 de Mayo de 1871. Los Ayuntamientos de provincia cuidarán muy especialmente de reclamar el resumen clasificado del número de habitantes de cada término municipal que, anualmente, ha de remitirse todos los años á la provincia respectiva, exigiendo responsabilidad á los Ayuntamientos que dejaren transcurrir los años de cada año económico sin verificarlo. Recibidos los resúmenes los remitirán á la provincia conservando en su poder copia literal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo, de la ley Municipal, cuando por efecto de la rectificación del Censo general de 1890, los Alcaldes de los pueblos de más de 400 habitantes publican el día 10 de Abril las listas que corresponden al artículo 12 de la ley de 26 de Junio de 1890, en las listas 1.ª y 3.ª se contenga una columna, donde se exprese el carácter de *elegible* ó no para cargos concejiles que corresponda á cada elector, con arreglo á las prescripciones del artículo 41 de la ley Municipal.

Las listas municipales y las provinciales del Censo de 1890, serán remitidas á las Audiencias territoriales, conocerán

resolverán todas las reclamaciones que sobre este particular se formulen en los mismos plazos y á tenor de los demás requisitos y trámites que prescribe la referida ley Electoral para la rectificación anual del Censo.

En lo sucesivo el libro del Censo electoral y las listas definitivas de electores en los pueblos de más de 400 vecinos, contendrán una casilla adicional en que se exprese si cada elector tiene el carácter de elegible para cargos municipales.

Art. 3.º Hecha la proclamación de Concejales en la forma que dispone el art. 50 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890, y recibida en la Junta municipal del Censo el acta á que se refiere el art. 52, si hubiere empate, el Ayuntamiento procederá inmediatamente en cada distrito al sorteo entre los Concejales presuntos; y el resultado del mismo, con la lista de los definitivamente elegidos en todo el Municipio, se expondrá al público en el mismo día, en la parte exterior del local, en el sitio destinado á la publicación de edictos.

La exposición al público tendrá lugar por espacio de ocho días.

Art. 4.º Los electores del término municipal podrán presentar por escrito ante el Ayuntamiento las reclamaciones que ocrean procedentes sobre la nulidad de la elección, y en su caso del sorteo, y sobre la incapacidad de los proclamados durante los ocho días de exposición al público que se mencionan en el artículo anterior. Durante ese mismo período, y otros ocho días más, podrán los elegidos presentar también los documentos que aleguen en su defensa, y las excusas que estuvieren fundadas en haber sido Senadores, Diputados á Cortes, Diputados provinciales ó Concejales en los dos años precedentes.

Las excusas fundadas en la edad ó en impedimento físico podrán presentarse en cualquier tiempo.

Art. 5.º Al día siguiente de finalizado el plazo que determina el artículo anterior, los Alcaldes elevarán

PÉNDICE A

de reclamaciones y el electoral del término municipal á la Comisión provincial respectiva, en la Administración de Correos ó Estación bajo sobres cerrados y sellados, y correspondiente recibo. Los Administradores irán inmediatamente, certificados, á los de las Comisiones provinciales.

En el caso de capitales de provincia, la entrega de expedientes en la Secretaría de la Diputación será también bajo recibo.

La incomparecencia de los Alcaldes en la remisión de expedientes en el plazo señalado, será corregida con una multa de 100 pesetas. Sin perjuicio de esta multa municipal, tan luego como note la falta, la Comisión provincial, tan luego como note la falta, sancionará también, bajo su responsabilidad, que en el momento se recojan los expedientes por comisionados, á costa del Alcalde negligente, á lo dispuesto en el art. 8.º del citado Real decreto de 1.º de Noviembre de 1890.

La Comisión provincial, una vez recibidos los expedientes, resolverá dentro del término de quince días las reclamaciones, protestas y exenciones formando publicar sus acuerdos, á más tarde del quinto día en el *Boletín oficial* de la provincia, sin perjuicio de cuidar que se notifiquen á los interesados en la forma prevenida por las disposiciones administrativas vigentes.

Los Vocales de las Comisiones provinciales, en caso de fuerza mayor, serán responsables de lo dispuesto en el artículo precedente, imponiéndose en una multa de 100 á 250 pesetas á aquéllos si para el día 20 de Junio, como tal, no hubieren resuelto los expedientes de todas clases. Transcurrido este día sin haberse resuelto dichos expedientes, la Comisión provincial será requerida en debida forma por el Gobierno para el cumplimiento de

notificándole la multa en que nuevamente incurre cada uno de sus Vocales, á razón de 20 pesetas por cada día de retraso en la resolución, y dando inmediatamente cuenta al Gobierno á los efectos de los arts. 132 y siguientes de la ley Provincial, y 382 y 415 del Código penal.

Art. 8.º Cuando por causas extraordinarias los expedientes de reclamaciones y protestas electorales no hubieren sido resueltos para el día en que haya de constituirse el nuevo Ayuntamiento, los elegidos tomarán posesión de sus cargos, á reserva de lo que por la Comisión provincial se resuelva, y entendiéndose que la declaración de nulidad que ésta pudiera acordar, no implicará la nulidad de los actos administrativos que hubiera llevado á efecto la Corporación.

Art. 9.º Los acuerdos de las Comisiones provinciales en materia de validez ó nulidad de elecciones municipales y demás actos con ellas relacionados, así como sobre la capacidad ó incapacidad y excusas de los elegidos, serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los interesados para apelar ante el Ministerio de la Gobernación dentro del término de diez días, según dispone el art. 146 de la ley Provincial.

El recurso de apelación se presentará á la Comisión provincial ó al Gobernador de la provincia, como Presidente de la misma, quien dentro del término de tercer día lo remitirá al Ministerio con todos los antecedentes que formen el expediente. La alzada se resolverá definitivamente y en última instancia en los sesenta días siguientes al de su ingreso en el mismo.

Art. 10. Pasado el plazo de los sesenta días señalado en el último párrafo del artículo anterior sin que se hubiere dictado resolución alguna, se considerarán como definitivos los acuerdos adoptados por las Comisiones provinciales, y se devolverán los expedientes al Gobernador para que éste á su vez los remita y se archiven en los respectivos Ayuntamientos.

Art. 11. En ningún caso, ni por razón alguna, des-

época

1.º y 4.º, podrán entablarse, ni admitirse por motivo, reclamaciones de los electores sobre nulidad de la elección ó del sorteo, ni sobre edad ó incapacidad de los elegidos por causas que afectarles al tiempo de su elección, ó por las que se expresan en el art. 13 del Real decreto de Noviembre de 1890.

Si se formulen por causas de incapacidad solo después de la elección, se incoarán ante los Jueces de lo civil, y se sustanciarán en la misma forma establecida en los artículos precedentes.

Cuando algún Concejal hubiere sido elegido por causas de incapacidad ó incurriere en ella después de haber sido elegido, aun cuando no se haya suscitado reclamación alguna, el Gobierno podrá ordenar la incoación de expediente especial en depuración de este. Dicho expediente se sustanciará con audiencia pública y se dará traslado á informe de la Comisión provincial, resolviéndose por el Gobernador de la provincia.

El decreto que se dicte no será ejecutivo, si el interesado no compareciere en alzada al Ministerio de la Gobernación dentro del término de quince días, contados desde el día de la notificación de aquél. Estas resoluciones serán resolverse necesariamente en el plazo de sesenta días desde su ingreso en dicho Ministerio.

Los Ayuntamientos se constituirán en la forma que preceptúa su ley orgánica. Los Concejales presentarán sus certificaciones-credenciales por la Junta de escrutinio general, en el día del Ayuntamiento, tres días antes por lo menos de aquel en que deba tener lugar la constitución. Si no dejaren de cumplir este requisito, ó que en el día señalado por la ley para constituirse no comparezcan, sin acreditación, incurrirán en la nulidad de su elección.

nador, con arreglo al art. 184 de la ley Municipal.

Los Concejales electos que reincidan en esta falta y dieren lugar por ella á que la Corporación no se constituya en el día que para el efecto se les cite, incurrirán en la doble multa que expresa este artículo.

Si por tercera vez, y previa nueva citación, dejasen de concurrir impidiendo que el Ayuntamiento pueda constituirse, se considerarán vacantes sus cargos, cubriéndose éstos interinamente por el Gobernador en individuos que reunan las condiciones legales, hasta tanto que aquellos se provean por elección en la forma y tiempo que establecen las disposiciones vigentes, y sin perjuicio de dar conocimiento á los Tribunales de justicia de la resistencia al desempeño de funciones públicas, á los efectos de los artículos 383 y 416 del Código penal.

Art. 14. Si por cualquier motivo no se hubiese nombrado el nuevo Ayuntamiento para el primer día del primer mes del año económico, seguirá el del año anterior hasta que la elección se verifique y haya tomado posesión el nuevamente nombrado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Los expedientes hoy en trámite referentes á la validez ó nulidad de elecciones municipales, incapacidades y excusas de los Concejales, seguirán sustanciándose hasta su terminación con arreglo á las disposiciones hasta ahora en vigor.

Segunda. Para la renovación bienal de los Ayuntamientos, que habrá de efectuarse en Mayo próximo, se observarán las reglas siguientes:

1.ª En las poblaciones de más de 400 vecinos, los individuos que soliciten la declaración de candidatos para Concejales, con arreglo á los números 1.º y 2.º letra b del art. 16 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890, y los dos electores que han de presentar personalmente las propuestas de candidatos en los casos



ÍNDICE

	<u>Páginas.</u>
TÍTULO PRIMERO.—De los términos municipales y de sus habitantes.—Capítulo I.—De los términos municipales y sus alteraciones....	531
Capítulo II.—De los habitantes de los términos municipales.....	534
Capítulo III.—Del empadronamiento.....	535
Capítulo IV.—De los derechos y de las obligaciones de los habitantes en los términos municipales.....	537
TÍTULO II.—Del gobierno y organización de los municipios.—Capítulo I.—De los Ayuntamientos y de las Juntas municipales....	539
Capítulo II.—De la organización de los Ayuntamientos.....	540
Capítulo III.—De la organización de la Junta municipal.....	552
TÍTULO III.—De la administración municipal.—Capítulo I.—De las atribuciones de los Ayuntamientos.....	554
Capítulo II.—De la administración de los pueblos agregados á un término municipal.	563
Capítulo III.—De las sesiones y del modo de funcionar los Ayuntamientos.....	564
Capítulo IV.—De las funciones administrativas de los Alcaldes, Tenientes, Síndicos, Regidores y Alcaldes de barrio.....	568
Capítulo V.—De los Secretarios de Ayuntamientos.....	571
TÍTULO IV.—De la Hacienda municipal.—Capítulo I.—De los presupuestos municipales..	574

LEY DE ORDEN PÚBLICO ^(1 a-b.)

Don Francisco Serrano y Domínguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortes soberanas; á todos los que la presente vieren y entendieren, salud: Las Cortes Constituyentes de la Nación Española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO

DEL ESTADO DE PREVENCIÓN Y ALARMA

CAPITULO PRIMERO

Sección primera.

Artículo 1.º Las disposiciones de esta ley serán aplicadas únicamente cuando se haya pro-

1-a.) Código penal.—Libro II.—Título III.—Delitos
contra el orden público.—(1)

CAPÍTULO PRIMERO.—REBELIÓN

Art. 243. Son reos de rebelión los que se alzaren públicamente

(1) En la *Gaceta* de 23 de Enero de 1874 se publicó un decreto cuya parte dispositiva dice así:

«Artículo 1.º El levantamiento de los rails de los ferrocarriles, la interceptación de la vía por cualquier medio, las cortaduras de puentes, el ataque á los trenes á mano armada, la destrucción ó deterioro de los efectos destinados á la explotación, y todos los demás daños causados en las vías ferreas, que puedan perjudicar á la seguridad de los viajeros ó mercancías, se reputarán delitos contra el orden público y se castigarán, según los casos, con la pena de muerte ó las demás prevenidas en los capítulos 1.º y 2.º, título 3.º, libro 2.º del Código penal.

Art. 2.º Los reos de estos delitos serán entregados inmediatamente después de su aprehensión, con las diligencias sumarias que se instruirán en el acto, á la Autoridad militar co-

1

1

1

de aplicarse cuando dicha suspensión haya sido levantada por las Cortes (1).

Art. 247. Cuando la rebelión no hubiere llegado á organizarse con jefes conocidos, se reputarán por tales los que de hecho dirigieren á los demás, ó llevarén la voz por ellos, ó firmaren los recibos ú otros escritos expedidos á su nombre, ó ejercieren otros actos semejantes en representación de los demás.

Art. 248. Serán castigados como rebeldes, con la pena de prisión mayor:

1.º Los que sin alzarse contra el Gobierno cometieren por astucia ó por cualquier otro medio alguno de los delitos comprendidos en el art. 243.

2.º Los que sedujeren tropas ó cualquier otra clase de fuerza armada de mar ó de tierra para cometer el delito de rebelión.

Si llegare á tener efecto la rebelión, los seductores se reputarán promovedores y sufrirán la pena señalada en el art. 244.

Art. 249. La conspiración para el delito de rebelión será castigada con la pena de prisión correccional en sus grados medio y máximo.

La proposición será castigada con la prisión correccional en su grado mínimo y medio.

CAPÍTULO II.—SEDICIÓN

Art. 250. Son reos de sedición los que se alzan pública y tumultuariamente para conseguir por la fuerza, ó fuera de las vías legales, cualquiera de los objetos siguientes:

1.º Impedir la promulgación ó la ejecución de las leyes ó la libre celebración de las elecciones populares en alguna provincia, circunscripción ó distrito electoral.

2.º Impedir á cualquiera Autoridad, Corporación oficial ó funcionario público el libre ejercicio de sus funciones ó el cumplimiento de sus providencias administrativas ó judiciales.

3.º Ejercer algún acto de odio ó venganza en la persona ó bienes de alguna Autoridad ó de sus agentes.

4.º Ejercer, con un objeto político ó social, algún acto de odio ó venganza contra los particulares ó cualquiera clase del Estado.

5.º Despojar con un objeto político ó social, de todos ó de parte de sus bienes propios á alguna clase de ciudadanos, al Municipio, á la Provincia ó al Estado, ó talar ó destruir dichos bienes.

(1) El art. 31 que se cita es el de la Constitución de 1869 y concuerda con el 17 de la vigente de 1876.

dades civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el orden público,

noche, requiriendo la retirada á toque de tambor, clarín ú otro instrumento á propósito.

Si las circunstancias no permitieren hacer uso de los medios indicados, se ejecutarán las intimaciones por otros, procurando siempre la mayor publicidad.

No serán necesarias respectivamente la primera ó la segunda intimación desde el momento en que los rebeldes ó sediciosos rompieren el fuego.

Art. 258. Cuando los rebeldes ó sediciosos se disolvieren ó sometieren á la Autoridad legítima antes de las intimaciones ó á consecuencia de ellas, quedarán exentos de toda pena los meros ejecutores de cualquiera de aquellos delitos y también los sediciosos comprendidos en el art. 251, si no fueren empleados públicos.

Los Tribunales en este caso rebajarán á los demás culpables de uno á dos grados las penas señaladas en los dos capítulos anteriores.

Art. 259. Los delitos particulares cometidos en una rebelión ó sedición ó con motivo de ellas, serán castigados respectivamente según las disposiciones de este Código.

Cuando no puedan descubrirse sus autores, serán penados como tales los jefes principales de la rebelión ó sedición.

Art. 260 Las Autoridades de nombramiento directo del Gobierno que no hubieren resistido á la rebelión ó sedición por todos los medios que estuvieren á su alcance, sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal á perpetua.

Las que no fueren de nombramiento directo del Gobierno, sufrirán la pena de suspensión en su grado máximo á inhabilitación absoluta temporal en su grado medio.

Art. 261. Los empleados que continuaren desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados, ó que sin habérseles admitido la renuncia de su empleo lo abandonaren cuando haya peligro de rebelión ó sedición, incurrirán en la pena de inhabilitación especial temporal.

Art. 262. Los que aceptaren empleos de los rebeldes ó sediciosos, serán castigados con la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos en su grado mínimo.

CAPÍTULO IV.—DE LOS ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD Y SUS AGENTES, RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA

Art. 263. Cometén atentado:

1.º Los que sin alzarse públicamente emplearen fuerza ó in

rior del mismo y contra el orden público, que al vigente ley penal condena.

res, la publicación por la prensa periódica de los escritos en ellos mencionados no constituirá por sí sola delito de desacato.

Art. 267. Cuando la calumnia, insulto, injuria ó amenaza de que habla el artículo precedente fueren graves, el delincuente sufrirá la pena de prisión correccional en su grado mínimo y medio, y multa de 150 á 1.500 pesetas.

Si fueren menos graves, la pena será de arreato mayor en su grado máximo á prisión correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 268 La provocación al duelo, aunque sea embozada ó con apariencias de privada, se reputará amenaza grave para los efectos del artículo anterior.

Art. 269. Los que hallándose un Ministro de la Corona ó una autoridad en el ejercicio de sus funciones, ó con ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaren, insultaren de hecho ó de palabra, fuera de su presencia, ó en escrito que no estuviere á ellos dirigido, serán castigados con la pena de arresto mayor.

Art. 270. Se impondrá también la pena de arresto mayor á los que injuriaren, insultaren ó amenazaren de hecho ó de palabra á los funcionarios públicos ó á los agentes de la Autoridad en su presencia ó en escrito que se les dirigiere.

CAPÍTULO VI.—DESÓRDENES PÚBLICOS

Art. 271. Los que causaren tumulto ó turbaren gravemente el orden en la audiencia de un Tribunal ó Juzgado, en los actos públicos propios de cualquiera Autoridad ó Corporación, en algún colegio electoral, oficinas ó establecimiento público, en espectáculos ó solemnidad ó reunión numerosa, serán castigados con las penas de arresto mayor en su grado medio á prisión correccional en su grado mínimo y multa de 150 á 1.500 pesetas.

Art. 272. Los que turbaren gravemente el orden público para causar injuria ú otro mal á alguna persona particular, incurrirán en la pena de arresto mayor.

Si este delito tuviere por objeto impedir á alguna persona el ejercicio de sus derechos políticos, se impondrá al culpable la citada pena de arresto mayor en su grado máximo.

Art. 273. Se impondrá también la pena de arresto mayor, á no corresponder una superior con arreglo á otros artículos del Código, á los que dieren gritos provocativos de rebelión ó sedición en cualquiera reunión ó asociación ó en lugar público, ú ostentaren en los mismos sitios lemas ó banderas que provocaren directamente á la alteración del orden público.

**a competencia de los Jueces y Tribunales
usas criminales que se formen sobre di-**

Los que extrajeran de las cárceles ó de los establecimientos á alguna persona detenida en ellos, ó la presen la evasión, serán castigados con la pena de mayor en su grado máximo á prisión correccional en su grado mínimo, si emplearen al efecto la violencia ó la intimidación, y con la pena de arresto mayor si se valieren de otros medios.

sión del detenido se verificare fuera de dichos esta-
os, sorprendiendo a los encargados de conducirlos,
n las mismas penas en su grado mínimo.

Los que causaren desperfectos en los caminos de las líneas telegráficas o interceptaren las comunicaciones correspondencia, serán castigados con la pena de reclusión en sus grados mínimo al medio.

A los que destruyeren ó deterioraren pinturas, es-
cro monumento público de utilidad ú ornato, se les
pena de arresto mayor en su grado medio á prisión
al en su grado mínimo.

VII.—DISPOSICIONES COMUNES Á LOS TRES CAPÍTULOS ANTERIORES.

Para los efectos de los artículos comprendidos en párrafos precedentes, se reputará Autoridad al que, ó como individuo de alguna Corporación ó Tribunal de jurisdicción propia.

aran también Autoridades los funcionarios del Mi-
cal.

En el caso de hallarse constituido en Autoridad cívica el que cometiera cualquiera de los delitos expresados en los capítulos anteriores, será castigado con la respectiva pena y con la inhabilitación absoluta.

Los ministros de una religión que en el ejercicio de
les provocaren á la ejecución de cualquiera de los
aprendidos en los tres capítulos anteriores, serán
con la pena de destierro si sus provocaciones no
fecto, y con la de confinamiento mayor si le produ-
ser que correspondiera, por otros artículos del Có-
y pena al delito cometido.

**Instrucciones para el cumplimiento de la ley de orden
23 de Abril de 1870, por parte de las Autoridades
—Procedimiento militar.—Circular.—Excmo. señor:**

chos delitos, y el procedimiento á que éstas han de ajustarse.

Para el cumplimiento, por parte de las Autoridades militares, de la ley de orden público de 23 de Abril último, S. A. el Regente del Reino, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver se observen las *Instrucciones siguientes*:

1.º La prescripción contenida en el art. 1.º de la ley de orden público, relativa á que sus disposiciones serán únicamente aplicadas cuando se haya promulgado la ley de suspensión de garantías, se entenderá que sólo se refiere á los artículos de dicha ley cuya aplicación sea contraria á lo establecido en la Constitución de la Monarquía.

2.º Para el cumplimiento de lo prevenido en los arts. 11, 12, 13, 14 y 15, no es necesaria la previa publicación de la ley de suspensión de garantías, puesto que ninguno de ellos menoscaba los derechos que la Constitución otorga á todos los españoles, y se limitan solamente á determinar la manera como han de proceder las Autoridades para restablecer el orden con más prontitud cuando se intente á mano armada.

3.º Cuando se declare el estado de guerra en los casos previstos en los arts. 12 y 13 citados, las Autoridades militares respectivas darán inmediatamente cuenta detallada á este Ministerio de las causas que hayan motivado tal determinación.

4.º Una vez declarado el estado de guerra, se dará puntual cumplimiento á cuanto previene el tit. 2.º de la mencionada ley, sin esperar á que se promulgue la de suspensión de garantías, toda vez que ya se han llenado las condiciones que exige el art. 2.º de la Constitución.

5.º Las facultades extraordinarias que á las Autoridades civiles otorgan los arts. 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10 de la ley, y que el art. 31 hace extensivas á las Autoridades militares en el estado de guerra, no podrán ser utilizadas sino después de publicada la ley de suspensión de garantías.

Esta misma condición es indispensable para la aplicación de todas las disposiciones del tit. 3.º

6.º La penalidad marcada en el art. 23 de la ley de orden público para los delitos de rebelión y sedición y los comunes cometidos con ocasión de ellos, no se refiere á los militares en activo servicio, pues á éstos se les seguirá aplicando la penalidad que marca la Ordenanza para tales delitos.

7.º Los Consejos de guerra ordinarios constituidos con arreglo á lo que previene el párrafo 2.º del art. 29, sólo podrán juzgar á los reos de que trata el párrafo 1.º del mismo artículo,

Sección segunda (1).

Art. 3.º Publicada la ley de suspensión de garantías á que se refiere el art. 1.º, se considerará

como los Consejos de guerra á que se refieren los arts. 27 y 28, constituirse en un todo conforme á lo que prescribe la legislación militar.

Consecuente á lo que previenen los arts. 27, 28 y 29 de la ley, tanto en la formación del sumario como en todo aquello de lo que no se hace mención especial en la ley, se observarán estrictamente los trámites establecidos en las Ordenanzas del ejército y disposiciones posteriores.

Cuando á juicio del Fiscal instructor sea conveniente la separación de piezas separadas en causas donde haya varios reos, podrá acordarla del modo que más conduzca á la brevedad del proceso, y lo verificará siempre respecto de aquellos que no tienen confesiones ó plenamente convictos, á fin de que no se demore la sentencia de éstos y su pronta ejecución.

* No se practicarán más careos que aquellos que sean absolutamente precisos, ni se evacuarán más citas que las que tengan reconocida importancia para probar la inocencia ó culpabilidad de los reos.

* Antes de elevarse la causa á plenario, y para saber si es necesario practicar alguna nueva diligencia ó subsanar algún defecto, se pasará el proceso al Capitán general, Comandante ó Jefe de la fuerza á quien corresponda, para que, previo informe del Fiscal instructor ó Asesor nombrado al efecto, acuerde lo que proceda.

* Al recibirse á los procesados la confesión con cargos, se leerá é impondrá perfectamente de las declaraciones de los testigos del sumario, interrogándoles á continuación y en presencia de sus defensores, para que les ilustren, si se conforman con ellas y si renuncian al trámite de las ratificaciones. En caso afirmativo se omitirán dichas ratificaciones de los testigos, ó se verificarán tan sólo aquellas con que no se hubiesen conformado los reos, asesorados de sus defensores, haciéndose constar por diligencia.

Las facultades otorgadas á las Autoridades civiles por los arts. 3.º al 13, únicamente podrán utilizarse después de publicada la ley de suspensión de garantías, de conformidad con la segunda disposición de la circular de 19 de Julio de 1870, que publica en la nota (1-b) de la presente ley, pág. 624

declarado por el mismo hecho el estado de prevención, hallándose facultada desde este momen-

Las mismas formalidades deberán observarse respecto de las nuevas citas testificales que se evacuren de results de la referida confesión con cargos, al ampliarse ésta.

13.° En los procedimientos que se dirijan contra reos ausentes no hay necesidad de ratificar testigos, puesto que, cuando se presenten ó sean aprehendidos aquéllos, ha de abrirse de nuevo la causa, y al recibírseles la confesión pueden solicitar que tenga efecto la expresada diligencia.

14.° Terminada la ratificación de los testigos, el Fiscal pondrá su conclusión, lo cual deberá practicar en un breve término, que en ningún caso podrá exceder de tres días, entregándose en seguida la causa al defensor del reo, ya sea oficial. ya letrado, para que en el mismo improrrogable plazo haga la defensa.

15.° Cuando fuesen varios los procesados y no pudieran defenderse bajo una sola dirección, si hubiesen de hacerse más de dos defensas, dispondrá el Fiscal instructor que en vez de entregarse el proceso á cada defensor, se ponga de manifiesto en su casa por el término que aquél señale, y que en ningún caso podrá pasar de seis días, para que los defensores tomen las notas y apuntaciones que consideren necesarias, á fin de que dentro de este término queden formalizadas todas las defensas, adoptando en este caso las precauciones que considere oportunas para evitar cualquier abuso.

16.° Si los defensores de los reos creyesen conveniente alegar en sus defensas alguna tacha ú otra circunstancia de invalidación de los testigos de cargo, presentarán al Fiscal instructor una lista comprensiva de dichos testigos, para que sean citados y comparezcan al acto de la celebración del Consejo, siempre que no sea difícil ó demasiado dilatoria dicha comparecencia, ó se crea impertinente su exploración, á juicio de la Autoridad militar asesorada. En su caso, los Vocales del Consejo de guerra, una vez terminada la acusación y defensa, podrán interrogar á los testigos presentados sobre lo que crean oportuno, y el resultado se hará constar en un acta que extenderá el Fiscal y quedará unida á la causa.

17.° Las sentencias pronunciadas por cualquiera de los Consejos de guerra ordinarios de que habla la ley de orden público, se ejecutarán desde luego si mereciesen la aprobación del Capitán general del distrito, de acuerdo con su Auditor, debiendo consultarse, en caso contrario, con el Consejo Supremo de la Guerra, quien fallará la causa en el tiempo más breve posible,

to la Autoridad civil para adoptar cuantas medidas preventivas y de vigilancia conceptúe convenientes á fin de asegurar el orden público.

Art. 4.º La Autoridad civil excitará por oficio á la judicial para que proceda desde luego contra los que comprenda que son responsables, en algún sentido, de los delitos expresados en el art. 2.º

Art. 5.º Si se formaren grupos, dictará las medidas oportunas para su disolución, intimando á los fautores y auxiliares de la agitación que se disuelvan; y en el caso de no ser obedecida á la tercera intimación, utilizará la fuerza de que disponga, al efecto de restablecer la calma y dejar expedida la vía pública.

Art. 6.º Propondrá el Gobierno, y en caso urgente acordará desde luego, la suspensión de las publicaciones que preparen, exciten ó auxilien la comisión de los delitos de que habla el art. 2.º de esta ley, y señaladamente los comprendidos en los artículos 167 y 174 del Código penal, dando cuenta al Gobierno de las determinaciones que sobre este punto adopte. Recogerá los ejemplares que encontrare de aquellas publicaciones, remitiéndolos con las personas responsables de los delitos expresados al Juzgado ordinario competente para los efectos de justicia.

Art. 7.º La Autoridad civil, en este estado, podrá detener y detendrá á cualquiera persona, si lo considerase necesario para la conservación del orden.

y la sentencia que dicte causará ejecutoria sin necesidad de consulta.

18.º En cualquiera de los casos á que se refiere el artículo anterior, las Autoridades militares darán cuenta á este Ministerio por telégrafo de las sentencias de muerte que recaigan que no se ejecutarán sin la autorización del Gobierno.

De orden de S. A., etc. Madrid 19 de Julio de 1870.=Prim.

Los detenidos en esta forma no deberán confundirse con los presos y detenidos por delitos comunes.

Art. 8.º Podrá asimismo compeler á mudar de residencia ó domicilio á las personas que considere peligrosas, ó contra las que existan racionales sospechas de participación en dichos delitos.

El cambio de domicilio no podrá decretarse á más de 150 kilómetros de distancia del pueblo del compelido á mudarle.

Art. 9.º El destierro, que desde luego puede acordar la Autoridad á una distancia que no exceda de 250 kilómetros, se entiende levantado de hecho y de derecho, así como el cambio de domicilio, terminado que haya el período de suspensión temporal de las garantías constitucionales, si antes no fuesen éstas restablecidas.

Los motivos de las providencias á que se contraen éste y los tres anteriores artículos, se harán constar en acta que se levante ó expediente que se forme antes ó después de llevarlas á ejecución.

Art. 10. La Autoridad civil podrá también entrar en el domicilio de cualquier español ó extranjero residente en España, sin su consentimiento, y examinar sus papeles y efectos. Pero nada de esto podrá verificarse sino por la misma autoridad ó por un delegado suyo, provisto de orden formal y escrita. En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, papeles y efectos tendrá lugar siempre que sea presenciado por el dueño ó encargado de la misma, ó uno ó más individuos de su familia, y por dos vecinos de la propia casa ó de las inmediatas, si se hallasen en ellas, y en su defecto por dos vecinos del mismo pueblo.

No hallando en ella al dueño ó encargado de la casa ni á ningún individuo de la familia, se

hará el reconocimiento á presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levantándose acta del reconocimiento, que firmará con ellos la Autoridad ó su delegado.

Cuando un delincuente contra el orden público fuere sorprendido *in fraganti*, y perseguido por la Autoridad civil ó sus subordinados ó dependientes, se refugiare en su propio domicilio. ó en el ajeno, podrán éstos penetrar en él, pero sólo para el efecto de la aprehensión.

Art. 11 (1). Los deberes y atribuciones de la autoridad en el estado de agitación, alarma, desorden ó tumulto, se subordinarán á lo que prescriben esta ley y el art. 181 del Código penal.

Art. 12 (2). Si la Autoridad civil una vez empleados todos los medios de que en circunstancias ordinarias dispone, y los que para las extraordinarias le otorgan los precedentes artículos, no pudiere por sí sola, ni auxiliada por la judicial,

(1) Véase la disposición 3.^a de la circular de 19 de Julio de 1870, que se publica en la nota (1-b) de la presente ley, pág. 624.

(2) *Circular resolviendo algunas dudas suscitadas con motivo de las leyes provincial y de orden público. — Parte dispositiva.*—1.^a Con arreglo á lo dispuesto en el art. 13 de la ley de orden público, en toda rebelión ó sedición, cuando los amotinados hostilicen á la fuerza del ejército, la Autoridad militar, aunque haya obrado hasta entonces por requerimiento de la civil y sin encargarse del mando, lo tomará desde luego asumiendo la plenitud de atribuciones que le confiere el estado de guerra, el cual se entenderá declarado con carácter provisional, si no hubiere precedido el acuerdo entre las Autoridades que el citado artículo establece.

2.^a En los casos en que sea posible procurar ese acuerdo, la convocatoria de la Junta para declarar el estado de guerra corresponde al Gobernador civil.

3.^a El Consejo de Autoridades para levantar el estado de guerra, con arreglo al art. 32 de la ley de 23 de Abril de 1870, la que terminen la rebelión ó sedición, será convocado por la Autoridad militar.—De Real orden, etc.—Madrid 10 de Agosto 1885.—Villaverde.

dominar la agitación y restablecer el orden, lo prevendrá en un bando que se publicará con la solemnidad posible, é inmediatamente después dispondrá que la militar proceda á la adopción de las medidas que reclame la paz pública, previa la declaración del estado de guerra.

Art. 13. Cuando la rebelión ó sedición se manifiesten desde los primeros momentos, rompan el fuego los rebeldes ó sediciosos, ó comprenda la Autoridad civil la urgente necesidad de apelar á la fuerza y resignar el mando para dominarlos, se pondrá de acuerdo con la Autoridad judicial y la militar, y dispondrán la inmediata declaración del estado de guerra.

Si no hubiese acuerdo entre estas Autoridades ni tiempo para tomarlo, se entrará desde luego provisionalmente en el estado de guerra en los dos primeros casos del párrafo anterior, dando directamente cuenta de todo al Gobierno y á las Autoridades superiores jerárquicas respectivamente.

Art. 14. Si ocurriese la rebelión ó sedición en capital de provincia, la Autoridad civil, para los efectos del artículo anterior, lo será el Gobernador de la misma ó el que haga sus veces, y las Autoridades judicial y militar las superiores en el orden jerárquico. En los demás pueblos se reunirán para dicha declaración el Juez de primera instancia, ó el decano si hubiere más de uno, el Alcalde popular y el Jefe militar que ejerza el mando de las armas.

En el caso de que, en dichos pueblos no existiere Autoridad militar que ejerza el mando de las armas, el Alcalde popular, jefe superior de la Milicia, asumirá las facultades que corresponden según esta ley á la Autoridad militar en el estado de guerra.

15. En la capital de la Monarquía y cuando resida el Rey ó la Regencia del Reino, podrá declararse el estado de guerra sin consentimiento del Gobierno.

Gobierno, cuando hayan ocurrido actos de rebelión ó sedición en dos ó más provincias, ó se presentados grupos considerables de rebeldes armados en ellas, determinará el estado de guerra que queda sujeto al estado de guerra.

16. Recibida por la Autoridad judicial la denuncia á que se refiere el art. 4.º de esta Ley, sin recibirla, si tuviere conocimiento de los hechos antes de que llegue á su poder, el Jueces de primera instancia de la población donde ocurran aquéllos, dando cuenta al Regente de Audiencia, se constituirán en sus Juzgados, con los Promotores fiscales respectivos y el Escribano que designen, aunque no en turno, pudiendo valerse de él ó de otro del turno, si creyeran que lo exige el procedimiento, si creyeran que lo exige la administración de justicia.

17. Inmediatamente formarán los Jueces la causa sobre delitos contra el orden público, y los de rebelión y sedición, si hubiere méritos para ello, dedicándose exclusivamente á este servicio preferente, á cuyo fin, si lo fuere necesario, delegarán la jurisdicción para otros negocios en el juez de paz que corres-

18. Darán aviso sin pérdida de tiempo á la Autoridad civil de hallarse constituidos en Tribunal, ofreciéndole su cooperación, y de estar formada la causa sobre los sucesos que hayan producido alarma ó el desorden, reclamándole los auxilios que crean convenientes para la pronta averiguación de los hechos criminales que sean objeto del procedimiento.

Art. 19. Si los delitos contra el orden público ocurriesen en punto donde exista Audiencia territorial, se constituirá en sesión permanente la Sala de gobierno en el punto que el Regente designe, adoptando los acuerdos oportunos para la pronta sustanciación de las causas.

En otro caso, los Regentes dictarán á los Jueces que conozcan de estas causas, las órdenes conducentes al propio fin, dando cuenta á la Sala de gobierno para la aprobación ó reforma de dichas órdenes. A este propósito, la referida Sala se reunirá diariamente mientras lo considere necesario, á las horas que el Regente le señale.

TÍTULO II

DEL ESTADO DE GUERRA (1)

Art. 20. Resignado el mando por la Autoridad civil en la militar, y en los casos á que se contrae el art. 15 de esta ley, quedará declarado en estado de guerra el territorio de la provincia en que ocurran aquellos sucesos, lo que se hará saber al público por medio de bandos y edictos que contengan las prevenciones y medidas oportunas.

Art. 21. En dicho bando se intimará á los rebeldes ó sediciosos y perturbadores que depongan toda actitud hostil y presten obediencia á la Autoridad legítima.

Los que lo hicieren en el término que el bando fije, y no habiendo término señalado, en el de dos horas, quedarán exentos de pena, excepto los autores ó jefes de la rebelión, sedición ó desorden, y los reincidentes en estos delitos.

(1) Véase la disposición 4.ª de la circular antes dicha de 19 de Julio de 1870. (Nota 1-b de la presente ley, pág. 624.)

Los autores y jefes referidos de la pena que les corresponda dentro del término que expira el anterior, y sufrirán la inmediata reincidencia al medio. Los reincidentes á la vigilancia de la Audiencia de serlo.

Art. 22. Publicado el ba
plazo que en él se señale, se
trance los grupos que se hu
za si fuere n
lencia, prenc
iéndolos á di
uando deban
le se expres

lerados com
en ó hubiere
rante éste, si
ad, hallándo
rehendidos t
r. estado con

les de las cas
os rebeldes d
esuntos crim
arse en ella
articipación
ey, sufrirán

En de lo dis
artículo los i
rómicas lega
de los herido
delitos de r
netidos con
respectivame

to en el Código penal, y en la forma determinada en el art. 184.

Art. 24. Todo funcionario ó Corporación, cualquiera que sea su autoridad ó cargo, prestará inmediatamente, así á la Autoridad militar como á la civil, el auxilio que éstas le pidan para sofocar la rebelión ó sedición y restablecer el orden.

El funcionario ó Corporación que no prestase inmediato auxilio á la Autoridad superior militar ó civil, será en el acto suspendido de su empleo ó cargo, y reemplazado en él interinamente hasta la resolución del Gobierno, á quien se dará cuenta al efecto; todo sin perjuicio de las penas en que incurra por consecuencia del procedimiento que se instruirá para depurar su responsabilidad ó irresponsabilidad criminal.

Art. 25. Las autoridades civiles continuarán funcionando en todos los asuntos propios de sus atribuciones que no se refieran al orden público, limitándose en cuanto á éste á las facultades que la militar les delegare ó deje expeditas, debiendo en uno y otro caso darla directamente los partes y noticias que les reclame, y las demás que con referencia al orden público lleguen á su conocimiento.

Art. 26. La Autoridad militar, á la vez que adopte las medidas comprendidas en los artículos precedentes, y que restablezca el orden y el prestigio de la Autoridad á todo trance, dispondrá que inmediatamente se instruyan las causas á que haya lugar, y se formen los Consejos de guerra que han de fallar las que correspondan á la jurisdicción militar, según lo que expresan los artículos siguientes.

Art. 27 (1). Los Consejos de guerra ordinarios

(1) Véase la disposición 6.^a de la mencionada circular de 19 de Julio de 1870. (Nota 1-b de la presente ley, pág. 624).

tro Capitanes nombrados por la Autoridad militar, el Juez de primera instancia, el de paz y el Promotor fiscal más antiguo en el pueblo cabeza de partido judicial donde el Consejo se celebre, ó quien haga sus veces.

Si el Juez de paz no fuere Letrado, le reemplazará, según el número de orden, el suplente que lo sea; si no lo hubiere, asistirá al Consejo el Juez de paz ó suplente Letrado del año ó años anteriores, y no habiéndole tampoco, el Abogado más antiguo del pueblo donde se celebre.

Será Presidente del Consejo el vocal que según las leyes civiles y militares fuere de mayor categoría; y si sobre esto ocurriere duda, el que disfrute más sueldo por razón de su empleo. Disfrutando sueldo igual, el más antiguo en el empleo que le devengue.

Los procesados podrán hacer la defensa por medio de señores oficiales ó Letrados en ejercicio, que nombren, no pudiéndose limitar su facultad de nombrar defensor á sólo oficiales del ejército.

Art. 30. Todos los demás que se consideren responsables en cualquier concepto de los expresados delitos de rebelión y sedición, serán juzgados y sentenciados por la jurisdicción común y conforme al procedimiento á que por esta ley ha de ajustarse.

En su consecuencia, si instruídas las diligencias sumarias por mandato de la Autoridad militar, apareciesen complicadas como reos de los expresados delitos personas no comprendidas en los tres precedentes artículos, los Fiscales de las causas harán expedir inmediatamente los oportunos testimonios del tanto de culpa, y los remitirán al Juez de primera instancia que corresponda, por conducto de la Autoridad militar superior, la que con toda seguridad pondrá los presuntos reos

ción de dicho Juez de primera instancia efectos de justicia.

1 (1). La Autoridad militar en el estado podrá adoptar las mismas medidas que y las demás á que esta ley la autoriza, muy especialmente de que los Jefes ó Comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, en posesión de su autoridad, ya á la de la judicial, lo verifiquen con toda seguridad de su destino; y cuando no llegasen á él, que se formen las causas oportunas para reprimir y castigar las faltas y delitos que en el servicio se cometan, cualquiera que sea el jefe que lo desempeñe.

2. Para declarar levantado el estado de guerra que haya terminado la rebelión ó la insurrección se celebrará previamente un Consejo por las autoridades militar, civil y judicial de la capital de la provincia declarada en dicho estado de guerra; si hubiere unanimidad de votos, se llevará á cabo el acuerdo, dándose inmediatamente al Gobierno.

Si el acuerdo no fuere por unanimidad, sino por mayoría de votos, no se llevará á cabo interinamente, á quien se dará asimismo cuenta de la resolución, no resuelva lo que corresponda en el Consejo de Ministros.

Al Gobierno corresponde levantar el estado de guerra cuando haya hecho la declaración de guerra que determina el art. 15.

3. Levantado que sea el estado de guerra, los expedientes remitidos á los Juzgados competentes,

los facultades otorgadas á las Autoridades militares no podrán ser utilizadas después de publicada la ley de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la disposición de la circular de 19 de Julio de 1870, que en la nota 1.ª de la presente ley, pág. 804.

para su continuación y demás efectos de justicia, todas las causas contra aquellas personas que se hallen sometidas al Tribunal excepcional por virtud de esta ley.

Art. 34. Las Autoridades civiles y militares no podrán en ningún caso establecer ni imponer otra penalidad que la prescrita anteriormente por las leyes.

TITULO III (1)

CAPITULO PRIMERO

DE LOS BANDOS QUE DICTEN LAS AUTORIDADES Y DE SUS INFRACCIONES

Sección primera.

Art. 35. Las Autoridades civiles y militares, en el período de suspensión de garantías, publicarán además los bandos que consideren necesarios para mantener mejor el orden público, con sujeción estricta, y bajo su responsabilidad, á las prescripciones constitucionales que no hayan sido suspendidas con arreglo al art. 31 de la Constitución, estableciendo en dichos bandos las penas en que incurren los infractores, y las aplicarán gubernativamente.

Art. 36. En ningún caso podrán señalar mayores penas que las siguientes: multa hasta 125 pesetas, ó arresto hasta ocho días, si dictare el bando un Alcalde popular.

Cuando sea el Gobernador de la provincia quien la dicte, podrá elevar la multa á 250 pesetas, y

(1) Véase la disposición 5.ª de la ya referida circular de 19 de Julio de 1870, Nota 1-b de la presente ley, pág. 624.

arresto hasta quince días, á la par ó separadamente.

Art. 37. Los multados por infracción de banco que sean insolventes, sufrirán por vía de sustitución el arresto, según lo prevenido en el artículo 504 del Código penal (1).

El arresto por vía de sustitución no podrá exceder de los días por que pueden imponerle aquellas Autoridades respectivamente, conforme á lo prescrito en el artículo anterior.

Art. 38. La Autoridad militar podrá corregir también del mismo modo y en la misma forma la civil, y con la limitación consignada en el artículo 35, las infracciones de sus bandos en el período de estado de guerra, sin que puedan la superior del distrito y de la provincia señalar pena mayor que la de quince días de arresto y 250 pesetas de multa, las dos á la par, ó una sola, y las mismas Autoridades militares ocho días de arresto y 5 pesetas en la propia forma.

En caso de ser insolventes los multados, sufrirán el arresto por vía de sustitución, sin que pueda ser mayor el que por tal concepto se imponga, de ocho ó quince días señalados respectivamente en este artículo.

Sección segunda.

Art. 39. Las Autoridades civiles y militares llevarán un libro en el que extenderán las providencias que acuerden, imponiendo gubernativamente la multa y el arresto expresados, haciendo constar en ellas claramente el motivo de su imposición.

Este artículo es con relación al Código de 1850, y su texto es el 625 del vigente.

La providencia se hará saber gubernativamente al infractor por los dependientes ó subordinados de aquellas Autoridades, entregándole copia literal de la misma. El penado firmará el recibo de esta copia al pie de la diligencia que ha de extender el encargado de hacerle saber dicha providencia: si nó supiere ó no pudiere firmar, lo hará un testigo á su ruego: si no quisiere, lo verificarán dos testigos requeridos verbalmente por el encargado de hacer saber la providencia.

Art. 40. Si á la primera diligencia en busca no fuere hallado el penado en su domicilio, se hará saber á cualquiera de los familiares mayor de 21 años, que more en la casa, con entrega de la copia literal de la providencia, y guardándose las reglas establecidas en el artículo anterior.

Si ni el penado ni ninguno de los familiares se encontraren en la casa á la primera diligencia en busca, se entenderán dichas diligencias con cualquiera de los vecinos más inmediatos, ó personas que habiten en las casas de éstos y sean familiares, mayores de 21 años.

Art. 41. Las providencias acordadas por las Autoridades superiores civiles de la provincia, la militar del distrito y el Comandante militar de una provincia, son ejecutivas. Contra ellas no cabe recurso de alzada. Los infractores pueden, sin embargo, entablar recurso de revisión ante las mismas Autoridades, cuyo fallo en este caso será ejecutorio.

Art. 42. Las providencias de las Autoridades inferiores civil y militar que impongan arresto se llevarán á efecto desde luego.

Sin embargo de su ejecución, dichas Autoridades, con copia literal de la providencia, la consultarán con las superiores respectivas en el mismo día, siendo posible, y los arrestados podrán

ir ante éstas por escrito y por conducto de superiores, exponiendo lo que tengan por conveniente. Las Autoridades inferiores dirigirán inmediatamente á su destino estas reclamaciones en su informe, y si se hicieren dentro de las primeras veinticuatro horas de la ejecución de sus providencias, omitirán la consulta, limitándose á ellas ó informarlas.

Las providencias en que se impongan multas menores de 30 pesetas, son ejecutivas también al momento, y se observará respecto á ellas lo determinado en el artículo anterior.

Las providencias en que se imponga una multa mayor de 30 pesetas, no se llevarán á efecto sino que la Autoridad superior respectiva, recibida la consulta, ó la reclamación en su caso, dentro de veinticuatro horas siguientes á la notificación, con el informe de la Autoridad que impuso la multa, confirme, modifique ó revoque dicha providencia, cuya superior resolución será ejecutada sin ulterior recurso.

TITULO IV

PROCEDIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ORDINARIA EN LAS CAUSAS POR LOS DELITOS QUE SE
EXPRESAN EN EL ART. 2.º DE ESTA LEY

CAPITULO PRIMERO

Sección primera.

Art. 43. El procedimiento en las causas que pertenecen á la jurisdicción ordinaria por los delitos que se expresan en el art. 2.º de esta ley, será el que se prescribe en los artículos siguientes.

Sección segunda.

Art. 44. El Juez de primera instancia del partido ó distrito en que hubiere principiado la subversión del orden, es el competente para conocer del asunto.

Donde haya dos ó más Jueces, si la rebelión ó sedición estallaren á un mismo tiempo en dos ó más distritos judiciales, los Jueces respectivos instruirán inmediatamente las primeras diligencias sumarias, que directamente pasarán al más antiguo de ellos, á quien para este caso se declara competente.

El Gobierno y las Salas de Gobierno de las Audiencias pueden, sin embargo, cometer el conocimiento de la causa al Juez de primera instancia que consideren conveniente, conforme al art. 38 del reglamento provisional de 26 de Septiembre de 1835.

Art. 45. En las causas de esta clase no podrá promoverse contienda de competencia.

Si un Juez reclamare el conocimiento de la causa teniéndolo ya otro, y hubiere duda sobre cuál de ellos sea el competente, no poniéndose de acuerdo á la primera comunicación que con tal motivo se dirijan, pondrán el hecho sin dilación en conocimiento de la Audiencia por medio de exposición razonada, para que la Sala de gobierno, oyendo en voz al Fiscal, decida en el acto lo que estime procedente. Cuando los Jueces pertenezcan á distintos territorios, elevarán directamente dicha exposición al Ministerio de Gracia y Justicia para la resolución oportuna. Mientras tanto, cada Juez continuará los procedimientos que hubiere incoado.

Art. 46. En todo caso, los Jueces de primera

ncia en cuyo distrito tenga ramificación el
o, u ocurran hechos justiciables por conse-
cia del mismo, instruirán las oportunas dili-
as, que pasarán al que sea competente para
er del delito principal.

t. 47. Todo Juez que principie á instruir
ncias en los casos prevenidos en los ante-
s artículos, dará cuenta sin dilación á la Au-
ia del territorio, por conducto del Regente,
Ministerio de Gracia y Justicia.

o propio verificará cuando se inhiba y acuer-
mitir sus actuaciones al Juez competente, y
vará á efecto sin consultar previamente con
diencia el auto de inhibición.

t. 48. En el momento en que por cualquier
o ó conducto tenga noticia el Juez de prime-
stancia de la perpetración de un delito con-
l orden público de los comprendidos en esta
i de cualquier hecho preparatorio para los
ios, procederá sin levantar mano á la ins-
ción del correspondiente sumario, dándole
rencia exclusiva y valiéndose del Escribano
sea más de su confianza.

t. 49. Para la comprobación del delito y de
linéncia del presunto reo empleará el Juez
edios comunes y ordinarios que establece el
ho.

t. 50. Para mayor actividad, los Jueces evi-
i la evacuación de las citas y careos que no
de conocida importancia, y todas aquellas
encias cuyo resultado, aun en el caso más
able para el reo, no hubieren de alterar ni
turalaleza del delito ni la responsabilidad de
tor.

t. 51. Toda persona, cualesquiera que se
ase y condición, cuando tenga que decla-
o testigo en las causas de que se trata, e

obligada á comparecer para este efecto ante el Juez que de ella conozca, luego que sea citada de orden del mismo, sin necesidad de permiso previo de su jefe ó superior respectivo.

Art. 52. La que resistiere sin asistirle impedimento justo, podrá ser compelida por cualquier medio legítimo de apremio, incluso el de hacerla conducir por la fuerza pública.

Art. 53. Todos han de dar su testimonio por declaración bajo juramento en forma, excepto el Jefe de la Nación y las Autoridades superiores; éstas podrán verificarlo por medio de certificación, informe ó comunicación oficial, sin necesidad de comparecer personalmente ante el Juez de la causa; aquél no puede declarar ni informar.

Art. 54. Cuando sean varios los procesados, el Juez podrá acordar la formación de las piezas separadas que estime convenientes para simplificar y activar los procedimientos y que no se dilate el castigo de los que resulten confesos ó convictos.

Art. 55. En los delitos expresados en el segundo artículo se procederá siempre á la prisión preventiva de los que aparezcan culpables, y no podrá acordarse su libertad durante la sustanciación de la causa, bajo fianza ni caución alguna, mientras duren los estados de alarma y de guerra.

Art. 56. En cualquier estado de la causa en que aparezca la inocencia de un procesado, se sobreseerá respecto de él, declarando que el procedimiento no le para perjuicio y poniéndole inmediatamente en libertad, sin costas algunas. Este sobreseimiento se consultará con el Tribunal superior, al propio tiempo que la sentencia definitiva, si hubiese otros procesados.

Art. 57. Desde que principie el sumario se dará conocimiento al Promotor fiscal, el cual tie-

enterarse de todo lo que en él se ante para promover y auxiliar la acsticia; será oído por escrito siempre lo estime, y lo será necesariamente lo que se ordena en el artículo an-

Concluido el sumario, se pasará la motor fiscal para que formalice su un término breve, que no podrá exco días.

Si en la acusación se pidiere la im- alguna de las penas correccionales, se previenen las reg'as 38, 39 y 40 de la nal para la aplicación del Código

varios los procesados se pidiere con- mposición de penas afflictivas y con- de penas correccionales, y no fuese formar pieza separada para los de id, se dará á la causa, respecto de nitación que se marca en los artículos

Fuera del caso expresado en el pá- o del artículo anterior, se dará tras- usación al procesado para que haga or igual término que el concedido al cal, haciéndole saber al mismo tiem- acto de la notificación nombre Pro- bogado, y si no lo hiciere, se le nom- cio los que se hallaren en turno.

Cuando sean varios los procesados, acer unidos su defensa, se les obli- o verifiquen bajo una misma direc- tiendo verificarlo de este modo por idad ú oposición entre ellos, si hubie- se más de dos defensas, dispondrá el vez de entregarse el proceso al defen-

sor de cada parte, se ponga de manifiesto á los respectivos defensores, en el oficio del Escribano, por el término que aquél señale, sin que pueda pasar de ocho días, dentro del cual deberán formalizarse todas las defensas. En este caso los autos estarán de manifiesto en el oficio del Escribano durante diez y ocho horas en cada día, para que los defensores puedan leerlos por sí mismos y sacar las copias ó apuntes que crean conducentes, tomando el Escribano las precauciones oportunas para evitar abusos.

Art. 62. Por medio de otrosíes en los escritos de acusación y defensa deberá necesariamente cada parte articular toda prueba que le conviniera ó renunciar á ella, expresando además si se conforma ó no con todas las declaraciones de los testigos del sumario, y con cuáles de ellas está conforme, si no lo estuviere con algunas; no haciendo lo uno ni lo otro, se entiende que renuncian la prueba y están conformes con las declaraciones del sumario.

Art. 63. Si las partes de consuno renunciaren la prueba y se conformaren con todas las declaraciones del sumario, ó nada dijeren sobre estos extremos por otrosíes en sus escritos de acusación y defensa, habrá el Juez por conclusa la causa desde luego, y sin otro trámite mandará llevar los autos á la vista, con citación de las partes, para sentencia.

En otro caso, recibirá la causa á prueba con calidad de todos cargos por un término breve, que, aunque se prorrogue, no podrá exceder de treinta días, admitiendo de las pruebas propuestas solamente las que estime pertinentes y de notoria influencia en el resultado del proceso.

Art. 64. Dentro de las veinticuatro horas siguientes á la notificación del auto recibiendo la

á prueba, presentará cada parte por duplicado de los testigos de cargo ó descargo de tinte valerse para su prueba respectiva, ex- do la vecindad, estado, profesión, oficio ó de vivir de cada uno de ellos. Un ejemplar as listas se unirá á los autos, y el otro se ará á la parte contraria para la oposición tachas á los testigos que las tuviesen, y efectos convenientes. No se admitirán más s que los contenidos en dicha lista, y los e ellos se presenten dentro del término de l, serán examinados, aun pasado aquel tér- en el día ó los días siguientes. Tampoco i admitirse más de diez testigos por cada ta útil.

65. El examen de los testigos de cargo y go, y la ratificación de los del sumario, con declaraciones no se hubiesen conformado rtes, tendrán efecto en audiencia pública istencia del Promotor fiscal. También po- sistir el procesado ó su Procurador y Letra- les convinieren.

este fin, presentadas las listas de testigos z señalará el día más próximo posible para iparecencia y examen ó ratificación de los os.

s del sumario serán citados de oficio, como n los de cargo que presente el Promotor los demás serán presentados por la parte sada, la cual, sin embargo, podrá decir que ppele y apremie á los que rehusen compare- declarar.

66. Los testigos que no se hallaren á más cia que la de un día de viaje de la residencia, según los medios de comunicaci- ecidos, serán compelidos á comparecer fc ente, no mediando razones justas que lo li

pidan, y también cuando á reclamación de alguna de las partes estimase el Juez indispensable para el cargo ó descargo la comparecencia personal.

Art. 67. Los demás testigos se examinarán por medio de exhortos, diligenciándose éstos con la mayor urgencia por los Jueces exhortados, bajo su más estrecha responsabilidad: pasado el término de prueba sin haber sido devueltos, el Juez exhortante seguirá sin ellos el procedimiento y dará inmediatamente cuenta de todo el Regente de la Audiencia.

Art. 68. En el día y hora señalados al efecto, se procederá á la ratificación y examen de los testigos, verificando el de cada uno de ellos con separación. Concluída la declaración de cada testigo, las partes ó sus defensores podrán hacer al mismo, por conducto del Juez, las preguntas que éste admita como pertinentes, extendiéndose así la pregunta como la contestación. También se escribirán las preguntas que el Juez deseche como impertinentes, si la parte interesada lo reclamare, á fin de que la Superioridad pueda apreciarlas en su día.

Art. 69. La prueba de tachas se hará en su caso acto continuo de la principal y dentro del término que ésta, formulando por escrito previamente la parte interesada las preguntas á cuyo tenor deban ser examinados los testigos que presentare para dicha prueba.

Art. 70. Concluso el término de prueba, ó practicada toda la que hubieren propuesto las partes, aunque aquél no haya expirado, lo acreditará el Escribano por diligencia, y sin otro trámite pasará los autos al estudio del Juez para sentencia, haciéndolo saber á las partes.

Art. 71. Dentro de los dos días siguientes, si el Juez hallare en la causa defectos sustanciales

absanar, ó faltaren algunas diligencias preparadas para el cabal conocimiento de la verdad, hará que para mejor proveer se practiquen íntegramente todas las que fueren indispensables bajo su responsabilidad en el caso de dar fin con esto á innecesarias dilaciones.

72. Pasados estos días, el Juez señalará hora para la vista pública dentro de los tres días. Durante este tiempo estarán los autos reunidos en la Escribanía, para que la parte o los defensores se instruyan y tomen las providencias convenientes, guardándose lo prevenido para lo que en el art. 61 de esta ley. Las costas que recaen en este acto los curiales se declaran pagables.

Después del acto de la vista podrán informar oralmente su derecho al Juez ó Tribunal los defensores nombrados por los procesados, por el orden que en el procedimiento escrito.

Promotor fiscal y los defensores nombrados por el Juez deberán informar necesariamente, guardando el mismo orden.

73. El Juez dictará sentencia, que deberá pronunciarse dentro de los cinco días siguientes á la conclusión del acto de la vista.

En la propia sentencia mandará también que se citen los autos en consulta al tribunal superior con citación y emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él dentro de tres días si la Audiencia residiera en la misma población, dentro de seis días en otro caso.

74. El emplazamiento se hará á los Promotores de los procesados, si éstos no fueren nombrados á la primera diligencia en busca; y al efecto, los Escribanos les prevendrán que nombren Procurador y Abogado que defiendan á sus interesados en el Tribunal superior, bajo aperc-

cibimiento de nombrárseles de oficio, admitiéndoles dicho nombramiento, si lo hicieren, en el acto de la notificación.

Art. 75. Las causas contra reos ausentes se sustanciarán por los mismos trámites determinados en los anteriores artículos; pero no se ratificarán más testigos del sumario que aquellos con cuyas declaraciones no se hubiesen conformado el Promotor ó los procesados presentes.

Art. 76. Los Jueces tendrán el término de veinticuatro horas para dictar las providencias interlocutorias.

Contra ellas no se admitirá más recurso que el de reposición y apelación subsidiaria, interpuesto dentro de segundo día. La apelación sólo se admitirá en un efecto, y para sustanciarla se esperará á que se remitan los autos á la Audiencia en consulta de la sentencia definitiva. Contra las providencias denegatorias de prueba no se da recurso alguno; pero la parte agraviada deberá formular ante el inferior la oportuna protesta, para que reproducida su petición en la segunda instancia, pueda recaer decisión sobre ella.

Sección tercera.

De la segunda instancia.

Art. 77. Recibidos los autos en la Audiencia, se pasarán sin dilación al Relator para que forme el amputamiento en el término que la Sala le señale, atendiendo al volumen de los autos, pero sin que pueda exceder de ocho días.

Art. 78. Devueltos los autos por el Relator, se comunicarán al Fiscal y á cada una de las partes para instrucción, por un breve término, que no podrá exceder de seis días para cada uno.

el caso de ser m
ará lo prevenido
propio tiempo se
ador y Abogado
e no lo hubiesen
u Procurador.

79. Al devolverse los autos ó al darse
struída de ellos cada parte, manifestará
firma de su Letrado y Procurador, su con
ad con el apuntamiento, ó las omisiones é
titudes que á su juicio puedan haberse co
en él, pidiendo en este caso se rectifique.

80. También podrán las partes, al devol
autos, ó darse por instruídas ó pedir que
ba la causa á prueba.

Se recibimiento á prueba en la segunda ins
sólo podrá tener lugar para justificar he
uevos de notoria influencia en el resultado
ausa, protestando no haber tenido conoci
de ellos en tiempo oportuno para alegarlos
arlos en la primera, y sobre los hechos no
dos por el Juez en primera instancia, cuan
hubiere hecho la protesta expresada en el

81. La Sala designará un Ministro po
el cual informará sobre la reforma ó adi
del apuntamiento y sobre la procedencia
prueba que se hubiere solicitado.

Ministro ponente ejercerá las demás fun
propias de este cargo.

82. Si la Sala estimare procedente la
esta, mandará practicarla, recibiendo para
causa á prueba por un breve término, que
e se prorrogue, no podrá exceder de veinte

prueba en este caso se practicará con las
s formalidades que en la l

ante el mismo ponente, ó dándose comisión al Juez inferior del punto donde se hallen los testigos.

Art. 83. Conformes las partes en el apuntamiento, ó hechas en él las reformas acordadas, ó adicionado en su caso con las pruebas practicadas en la segunda instancia, se señalará para la vista el día más próximo posible, con citación de las partes.

En el acto de la vista informarán de palabra, primero el Fiscal y después los defensores de los procesados, por el mismo orden que hubieren guardado en la primera instancia. Caso de haber apelado alguna de las partes, su defensor únicamente usará de la palabra antes que el Fiscal.

Art. 84. Estas causas se verán precisamente por cinco Magistrados, debiendo ser uno de ellos el Regente ó el que haga sus veces.

Si en la Sala á que corresponda no hubiere número suficiente de Ministros, se agregarán los más antiguos de las otras hasta completarlo, con exclusión de los Presidentes, si hubiere número suficiente para ello.

Art. 85. Concluída la vista, la Sala dictará sentencia fundada, dentro del término de seis días.

Esta sentencia causará ejecutoria.

Art. 86. Dictada la sentencia, se remitirá sin dilación, con certificación de ella, al Juez inferior para su ejecución y cumplimiento, sin perjuicio de la tasación de costas y gastos del juicio.

Hecha ésta, y aprobada, se devolverá la causa al Juez inferior con la certificación correspondiente.

Art. 87. Contra las providencias interlocutorias de las Audiencias en las causas de que se trata, no se admitirá más recurso que el de súplica para ante la misma Sala, si se interpusiese dentro del segundo día.

o sea necesario, según la urgencia del caso, y el juicio de los mismos.

Art. 89. Sobre los demás puntos respectivos al procedimiento en estas causas ante la Autoridad judicial, que no se hallen expresamente mencionados en la presente ley, se observarán las reglas establecidas en los procedimientos comunes y en la ley provisional para la aplicación del Código de Procedimiento, sin que se acuda á ninguna otra ley especial.

Art. 90. Quedan derogadas las leyes, decretos, órdenes y otras disposiciones publicadas hasta ahora sobre el procedimiento en las causas que se tramitan por la jurisdicción ordinaria y por los demás á que se refiere esta ley.

ARTÍCULOS ADICIONALES

Artículo 1.º Las disposiciones precedentes sobre el procedimiento regirán hasta que se plantee el juicio por jurados, como prescribe el artículo 93 de la Constitución, en cuyo caso se modificarán las de esta ley según lo requieran la Ley de Tribunales y la de procedimiento en materia criminal.

Art. 2.º Establecido por una ley el recurso de amparo en materia criminal, se acomodará la presente á las prescripciones que se dicten en ella, salvas las modificaciones que se creyere conveniente introducir á fin de asegurar la celeridad, economía y sencillez de la tramitación en causas sobre los delitos que son objeto de esta ley.

Art. 3.º La presente ley no abraza los casos

de guerra extranjera ni de guerra civil formalmente declarada.

De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica al Regente del Reino para su promulgación como ley.

Por tanto, mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que la guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes
Madrid 23 de Abril de 1870.—Francisco Serrano.—El Ministro de la Gobernación, Nicolás María Rivero.

	<u>Página</u>
LIBRO PRIMERO.—Del estado de prevención	
Libro I.—Capítulo primero.—Sección pri-	
a.....	617
En segunda.....	626
LIBRO II.—Del estado de guerra.....	639
LIBRO III.—Capítulo primero.—De los ban-	
que dictan las autoridades y de sus in-	
dicaciones.—Sección primera.....	639
En segunda.....	640
LIBRO IV.—Del procedimiento ante la auto-	
ridad judicial ordinaria en las causas por los	
delitos que se expresan en el art. 2.º de esta	
Ley.—Capítulo primero.—Sección primera ..	642
En segunda.....	649
En tercera.—De la segunda instancia....	651
LIBROS ADICIONALES.....	654

LEY PROVISIONAL

DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA HACIENDA

CAPITULO I

De la Hacienda pública.

Artículo 1.º Constituyen la Hacienda pública todas las contribuciones, rentas, fincas, valores y derechos que pertenecen al Estado. Sus rendimientos, que forman el haber del Tesoro, se aplican al pago de las obligaciones del Estado.

Art. 2.º La recaudación del haber del Tesoro estará á cargo del Ministerio de Hacienda, y se efectuará por agentes del mismo, responsables y sujetos á la rendición de cuentas.

Los empleados de los diferentes Ministerios que tengan á su cargo la administración de algunas rentas, impuestos ó derechos que por razón de su especialidad no puedan administrarse por el de Hacienda, dependerán de éste en todo lo relativo á la entrega y aplicación de los fondos y á la rendición de sus respectivas cuentas.

Art. 3.º (1). Estarán sujetos á la prestación de fianza aquellos funcionarios de quienes las instrucciones lo exijan para la seguridad de los fondos ó efectos que manejen ó custodien. Las fianzas podrán constituirse:

1.º En metálico.

2.º En efectos públicos, al cambio, término

(1) Modificado como aquí se encuentra por el art. 72 de la ley de 11 de Julio de 1877.

o, de la cortización oficial del mes anterior que se constituye la fianza.

En fincas rústicas; y

En fincas urbanas situadas en capitales de provincia ó poblaciones que excedan de 20.000 s, estimándose su valor por la tercera parte que resulte capitalizando la renta líquida imponible amillarada al 5 por 100 en rústicas y al 100 en las urbanas.

Por las fincas que se constituyan en metálico a favor del Estado para garantía de destinos públicos, se abonará el mismo tanto por ciento de interés que devengue oficialmente la deuda pública del Tesoro.

t. 4.ª La suma de los caudales públicos, incluidos los reintegros de pagos indebidos, y el producto de la venta de los efectos que se enajenen por ser éstos innecesarios en todos los ramos del servicio del Estado, se reunirán en el Tesoro ó sus dependencias, ingresando en sus arcas materialmente.

Se prohíbe la existencia de cajas particulares que sólo contengan fondos destinados y aplicados á un ramo especial, á no ser que por necesidad del servicio se creyera necesaria la existencia de alguna de estas cajas, en cuyo caso se establecerá con conocimiento y consentimiento del Ministerio de Hacienda, y su custodia será á cargo de claveros é interventores responsables, en la forma que determine un reglamento especial (1).

El cumplimiento de este artículo no se ha llevado por completo á efecto hasta el año de 1886; pues si bien por la ley de Diciembre de 1881 quedaron suprimidas la mayor parte de las Cajas especiales, continuaron, sin embargo, existiendo las de redenciones y enganches, la de premios para el servicio de la marina y algunas otras, que por fin desaparecieron

Art. 5.º No se concederán exenciones, perdones ni rebajas de las contribuciones ó impuestos públicos, ni moratorias para el pago de débitos al Tesoro, sino en los casos y en la forma que las leyes hubieren determinado (1).

Art. 6.º No podrán enajenarse ni hipotecarse los derechos de la Hacienda pública, cualquiera que sea su naturaleza, sino en virtud de una ley, y tampoco podrán arrendarse las rentas públicas fuera de los casos en que se halle expresamente autorizado por las leyes de su creación ó por otra ley especial. .

Art. 7.º Para someter á juicio de árbitros las contiendas que se susciten sobre los derechos de

por virtud de la ley de 2 de Agosto de 1886, para cuyo cumplimiento se dió el Real decreto de 28 del propio mes.

(1) Acerca de lo dispuesto en este artículo se hallan vigentes los siguientes de la ley de 18 de Junio de 1885:

«**Art. 8.º** En lo sucesivo no se concederán por ningún concepto moratorias para el pago de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería.

Las moratorias que estuvieren legalmente concedidas en 30 de Junio de este año, se harán efectivas en el término de cuatro años.

Art. 9.º Se podrá condonar la contribución á los particulares, á los pueblos ó á las provincias por calamidades extraordinarias.

La condonación ha de ser concedida al particular por el Ayuntamiento, asociado del número de contribuyentes que se determine; al distrito municipal por la Diputación provincial, y á la provincia por una ley, siendo siempre á más repartir la cantidad condonada en el año económico siguiente entre los contribuyentes del distrito municipal, de la provincia ó de la Península é islas adyacentes, según los casos.»

Véase asimismo la ley de moratorias de 16 de Abril de 1895, la Instrucción para su cumplimiento de la misma fecha publicadas en la *Gaceta* de 18 del mismo mes, y el art. 41 de la ley de presupuestos de 30 de Junio de 1895, así como la ley de 24 de Agosto de 1896, publicada en la *Gaceta* de 26 del mismo mes, y el art. 28 de la ley de presupuestos de 28 de Junio de 1898.

nda, habrá de preceder una ley autori-

1.º En las negociaciones y comisiones del y en todo contrato de ejecución material tender á algún servicio público se prohíbe la nulidad, toda estipulación ó cláusula lícita ó implícitamente suprima ó altere las formalidades establecidas para justificar el descargo de las personas responsables del empleo de los fondos públicos. Cualquiera sea la clase y condición de los que por compra ó por servicios accidentales tengan que autorizar aquellas operaciones, aun cuando no fueran empleados públicos, quedarán por este solo sujeta en la rendición de sus cuentas á las reglas de justificación establecidas por los reglamentos ó instrucciones para cada caso.

2.º Los procedimientos, así para la collectione de contribuciones como para la de las deudas públicas y créditos definitivamente reconocidos á favor de la Hacienda, serán meramente administrativos y se ejecutarán por los reglamentos de la Administración en la forma que las leyes fiscales determinen. Las certificaciones de los débitos de aquella procedencia tendrán los interventores y jefes de los ramos de los ramos, tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial. No podrán haber otros asuntos contenciosos mientras no se haya el pago ó la consignación de lo liquidado á las cajas del Tesoro público.

10. Los procedimientos para el reintegro de la hacienda pública en los casos de alcance ó aplicación de fondos ó desfalcos, cualquiera sea su naturaleza, serán administrativos, y se seguirán por la vía de apremio mientras sólo

dirijan contra los empleados alcanzados ó sus bienes, y contra los fiadores ó personas responsables, ya por razón de obligaciones contraídas en las fianzas, ya por su intervención oficial en las diligencias y aprobación de estas, ó ya por razón de actos administrativos que hubieran ejercido como funcionarios públicos, sin que obste, para la continuación de los indicados procedimientos en dicha vía, la jurisdicción de los tribunales competentes para conocer y fallar sobre las causas criminales que por aquellos delitos se formaren, de cuya decisión deberá darse conocimiento á los jefes de los alcanzados ó malversadores.

Art. 11. Cuando contra los procedimientos administrativos á que se refiere el artículo anterior se opusieren demandas por terceras personas que ninguna responsabilidad tengan para con la Hacienda pública por obligación ó gestión propia ó tramitada, el incidente se ventilará por trámites de justicia ante los tribunales competentes.

Art. 12. En el procedimiento por apremio, de que habla el art. 9.º, se aplicará ante todas cosas al reintegro de la Hacienda pública la fianza que tuviera prestada el empleado responsable.

Si esta fianza fuere insuficiente, se perseguirán en seguida los bienes muebles ó inmuebles de la pertenencia del mismo.

Si estos no alcanzaren á cubrir el desfaldo, y el valor efectivo de las fincas hipotecadas no hubiere llegado al que se les atribuyó en la fianza, se dirigirá el apremio solo por la diferencia que resulte entre ambos valores contra los testigos de abono y los funcionarios aprobantes de la fianza, no persiguiéndose á estos hasta después que se hayan agotado los medios del reintegro contra aquéllos.

Cuando todavía quedare por cubrir el alcan-

ce en todo ó en parte después de las gestiones precedentes, se dirigirá el apremio contra los jefes ó empleados á quienes con arreglo á las instrucciones de cada ramo deba exigirse la responsabilidad subsidiaria.

Art. 13. La Hacienda pública, por sus créditos liquidados, tiene derecho de prelación en concurrencia con otros acreedores, sin otras excepciones que las siguientes:

Primera. Los acreedores que lo sean por título de dominio ó de hipoteca especial con relación á las fincas comprendidas en la fianza que prestó el deudor á favor de la Hacienda, siempre que aquel título no haya caducado legítimamente y sea de fecha anterior á la del otorgamiento de dicha fianza.

Segunda. Los que tengan la misma acción de dominio ó de hipoteca especial sobre los bienes del deudor no comprendidos en la fianza, siempre que el título de aquella acción esté vigente; pero quedando á salvo el derecho de la Hacienda contra toda enajenación ó hipoteca de los bienes del deudor si resultare ó pudiere probarse haber sido simuladas ó haberse hecho en fraude de los bienes del fisco.

Tercera. Las mujeres por su dote entregada y recibida de todas las solemnidades prescritas por el derecho común; excluyéndose la dote simplemente confesada, cualquiera que sea la fecha del otorgamiento.

Art. 14. Los procedimientos para la cobranza de créditos por alcances, cuando éstos hayan sido autorizados por los jefes de los empleados, serán dirigidos por los mismos jefes, con aprobación de la

Autoridad superior económica de la provincia.
Los empleados, sin embargo, verificado q

sea el pago ó la consignación de la cantidad demandada, podrán reclamar contra la providencia de los jefes ante el Tribunal de Cuentas.

Art. 15. También corresponderán al orden administrativo la venta y administración de bienes desamortizados y propiedades del Estado (1). Las contiendas que sobre incidencias de subastas ó de arrendamientos de los mismos bienes ocurran entre el Estado y los particulares que con él contrataren, se ventilarán ante las corporaciones y con sujeción á los trámites que dispongan las leyes é instrucciones que regulan estos servicios.

Las cuestiones sobre dominio ó propiedad cuando lleguen al estado de contenciosas pasarán á los Tribunales de justicia á quienes corresponda.

Art. 16. Ningún Tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución ni dictar providencias de embargo contra las rentas ó caudales del Estado.

Los que fueren competentes para conocer sobre reclamación de créditos á cargo de la Hacienda pública y en favor de particulares, dictarán sus fallos declaratorios del derecho de las partes, y podrán mandar que se cumplan cuando hubieren causado ejecutoria; pero este cumplimiento tocará exclusivamente á los agentes de la Administración, quienes con autorización del Gobierno acordarán y verificarán el pago en la forma y dentro de los límites que señalen las leyes de presupuestos y las reglas establecidas para el de las obligaciones del Estado.

Art. 17. La Hacienda pública tiene derecho al

(1) Con arreglo á lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución en necesario que el Gobierno esté autorizado por una ley especial para disponer de las propiedades del Estado.

de un 6 por 100 sobre el importe alcances, malversación y desfalcos á contar desde el día en que se le juicio hasta el en que se verifique. Pero cuando, por la insolvencia del o, se exija el pago á los responsables solamente se les cargarán dichos intereses el día en que, declarada su responsabilidad requiera al pago, hasta el en que integro (1). La obligación al pago de no eximirá á los responsables de las hayan incurrido.

Ninguna reclamación contra el Estado de daños y perjuicios ó á título de admitida gubernativamente pasado el hecho en que se funde el reclamo á éste únicamente el recurso de amparo ante los Tribunales competentes, lugar como si la reclamación hubiese sido admitida por el Gobierno. Este recurso prescribe por el transcurso de dos años, á contar desde la fecha.

Todo crédito cuyo reconocimiento y pago se haya solicitado con la presentación de documentos justificativos de los mismos, dentro de los tres meses siguientes á la cor-

de presupuestos de 26 de
se dispuso para los deudores
mente;
adadores y los arrendatarios
gan los plazos á sus vencimientos
le interés por demora.
is será satisfecho por los
ca y de intervención, cuando
ustifiquen no haber sido
n las instrucciones, y por el
tal.»

vicio de que proceda, quedará prescrito (1). No será aplicable esta disposición á los créditos cuyo reconocimiento y liquidación haya dejado de verificarse por causas independientes de los interesados, siempre que éstos justifiquen haber presentado en tiempo oportuno sus reclamaciones y los documentos en que las hayan fundado.

Con este fin, todo acreedor podrá exigir de la oficina á que corresponda un recibo expresivo de la reclamación y documentos presentados, y de la fecha y número de su inscripción en el registro de la misma oficina.

No se entiende abierto ni rehabilitado por este artículo ningún plazo que estuviere cerrado ó fenecido á virtud de disposiciones anteriores.

Art. 20. Las operaciones de la Dirección de la deuda pública estarán bajo la inspección de una Comisión permanente, compuesta de tres individuos de cada uno de los Cuerpos Colegisladores, quiénes haciendo el reconocimiento y examen de los libros y cajas de aquella dependencia, siempre que lo estimen conveniente, presentarán á las Cortes anualmente su informe, proponiendo las mejoras de que sea susceptible su organización.

Esta Comisión se nombrará en cada legislatura luego que ésta se haya constituido, y continuará en el ejercicio de su cargo hasta que sea relevada por la del año siguiente, aun cuando estén suspensas las Cortes ó se haya disuelto el Congreso de los Diputados.

Art. 21. El Ministro que acuerde resolución contraria á cualquiera de las prohibiciones de este capítulo, ó á las reglas en él dispuestas para que no se menoscaben los intereses públicos, quedará

(1) Sobre prescripción de créditos, véase el art. 7.º de la nota puesta al 62 de esta ley.

objeto á la responsabilidad penal á los defraudadores.

Art. 22. Los Jefes administrando las propiedades y derechos de la Hacienda ó del Tesoro, instrucciones, respectivo ramo, ó causando comisión ú omisión de importe, y quedar sujetos á las penas que hubiere mediado deli-

CAP

de las obligaciones del

Art. 23. Son únicas del Estado las que se realicen por el presupuesto anual de presupuestos por leyes especiales (1).

Art. 24. Cada Ministerio anual de todos los gastos pasará al de Hacienda y se presentará á las Cortes para su deliberación el día 1.º de mayo de cada año. Esta propuesta a-

1) El párrafo 2.º del art. 3.º de la Constitución, dispone lo siguiente:

«Nadie está obligado á pagar contribución que no esté establecida por las Cortes ó por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.»

proyecto de ley que lleve consigo autorización de gastos.

Los presupuestos generales de ingresos y gastos se presentarán á las Cortes antes del día 11 del mes de Febrero, ó sea cuatro meses y diez y ocho días antes de aquel en que haya de empezar su ejercicio (1).

Art. 25. El presupuesto de cada Ministerio sólo comprenderá los gastos de su servicio, clasificados por capítulos, cada uno de los cuales contendrá las atenciones de una misma especie, subdivididas en el número de artículos necesarios para la determinación de los pormenores.

Art. 26. En el presupuesto de ingresos se expresará el importe calculado de cada uno de los recursos de la Hacienda: el de gastos comprenderá todas las obligaciones cuyo cumplimiento exija el empleo de alguna cantidad.

Art. 27. Los presupuestos se dividirán en ordinarios y extraordinarios: en los ordinarios se incluirán los recursos y los gastos que tengan carácter permanente, aunque su cuantía sea variable; en los extraordinarios se detallarán los recursos y obligaciones de carácter transitorio.

Art. 28. En los presupuestos de ingresos figurará en partida separada cada contribución, impuesto ó renta, y también el producto de las fincas, valores y derechos pertenecientes al Estado.

Art. 29. El presupuesto ordinario de gastos tendrá dos partes: se comprenderán en la primera las obligaciones generales del Estado, y en la

(1) Este párrafo se halla en analogía con el 43 de la Constitución de 1869, que fijaba el 1.º de Febrero como plazo máximo dentro de cada año para la reunión de las Cortes; pero como la Constitución vigente no dice más sino que se han de reunir todos los años, de aquí que no siempre pueda tener debido cumplimiento lo dispuesto en este artículo.

gunda las propias de los diferentes Ministerios.

Una y otra se dividirán en secciones, y éstas en capítulos y artículos.

Art. 30. No podrán incluirse en una sección ligaciones correspondientes á distintos Ministerios, ni en un capítulo diversos servicios, ni tampoco los gastos del personal y material del mismo servicio.

Art. 31. Las Cortes discutirán y votarán, por preceptos en los ingresos, y por capítulos en los gastos, todas las alteraciones que el Gobierno proponga con relación á los presupuestos del anterior; las demás partidas se entenderán aprobadas (1).

Art. 32. Si reunidas las Cortes en el tiempo señalado por la Constitución dejasen de votar y autorizar algún año la ley de presupuestos para siguiente, se considerará vigente la inmediata anterior. Se exceptúa el caso en que se determine otra cosa por una ley especial (2).

Art. 33. El Gobierno no puede suprimir ni modificar los recursos votados por el Parlamento.

1) En el art. 12 de la ley de presupuestos de 7 de Julio de 1888, se dispuso que en lo sucesivo se presentasen aquéllos de una forma que facilitase el cumplimiento del artículo que anotamos, á cuyo fin se daban reglas para la formación de los mismos; pero, sin embargo, no se ha cumplido este precepto legal.

2) Está en analogía con el art. 85 de la Constitución, que dice así:

«Todos los años presentará el Gobierno á las Cortes el presupuesto general de gastos del Estado para el año siguiente, y el de contribuciones y medios para llenarlos, como asimismo las cuentas de la recaudación é inversión de los caudales públicos, para su examen y aprobación.

«Si no pudieran ser votados antes del primer día del mes económico siguiente, regirán los del anterior, siempre que éstos hayan sido discutidos y votados por las Cortes y aprobados por el Rey.»

ni crear otros nuevos á no estar autorizados por la ley de presupuestos ú otra especial.

Tampoco podrá dar otro empleo á los fondos públicos que el prescrito en la ley de presupuestos ú otra que lo determine.

Art. 34. Los Ministros que ordenen exacciones no autorizadas por la ley, incurrirán en las penas señaladas en el Código penal á los que cometen defraudación atribuyéndose poder y facultades que no tienen.

Los que faltaren á la ley en la aplicación y distribución de los fondos públicos quedarán sujetos á las penas prescritas por el mismo Código para los que distraen de su objeto dinero, efectos ó cualquiera otra cosa recibida en depósito ó administración.

Art. 35. Los presupuestos regirán durante un año; pero quedarán abiertos en los seis meses siguientes para la liquidación y ejecución de los cobros y pagos pendientes al finalizar dicho año.

Art. 36. Para cada mes se aprobará en Consejo de Ministros una distribución de fondos por capítulos de los presupuestos de todos los Ministerios, con sujeción á la cual la Ordenación de pagos dispondrá el abono de las obligaciones del Estado.

Art. 37. Las distribuciones mensuales de fondos se redactarán en el Ministerio de Hacienda por los pedidos que le harán los demás Ministerios, atendiendo á la importancia de las obligaciones propias de cada capítulo del presupuesto que hayan de satisfacerse en los meses respectivos.

Art. 38. En la ley de cada presupuesto se fijará el importe ó la cantidad á que podrá ascender durante el año á que corresponda el mismo la deuda flotante del Tesoro. Dentro del límite determinado para esta clase de deuda, podrá el Mi-

nistro de Hacienda adquirir sumas á préstamo, y verificar cualquiera operación de crédito sin necesidad de otra autorización.

En los demás casos será indispensable se autorice por una ley.

Art. 39. El Gobierno pasará al Tribunal de Cuentas del Reino para su examen y toma de razón todos los contratos que celebre con el fin de adquirir fondos, bien sea en concepto de préstamo ó anticipo, bien negociando valores ó efectos públicos. A los contratos originales se acompañarán los expedientes que los hayan producido, debiendo entregarse en el Tribunal dentro de los treinta días siguientes al de la celebración del contrato. Se dará también cuenta al Tribunal, de los órdenes que aprueben ó autoricen operaciones del Tesoro para entretenimiento ó renovación de deuda flotante.

Si en alguno de los referidos contratos ó operaciones se hubiesen cometido ilegalidades ó cualquiera clase de abusos ó faltas, á juicio del Tribunal, éste dará inmediatamente cuenta á las Cortes por medio de una Memoria extraordinaria.

Art. 40. Cuando ocurra la necesidad de hacer un gasto para el cual no haya crédito legislativo, ó sea insuficiente la suma señalada en el presupuesto para atender á un servicio, el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley pidiendo en el primer caso un crédito extraordinario, y en el segundo un suplemento de crédito, y proponiendo en ambos los medios de obtener los fondos necesarios para cubrir las obligaciones que aquellos créditos representan (1).

(1) Por orden de 14 de Enero de 1874, se declaró en vigor el presente Real decreto de 22 de Octubre de 1858.

Art. 41. Si las Cortes no estuvieran reunidas y el gasto para el cual falte crédito fuera urgente, el Gobierno podrá, bajo su responsabilidad, acordarlo, observando estas formalidades:

Cuando resulten sobrantes de crédito en otros capítulos de la sección á que corresponda el gasto, podrá hacerse transferencia de crédito del capítulo ó capítulos que ofrezcan remanente al capítulo ó á los capítulos en que exista el déficit. Estas transferencias se acordarán por el Consejo de Minis-

«Artículo 1.º Toda concesión de suplementos de crédito y créditos extraordinarios que en los casos expresados en el artículo 27 de la ley de 20 de Febrero de 1850 hubiere de hacerse para atender á obligaciones del Estado, comprenderá los medios con que haya de cubrirse su importe.

»Art. 2.º Para la concesión de créditos supletorios y extraordinarios en el caso de que las Cortes no se hallaren reunidas, mi Gobierno oirá previamente al Consejo de Estado, quien informará sobre la urgencia y la imprescindible necesidad de su concesión. Cuando las Cortes estuvieren reunidas, mi Gobierno reclamará de las mismas, sin necesidad de informe del Consejo de Estado, los suplementos de crédito y créditos extraordinarios que fueren necesarios, por medio de los oportunos proyectos de ley.

»Art. 3.º Siempre que se juzgue necesaria la concesión de un suplemento de crédito ó de un crédito extraordinario, se instruirá por el Ministerio en cuyo favor hubiera de otorgarse, el expediente en que se demuestre con datos correspondientes la urgencia é imprescindible necesidad de acordar la expresada medida.

»Art. 4.º Terminada que sea la instrucción de los referidos expedientes, se pasaran al Ministerio de Hacienda, y examinados por éste y con su propuesta de medios para cubrir los créditos, los someterá á resolución del Consejo de Ministros, previo informe del de Estado.

»Art. 5.º Los decretos que tengan á bien rubricar autorizando suplementos de crédito ó créditos extraordinarios, serán extendidos por el Ministerio de Hacienda y refrendados por el Presidente de mi Consejo de Ministros, quedando los expedientes en aquel Ministerio para que en su día los someta á la aprobación de las Cortes.»

yendo previa

Consejo de

ando no hul

el presupuesto, el Consejo de Ministros acerca la concesión de suplemento de crédito ó crédito extraordinario (2) oyendo previamente al Consejo de Estado en pleno sobre la necesidad y urgencia del gasto, cuyo importe se cubrirá proviniendo con la deuda flotante del Tesoro y rentas ó recursos eventuales del Estado no sean proporcionado valores superiores á los puestos en cantidad equivalente ó superior que representen los nuevos créditos (3).

. 42. Los decretos de concesión de créditos extraordinarios ó de suplementos de crédito se redactarán, con los expedientes que los hayan producido, el Tribunal de Cuentas para su registro, y éstos se publicarán en la *Gaceta de Madrid*. El Ministro no incurrirá en responsabilidad, conforme al art. 34, si los ejecuta sin cumplir estos requi-

. 43. El Gobierno presentará al Congreso de Diputados, dentro precisamente del primer día de cada reunión de Cortes, un proyecto de ley de aprobación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito acordados durante la suspensión de sesiones, y de los medios necesarios para obtener los recursos equivalentes.

—
base lo que acerca del particular dice la ley de 25 de Junio de 1880, cuya parte dispositiva transcribimos íntegra en el art. 43.

—
ingase presente lo dispuesto en el art. 4.º de la ley de 25 de Junio de 1880, cuya parte dispositiva se halla íntegra en el art. 43.

—
modificó por el art. 14 de la ley de 23 de Febrero de 1881 el 4.º de los adicionales de la ley de 21 de Julio de 1880, en esta forma restablecido: «4.º Se restablece el art. 4.º de la ley de contabilidad de 25 de Junio de 1879.»

Art. 44. En el mismo plazo de un mes el Tribunal de Cuentas presentará al Congreso una Memoria dando razón de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que haya registrado, y emitiendo su juicio sobre la legalidad de cada uno de ellos.

Art. 45. Serán responsables al reintegro de todo exceso de pago que hubiere hecho el Tesoro público los jefes administrativos y funcionarios de cualquiera clase que lo hubieren ocasionado al liquidar créditos ó haberes, ó al expedir documentos en virtud de las funciones que les estén encomendadas, sin perjuicio de las penas á que haya lugar si resultase culpabilidad.

CAPITULO III

De los balances que deben acompañar al proyecto de ley de presupuestos.

Art. 46. Con el proyecto de ley de presupuestos presentará el Gobierno un balance que ponga de manifiesto la situación del anterior al terminar el año de su período natural, y la del Tesoro público en la misma fecha.

Art. 47. El balance á que se refiere el artículo anterior, comprenderá:

1.º El importe calculado en la ley de presupuesto por cada uno de los conceptos generales de ingreso; lo que por cuenta de los mismos se haya recaudado; las sumas pendientes de cobro; el total de los valores probables del presupuesto, y las diferencias que produzca la comparación de éstos con los créditos legislativos.

2.º La cantidad consignada en cada sección del presupuesto de gastos para atender á los servicios públicos; lo satisfecho por cuenta de estos créditos durante el año; las sumas pendientes de

tes al Departamento de su respectivo cargo con arreglo á las disposiciones de la presente ley. Esta facultad podrá delegarse por los Ministros en los Directores y demás agentes de la Administración pública en los términos que establezcan los reglamentos (1).

(1) Por referirse á éste y otros artículos de la presente ley, ponemos á continuación toda la parte dispositiva de la de 25 de Junio de 1880, que dice así:

«Artículo 1.º Los Departamentos ministeriales no podrán crear nuevos servicios, modificar los existentes, ni disponer sus gastos respectivos sino dentro del importe de los créditos autorizados, sin que en caso alguno preceda al otorgamiento del crédito la ordenación del gasto, bajo la responsabilidad personal del Ministro que la disponga.

Art. 2.º Los Ordenadores y los Interventores de pagos serán personalmente responsables de toda obligación que reconozcan y liquiden sin crédito previo suficiente, á no ser que habiendo expuesto por escrito su improcedencia, y las razones en que la funden, al Ministro del ramo á que la obligación pertenezca y al de Hacienda, les ordenen ambos la liquidación ó el abono, que se realizará entonces bajo la responsabilidad ministerial con arreglo á lo dispuesto en la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda y en el art. 1.º de la presente.

Art. 3.º En la misma responsabilidad incurrirán los Jefes de los Departamentos ministeriales que den ó conserven á los servicios públicos mayor extensión de la que permitan los créditos legislativos, y los Ordenadores é Interventores que no expongan en tiempo oportuno las observaciones escritas á que se refiere el artículo anterior.

Art. 4.º El Gobierno presentará anualmente á las Cortes, con el proyecto de ley de presupuestos, una relación de los servicios que puedan por su naturaleza exigir ampliaciones de crédito. La facultad que el art. 41 de la ley de 25 de Junio de 1870 concede al Gobierno para acordar con las formalidades en él establecidas créditos supletorios cuando no estuvieren reunidas las Cortes, se entenderá limitada á los servicios que comprenda la expresada relación, que se publicará con los presupuestos generales del Estado.

Art. 5.º Las transferencias de crédito entre artículos de un mismo capítulo no se dispondrán en adelante sino por Real decreto acordado en Consejo de Ministros.

Art. 6.º Para elevar el sueldo ó la categoría de cualquier cargo público, será también requisito indispensable que la alte-

Art. 49. El
 todos los pagos
 jas públicas. A
 neral del Tesor
 de pagos del Es
 delegación del
 Con el obje
 habrá los Orde
 deren necesari

Todos los Ordenadores secundarios de pagos serán subalternos del general del Estado. Su nombramiento y renovación corresponde al Ministro de Hacienda.

ración de la planta correspondiente se acuerde en Consejo de Ministros y se autorice por Real decreto.

Art. 7.º No se reconocerán ni abonarán á título de gratificación o sobresueldo aumentos de haber á los funcionarios públicos civiles ó militares, con aplicación á los créditos del material de los servicios, ni á otros distintos de los expresamente destinados á aquel fin en los presupuestos del Estado.

Art. 8.º Los Ordenadores y los Interventores de pagos incurrirán en responsabilidad personal si ordenasen pagos ó liquidaran obligaciones en contravención á lo dispuesto por los artículos precedentes.»

Posteriormente, por Real decreto de 1.º de Mayo de 1883, se mandó lo siguiente:

«Artículo 1.º La facultad de disponer los gastos propios de cada Ministerio que el art. 48 de la ley de 25 de Junio de 1877 concede á los respectivos Ministros, se entenderá limitada al importe de los créditos que para los servicios correspondientes autorice el presupuesto del año corriente ó se concedan en la forma y por los trámites que la referida ley de 25 de Junio de 1877 determina, sin que en caso alguno pueda preceder la ordenación del gasto al otorgamiento del crédito necesario.

Art. 2.º Cuando la índole de los servicios exija que su ejecución dure más tiempo del que comprende el período natural del presupuesto corriente, el gasto se autorizará por Real decreto acordado en Consejo de Ministros.

Art. 3.º El Ministro que proponga los gastos de que trata el artículo anterior, comunicará su proposición al Ministro de Hacienda con anterioridad á la celebración del Consejo e hayan de acordarse aquéllas. El Consejo de Ministros, en

Se exceptúan los Ordenadores de los ramos de Guerra y Marina, los cuales serán nombrados por estos Ministerios. Dependerán, sin embargo, directamente del Ministro de Hacienda, y por consiguiente del Ordenador general de pagos del Estado.

Art. 50. El personal de las Ordenaciones de pagos de los Ministerios se nombrará por el Ministro de Hacienda á propuesta fundada del Ordenador general de pagos del Estado.

de los datos que uno y otro Ministro le faciliten, resolverá sobre la autorización que se le pida. Si el acuerdo del Consejo fuere favorable, el Ministro proponente le trasladará al de Hacienda, para que lo tenga en cuenta al formar los futuros presupuestos.

Art. 4.º Quedan derogadas las disposiciones anteriores que se opongan á lo mandado en el presente decreto.»

La Real orden de 24 de Setiembre de 1883, aclaratoria del anterior Real decreto, dice así en su parte resolutive:

«S. M., conformándose con lo propuesto por la Intervención general de la Administración del Estado, y con lo informado por la Dirección general de lo Contencioso, se ha servido disponer se manifieste al Ministerio del digno cargo de V. E., como de su Real orden lo ejecuto, que el Real decreto de 1.º de Mayo de este año no es aplicable á los gastos que haya de reconocer por los contratos de arrendamiento, cuando dichos gastos constituyan una obligación ordinaria cuyo importe, respecto á los años que los contratos alcancen, pueda satisfacerse dentro de los límites de los créditos concedidos para esta clase de atenciones en los presupuestos que rijan al celebrarse aquéllos, y no constituyan aumento de dichos créditos, y que basta para legalizar los pagos que se aprueben de Real orden estos contratos.»

— Sobre anticipaciones, la ley de 28 de Febrero de 1873 en su art. 8.º dispuso lo siguiente:

«Art. 8.º Quedan prohibidos los pagos en suspenso de los diferentes Ministerios. Las cantidades que deban satisfacerse para la ejecución de servicios cuyos justificantes no puedan obtenerse al tiempo de hacer los pagos, se aplicarán desde luego á los capítulos correspondientes, quedando los jefes encargados de los mismos servicios responsables de la justificación que habrán de entregar á las Intervenciones de las Ordenaciones respectivas en el improrrogable plazo de tres meses.»

e exceptúan las Ordenaciones de Guerra y Marina, cuyo personal se nombrará por aquellos Ministerios con sujeción á los escalafones y reglamentos de los Cuerpos administrativos del ejército y la armada.

t. 51. Los Ordenadores de pagos serán responsables de todos los indebidamente dispuestos, por lo que el Ministro de Hacienda los ordenará á exponerle aquéllos por escrito su incidencia y las razones en que ésta pueda fundarse.

CAPITULO V

De la Intervención.

t. 52. Se confiere al Director general de Contabilidad el carácter de Interventor general de la administración del Estado. La Dirección de Contabilidad fiscalizará todos los actos de la administración pública que produzcan ingresos ó gastos; intervendrá la ordenación y ejecución de ingresos y pagos, y llevará toda la contabilidad del Estado.

t. 53. La Intervención general ejercerá sus funciones por medio de agentes directos ó delegados establecidos cerca de todas las dependencias encargadas de los diferentes ramos de la administración pública, y de la ordenación general y liquidación de los pagos.

t. 54. Todos los agentes interventores directos serán nombrados por el Ministerio de Hacienda, á propuesta de la Intervención general. En los mismos términos se hará el nombramiento y cese de todo el personal de las Intervenciones provinciales en cuanto á las de las Ordenaciones, dependencias y establecimientos de Guerra y Marina. Observarán las reglas establecidas en los a-

títulos 49 y 50 respecto á las Ordenaciones secundarias de pagos de los mismos Ministerios.

Art. 55. La Intervención general del Estado queda facultada para inspeccionar por sí ó por medio de Delegados todas las dependencias y establecimientos de Guerra y Marina en cuanto se refiera á los servicios que produzcan liquidación y pagos de obligaciones.

Art. 56. Los Interventores serán responsables mancomunadamente con los Administradores, Ordenadores de pagos y Jefes de establecimientos, de todos los actos ilegales de éstos, referentes á la liquidación de derechos y obligaciones de la Hacienda y del Tesoro, y á los pagos que realicen las Cajas, siempre que los consientan sin hacer observación escrita acerca de su improcedencia ó ilegalidad.

CAPÍTULO VI

De las cuentas del Estado.

Art. 57. De todas las contribuciones, rentas, fincas, valores y derechos cuyos rendimientos constituyen el haber de la Hacienda; la distribución é inversión que de éste se haga y de las operaciones que realice el Tesoro, se rendirán cuentas al Tribunal de las del Reino por conducto de la Intervención general del Estado, en los plazos, en la forma y por los períodos que determinan las instrucciones ó reglamentos.

Art. 58. Las cuentas á que se refiere el artículo anterior se darán por los empleados que tengan á su cargo la administración ó manejo de las contribuciones, rentas, propiedades, valores y efectos, y serán intervenidas por agentes directos de la Intervención general del Estado. Estas cuen-

tas parciales se di
resultados puedan
de presentar el Go

Art. 59. El pi
cuentas parciales,
tervención genera
las pasará al Tri
después de hecha
plazos que los reg

Art. 60. Corre
ción general pers
cuentre en el exa
también los alcan
revisarlas y falla
descubran fuera d
no se darán por t
al efecto se sigan
mo Tribunal.

Art. 61. En el
contados desde el
puesto, el Gobierno
Diputados la cuen
mismo, con un pr
ción (1).

(1) Por la ley de 27 d
ministro para modificar
Hacienda pública, y á
tiva de dicha ley:

«Artículo 1.º Se aut
oyendo al Tribunal de
do, modifique la legis
Hacienda pública con s

1.º A partir de 1.º de
tabilidad del Estado re
los ejercicios cerrados
que ofrezcan las cuen
doras, cerradas en 30 d
ciones que esos saldos

Art. 62. La cuenta definitiva correspondiente á cada presupuesto constará de dos partes.

La primera se referirá á los ingresos, y expresará, con la misma clasificación de conceptos de la ley del presupuesto respectivo, los ingresos calculados en ella; los que se hayan recaudado

duzca en su día el examen y comprobación de las referidas cuentas atrasadas.

2.º Sin perjuicio de que los Jefes de las oficinas centrales y provinciales den el mayor impulso á la rendición de cuentas anteriores de que se hallen en descubierto, cuidarán bajo su responsabilidad, y con sujeción á los medios coercitivos que en uso de esta autorización se establezcan, de que la contabilidad correspondiente al nuevo periodo de 1.º de Julio de 1879 en adelante se lleve al corriente en todos los ramos de su respectivo cargo.

3.º Desde la fecha citada la contabilidad de las Administraciones económicas se entenderá dividida, con arreglo á lo que se disponga, en contabilidad general y contabilidad auxiliar, corriendo la primera á cargo de las Intervenciones, y la segunda al de los Negociados correspondientes de las Secciones administrativas.

4.º La Intervención general y las Ordenaciones de los Ministerios y ramos centralizados simultánearán también con el desempeño de la contabilidad corriente del nuevo periodo la liquidación y ajuste de las cuentas atrasadas de los ejercicios anteriores.

5.º En todas las dependencias del Estado encargadas del servicio de cuenta y razón en que sea necesario, se establecerán Secciones temporales que atiendan á la formación, examen y comprobación de las cuentas atrasadas, sin entorpecer el curso ordenado y puntual de la contabilidad corriente.

6.º La Intervención general de la Administración del Estado queda autorizada para formar y rendir las cuentas generales correspondientes al ejercicio de 1879 á 1880 y sucesivos, sin esperar á la liquidación de las de época anterior, que continuará al propio tiempo, conforme se determina en la base 4.º

7.º Si al terminarse la liquidación de las cuentas atrasadas, los saldos respectivos no guardasen la debida conformidad con los que hubieran servido de base á la contabilidad que se establezca en 1.º de Julio de 1879, se acordarán ó propondrán por la Intervención general las disposiciones procedentes para que no se interrumpa la continuación de la contabilidad, ni se

durante el período natural y ejercicio del presupuesto; lo dado sin cobrar por cuenta de los á favor de la Hacienda por concepto de *resultas* á la cuenta por último, la comparación en supuestos y los realizados (1)

irroguen perjuicios al Estado ni á errores ó defectos en que hubieren los créditos ó débitos de la Hacienda se exija la responsabilidad á que ha Tribunal de Cuentas cuando lo reclama resoluciones que se propongan.

8.º Tanto en la redacción de las cuentas, como en las del que parta de la intervención general de la Administración responderá establecer las reglas á todas las contabilidades auxiliares y de ellas, en cuanto sea posible, un modelo, libros y cuentas, establecerá la regla sin apartarse de la nomenclatura de la ley, simplifique la liquidación y ajustes ó servicios que sea conveniente de

9.º Se constituirá un Cuerpo de los cargos de Jefes de intervención y Administraciones económicas y demás, exigiéndose las circunstancias de esta autorización determine el Gobierno referidos destinos.

Art. 2.º El Ministro de Hacienda dará uso que haga de la autorización que es

(1) Por ley de 31 de Diciembre de 1877 de *resultas* de ejercicios cerrados,

LEY

«Artículo 1.º A contar desde el año de 1878 se formará parte del presupuesto corriente los ejercicios cerrados por ingresos y gastos

Art. 2.º De las expresadas *resultas* general anual con independencia de corriente y las especiales de Rentas públicas con la misma clasificación de Dirección

La segunda parte se contraerá á los gastos, y detallará, por el mismo orden y clasificación de capítulos que el presupuesto, los créditos concedidos para cada servicio, tanto por la ley, cuanto por otras disposiciones, en concepto de supletorios ó extraordinarios; los pagos hechos á cuenta de los mismos créditos; las obligaciones reconocidas y que por no haberse satisfecho deban pasar como *resultas* á la cuenta del presupuesto siguiente, y por último, la comparación de los gastos presupuestos con los pagos realizados.

Después se resumirán por secciones, así en ingresos como en gastos, los resultados generales

Secciones en las segundas, que comprendan los presupuestos generales del respectivo año económico.

Dentro de cada Dirección ó Sección se dividirán las cuentas en seis grupos, de los cuales, del 2.º al 6.º comprenderán las *resultas* de los cinco últimos ejercicios, y el 1.º las que sean exigibles de los anteriores.

Cada uno de los grupos se subdividirá, á la vez, en tantos conceptos generales de ingresos, ó tantos capítulos de gastos como contuviere el presupuesto de que procedan las *resultas*; omitiéndose los detalles de subconceptos ó artículos, á fin de no complicar la contabilidad de estas incidencias.

Art. 3.º La Intervención general, ó el Tribunal de Cuentas si así se dispone, formará y acompañará á las cuentas generales del Estado de cada ejercicio las de *resultas* de ejercicios cerrados, reasumidas en una general que demuestre la situación que ofrezcan las *resultas* de los presupuestos liquidados, las alteraciones ó modificaciones que produzcan los ingresos y pagos procedentes de los mismos, que se hayan verificado en el año económico á que la cuenta general de *resultas* corresponda, y el remanente ó nuevo déficit que produzcan las expresadas operaciones.

Art. 4.º Los débitos ó créditos que resulten pendientes del ajuste de las cuentas de Rentas públicas y Gastos públicos á la terminación de los respectivos ejercicios, se trasladarán á las especiales de *resultas* de ejercicios liquidados, aplicándose á estas últimas todos los ingresos y pagos que deban imputarse á los derechos y obligaciones reconocidos de dicha procedencia.

de la recaudación y distribución de los fondos públicos, y se presentará como última consecuencia el déficit ó el sobrante que resulte.

Art. 63. Acompañará á la cuenta general el estado demostrativo de las alteraciones que en la ejecución de la ley del presupuesto hubiesen sufrido los créditos consignados en ella por efecto de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito acordados con arreglo á lo prescrito en el capítulo 2.º de esta ley. A este estado se unirá copia de las leyes y documentos que hayan modificado los créditos supletorios.

Art. 5.º Las obligaciones por resultas de ejercicios cerrados se cubrirán con los recursos que se obtengan de igual procedencia, con los extraordinarios que determinen las leyes con el mismo destino, con los sobrantes del presupuesto ordinario, y, en su defecto, con la parte de la deuda flotante del Tesoro que autoricen las leyes respectivas del presupuesto de cada año económico.

Art. 6.º A partir de la cuenta general del Estado, correspondiente al presente año económico, formará parte integrante de la misma una nueva cuenta parcial denominada «Cuenta de la Hacienda con el Tesoro público por los resultados de presupuestos liquidados.» A esta cuenta se cargarán:

1.º Los déficits que ofrezca la liquidación de los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios ó especiales.

2.º Los déficits que igualmente produzcan en cada año los resultados de presupuestos cerrados.

Serán de abono en la misma cuenta:

Primero. Los remanentes que presente la liquidación de los presupuestos ordinario y extraordinario.

Segundo. Los remanentes que asimismo se obtengan en cada año por resultas de presupuestos cerrados.

Tercero. Los recursos extraordinarios que se autoricen para cubrir déficits de presupuestos anteriores.

Como saldo presentará esta cuenta general la suma suplida por el Tesoro á los presupuestos generales del Estado.

Art. 7.º La prescripción que el art. 19 de la ley de administración y contabilidad de 25 de Junio de 1870 establece para los créditos cuya liquidación y reconocimiento no se hubiera reclamado en los cinco años siguientes á la terminación del ejercicio de que procedan, se entenderá aplicable á los créditos

Art. 64. Serán parte integrante de la cuenta de cada presupuesto otras dos generales de Rentas públicas y de Gastos públicos, que el Gobierno debe formar y remitir al mismo tiempo que aquéllas al Tribunal, y como comprobantes de la primera, las de fabricación y administración del sello del

que, liquidados y reconocidos en las cuentas respectivas de gastos públicos no sean reclamados por los acreedores legítimos ó sus derecho-habientes, dentro de los cinco años siguientes á la terminación del ejercicio de que procedan. Para los efectos de esta disposición, se entenderá abierto desde la publicación de la presente ley el plazo hábil para reclamar los derechos liquidados y reconocidos en las cuentas de los ejercicios cuyo período se halle definitivamente cerrado á la fecha de la misma.

Los créditos á favor del Estado no reclamados en quince años quedarán prescritos.

La prescripción establecida en este artículo, y el plazo habilitado para las reclamaciones á que el mismo hace referencia, no alcanzan á los créditos de la deuda del Estado y del Tesoro, respecto de los cuales seguirán aplicándose las disposiciones contenidas en las leyes especiales referentes á estos servicios. Las reclamaciones del Estado por impuestos, derechos fiscales ó reintegros de cualquier clase, que se dirijan contra el causante del débito dentro de los plazos de esta ley, no se entenderá que alcanzan á los terceros adquirentes de inmuebles y de derechos reales cuando los hayan adquirido ó adquieran con arreglo á las disposiciones de la ley hipotecaria.

Las obligaciones de ejercicios cerrados comprendidas en cuentas de Gastos públicos, que dejen de ser reclamadas, y los derechos de igual procedencia no realizados dentro de los plazos que al efecto se conceden, serán dados de baja al vencimiento respectivo, justificándose con relación detallada de los créditos y de los acreedores ó deudores personales á cuyo nombre hubieren sido reconocidos, y haciéndose constar en la misma, por medio de certificación que se extenderá á su final, en cuanto á las primeras, la circunstancia de no constar en las oficinas haberse entablado reclamación escrita para su pago.

Art. 8.º Quedan en su fuerza y vigor la ley de 25 de Junio de 1870, en cuanto no sea alterada por la presente, y la de 25 de Junio de 1880.

Art. 9.º El Ministro de Hacienda dictará la instrucción y disposiciones convenientes para el cumplimiento de esta ley.

Estado, efectos estancos y minas explotadas por

Art. 65. Las tres cuentas anuales formarán parte de la cuenta general por el año en que haya concluido el ejercicio del presupuesto, y responderán, presentar a las Cortes dentro del plazo

La cuenta anual de los gastos de las oficinas indicadas, las particulares de la Administración pública y de Propiedad

Art. 66. La cuenta general contendrá, con la debida distinción, los gastos que por el presente se hayan liquidado y los ingresos cobrados

La cuenta de los gastos de los derechos de los tribunales del Estado, de los gastos de las autoridades pa-

La cuenta de las operaciones de las Cajas de Pensiones, del Tesoro en pre-

La cuenta de los gastos de la demarcación de los distritos, de las conversiones de los años, y la de los gastos de terminar el m-

La cuenta de los gastos de los manifestos de los gastos del Estado a las adquisiciones de los terrenos de el mismo,

tes al terminar aquel período, haciendo la debida distinción de los bienes que estén en venta y de los que se utilicen para el servicio público. Además determinará esta cuenta el resultado de las ventas realizadas en el año y el movimiento de los valores á cobrar que producen las enajenaciones.

Art. 71. Interin la Caja de Depósitos conserve su actual organización, se formará é imprimirá también con la cuenta anual del Estado la particular de las operaciones del establecimiento.

Art. 72. Cuando por la importancia de un servicio, ó por el tiempo y forma en que haya de cumplirse, la ley que conceda el crédito necesario para realizarlo ordene que se lleve de él cuenta separada, el Gobierno la presentará al Congreso con el correspondiente proyecto de ley en la época prescrita al autorizar el gasto, sin perjuicio de haber figurado las mismas operaciones en las cuentas generales de los períodos en que se hubiesen realizado.

Art. 73. A todo proyecto de ley de aprobación de cuentas acompañará una certificación librada por el Tribunal de Cuentas, en que conste que habiendo sido examinadas y comprobadas con los resultados de las parciales presentadas al mismo Tribunal, y con las leyes y demás disposiciones que hayan autorizado los cobros y los gastos, han resultado conformes, expresando en caso contrario las diferencias observadas.

Art. 74. El Tribunal de Cuentas remitirá directamente al Congreso, dentro del mismo plazo señalado al Gobierno para la presentación de las cuentas generales, una Memoria, en la cual, refiriéndose á lo que resulte de éstas, exprese si se han cometido ó no ilegalidades en la cobranza y aplicación de los fondos del Estado, determinando

en caso afirmativo las que sean, y haciendo la demás observaciones á que dé lugar la cuenta examinada.

Art. 75. Cada trimestre se publicará en la *Gaceta de Madrid* un estado de los créditos abiertos en el anterior por el Tesoro á cada Ministerio por capítulos, y otro estado de la aplicación hecha por cada Ministerio, ó sea de la inversión dada á los fondos, según los mismos capítulos del presupuesto.

Madrid 25 de Junio de 1870.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola.

ÍNDICE

	<u>Páginas.</u>
CAPÍTULO PRIMERO.—De la Hacienda pública.	657
CAPÍTULO II.—De las obligaciones del Estado y de los presupuestos.....	666
CAPÍTULO III.—De los balances que deben acompañar al proyecto de ley de presu- puestos.....	673
CAPÍTULO IV.—De la ordenación de los gastos del Estado y de los pagos que para cubrirlos realice el Tesoro.....	674
CAPÍTULO V.—De la Intervención.....	678
CAPÍTULO VI.—De las cuentas del Estado....	679

•

.

•

LEY DE REUNIONES PÚBLICAS (1)

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El derecho de reunión pacífica, que concede á los españoles el art. 13 de la Constitución, puede ejercitarse por todos sin más condición, cuando la reunión haya de ser pública, que la de dar los que la convoquen conocimiento escrito y firmado del objeto, sitio, día y hora de la reunión, veinticuatro horas antes, al Gobernador civil en las capitales de provincia, y á la Autoridad local en las demás poblaciones.

Art. 2.º Por reunión pública, para los efectos de esta ley, se entiende la que haya de constar de más de 20 personas y haya de celebrarse en edificio donde no tengan su domicilio habitual los que la convoquen.

Art. 3.º Las reuniones públicas, procesiones cívicas, séquitos y cortejos de igual índole, necesitan, para celebrarse en las calles, plazas, paseos ó cualquier otro lugar de tránsito, el permiso previo y por escrito de las Autoridades indicadas en el art. 1.º

(1) Por el art. 28 de la ley constitutiva del ejército, de 29 de Noviembre de 1878, se prohíbe á los militares asistir á reuniones políticas, incluso las electorales.

Véanse los artículos 198 á 202 inclusive del Código penal, ya transcritos en la nota de la pág. 9.

Art. 4.º A toda reunión pública puede asistir la Autoridad personalmente ó por medio de sus Delegados. En caso de asistir personalmente, ocupará el sitio de preferencia, pero sin presidir ni mezclarse en las discusiones.

Art. 5.º La Autoridad mandará suspender ó disolver en el acto:

1.º Toda reunión pública que se celebre fuera de las condiciones de esta ley.

2.º Todas aquellas que, habiéndose convocado con arreglo á ella, traten de objetos no consignados en el aviso, ó se verifiquen en sitio diverso del designado.

3.º Las que en cualquier forma embaracen el tránsito público.

4.º Las definidas y enumeradas en el art. 189 del Código penal.

Y 5.º Aquellas en que se cometa ó se trate de cometer cualquiera de los delitos especificados en el título 3.º, libro 2.º del mismo Código.

En todos estos casos la Autoridad dará inmediatamente cuenta al Gobierno, y en los dos últimos pasará además al Tribunal competente el oportuno tanto de culpa.

Art. 6.º Las reuniones á que se refiere el artículo 2.º, cuando se celebren por los electores de una circunscripción durante el período electoral, podrán ser suspendidas por el Delegado de la Autoridad, si incurren en algunos de los casos marcados en el art. 5.º La reunión suspendida podrá verificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, si los que la convocaron lo ponen en conocimiento de la Autoridad: si hubiere lugar en este caso á una segunda suspensión, la reunión se entenderá definitivamente disuelta.

Art. 7.º No están sujetas á las prescripciones de esta ley

- 1.° Las procesiones del culto católico.
- 2.° Las reuniones de este mismo culto y las de los demás tolerados, que se verifiquen en los templos ó cementerios.
- 3.° Las que verifiquen las asociaciones y establecimientos autorizados, con arreglo á sus estatutos aprobados por la Autoridad.
- 4.° Las que tienen lugar en las funciones de teatro y demás espectáculos.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 15 de Junio de 1880.—Yo el Rey.—El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero y Robledo.

.

1

LEY DE POLICÍA DE IMPRENTA ^(1-a-b)

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Para el ejercicio del derecho que reconoce á todos los españoles el párrafo 2.º del art. 13 de la Constitución de la Monarquía, y para los efectos de la presente ley, se considera

(1-a)—Código penal.—Libro 2.º—Título II.—Capítulo 2.º

Art. 203. Incurrirán en la pena de arresto mayor:

1.º Los autores, directores, editores ó impresores, en sus respectivos casos, de publicaciones clandestinas.

Se entienden por tales las que no lleven pie de imprenta ó le lleven supuesto.

2.º Los directores, editores ó impresores, también en sus respectivos casos, de publicaciones periódicas que no hayan puesto en conocimiento de la autoridad local el nombre del director antes de salir aquélla á luz.

En la misma pena incurrirán los mencionados en este artículo cuando no pusieren en conocimiento de la Autoridad local, antes de salir á luz la publicación periódica, el nombre del editor, si aquélla lo tuviere.

Código penal.—Libro 2.º—Título IX.

Art. 457. Incurrirán en la pena de multa de 125 á 1.250 pesetas los que expusieren ó proclamaren, por medio de la imprenta y con escándalo, doctrinas contrarias á la moral pública.

Código penal.—Libro 2.º—Título XV.

Art. 582. Los que provocaren directamente, por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación, á la perpetración de los delitos comprendidos en este Código, in-

impreso la manifestación del pensamiento por medio de la imprenta, litografía, fotografía, ó por otro procedimiento mecánico de los empleados hasta el día ó que en adelante se emplearen para la reproducción de las palabras, signos y figuras sobre papel, tela ó cualquiera otra materia.

Art. 2.º Los impresos se dividen en libros, folletos, hojas sueltas, carteles y periódicos.

Tienen también la consideración de impresos los dibujos, litografías, fotografías, grabados, estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquiera

currirán en la pena inferior en dos grados á la señalada al delito.

Art. 583. Si á la provocación hubiere seguido la perpetración del delito, la pena de la provocación será la inmediatamente inferior en grado á la que para aquél esté señalada.

(1-b.) — Ley de Enjuiciamiento criminal. — Libro IV. Título V. — Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación.

Art. 816. Inmediatamente que se dé principio á un sumario por delito cometido por medio de la imprenta, el grabado ú otro medio mecánico de publicación, se procederá á secuestrar los ejemplares del impreso ó de la estampa donde quiera que se hallaren. También se secuestrará el molde de ésta.

Se procederá asimismo inmediatamente á averiguar quién haya sido el autor real del escrito ó estampa con cuya publicación se hubiese cometido el delito.

Art. 817. Si el escrito ó estampa se hubiese publicado en un periódico, bien en el texto del mismo, bien en hoja aparte, se tomará declaración, para averiguar quién haya sido el autor, al director ó redactores de aquél y al jefe ó regente del establecimiento tipográfico en que se haya hecho la impresión ó grabado.

Para ello se reclamará el original de cualquiera de las personas que lo tenga en su poder, la cual, si no lo pusiere á disposición del juez, manifestará la persona á quien lo haya entregado.

Art. 818. Si el delito se hubiese cometido por medio de la publicación de un escrito ó de una estampa sueltas, se tomará la

otra producción de esta índole, cuando aparecieren solas y no en el cuerpo de otro impreso.

Art. 3.º Se entiende por libro todo impreso que sin ser periódico reuna en un solo volumen 200 ó más páginas.

Se entiende por folleto todo impreso que sin ser periódico reuna en un solo volumen más de ocho páginas y menos de 200.

Es hoja suelta todo impreso que sin ser periódico no exceda de ocho páginas.

Es cartel todo impreso destinado á fijarse en los parajes públicos.

declaración expresada en el artículo anterior al jefe y dependientes del establecimiento en que se haya hecho la impresión ó estampación.

Art. 819. Cuando no pudiere averiguarse quién sea el autor real del escrito ó estampa, ó cuando por hallarse domiciliado en el extranjero, ó por cualquier otra causa de las especificadas en el Código penal, no pudiere ser perseguido, se dirigirá el procedimiento contra las personas subsidiariamente responsables, por el orden establecido en el artículo respectivo del expresado Código.

Art. 820. No será bastante la confesión de un supuesto autor para que se le tenga como tal y para que no se dirija el procedimiento contra otras personas, si de las circunstancias de aquél ó de las del delito resultaren indicios bastantes para creer que el confeso no fué el autor real del escrito ó estampa publicados.

Pero una vez dictada sentencia firme en contra de los subsidiariamente responsables, no se podrá abrir nuevo procedimiento contra el responsable principal, si llegare á ser conocido.

Art. 821. Si durante el curso de la causa apareciere alguna persona que, por el orden establecido en el artículo respectivo del Código penal, deba responder criminalmente del delito antes que el procesado, se sobreseerá en la causa respecto á éste, dirigiéndose el procedimiento contra aquélla.

Art. 822. No se considerarán como instrumentos ó efectos del delito más que los ejemplares impresos del escrito ó estampa y el molde de ésta.

Art. 823. Unidos á la causa el impreso, grabado ú otro medio mecánico de publicación que haya servido para la comisión del delito, y averiguado el autor ó la persona subsidiariamente responsable, se dará por terminado el sumario.

Se entiende por j
presos que salgan á l
ó más veces al día, ó
gulares ó irregulares, que no excedan de 30. Los
suplementos ó números extraordinarios serán
comprendidos en esta definición para los efectos
de la ley.

Art. 4.° Se entiende publicado un impreso
cuando se hayan extraído más de seis ejemplares
del mismo del establecimiento en que se haya he-
cho la tirada.

Los carteles se entenderán publicados desde
el momento en que se fije alguno en cualquier
paraje público.

Art. 5.° La publicación del libro no exigirá
más requisito que el de llevar pie de imprenta.

Art. 6.° Este mismo requisito se llenará en
todo fol'eto, y además el de depositar en el Go-
bierno de provincia ó en la Delegación especial
gubernativa ó Alcaldía de la población en que sea
la luz, tres ejemplares del mismo en el acto de la
publicación.

Art. 7.° Los mismos requisitos se llenarán al
publicar una hoja suelta ó cartel, y además pre-
sentará el que los publique una declaración es-
crita y firmada que comprenda los particulares
siguientes:

1.° El nombre, apellidos y
clarante.

2.° La afirmación de hallarse
uso de los derechos civiles y po

No será necesaria esta decla-
blicación de las hojas ó cartels
prospectos exclusivamente como
ó técnicos.

Art. 8.° La sociedad ó partic
fundar un periódico, lo pondrá e

la primera Autoridad gubernativa de la localidad en que aquél haya de publicarse, cuatro días antes de comenzar su publicación. y una declaración escrita y firmada por el fundador, que comprenda los particulares siguientes:

1.º El nombre, apellidos y domicilio del declarante.

2.º La manifestación de hallarse éste en el pleno uso de los derechos civiles y políticos.

3.º El título del periódico, el nombre, apellidos y domicilio de su director; los días en que deba ver la luz pública, y el establecimiento en que haya de imprimirse.

Acompañará además el recibo que acredite hallarse dicho establecimiento al corriente en el pago de la contribución de subsidio, ó cualquiera otro documento que pruebe hallarse abierto y habilitado para funcionar.

De esta declaración se dará al interesado recibo en el acto.

Art. 9.º La representación de todo periódico ante las Autoridades y Tribunales corresponde al director del mismo, y en su defecto al propietario, sin perjuicio de la responsabilidad civil ó criminal que puedan tener otras personas por delitos ó faltas cometidos por medio del periódico.

El fundador se considerará propietario mientras no transmita á otro la propiedad.

Cuando una Sociedad legalmente constituida funde un periódico ó adquiera su propiedad, tendrá la representación legal para todos los efectos el Gerente que aquélla designe, quien gozará los mismos derechos y estará sujeto á iguales responsabilidades civiles y criminales que si fuese propietario único del periódico.

Art. 10. Los directores de los periódicos deberán hallarse en el pleno uso de sus derechos

civiles y políticos; litará, mientras su el periódico.

Art. 11. El dir presentar en el ac zados con su firma mero y edición, en la Delegación espe día del pueblo en c dicos de Madrid se ejemplares con la Ministerio de la G plares citados será na que los present

Art. 12. Cuanc un periódico, su p la Autoridad gube tiempo el adquirir minos expresados c

También se dal gubernativa cuand en que el periódico el nuevo se halla en el art. 8.º, y acc éste se refiere.

Art. 13. Cesara co cuando por sent lo representa del políticos, y hayan la notificación de l representante haya tablece el art. 8.º e na del fundador.

Art. 14. Todo serrar las aclaraci sean dirigidas por ración ó particular

alguna publicación hecha en el mismo, ó á quienes se hubieren atribuído hechos falsos ó desfigurados.

El escrito de aclaración ó rectificación se insertará en el primer número que se publique, cuando proceda de una Autoridad, y en uno de los tres números siguientes á su entrega, si procede de un particular ó Corporación, en plana y columna iguales y con el mismo tipo de letra á los en que se publicó el artículo ó suelto que lo motive; siendo gratuita la inserción siempre que no exceda del duplo de líneas de éste, pagando el exceso el comunicante al precio ordinario que tenga establecido el periódico.

El comunicado deberá en todo caso circunscribirse al objeto de la aclaración ó rectificación.

Art. 15. El derecho á que se refiere el artículo anterior podrá ejercitarse por los cónyuges, padres, hijos ó hermanos de la persona agraviada, en caso de ausencia, imposibilidad ó autorización; y por los mismos, y además por sus herederos, cuando el agraviado hubiese fallecido.

Art. 16. Si el comunicado no se insertase en el plazo que fija el art. 14, podrá la Autoridad ó particular interesado demandar á juicio verbal, con arreglo á las disposiciones de la ley de enjuiciamiento civil, al representante del periódico.

El juicio versará exclusivamente sobre la obligación de insertar el comunicado. Si la sentencia fuese condenatoria, se impondrán siempre las costas al demandado y se mandará insertar por cabeza del escrito en uno de los tres primeros números que se publiquen después de la notificación: en este caso, y si el comunicado procediese de una Autoridad, se impondrá además al representante del periódico una multa de 300 pesetas.

Art. 17. El impr
derecho á exigir que
originales. De ellos i
luntad de su autor,
los Tribunales cuand
fensa del impresor c
responsabilidad que
blicación.

Art. 18. Para los
señala, serán conside

1.° Todo impresc
ta ó lo lleve supuest

2.° Toda hoja sue
publique sin cumpli
pectivamente por los

3.° Todo periódic
después respectivame
que establecen los ar

4.° La hoja suelta
tase falsa en alguno
ción hecha con arre
respectivamente.

Art. 19. Las infr
esta ley que no const
Código penal, serán c
con las mismas pen.
faltas cometidas por

De la imposición
apelarse en ambos efe
trucción en término
previamente el impo
sito no se admitirá la
sobre la procedencia (
siguiendo la tramitac
cios verbales de falta
ridad el Fiscal munic

Estas infracciones

término de ocho días, á contar desde que se cometieron.

Art. 20. La introducción y circulación de dibujos, litografías, fotografías, grabados, estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquiera otra producción de esta índole, y las de folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idioma español é impresos en el extranjero, podrá ser prohibida por acuerdo del Consejo de Ministros.

Art. 21. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones especiales relativas á la imprenta.

Por tanto,

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 26 de Julio de 1883.—Yo el Rey.—El Ministro de la Gobernación, Pío Gullón.

LEY REGULANDO EL DERECHO DE ASOCIACIÓN ⁽¹⁾

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en su nombre, y durante su menor edad, la Reina Regente del Reino. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El derecho de asociación que reconoce el art. 13 de la Constitución, podrá ejercitarse libremente, conforme á lo que se preceptúa en esta ley.

En su consecuencia, quedan sometidas á las disposiciones de la misma las asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo, ó cualesquiera otros lícitos, que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro ó la ganancia.

Se regirán también por esta ley los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión, de patronato, y las cooperativas de producción, de crédito ó de consumo.

Art. 2.º Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley:

1.º Las asociaciones de la religión católica autorizadas en España por el Concordato.

Las demás asociaciones religiosas se regirán

(1) Véanse los artículos 198 á 202 del Código penal, que van puestos en la nota de la pág. 9.

sta ley, aunque de
las no católicas é
. 11 de la Constitu

Las sociedades q
las en el art. 1.º, se propongan un objeto
mente civil ó comercial, en cuyo caso se re-
por las disposiciones del derecho civil ó del
antil respectivamente.

Los institutos ó corporaciones que existan
ción en virtud de leyes especiales.

. 3.º Sin perjuicio de lo que el Código pre-
sponga relativamente á los delitos que se
an con ocasión del ejercicio del derecho de
ción ó por la falta de cumplimiento de los
aitos establecidos por la presente ley, para
as asociaciones se constituyan ó modifiquen
bernador de la provincia impedirá que fun-
a y que celebren reuniones los asociados
ndo los hechos en conocimiento del Juzgado
trucción correspondiente dentro de las vein-
ro horas siguientes á su acuerdo.

. 4.º Los fundadores ó iniciadores de una
ción, ocho días, por lo menos, antes de cons-
a, presentarán al Gobernador de la provin-
que haya de tener aquélla su domicilio.
emplares, firmados por los mismos, de los
tos, reglamentos, contratos ó acuerdos por
ales haya de regirse, expresando claramente
os la denominación y objeto de la asocia-
su domicilio, la forma de su administra-
gobierno, los recursos con que cuente ó
s que se proponga atender á sus gastos, y
cación que haya de darse á los fondos ó
es sociales, caso de disolución.

s formalidades prevenidas en el párrafo an-
se exigirán igualmente y deberán llenarse
. Gobernador de la p

tituya sucursal, establecimiento ó dependencia de una asociación ya formada.

Del mismo modo estarán obligados los fundadores, directores, presidentes ó representantes de asociaciones ya constituidas y de sucursales ó dependencias de las mismas, á presentar al Gobernador de la provincia respectiva dos ejemplares firmados de los acuerdos que introduzcan alguna modificación en los contratos, estatutos ó reglamentos sociales.

En el acto mismo de la presentación se devolverá á los interesados uno de los ejemplares con la firma del Gobernador y sello del Gobierno de la provincia, anotando en él la fecha en que aquélla tenga lugar.

También estarán obligados los directores, presidentes ó representantes de cualquier asociación á dar cuenta dentro del plazo de ocho días de los cambios de domicilio que la asociación verifique.

En el caso de negarse la admisión de los documentos á registro, los interesados podrán levantar acta notarial de la negativa, con inserción de los documentos, la cual acta sufrirá los efectos de la presentación y admisión de los mismos.

Art. 5.º Transcurrido el plazo de ochodías que señala el párrafo 1.º del artículo anterior, la asociación podrá constituirse ó modificarse con arreglo á los estatutos, contratos, reglamentos ó acuerdos presentados, salvo lo que se dispone en el artículo siguiente.

Del acta de constitución ó de modificación deberá entregarse copia autorizada al Gobernador ó Gobernadores respectivos dentro de los cinco días siguientes á la fecha en que se verifique.

Art. 6.º Si los documentos presentados no reúnen las condiciones exigidas en el art. 4.º, el Gobernador los devolverá á los interesados en el pla-

zo de ocho días, con expresión de la falta de que adolezcan, no pudiendo, por consiguiente, constituirse la asociación mientras la falta no se subsane.

Cuando de los documentos presentados en cumplimiento del mismo art. 4.º aparezca que la asociación deba reputarse ilícita con arreglo á las prescripciones del Código penal, el Gobernador remitirá inmediatamente copia certificada de aquellos documentos al Tribunal ó Juzgado de instrucción competente, dando conocimiento de ello, dentro del plazo de ocho días que fija el párrafo anterior, á las personas que los hubiesen presentado, ó á los directores, presidentes ó representantes de la asociación, si ésta estuviese ya constituida.

Podrá la asociación constituirse ó reanudar sus funciones, si, dentro de los veinte días siguientes á la notificación del acuerdo á que se refiere el párrafo anterior, no se confirma por la Autoridad judicial la suspensión gubernativa.

Art. 7.º En cada Gobierno de provincia se llevará un registro especial, en el cual se tomará razón de las asociaciones que tengan domicilio ó establecimiento en su territorio, á medida que se presenten las actas de constitución. Se consideran parte integrante del registro todos los documentos cuya presentación exige esta ley.

Art. 8.º La existencia legal de las asociaciones se acreditará con certificados expedidos con relación al registro, los cuales no podrán negarse á los directores, presidentes ó representantes de la asociación.

Ninguna asociación podrá adoptar una denominación idéntica á la de otra ya registrada en la provincia, ó tan parecida, que ambas puedan fácilmente confundirse; aplicando el Gobernador en

este caso lo dispuesto en el párrafo 1.º del art. 6.º

Art. 9.º Los fundadores, directores, presidentes ó representantes de cualquier asociación darán conocimiento por escrito al Gobernador civil en las capitales de provincia, y á la autoridad local en las demás poblaciones, del lugar y días en que la asociación haya de celebrar sus sesiones ó reuniones generales ordinarias, veinticuatro horas antes de la celebración de la primera.

Las reuniones generales que celebren ó promuevan las asociaciones quedarán sujetas á lo establecido en la ley de reuniones públicas, cuando se verifiquen fuera del local de la asociación ó en otros días que los designados en los estatutos ó acuerdos comunicados á la Autoridad, ó cuando se refieran á asuntos extraños á los fines de aquélla, ó se permita la asistencia de personas que no pertenezcan á la misma.

Art. 10. Toda asociación llevará y exhibirá á la Autoridad, cuando ésta lo exija, registro de los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de todos los asociados, con expresión de los individuos que ejerzan en ella cargo de administración, gobierno ó representación. Del nombramiento ó elección de éstos deberá darse conocimiento por escrito al Gobernador de la provincia, dentro de los cinco días siguientes el en que tenga lugar.

También llevará uno ó varios libros de contabilidad, en los cuales, bajo la responsabilidad de los que ejerzan cargos administrativos ó directivos, figurarán todos los ingresos y gastos de la asociación, expresando inequívocamente la procedencia de aquéllos y la inversión de éstos. Anualmente remitirá un balance general al registro de la provincia

La falta de cumplimiento de lo prevenido en este artículo, se castigará por el Gobernador de la

provincia con multa de 50 á 150 pesetas á cada uno de los directores ó socios que ejerzan en la asociación algún cargo de gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades civiles ó criminales que fueren procedentes.

Art. 11. Las asociaciones que tribuyan fondos con destino al de los asociados, ó á fines de trucción ú otros análogos, formalmente las cuentas de sus poniéndolas de manifiesto á su gando un ejemplar de ellas en provincia, dentro de los cinco su formalización.

La inobservancia de este artículo por los medios expresados en el

Art. 12. La Autoridad gubernetrar en cualquiera tiempo en una asociación y en el local de nes, y mandará suspender ó reunión en que se cometa alguno de los delitos del

Gobernador de la provincia, especificando con toda los en que se apoye, las res de cualquier asociación os ó de los actos de sus resulten méritos bast ue deben reputarse ilíc do delitos que deban n

todo caso, la Autoridad las veinticuatro horas o, pondrá en conocimiento correspondiente, c antes, los hechos que haya

pensión de la asociación ó de sus sesiones y los nombres de los asociados ó concurrentes que aparezcan responsables de ellos.

La suspensión gubernativa de una asociación quedará sin efecto si antes de los veinte días siguientes al acuerdo no fuese confirmada por la Autoridad judicial, en virtud de lo prevenido en el art. 14.

Art. 13. Los términos que señala esta ley para que la Autoridad gubernativa ponga en conocimiento de la judicial los acuerdos que adopte respecto de las asociaciones, se entenderán ampliados, con arreglo á la de Enjuiciamiento criminal, en un día por cada 20 kilómetros de distancia, cuando la asociación no tenga su domicilio en la capital ó residencia del Tribunal competente para instruir las diligencias á que dieren lugar los hechos que motiven el acuerdo.

Art. 14. La Autoridad judicial podrá decretar la suspensión de las funciones de cualquier asociación, desde el instante en que dicte auto de procesamiento por delito que dé lugar á que se acuerde la disolución en la sentencia.

Art. 15. La Autoridad judicial será la única competente para decretar la disolución de las asociaciones constituídas con arreglo á esta ley.

Deberá acordarla en las sentencias en que declare ilícita una asociación conforme á las disposiciones del Código penal y en las que dicte sobre delitos cometidos en cumplimiento de los acuerdos de la misma.

Podrá también decretarla en las sentencias que dicte contra los asociados por delitos cometidos por los medios que la asociación les proporcione, teniendo en cuenta en cada caso la naturaleza y circunstancias del delito, la índole de los medios empleados y la intervención que la aso-

ciación haya tenido en el empleo de dichos medios y en los hechos ejecutados.

Art. 16. Decretada por sentencia firme la disolución de una asociación, no podrá constituirse otra con la misma denominación ni con igual objeto, si éste hubiere sido declarado ilícito. Si no lo hubiere sido, y se constituyera otra asociación con igual denominación ú objeto, no podrán formar parte de ella los individuos á quienes se hubiese impuesto pena en dicha sentencia.

La suspensión producirá el efecto de impedir que se constituya otra asociación con la misma denominación ú objeto de que formen parte individuos de la asociación suspensa, é incapacitará á los asociados de ésta para reunirse en el local de sus sesiones, ó en otro que adoptaren para ella, durante el tiempo que la suspensión deba subsistir.

Art. 17. De las sentencias ó providencias en que se acuerde la disolución ó suspensión de las funciones de una asociación, ó en que ésta se deje sin efecto, dará la Autoridad judicial conocimiento al Gobernador de la provincia, en el término de segundo día.

Art. 18. Las asociaciones quedan sujetas en cuanto á la adquisición, posesión y disposición de sus bienes, para el caso de disolución, á lo que dispongan las leyes civiles respecto á la propiedad colectiva.

Art. 19. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en cuanto se opongan á la presente ley.

Artículo adicional. Las asociaciones existentes quedan sometidas á las disposiciones de esta ley, y deberán cumplir lo dispuesto en el art. 4.º, si ya no lo hubieren hecho anteriormente, dentro de los cuarenta días siguientes á su publicación

en la *Gaceta de Madrid*, siéndoles aplicable, si no lo verifican dentro de ese plazo, lo prevenido en el art. 3.º

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 30 de Junio de 1887.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de la Gobernación, Fernando de León y Castillo.

LEYES SOBRE REPRESION

de delitos cometidos por medio de sustancias ó aparatos explosivos. ⁽¹⁾

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino:

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El que atentare contra las personas ó causare daño en las cosas, empleando para ello sustancias ó aparatos explosivos, será castigado:

Primero. Con la pena de cadena perpetua á muerte, si por consecuencia de la explosión resultare alguna persona muerta ó lesionada.

Con la misma pena, si se verificase la explosión en edificio público, lugar habitado ó donde hubiere riesgo para las personas y resultare daño en las cosas.

Segundo. Con la de cadena temporal en su grado máximo á muerte, si se verificase la explosión en edificio público, lugar habitado ó donde hubiere riesgo para las personas, aunque no resultare daño en las cosas.

Tercero. Con la de cadena temporal en los demás casos, si la explosión se verifica.

(1) Reformada por la de 2 de Septiembre de 1896, que se inserta á continuación.

Art. 2.º El que colocare sustancias explosivos en cualquier sitio público ó particular, para atentar contra las personas, ó causar daño en las cosas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, ó cadena temporal en su grado medio, si la explosión no se verificase.

El que empleare sustancias ó aparatos explosivos para producir alarma, será castigado con la pena de presidio mayor, si la explosión se verificase, y con la de presidio correccional en su grado máximo, ó la de presidio mayor en su grado mínimo, si la explosión no tuviere lugar.

Las penas del presente artículo serán aplicables á los hechos en él comprendidos, á merced del resultado de los mismos esté castigado mayormente en el Código penal.

Art. 3.º El que tenga, fabrique, facilite ó venda sustancias ó aparatos explosivos, será castigado:

1.º Con la pena de presidio correccional en su grado máximo, ó la de presidio mayor, cuando destinase ó supiese que se destinaban las sustancias ó aparatos explosivos para la ejecución de alguno de los delitos castigados en esta ley.

2.º Con la pena de presidio correccional en su grado máximo, ó la de presidio mayor en su grado mínimo, cuando no tuviera motivos racionales para afirmar que no los tenía, ó cuando el comprador, fabricante ó vendedor de sustancias explosivas sospechaba que habrían de emplearse en la ejecución de los referidos delitos.

3.º Con la pena de arresto mayor, si no se cometiera únicamente la infracción de los artículos anteriores relativos á la fabricación, tenencia ó venta de las sustancias ó aparatos explosivos.

En la aplicación de las penas de este artículo procederán los Tribunales según su prudencia.

bitrio dentro de los límites de cada una, atendiendo á las circunstancias del caso.

Lo dispuesto en el núm. 1.º de este artículo no tendrá lugar cuando los actos ejecutados por el culpable constituyan además delitos castigados con mayor pena en esta ley ó en el Código penal.

Art. 4.º La conspiración para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en esta ley será castigada con la pena inferior en dos grados á la señalada al delito más grave de los que se tratare de cometer.

La proposición encaminada al mismo fin se castigará con la pena inferior en tres grados á la correspondiente al más grave de los delitos que fueren obje o de la proposición.

Art. 5.º El que amenazase con causar algún mal de los previstos en el art. 1.º de esta ley, aunque la amenaza no sea condicional, será castigado con la pena inferior en dos grados á las señaladas en dicho artículo para el delito respectivo.

Art. 6.º El que aun sin inducir directamente á otros á ejecutar cualesquiera de los delitos enumerados en los artículos anteriores, provocase de palabra, por escrito, por la imprenta, el grabado ú otro medio de publicación, á la perpetración de dichos delitos, incurrirá en la pena señalada á los autores respectivos, si á la provocación hubiera seguido la perpetración, y en la inferior en un grado cuando no se realizase el delito.

Art. 7.º La apología de los delitos ó de los delincuentes penados por esta ley será castigada con presidio correccional.

Art. 8.º Las asociaciones en que, de cualquier forma, se facilite la comisión de los delitos comprendidos en esta ley, se reputarán ilícitas y serán disueltas, aplicándoles, en cuanto á su suspensión, lo dispuesto en la ley de asociaciones, sin perjui-

las penas en que incurran los individuos mismas asociaciones por los delitos que tíivamente hubieran cometido.

9.° Corresponde al Tribunal del Jurado conocimiento de las causas que se instruyan por fuera de los delitos á que se refiere esta ley.

10. En la instrucción de dichas causas jeces respectivos practicarán con urgencia as actuaciones, omitiendo las que no fueren as para determinar las circunstancias del y la responsabilidad de los culpables, y rán los procedimientos más rápidos para constar cuando fuere necesario á dicho obedad ó identidad de los presuntos culpables. o sean varios los procesados, el Juez instrucdrá acordar la formación de las piezas ses que estime conveniente y activar los proentos, á fin de que no se dilate el castigo que resulten confesos y convictos.

s Tribunales superiores corregirán severaá los responsables de las dilaciones injusas que observen en la instrucción de los ios.

11. Terminado el sumario por el Juez insc, lo remitirá á la Audiencia, con un emplaato de las partes por término de cinco días. egados los autos á la Audiencia, ésta en el o de tercero día, confirmará el auto de terón del sumario, ó mandará, si lo estima ensable, practicar las diligencias que, soli: por las partes acusadoras, hubiesen sido das por el Juez.

firmado el auto de terminación del suma-comunicará inmediatamente por tres días d, y después, por igual plazo, al acusador o, si, en caso de haberlo, hubiese comparelno y otro solicitarán por escrito el sobre-

seimiento, la inhibición ó la apertura del juicio. En este último caso, formularán las conclusiones provisionales y articularán las pruebas de que intenten valerse.

La Audiencia acordará el sobreseimiento ó la inhibición en los casos en que la ley impone estas resoluciones, ó decretará la apertura del juicio en los demás.

Si el acusado ó los acusados no nombrasen defensor, se hará la designación de oficio, en cuyo caso las defensas tendrán lugar bajo una sola dirección, si no fuesen incompatibles.

La Audiencia dispondrá que se pongan los autos de manifiesto en la Secretaría á los distintos defensores, para su instrucción, en el plazo que señale, y que no deberá exceder de diez días comunes para todos.

Si el defensor ó defensores se excusaren de asistir al juicio, por cualquier causa que el Tribunal no estime debidamente justificada, se nombrará defensor de oficio.

Art. 12. Inmediatamente que la causa se halle en estado de ser sometida al Jurado, el Tribunal dispondrá lo conveniente para que, de conformidad con lo prevenido en el párrafo 3.º del artículo 43 de la ley del Jurado, se reúna desde luego el correspondiente al partido de donde proceda la causa, aun cuando no se haya verificado el alarde general; y la vista de estas causas se celebrará con preferencia á la de cualesquiera otras, aunque estuviesen señaladas con anterioridad.

Cuando se someta la causa al conocimiento de un nuevo Jurado, deberá tener lugar el segundo juicio dentro de los quince días siguientes á la terminación del primero.

Art. 13. Las competencias que se promuevan con ocasión de las causas á que se refiere la pre-

sente ley entre Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, se sustanciarán con arreglo á lo dispuesto en el art. 782 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Art. 14. El término para preparar el recurso de casación por infracción de ley será de dos días contados desde la publicación de la sentencia.

En el mismo plazo se podrá interponer el recurso por quebrantamiento de forma y anunciar el de infracción de ley.

Dentro del término del emplazamiento se formalizará el recurso por infracción de ley, si se hubiere anunciado ó preparado.

Ambos recursos, si se hubieren interpuesto, se sustanciarán conjuntamente en el Tribunal Supremo, y los autos se pondrán de manifiesto á las partes en los traslados que proceda.

El Tribunal Supremo sustanciará y resolverá estos recursos con preferencia á los demás, aun cuando sea en el período de vacaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

Se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código penal y en las leyes de Enjuiciamiento Criminal y del Jurado, tanto generales como especiales, en todo lo que no se hallen expresamente modificadas por la presente ley.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 10 de Julio de 1894.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz y Capdepón.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º El que atentare contra las personas ó causare daño en las cosas, empleando para ello sustancias ó aparatos explosivos ó materias inflamables, será castigado:

1.º Con la pena de muerte, si por consecuencia de la explosión resultare alguna persona muerta.

2.º Con la pena de cadena perpetua á muerte, si por consecuencia de la explosión resultara alguna persona lesionada ó si se verificase la explosión en edificio público, lugar habitado ó donde hubiera riesgo para las personas y resultare daño en las cosas.

3.º Con la de cadena temporal en su grado máximo á muerte, si se verificase la explosión en edificio público, lugar habitado ó donde hubiera riesgo para las personas, aunque no resultare daño en las cosas.

4.º Con la de cadena temporal en los demás casos, si la explosión se verifica.

5.º Con la de presidio mayor en su grado máximo á cadena temporal en su grado medio, si la explosión no se verificase.

Art. 2.º Los delitos á que se refiere el artículo anterior serán juzgados por la jurisdicción militar, debiendo ésta proceder en juicio sumarísimo, si el delito fuese flagrante.

Los demás delitos
ley serán castigados co
la de 10 de Junio de 1
de justicia militar y d
ciendo de las causas que se instruyan por el
los Tribunales de derecho de la jurisdicci
ordinaria, ó, en su caso, los Tribunales militares.

Art. 3.º Los Tribunales que conozcan de las
causas por delitos comprendidos en la presente
ley propondrán al Gobierno la rebaja ó conmuta
ción de la pena, si entendieran que ésta es no
tablemente excesiva, atendidas las c
del hecho ó del delincuente.

Art. 4.º El Gobierno podrá sup
riódicos y Centros anarquistas, y c
tablecimientos y lugares de recreo d
quistas se reúnan habitualmente pa
sus planes ó verificar su propaganda.

También podrá hacer salir del
personas que, de palabra, por escrito
prensa, grabado ú otro medio de pul
paguen ideas anarquistas ó formen
Asociaciones comprendidas en el a
ley de 10 de Julio de 1894.

Si el extrañado en esta forma
Península, será sometido á los Tribu
ligado, por haber quebrantado el ex
con la pena de relegación á una co
por el tiempo que los Tribunales f
caso, pero que nunca podrá ser m
años, quedando allí sujeto al régime
rio que, según la conducta que obse
ren indispensable las autoridades m

Los acuerdos á que se refieren
anteriores se adoptarán en Consejo
y previo informe de la Junta de an
la capital de la respectiva provincia.

Art. 5.º Lo prescrito en el artículo anterior se aplicará con relación al territorio ó territorios que el Gobierno, por decreto acordado en Consejo de Ministros, señale.

Art. 6.º Por los Ministerios de Gracia y Justicia, de la Guerra, de Marina y de la Gobernación, se darán las instrucciones convenientes para la ejecución de esta ley.

Art. 7.º La presente ley permanecerá en vigor durante tres años. Terminados éstos necesitará ser ratificada por las Cortes.

Si al expirar el plazo señalado en el párrafo anterior no estuvieran las Cortes reunidas, el Gobierno podrá acordar que continúe rigiendo por un año más, dando cuenta á las Cortes tan pronto como se reunan.

Art. 8.º Quedan en vigor las disposiciones de la ley de 10 de Julio de 1894 que no estén modificadas por la presente.

Art. 9.º El art. 13 de la misma ley será aplicable á las contiendas de jurisdicción entre los Tribunales militares y los civiles, con las modificaciones que, respecto al Tribunal que ha de decidir la competencia, se establecen en el Código de Justicia militar.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á 2 de Septiembre de 1896.—Yo la Reina Regente.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

APÉNDICES

á las leyes sobre represión de delitos cometidos por medio de sustancias ó aparatos explosivos.

1.º

Real decreto sobre cumplimiento de la ley de 2 de Septiembre de 1896 sobre los mismos delitos.

En nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente, de acuerdo con el Consejo de Ministros:

Artículo 1.º Las disposiciones de la ley de 2 de este mes sobre señalamiento de penas y sobre competencia de la jurisdicción militar para los delitos perpetrados con el empleo de sustancias ó aparatos explosivos ó materias inflamables, se consideran en vigor y con toda su eficacia legal desde su promulgación, con arreglo á lo que la misma ley ordena.

Art. 2.º Las prescripciones de su art. 4.º sobre facultades gubernativas para la supresión de periódicos y centros anarquistas, y para el extrañamiento de los propagadores de ideas anarquistas y de los afiliados á asociaciones comprendidas en el art. 8.º de la ley de 10 de Julio de 1894, sólo se aplicarán, por ahora, en las provincias de Madrid y Barcelona.

Dado en San Sebastián á 16 de Septiembre de 1896.—
María Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

2.º

Real decreto mandando aplicar en todas las provincias los preceptos de la ley de 2 de Septiembre de 1896.

En nombre de mi augusto Hijo Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente, de acuerdo con el Consejo de Ministros:

Artículo único. Las prescripciones de la ley de 2 de Septiembre de 1896 sobre facultades gubernativas para supresión de periódicos y centros anarquistas, y para el extrañamiento de los propagadores de ideas anarquistas y de los afiliados á asociaciones comprendidas en el art. 8.º de la ley de 10 de Julio de 1894 se aplicarán desde la promulgación de este decreto en todas las provincias del Reino.

Dado en San Sebastián á 12 de Agosto de 1897.—
Maria Cristina.—El Presidente interino del Consejo de Ministros, Marcelo de Azcárraga.

Circular del fiscal del Tribunal Supremo sobre la necesidad de evitar la propaganda de las ideas anarquistas, aun la que hacen los periódicos dando noticias de los crímenes del anarquismo.

El execrable atentado cometido en la persona del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que es causa en estos momentos de luto nacional, me impone el deber imperioso de dirigir mi voz á los señores fiscales, no para recordarles textos legales y superiores instrucciones que conocen, sino para rendir primero justo tributo á la memoria del gran estadista y patriota, víctima de infames maquinaciones fraguadas por esos nuevos enemigos de la sociedad, tanto más terribles y tanto más perversos cuanto que, haciendo del odio una religión, pretenden imponerse por el terror y emplean cobardemente, como único procedimiento, el crimen y el exterminio, servido por la astucia, la simulación y el engaño; y para expresar después á todos mis subordinados la suprema necesidad de que contra tales sectarios, unidos por vínculos de solidaridad internacional en que encuentran á la vez su fuerza y su tristísima resonancia, hay que utilizar con la mayor constancia y la más decidida é inquebrantable energía cuantos recursos la ley pone á nuestra disposición, teniendo siempre en cuenta que á nuestro ministerio corresponde en mucha parte la defensa de los sagrados intereses así colectivos como individuales, tan traidoramente amenazados.

No se trata ya de los atentados que se cometan. Una vez realizados, la misión del funcionario fiscal está en las leyes perfectamente definida y clara; pero hay algo en que la diversidad de interpretaciones pudiera engendrar cierta confusión que, traducíendose

por auxilio moral, restaría fuerza á los poderes para realizar la obra de restaurar el orden y la tranquilidad. Me refiero al daño que las publicaciones periódicas pueden causar por el afán de mantener el interés, ofrecer á sus lectores incentivos para la curiosidad. Ese afán, seguramente lícito en otras ocasiones, será en las presentes circunstancias indiscreto é imprudente, si no llegara, como llega, á constituir delito definido y penado por el legislador. A pretexto de dar cuenta de detalles relativos á los culpables, se forjan leyendas que, tal vez sin que ese sea el propósito, le presentan como mártires de una idea y como héroes que arrostran toda suerte de penalidades y hacen inválidos el sacrificio de su vida en aras del amor á los que llaman sus hermanos; ¡como si pudiera haber heroicidad en la traición, ni amalgamarse el instinto feroz y sanguinario con los sentimientos de humanidad!

Comprenderá V. S. que esa manera de ejercer el magisterio de la prensa es una cooperación á los fines del anarquismo, cosa que no cabe tolerar sin mengua del interés público y sin desprestigio de la ley. En la Circular de esta Fiscalía de 17 de Noviembre de 1893, se trazaba la línea de conducta que los señores fiscales deberían seguir en orden á esas transgresiones de tanta y tan vital trascendencia; pero de entonces á acá la legislación ha cambiado. Lo que antes era punible como falta, ahora lo es como delito.

La ley de 10 de Julio de 1894, declarada vigente por la de 2 de Septiembre de 1896, establece en su art. 7.º que la apología de los delitos y de los delincuentes penados por aquélla será castigada con presidio correccional; y apología es, no sólo presentar el hecho criminal como laudable, y como meritoria la conducta del que lo ejecuta, sino disminuir la enormidad de los delitos presentando á sus autores con caracteres que tiendan hacerlos simpáticos y disminuir el horror que sus crímenes humanos atentados deben inspirar. Todo, pues, lo que

directa ó indirectamente pueda tener este objeto, es punible según la ley, y no cabe tolerarlo sin que seamos infieles á nuestra misión y á la confianza que, como representantes del poder social, se nos otorga.

Esto sentado, deberá V. S. vigilar la prensa periódica y toda clase de publicaciones, sean de la clase que fueren, y en el momento que advierta que manifiesta ó veladamente se hace la apología del anarquismo, ó de sus adeptos ó de sus atentados, procederá á promover la formación de causa, inspeccionando personalmente el sumario y cuidando de que las diligencias se sigan con la mayor celeridad, para que la represión sea inmediata y el temor á la pena haga lo que la prudencia y el amor á la civilización debieran por sí solos hacer.

Encargo á V. S. el más puntual y exacto cumplimiento de lo que en la presente circular se ordena, abrigando la esperanza de que no me verá obligado á adoptar medidas de rigor por omisiones, contra las cuales tengo como garantía el celo hasta aquí demostrado por los Sres. Fiscales.

Madrid 13 de Agosto de 1897.—Luciano Puga.

Señor Fiscal de la Audiencia de

Real decreto prorrogando por un año más las prescripciones de la ley de 2 de Septiembre de 1896 sobre delitos cometidos por medio de sustancias ó aparatos explosivos.

En virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 7.º de la ley de 2 de Septiembre de 1896, y de lo propuesto por mi Presidente del Consejo de Ministros, y de conformidad con el acuerdo del mismo Consejo, en nombre de mi augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. La ley de 2 de Septiembre de 1896 sobre delitos cometidos por medio de sustancias ó aparatos explosivos y las demás disposiciones complementarias dictadas para su ejecución, continuarán rigiendo por un año más, dando de este decreto cuenta á las Cortes tan pronto como se reunan.

Dado en San Sebastián á 6 de Septiembre de 1899.—
Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela.

GUION

CONTENIDO DE ESTE MANUAL

	<u>Páginas.</u>
CONSTITUCIÓN.....	1
Índice de la misma.....	39
LEY DE RELACIONES ENTRE LOS CUERPOS COLE-	
GISLADORES.....	41
LEY ELEUTORAL PARA DIPUTADOS Á CORTES...	45
Índice de la misma.....	109
APÉNDICES Á LA MISMA LEY.....	111
Índice de los mismos.....	315
LEY DE INCOMPATIBILIDADES Y CASOS DE RE-	
ELECCIÓN.....	323
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	327
Índice del mismo.....	370
REGLAMENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CON-	
GRESO DE LOS DIPUTADOS.....	373
Índice del mismo.....	392
LEY ELECTORAL DE SENADORES.....	398
Índice de la misma.....	414
LEY FIJANDO EL PLAZO EN QUE DEBEN PROBAR	
SU APTITUD LEGAL LOS SENADORES ELECTOS..	415
LEY SEÑALANDO EL PLAZO DENTRO DEL CUAL LOS	
SRES. SENADORES DEBEN PRESTAR JURAMENTO	417
REGLAMENTO DEL SENADO.....	421
Índice del mismo.....	467
LEY DE PROCEDIMIENTO CUANDO EL SENADO SE	
CONSTITUYE EN TRIBUNAL DE JUSTICIA.	469
Índice de la misma.....	481

	<u>Page</u>
LEY PROVINCIAL.....	43
Indice de la misma.....	50
LEY MUNICIPAL.....	51
Indice de la misma.....	615
LEY DE ORDEN PÚBLICO.....	617
Indice de la misma.....	656
LEY PROVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTA- BILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA.....	657
Indice de la misma.....	669
LEY DE REUNIONES PÚBLICAS.....	671
LEY DE POLICÍA DE IMPRENTA.....	695
LEY REGULANDO EL DERECHO DE ASOCIACIÓN...	705
LEYES SOBRE REPRESIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR MEDIO DE EXPLOSIVOS.....	715

MAR 10 '52 H

APR 28 '52 H